

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

REVISTA No. 25

Sexta Época

Año III Enero 2010

Derechos Reservados ©
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
INSURGENTES SUR 881 TORRE 'O' PISO 12
COL. NÁPOLES. DELEG. BENITO JUÁREZ
C.P. 03810. MÉXICO, D.F.

Certificado No. 04-2001-012517410700-102

FIDEICOMISO PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DEL DERECHO FISCAL Y ADMINISTRATIVO

- **2010**
  Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta publicación, por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo fotocopia, grabación magnetofónica y cualquier sistema de almacenamiento de información, sin la autorización expresa.

- El contenido de los artículos publicados son de la exclusiva responsabilidad de los autores.

- ISSN 1665-0086 50109

- Página Internet del T.F.J.F.A: www.tfjfa.gob.mx
  Correo Electrónico de la Revista: publicaciones@.tfjfa.gob.mx

REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
ENERO DE 2010. No. 25

CONTENIDO:

- **Primera Parte:**
  Precedentes de Sala Superior 5

- **Segunda Parte:**
  Criterios Aislados de Sala Superior y de Salas Regionales 219

- **Tercera Parte:**
  Criterios Aislados de Salas Regionales aprobados durante la Quinta Época 369

- **Cuarta Parte:**
  Acuerdos Generales 377

- **Quinta Parte:**
  Jurisprudencias y Tesis del Poder Judicial Federal 383

- **Sexta Parte:**

  Trabajo del Mag. Héctor Silva Meza presentado en el XVII Congreso Nacional de Magistrados “Visión del Contencioso Administrativo Federal ante los retos del cambio social”, Mesa B, Subtema Juicio Sumario 429

- **Séptima Parte:**

  Índices Generales 433

PRIMERA PARTE

PRECEDENTES DE SALA SUPERIOR

PLENO

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-241

MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO.- SI AL TRADUCIRSE NO SON DESCRIPTIVAS DE LOS PRODUCTOS QUE PRETENDE PROTEGER DEBEN REGISTRARSE.- El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece diversos supuestos cuando la marca no es registrable, la fracción IV, previene las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción; la fracción VI indica la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables. Ahora bien, si del análisis que efectúa este Tribunal del conjunto de los elementos de una marca incluyendo su traducción advierte que no es descriptiva de los servicios que pretende proteger, es decir, no son signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, ni tampoco evoca conexión directa con el producto a proteger, es evidente que dicha marca sí es registrable, siempre y cuando no exista algún impedimento legal para ello.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 917/08-EPI-01-4/772/09-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de agosto de 2009, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

QUINTO.- [...]

A juicio de esta Juzgadora es FUNDADO el agravio en estudio, conforme a los siguientes razonamientos.

La resolución impugnada, en el presente juicio fue transcrita en el Considerando Segundo de esta sentencia, la cual se tiene por reproducida en este Considerando en obvio de repeticiones. En la parte conducente indica que el registro propuesto no es registrable como marca con fundamento en el artículo 90 en sus fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de resultar una traducción de un término que resulta ser descriptivo de características y cualidades de servicios que desea distinguir de otros de su misma clase y especie en el mercado.

Que esa autoridad no está obligada a registrar los signos propuestos por el hecho de haber registrado, según el dicho del apoderado, otras parecidas a aquellas. Que no se puede obligar a ese Instituto a registrar la marca que se solicita aunque se hayan concedido otros registros que de acuerdo con el criterio del apoderado resultan análogos al caso, pues en el caso de la solicitud de la marca existe una actualización de los supuestos establecidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

Que en relación a la invocación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, su signo no es del todo descriptivo sino que lo es parcialmente, si bien el citado Convenio limita el registro marcario de un signo como el registro que requiere protección sea totalmente carente de distintividad, como lo es el que ocupa, el mismo resulta descriptivo de características y cualidades de los servicios y por ello carece de distintividad, en términos del artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Que la denominación propuesta está conformada por dos palabras que cumplen con un significado propio, la primera de ellas ASIAN, es un término expresado en idioma inglés que se aplica para referir que algo es procedente de Asia o relativo a dicho continente, pues se traduce como "asiático" según lo que se desprende de la consulta al diccionario ubicado en la página web www.elmundo.es, respecto de la palabra BISTRO la misma es un término que si bien es cierto no se encuentra definido en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el mismo constituye un término que ha tenido diversas acepciones.

Que "bistro" es una palabra rusa que significa "rápido" y que antaño fue asociada con la rapidez de preparar o servir un plato de comida a la clase trabajadora o proletariado, la incógnita es cómo, hoy en día, bistro ha pasado a ser un sinónimo de un café o un restaurante fino, elegante, caro y de abolengo.

Que además independientemente de ello, al analizar si un signo es o no registrable esa autoridad debe atender no solo al significado literal de las palabras que conforman el signo que se desea registrar, sino al sentido en el que será usado dentro de la rama del comercio en que serán ofrecidos los servicios a los cuales desea aplicarse el signo, por lo que tomando en consideración el significado de ambos términos, se considera que los mismos se refieren a una característica de los servicios que se pretenden distinguir.

Que la denominación ASIAN BISTRO resulta descriptiva del servicio que se pretende amparar en tanto que indica que se trata de un restaurante fino, elegante o caro de tipo asiático, siendo los servicios de restauración (sic) aquellos que se pretenden amparar, por lo que la denominación propuesta no puede ser aprobada para ser usada en forma exclusiva por un solo titular, pues cualquier otro prestador de servicios de la misma especie, cuyos servicios cuenten con las mismas características tiene derecho de señalar este hecho y dicha característica dentro de su publicidad o etiquetas.

Que respecto de los servicios que se desean amparar en la clase 43 de la denominación ASIAN BISTRO es aplicable a los servicios que se pretenden distinguir por el solicitante, "SERVICIOS PARA PROVEER ALIMENTOS Y BEBIDAS; HOSPEDAJE TEMPORAL; ESPECIALMENTE: SERVICIOS DE RESTAURANTE".

Que del análisis a los servicios que desean distinguirse mediante la denominación que se propone, la misma se aplica particularmente en el caso del servicio de restauración (sic) como lo indica el término BISTRO respecto del cual el término ASIAN no confiere distintividad alguna sino que solo indica el tipo de comida que ahí se ofrece (de tipo asiático), por lo que la determinación es claramente descriptiva del servicio de restauración (restaurantes) resultando procedente negar el signo propuesto.

Que considerando la palabra "bistro" como un sinónimo de restaurante de lujo o de abolengo, la denominación propuesta señala tanto el servicio de restauración (sic) como el tipo de alimentos a proveer en el mismo, por lo que debe negarse el registro, pues la denominación resulta aplicable a una gran gama de lugares que ofrecen los mismos servicios con las mismas características, por lo que de conceder el registro para el uso en forma exclusiva de la denominación que resulta aplicable a toda una gama de servicios se estaría limitando a los demás oferentes de los mismos de hacer referencia de ello, lo cual sería una ventaja para el solicitante frente a los competidores del mercado.

Que conforme al artículo 90, fracción IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial, basta que un signo describa o indique no solo a los productos o servicios en sí mismos, sino a cualquiera de las características que los constituya, bastando una sola de ellas para hacer procedente negar el registro del signo, así como el hecho de que no son registrables las traducciones a otros idiomas de palabras no registrables, por lo que se niega el registro del signo.

Que la denominación propuesta es carente de distintividad, en virtud de resultar descriptiva de los servicios a los que se aplica, en tanto que designan ciertas

características de los mismos y que efectivamente entre la denominación y los servicios a proteger se encuentra una estrecha relación.

Que una marca está desprovista de tal requisito distintivo si la denominación respectiva se integra por elementos que al ser analizados resultan descriptivos de los productos a los que se aplican. Hasta aquí lo señalado por la autoridad en la resolución impugnada.

Esta Juzgadora considera conveniente tener presente el contenido de los artículos que sirvieron de base a la autoridad para negar el registro marcario.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"**ARTÍCULO 90.-**" [N.E. Se omite transcripción]

CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"**ARTÍCULO 6 quinquies**." [N.E. Se omite transcripción]

Del artículo 90 indicado se desprende que no serán registrables como marca:

1. Las denominaciones, figura o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. (Fracción IV).

2. Las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción; (Fracción IV) y,

3. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables. (Fracción VI).

De acuerdo con lo anterior, el artículo 90, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, contempla la prohibición de inscribir una marca que sea descriptiva o indicativa del producto o servicio que trata de amparar, sus características íntimas o particulares y que sea descriptiva en general de cualquier cosa, por lo que si se pretende registrar como marca un adjetivo calificativo que traducido de un idioma extranjero al español, su significado describa en sí mismo el producto o servicio; o bien, sea indicativo de cierta cualidad o características del producto o servicio que ampara la marca, la misma resulta ser descriptiva, y por lo tanto, está prohibido su registro.

Por su parte, en el artículo 6 quinquies aludido, en la parte relativa previene que las marcas de fábrica o de comercio reguladas en ese artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidados mas que en los casos ahí citados, entre otros cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama.

Ahora bien, en autos del expediente administrativo EM-696259, consta la solicitud del registro de marca ASIAN BISTRO en la clase 43 que se refiere a “Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal; especialmente: servicios de restaurant”.

El Poder Judicial de la Federación ha emitido diversas tesis relacionadas con las marcas descriptivas, mismas que a continuación se transcriben:

> “**MARCAS. DESCRIPTIVIDAD.-**” [N.E. Se omite transcripción, consultable en SJF, Octava Época, III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Tesis Aislada, Página: 454

"**MARCAS DESCRIPTIVAS.-**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en SJF, Séptima Época, Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC, Tesis: 431, Página: 476]

"**MARCAS COMPUESTAS. DESCRIPTIVIDAD Y CONDICIÓN DISTINTIVA DE LAS.-**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en SJF, Octava Época, VIII, Septiembre de 1991, Tesis Aislada, Página: 155]

De las tesis transcritas con antelación, se advierte que no son registrables como marca las frases descriptivas de los productos o servicios que traten de ampararse con la marca, incluyendo aquellas que pueden servir para designar la calidad de esos productos y una denominación descriptiva no se considerará distinta por el hecho de ostentar una ortografía caprichosa. Asimismo, que una marca no es distintiva si la denominación respectiva se integra por dos o más palabras que al ser analizadas en forma aislada resultan descriptivas de los productos o de los servicios correspondientes y las mismas continúan siendo descriptivas en su conjunto; en tal caso la denominación propuesta para registro en esos términos, debe ser rechazada.

En relación con la prohibición de registrar la traducción a otros idiomas de las palabras no registrables, el Poder Judicial de la Federación ha establecido las tesis que a continuación se transcriben:

"**MARCAS. ADJETIVOS CALIFICATIVOS EN IDIOMA EXTRANJERO, CUANDO SON REGISTRABLES**." [N.E. Se omite transcripción, consultable en SJF, Octava Época, VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, Tesis Aislada, Página: 571]

"**MARCAS. CARÁCTER DESCRIPTIVO DE UNA DENOMINACIÓN EN IDIOMA EXTRANJERO. NO ES REGISTRABLE.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en SJF, Octava Época, V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, Tesis Aislada, Página: 291]

"**MARCAS. NO DEBEN REGISTRARSE LAS CONSTITUÍDAS POR UN VOCABLO COMPUESTO DE DOS PALABRAS DE IDIOMA EXTRANJERO**." [N.E. Se omite transcripción, consultable en SJF, Séptima Época, 57 Sexta Parte, Tesis Aislada, Página: 37]

Conforme lo anterior es evidente que la resolución impugnada es ilegal, ya que no se actualizan los supuestos de prohibición contenidos en la fracción IV, en relación con la VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues contrariamente a lo señalado por la autoridad demandada la denominación "ASIAN BISTRO" no es descriptiva de los servicios que pretende proteger y que se encuentran incluidos en la clase 43 que se refiere a "SERVICIOS PARA PROVEER ALIMENTOS Y BEBIDAS; HOSPEDAJE TEMPORAL; ESPECIALMENTE: SERVICIOS DE RESTAURANTE".

En efecto, como se advierte la marca ASIAN BISTRO no da una idea que esté protegiendo los servicios de alimentos de una forma evidente y mucho menos que se trate de algo elegante, por lo que no se trata de una marca descriptiva.

La autoridad indebidamente indica que la marca al traducirse un término resulta que es descriptivo de características y cualidades de los servicios, sin embargo, es de señalarse que conforme a los criterios adoptados por el Poder Judicial de este Tribunal, la valoración de una marca y su análisis debe hacerse en su conjunto y no por cada elemento que la conforma.

Así indica que la marca propuesta está conformada por dos palabras que cumplen con un significado propio, la primera de ellas es un término expresado en idioma inglés que se aplica para referir o que es algo procedente de Asia o relativa a dicho continente.

Que por lo que se refiere al término BISTRO es un término que si bien no se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua el mismo tiene diversas acepciones. Indica que es una palabra rusa que refiere "rápido" y que anta-

ño fue asociada con la rapidez de preparar o servir un plato de comida a la clase trabajadora o proletariado, y que el día de hoy ha pasado a ser sinónimo de un café o restaurante fino, elegante, caro y de abolengo.

Como se advierte de lo anterior efectivamente le asiste la razón a la actora pues la autoridad no está analizando la marca en su conjunto, sino que efectúa el análisis por cada palabra, en la primera dice que es una traducción al inglés y en la segunda que sugiere que se trata de un café o restaurante fino, elegante, caro y de abolengo, y que por ello se traduce en servicios asiáticos.

Ahora bien, la actora invoca el artículo 6 quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el que indica que las marcas de fábrica o de comercio reguladas en ese artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas mas que en los casos que ahí se indican, entre otros, cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama.

Conforme a dicho precepto y analizando la marca en su conjunto ASIAN BISTRO, es evidente que no es descriptiva de los productos o servicios a proteger, esto es, servicios para proveer alimentos y bebidas, hospedaje temporal y servicios de restaurante, es decir, no son signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales y constantes del comercio.

Ello porque por un lado la autoridad indica que el primer término es una traducción del inglés que se refiere a algo referente a Asia y por el otro que denota algo elegante, caro o de abolengo, sin embargo, como se indica ASIAN BISTRO, en su conjunto no puede ser considerado como descriptivo de los servicios que pretende

proteger, que sugiere servicios para proveer alimentos y bebidas, ni hospedaje temporal o servicios de restaurante.

Más aún, el hecho de que la autoridad demandada afirme que el término BISTRO alude a algo caro, elegante y de abolengo, no puede indicar que sea descriptiva de los servicios que se pretenden amparar con la marca, pues no indica claramente que los servicios que se prestan con dicha marca tengan esa característica, es decir, están ubicando a la marca un determinado status o alcance de determinado mercado, sin que tal circunstancia se desprenda de la marca analizada en su conjunto.

Por otro lado, del análisis que indica la autoridad respecto del primer término de la marca, es de señalarse que su traducción no evoca una conexión directa con el producto que se pretende proteger ni con sus cualidades, por lo que dicha palabra sí es registrable aún cuando la palabra sea sugerente de cierta calidad o cantidad, pues ello no resulta ser descriptivo y prohibido por la ley. Es decir, el término ASIAN, es una evocación y no una frase descriptiva, sin pasar por alto que el examen de dicha marca debe examinarse en su conjunto como ya se indicó, ya que es así como se percibe por el público consumidor y de manera global como en el caso de ASIAN BISTRO.

En ese sentido resulta inexacto que la autoridad haya negado el registro de la marca solicitada ASIAN BISTRO, para la clase 43 que se refiere a servicios para proveer alimentos y bebidas, hospedaje temporal, especialmente servicios de restaurante pues es evidente que no resulta descriptiva de los productos que pretender proteger, aún considerando la traducción de ASIAN como algo que sugiere asiático, ya que dicho término no es indicativo de los productos que pretende amparar en sus cualidades y características, pues la cualidad solo se refiere a restaurantes, no así a alimentos y bebidas.

Cabe precisar además que la autoridad determinó el carácter descriptivo e indicativo de la marca aludiendo a que se compone de elementos que sirven para

describir los productos que pretende proteger, lo que determinó del análisis del significado del primer término y su traducción al español sin referirse a los demás supuestos que establece el artículo 90, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, la autoridad no consideró que el signo es indicativo de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o de la época de producción de los servicios que se pretenden proteger.

Por otro lado, la autoridad al efectuar el análisis de la marca lo hizo desglosando cada término, esto es, no hizo el análisis de la marca en su conjunto, sino fue presentada de manera integral, por tanto erróneamente llegó a concluir que se trataba de una marca descriptiva de los productos que pretende amparar, lo que no resulta exacto, pues la marca ASIAN BISTRO no indica que se trata de un restaurante fino, elegante o caro de tipo asiático, siendo los servicios de restauración (sic) que se pretende amparar.

En ese contexto es evidente que la autoridad debió conceder el registro solicitado, al encontrarse satisfecha la exigencia señalada en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues dicho precepto dispone que se entiende como marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, como acontece en la especie, ya que el registro ASIAN BISTRO tiene la calidad de distinguir productos de la clase 43 de otros de la misma especie y clase en el mercado.

Por lo que no puede evidenciarse que el registro como marca de la denominación ASIAN BISTRO otorgue a la hoy actora el uso exclusivo de una expresión que describe los productos de la clase 43 en perjuicio de los demás prestadores de servicios de restaurante y hospedaje.

Tiene aplicación a lo anterior la tesis con número de registro 231,557, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, Página: 403, que establece:

"**MARCAS, NATURALEZA DE LAS**." [N.E. Se omite transcripción]

Bajo este contexto le asiste la razón a la actora en cuanto a que la citada marca no se ubica en los supuestos previstos en las fracciones IV y VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues el registro ASIAN BISTRO, en su traducción de la primera palabra no es descriptivo de los servicios que pretende proteger.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volúmenes 187 a 192, Sexta Parte, página 93, cuyo rubro y texto rezan:

"**MARCAS, FIGURAS Y DISEÑOS EVOCATIVOS. LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS NO CONTIENE PROHIBICIÓN DE REGISTRARLOS**." [N.E. Se omite transcripción]

Esta Juzgadora concluye después de un análisis oficioso de la suficiente fundamentación de la competencia de la emisora de la resolución impugnada que resulta violatoria de la garantía de la debida fundamentación de la competencia de la autoridad emisora, prevista en el artículo 16 constitucional, y que recoge el artículo 3, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque la Coordinación Departamental de Examen de Marcas "B" del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no fundó debidamente su facultad que le fue delegada para negar el registro como marca solicitado por la actora como se resolvió en el considerando Quinto de esta sentencia. Se analizó además de fondo la cuestión efectivamente planteada por la actora habiendo resultado fundado su concepto de agravio, por lo que es procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada con fundamento en los artículos 51, fracciones II y IV y penúltimo párrafo y 52, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para el efecto de que la autoridad competente emita otra debidamente fundada y motivada, en la que otorgue el

registro como marca del signo ASIAN BISTRO, en los términos solicitados por la actora.

[...]

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracciones II, IV y penúltimo párrafo y 52, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I. Ha resultado fundado el estudio oficioso de la competencia de la autoridad en términos del Considerando Quinto de esta sentencia.

II.- La parte actora acreditó su pretensión, en consecuencia,

III. Se declara la nulidad de la resolución impugnada identificada en el Resultando 1o. del presente fallo, en los términos y para los efectos precisados en el Considerando Sexto de esta resolución.

IV. NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de agosto de 2009, por mayoría de 7 votos a favor de los Magistrados Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Guillermo Domínguez Belloc y Francisco Cuevas Godínez, 2 votos en contra de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y Alejandro Sánchez Hernández, este último quien se reserva su derecho para formular voto particular. Estando ausentes los Magistrados Jorge Alberto García Cáceres y Juan Manuel Jiménez Illescas.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 3 de septiembre de 2009, y con fundamento en lo previsto por los artículos 30, fracción V y 47 fracción III, de la Ley Orgánica

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Magistrado Francisco Cuevas Godínez, ante la Secretaria General de Acuerdos: Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 917/08-EPI-01-4/772/09-PL-07-10

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 49, párrafo tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, disiento del criterio aprobado por mayoría en el presente asunto, por las razones que en seguida expreso.

En el Considerando Quinto del fallo mayoritario, se procede al estudio oficioso de la competencia de la autoridad que emitió la resolución impugnada en juicio, contenida en el oficio con código de barras No. 20070216413, MA/M/1985/0696259, de fecha 31 de mayo de 2007, emitido por la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas “B”, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través del cual niega la solicitud de marca 696259 ASIAN BISTRO.

Ahora bien, a fojas 20 y 37, del expediente administrativo exhibido por la autoridad demandada, obran los oficios a través de los cuales comunican a la solicitante del registro de marca, actora en el juicio, la existencia de impedimentos legales que obstaculizan el otorgamiento del registro de la marca ASIAN BISTRO; oficios emitidos por las Coordinadoras Departamentales de Examen de Marcas “A” y “D”, con fecha 10 de marzo de 2005 y 7 de marzo de 2006, respectivamente.

Del análisis a tales documentos, se desprende que carecen de la suficiente y debida fundamentación de la competencia; ya que las autoridades que los emitieron, únicamente, invocan la aplicación del artículo 6, inciso b), del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores De-

partamentales y otros subalternos, sin precisar el párrafo que les otorga la competencia para emitir este tipo de actos.

Cuestión que, aún de oficio, este Órgano Jurisdiccional está obligado a analizar de conformidad con lo establecido en el artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Aunado a ello, considero que, contrario a lo sustentado en el Considerando Sexto, la marca que pretende registrar la parte actora, sí es descriptiva de los productos que pretende amparar.

Se arriba a tal conclusión pues el signo "ASIAN BISTRO", pretende proteger servicios incluidos en la clase 43, que se refiere a: "Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal; **especialmente: servicios de restaurante**"; ahora bien, como en la propia resolución mayoritaria se establece, el término BISTRO es una palabra rusa que significa: "rápido", además, tiene diversas acepciones, pero sobre todo está asociado con la: "rapidez de preparar o servir un plato de comida a la clase trabajadora o proletariado, **y que el día de hoy ha pasado a ser sinónimo de un café o restaurante fino, elegante, caro y de abolengo**", significado o acepción que me permite concluir que tal marca sí es descriptiva de los productos que pretende proteger.

De lo razonado, concluyo que es incorrecta la conclusión a la que arriba la resolución mayoritaria, pues además de que no se ordena regularizar el procedimiento, a fin de que el o los oficios de impedimento legal, sean emitidos por autoridad que funde debidamente su competencia para emitir este tipo de actos; contrario a lo dispuesto en el artículo 90, fracciones IV y VI, de la Ley de la Propiedad Industrial, se ordena otorgar el registro de marca solicitado por la actora, no obstante que es descriptiva de los productos que pretende proteger.

MAG. ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

PRIMERA SECCIÓN

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-1aS-287

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO. CASO EN EL QUE DEBE ATENDERSE A LA SEDE DE LA AUTORIDAD EMISORA.- El artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que para determinar la competencia por razón del territorio de las Salas Regionales, deberá atenderse en primer término al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, señalando como excepción aquellos casos en que se trate de personas morales que formen parte del sistema financiero en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta; tengan el carácter de controladoras o controladas y determinen su resultado fiscal consolidado; el demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país; o se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria o por unidades administrativas adscritas a dicha Administración General. Por lo que si la parte actora señaló como resolución controvertida en el juicio contencioso administrativo una emitida por la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria o por sus unidades administrativas, será competente la Sala Regional en cuya circunscripción territorial se encuentre la sede de la autoridad que la haya dictado. Ello en virtud de que debe atenderse únicamente a la sede de la autoridad emisora para establecer la Sala Regional competente y no al domicilio fiscal de la parte actora, toda vez que el artículo 34 de la Ley Orgánica de este Tribunal en su fracción III es categórico al señalar dicha circunstancia como caso de excepción a la regla general para determinar la Sala a la que le corresponda territorialmente conocer del juicio interpuesto por la parte actora.

Incidente de Incompetencia Núm. 26367/08-17-06-2/1365/09-03-01-1/1741/09-S1-02-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Vianey Palomares Guadarrama.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de septiembre de 2009)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

Ahora bien, en el caso que nos ocupa la Sala Regional del Noroeste III de este Órgano Jurisdiccional, promovió incidente de incompetencia por razón del territorio al considerar que en la especie se actualiza la excepción prevista en la fracción III, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente a partir del 07 de diciembre de 2007.

En ese orden de ideas, resulta importante resaltar que el C. JOSÉ LUIS GATICA VILLEGAS en representación legal de la empresa denominada **MEDICINAS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.,** al promover el juicio contencioso administrativo señaló en su escrito inicial de demanda lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Del texto antes reproducido se desprende que si bien la demandante señala que su domicilio fiscal se encuentra en Culiacán, Sinaloa; también es cierto, que el hecho de que en el caso está promoviendo juicio contencioso administrativo en contra del oficio número 900 09 02-02-2008-06661 de fecha 18 de junio de 2008, emitido por la Administradora de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos “2” de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria; es decir, por una unidad administrativa dependiente de la Administración

General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, tal y como se desprende del artículo 20 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente a la fecha de la emisión de la resolución controvertida, el cual en la parte que interesa dispone lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Las consideraciones anteriormente vertidas se confirman con el ejemplar del oficio 900 09 02-02-2008-06661 controvertido en el juicio de origen, exhibido por la demandante y que corre agregado a fojas 61 a 75 del expediente principal, que en la parte que interesa consigna:

[N.E. Se omite transcripción]

En esa tesitura, resulta **FUNDADO** el argumento de la Sala Regional del Noroeste III de este Tribunal, en el sentido de que para determinar la competencia de la Sala Regional que debe conocer del juicio promovido por **MEDICINAS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.**, lo procedente es considerar la sede de la Sala Regional donde se encuentra la sede de la autoridad que emitió la resolución controvertida, en atención a que como ha quedado precisado en párrafos anteriores, se demostró que la Administradora de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos "2" de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es una unidad administrativa dependiente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, cuya sede se encuentra ubicada en la Ciudad de México Distrito Federal, tal como se desprende de los artículos 4° de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 2 del Acuerdo por el que se establece la Circunscripción Territorial de las Unidades Administrativas del Servicio de Administración Tributaria; y 9 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, los cuales disponen lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

[...]

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 29, fracción I y 30 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 23, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente a partir del 07 de diciembre de 2007, se resuelve:

I.- Es **PROCEDENTE** y **FUNDADO** el incidente de incompetencia planteado, en consecuencia.

II.- Es competente por cuestión de territorio para conocer del presente juicio, la Sexta Sala Regional Metropolitana de este Órgano Jurisdiccional, por lo que mediante oficio que se gire remítanse los autos del expediente, así como copia del presente fallo.

III.- Gírese diverso oficio a la Sala Regional del Noroeste III de este Tribunal con copia de la presente resolución, para su conocimiento.

IV.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 10 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor de la ponencia de los CC. Magistrados Jorge Alberto García Cáceres, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alejandro Sánchez Hernández y Nora Elizabeth Urby Genel.

Se encontraba ausente el C. Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.

Fue Ponente en el presente asunto la C. Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, cuya ponencia se aprobó.

Se formuló el presente engrose el 23 de septiembre de 2009 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III y 48, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial

de la Federación, de fecha 6 de diciembre de 2007, vigente a partir del día siguiente a su publicación firma la C. Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, Presidenta de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Lic. Sonia Sánchez Flores, Secretaria Adjunta de Acuerdos que da fe.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-1aS-288

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA. CASOS EN QUE LA SALA REGIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Los Acuerdos G/59/2008 y G/17/2008 del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa señalan la creación de la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con competencia en todo el territorio nacional y sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, por lo que si se interpone incidente de incompetencia por razón del territorio por una Sala Regional de este Órgano Jurisdiccional o por alguna de las partes; y del análisis realizado a la resolución controvertida se advierte que se encuentra dentro de las hipótesis de procedencia del juicio contencioso administrativo establecidas en el artículo 14, fracciones XI, XII y XIV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dictadas con fundamento en la Ley de Propiedad Industrial, Ley Federal del Derecho de Autor, Ley Federal de Variedades Vegetales, así como en los demás ordenamientos que regulan la materia de Propiedad Intelectual; la Sala competente para conocer del juicio contencioso administrativo será la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, sin que dicha competencia sea definida atendiendo a lo previsto por el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente a partir del 7 de diciembre de 2007, y que señala: "*las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón del territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante*", así como la presunción establecida en el último párrafo del propio artículo que consigna: "*se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal salvo que la parte demandada demuestre lo contrario*"; es decir, en estos casos no debe atenderse al domicilio fiscal, ni al domicilio para oír y recibir notificaciones de la demandante para determinar la jurisdicción de una Sala.

Incidente de Incompetencia Núm. 30280/08-17-04-6/2857/09-07-03-9/2081/09-S1-03-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de septiembre de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Enrique Orozco Moles.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de septiembre de 2009)

PRECEDENTES:

VI-P-1aS-165
Incidente de Incompetencia Núm. 19528/08-17-04-2/5662/08-05-03-4/2069/08-S1-02-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de enero de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Vianey Palomares Guadarrama.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de febrero de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 16. Abril 2009. p. 130

VI-P-1aS-220
Incidente de Incompetencia Núm. 28955/08-17-08-6/1909/08-16-01-8/356/09-S1-01-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de abril de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Julián Rodríguez Uribe.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de abril de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 18. Junio 2009. p. 437

VI-P-1aS-250
Incidente de Incompetencia Núm. 31721/08-17-10-9/645/09-12-02-1/835/09-S1-03-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de mayo de 2009, por mayoría de 4

votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Enrique Orozco Moles.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de mayo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 19. Julio 2009. p. 114

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-1aS-289

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL.- BOLETA DE INFRACCIÓN LEVANTADA RESPECTO DEL PESO, DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL.- De conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente hasta el 6 de diciembre de 2007, las salas regionales conocerán de los juicios por razón de territorio respecto del lugar donde se encuentra la sede de la autoridad demandada; ahora bien, para determinar la Sala Regional competente para conocer del juicio en que se impugna una boleta de infracción, deberá atenderse a la sede de la autoridad que la calificó e impuso la sanción, ya que de conformidad con el artículo 8° del Reglamento sobre Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, la revisión del peso de los vehículos que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal se realiza en operativos o en lugares autorizados, sin que en el caso en comento resulten aplicables las disposiciones del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales, puesto que si la infracción a las disposiciones del primer reglamento citado ya fue calificada y sancionada por la autoridad competente, resulta irrelevante el lugar de radicación de la boleta de infracción.

Incidente de Incompetencia Núm. 787/07-10-01-8/1674/09-S1-01-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de octubre de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Julián Rodríguez Uribe.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de octubre de 2009)

PRECEDENTES:

VI-P-1aS-162
Incidente de Incompetencia Núm. 4572/07-11-02-8/1252/08-S1-01-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de enero de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Julián Rodríguez Uribe.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de febrero de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 16. Abril 2009. p. 87

VI-P-1aS-283
Incidente de Incompetencia Núm. 786/07-10-01-2/1737/09-S1-05-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de octubre de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. Teresa Isabel Téllez Martínez.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 93

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-1aS-290

RECURSO DE RECLAMACIÓN EXTEMPORÁNEO.- El artículo 62, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el término para la interposición del recurso de reclamación es de 5 días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la sentencia interlocutoria que conceda o niegue la suspensión definitiva, por lo que si se presenta fuera del plazo señalado, lo procedente es que se deseche por extemporáneo.

Recurso de Reclamación Núm. 2331/08-18-01-2/2450/09-S1-01-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Julián Rodríguez Uribe.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de octubre de 2009)

PRECEDENTES:

VI-P-1aS-263
Recurso de Reclamación Núm. 226/09-03-01-2/1214/09-S1-02-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 11 de junio de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María del Consuelo Hernández Márquez.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de julio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 21. Septiembre 2009. p. 57

VI-P-1aS-273

Recurso de Reclamación Núm. 40/09-03-01-5/1575/09-S1-03-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de agosto de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Elizabeth Ortiz Guzmán.

(Tesis aprobada en sesión de 18 de agosto de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 95

VI-P-1aS-274

Recurso de Reclamación Núm. 137/09-16-01-7/1143/09-S1-03-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de agosto de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Elizabeth Ortiz Guzmán.

(Tesis aprobada en sesión de 18 de agosto de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 95

VI-P-1aS-275

Recurso de Reclamación Núm. 1293/08-EPI-01-3/1413/09-S1-02-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1° de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Beatriz Rodríguez Figueroa.

(Tesis aprobada en sesión de 1 de septiembre de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 95

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-1aS-291

APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y PELIGRO EN LA DEMORA. EL JUZGADOR NO DEBE TOMAR EN CUENTA DICHOS ELEMENTOS AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LA EJECUCIÓN, SOLICITADA COMO MEDIDA CAUTELAR DENTRO DEL JUICIO.- En términos de lo dispuesto por la fracción IX del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al pronunciarse respecto de la suspensión definitiva solicitada, tratándose ésta de una de las medidas cautelares que pueden ser dictadas dentro del juicio para mantener la situación de hecho existente, la Sala del conocimiento ya no tiene que considerar la apariencia del buen derecho ni el peligro en la demora, pues tales elementos ya fueron valorados por el Magistrado Instructor, al resolver sobre la medida provisional que al efecto se dicte, puesto que al advertirse que concurren dichos elementos, se debe conceder la suspensión provisional a fin de evitar un daño irreparable que pudiera ocasionarse por la demora en el dictado de la medida cautelar, lo que no ocurre en el supuesto donde se resuelve sobre la suspensión definitiva, ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del mismo ordenamiento legal, la Sala para otorgar la suspensión definitiva deberá tomar en cuenta las manifestaciones expresadas por la parte solicitante y las que en su caso produzca la autoridad a quien se le impute el acto administrativo o los hechos objeto de la controversia, a fin de determinar si resulta procedente decretar o no la medida cautelar definitiva, sin que exista ya el riesgo de que se cause un daño de manera inminente, puesto que el actor ya se encuentra protegido por la suspensión provisional.

Recurso de Reclamación Núm. 18276/08-17-06-6/2304/09-S1-04-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de octubre de 2008, por mayoría de 4 votos a favor y 1

voto en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de octubre de 2009)

PRECEDENTES:

VI-P-1aS-81
Recurso de Reclamación Núm. 23798/07-17-09-7/773/08-S1-04-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de julio de 2008, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Jorge Carpio Solís.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de septiembre de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 11. Noviembre 2008. p. 469

VI-P-1aS-155
Recurso de Reclamación Núm. 1158/08-03-01-6/1792/08-S1-04-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de diciembre de 2008, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Jorge Carpio Solís.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de diciembre de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 14. Febrero 2009. p. 245

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-1aS-292

COMPETENCIA TERRITORIAL. TRATÁNDOSE DE EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO.- Atento a lo establecido en la fracción I, inciso a), segundo párrafo, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tratándose de empresas que formen parte del sistema financiero, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será competente por razón del territorio, para conocer del juicio contencioso administrativo, la Sala del citado Tribunal en cuya jurisdicción tenga su sede la autoridad que haya dictado el acto impugnado; lo anterior como supuesto de excepción a la regla general que contempla el primer párrafo del artículo en cita, y que dispone que las Salas del mencionado órgano jurisdiccional conocerán de los juicios por razón de territorio atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante. Ahora bien, en el artículo 8, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta se establece que el sistema financiero se compone, entre otras, por las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, almacenes generales de depósito, administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras financieras, uniones de crédito, sociedades financieras populares, sociedades de inversión de renta variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, casas de cambio y sociedades financieras de objeto limitado, que sean residentes en México o en el extranjero. Consecuentemente, si la demandante es una Unión de Crédito, a efecto de determinar qué Sala de este Tribunal es la competente para conocer del juicio, debe atenderse a la sede de la autoridad que emitió el acto impugnado y no a la ubicación del domicilio fiscal del actor.

Incidente de Incompetencia Núm. 1313/09-13-01-5/14337/09-17-04-6/2242/09-S1-02-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de octubre de 2009, por unanimidad

de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Beatriz Rodríguez Figueroa.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de octubre de 2009)

PRECEDENTES:

VI-P-1aS-194
Incidente de Incompetencia Núm. 315/08-15-01-8/1569/08-S1-01-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de marzo de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de marzo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 17. Mayo 2009. p. 188

VI-P-1aS-195
Incidente de Incompetencia Núm. 7263/08-17-10-8/1880/08-S1-05-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de marzo de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretario: Lic. Luis Alberto Placencia Alarcón.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de marzo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 17. Mayo 2009. p. 188

VI-P-1aS-265
Incidente de Incompetencia Núm. 255/09-13-01-4/7711/09-17-10-9/1150/09-S1-02-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de junio de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Vianey Palomares Guadarrama.
(Tesis aprobada en sesión de 23 de junio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 21. Septiembre 2009. p. 64

VI-P-1aS-280

Incidente de Incompetencia Núm. 5807/09-17-03-5/1354/09-13-01-2/1703/09-S1-04-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde.

(Tesis aprobada en sesión de 3 de septiembre de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 85

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-1aS-293

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL.- RESULTA INFUNDADO EL PLANTEADO POR LA ACTORA CUANDO LO PROMUEVE EN CONTRA DE LA SALA ANTE LA CUAL PRESENTÓ SU ESCRITO DE DEMANDA.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cualquiera de las partes en el juicio contencioso administrativo puede promover el incidente de incompetencia por razón de territorio. Por su parte, el artículo 13 de la misma ley, establece como obligación procesal del actor que presente su escrito de demanda ante la Sala que considere competente, ello con el propósito de fijar la radicación de la Sala Regional que habrá de tramitar y, en su caso, resolver dicho juicio. De tal manera, dado que corresponde al propio actor presentar la demanda ante la Sala que considera competente, deben estimarse infundadas sus pretensiones en el sentido de que la Sala ante la cual presentó su demanda es incompetente, ya que sólo al momento de presentar tal escrito es que tiene la oportunidad de precisar la competencia territorial de la Sala que en su opinión debe conocer del juicio respectivo, sin que pueda posteriormente controvertir la competencia de dicha Sala, pues ya se ha sometido a la jurisdicción de ésta. Aunado a ello, el artículo 23, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 1° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, señala que la competencia de los Tribunales por razón de territorio se puede prorrogar de manera tácita o expresa, existiendo prórroga tácita por parte del actor en el momento en que presenta su escrito de demanda, razón por la cual, si la Sala en cuestión aceptó conocer del juicio, admitiendo la demanda y llevando a cabo varios actos procesales, es infundado el planteamiento de incompetencia de dicha Sala aducido por la actora.

Incidente de Incompetencia Núm. 357/09-04-01-7/1298/09-S1-02-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

nistrativa, en sesión de 27 de octubre de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Beatriz Rodríguez Figueroa.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de octubre de 2009)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-1aS-294

Incidente de Incompetencia Núm. 2580/08-04-01-2/1834/09-S1-02-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de noviembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Beatriz Rodríguez Figueroa.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de noviembre de 2009)

PRECEDENTE:

VI-P-1aS-276
Incidente de Incompetencia No. 2120/08-04-01-5/869/09-S1-03-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de junio de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Elizabeth Ortiz Guzmán.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 72

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-1aS-295

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL. PARA DETERMINAR LA SALA REGIONAL CORRESPONDIENTE DEBE ATENDERSE AL DOMICILIO FISCAL DEL DEMANDANTE AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- El artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece como regla general para determinar la competencia por territorio de las Salas Regionales de este Tribunal, que deberá atenderse al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, por lo que, con la norma legal aludida, es dable concluir que el domicilio para determinar la Sala Regional competente por territorio para conocer del juicio contencioso administrativo, es el domicilio fiscal que tuvo el accionante al momento de la presentación de la demanda, sin que sea válido estimar fundado un incidente de incompetencia territorial, apoyado en que durante la substanciación del juicio la parte actora cambie su domicilio fiscal, pues de aceptarse este criterio, durante la tramitación del juicio se podrían presentar incidentes de incompetencia tantas veces como el enjuiciante cambiara de domicilio.

Incidente de Incompetencia Núm. 8628/08-17-11-9/2361/09-S1-04-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de noviembre de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretaria: Lic. Rossina Montandon Spinoso.
(Tesis aprobada en sesión de 5 de noviembre de 2009)

PRECEDENTES:

VI-P-1aS-260
Incidente de Incompetencia Núm. 5279/08-17-10-9/88/09-S1-01-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

nistrativa, en sesión de 21 de abril de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Julián Rodríguez Uribe.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de julio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 21. Septiembre 2009. p. 44

VI-P-1aS-278
Incidente de Incompetencia Núm. 3304/08-06-01-6/1128/09-S1-01-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.
(Tesis aprobada en sesión de 1 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 83

VI-P-1aS-279
Incidente de Incompetencia Núm. 3878/08-06-02-5/1184/09-S1-02-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María del Consuelo Hernández Márquez.
(Tesis aprobada en sesión de 1 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 83

SEGUNDA SECCIÓN

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-2aS-369

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.- ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO EXENTO DE LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL.- Si en el juicio contencioso administrativo promovido por el organismo público descentralizado PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN en contra de la determinación de un crédito fiscal, se solicita la suspensión de la ejecución, la Sala del conocimiento debe conceder la medida cautelar sin exigir a la actora la presentación de garantía del interés fiscal; sin perjuicio de lo previsto en los artículos 141, 142 y 144 del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior, por virtud de que la empresa actora es un organismo descentralizado de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de acuerdo al artículo 3° de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; que en términos del artículo 14 del propio ordenamiento, queda exceptuado de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales.

Recurso de Reclamación Núm. 26187/08-17-09-3/752/09-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de junio de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de septiembre de 2009)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-2aS-370

Recurso de Reclamación Núm. 26691/08-17-02-3/1780/09-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Thelma Semíramis Calva García.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de octubre de 2009)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

CUARTO.- [...]

De la anterior transcripción se desprende que la demandante solicitó la suspensión **únicamente** respecto de los siguientes actos impugnados:

a) La resolución emitida por el Procurador Federal de Protección al Ambiente de fecha 9 de junio de 2008, recaída al recurso de revisión, interpuesto por la actora, mediante la cual se confirma la diversa resolución de fecha 18 de enero de 2008, mediante la cual se le impone a la hoy actora una multa por $52,590.00.

b) El consecuente procedimiento administrativo de ejecución de la mencionada multa.

En efecto, la demandante, al formular su solicitud de suspensión de los actos impugnados, **únicamente** elevó su petición por lo que hace a la multa impuesta en

cantidad de $52,590.00 y el consecuente procedimiento administrativo de ejecución que se pudiera llevar a cabo con el fin de hacer efectiva dicha multa.

Y es claro que la actora en ningún momento señaló, en el apartado de suspensión de su escrito inicial de demanda, que su petición fuera para que se le concediera una medida cautelar respecto de alguna medida correctiva que le hubiere sido impuesta por la autoridad.

Por tanto, resultan infundados los agravios SEGUNDO y TERCERO del recurso de reclamación, ya que la Sala de origen no incurrió en la omisión que la autoridad le imputa, en tanto que no tenía por qué realizar precisión alguna sobre si la concesión de la suspensión comprendía también a la medida correctiva que, según afirma la reclamante, se había impuesto a la actora; toda vez que la petición de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, nunca se formuló en dicho sentido.

No resulta, por tanto, materia de análisis y resolución, la procedencia o improcedencia de la suspensión respecto de una medida correctiva, pues nunca se solicitó en esos términos por la demandante, quedando al margen de esta resolución los aspectos relativos a la supuesta violación a la legislación ambiental que arguye la reclamante.

A mayor abundamiento, la Novena Sala claramente indicó que la suspensión de la ejecución se concedía respecto de la multa determinada a la actora, en razón de que sobre dicho acto, y su consecuente ejecución, versó la petición de la demandante, sin que en ningún momento mencionara que también pretendía la paralización de la ejecución de las medidas correctivas mencionadas por la autoridad, por lo que la Novena Sala Regional Metropolitana no se encontraba obligada a pronunciarse respecto de las mismas.

Así pues, la suspensión definitiva fue concedida para el efecto de que la autoridad se abstuviera de efectuar actos tendientes a hacer efectivo el importe de **la**

multa determinada a la hoy actora hasta en tanto se resolviera en forma definitiva el presente juicio.

Por tanto, en la sentencia interlocutoria emitida por la Novena Sala Regional de este Tribunal se concedió debidamente la suspensión de la ejecución de los actos impugnados, en virtud de que la parte actora tiene el carácter de Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, y de conformidad con los artículos 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y 14 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se encuentra exenta de presentar garantía alguna respecto de la multa determinada.

Cabe acotar que sobre este último aspecto, la autoridad reclamante no endereza agravio alguno, por lo que se infiere que se encuentra conforme con la concesión de la medida cautelar, al amparo de los fundamentos anteriores; pues nunca sostiene que la suspensión concedida a PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, respecto de la multa y su ejecución, fueren ilegales o generaran alguna afectación al interés general.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 23, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 25, 28, y 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- Es procedente el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada.

II.- Es parcialmente fundado el recurso de reclamación pero insuficiente para revocar la sentencia recurrida.

III.- Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha 10 de octubre de 2008 emitida por la Novena Sala Regional Metropolitana de este Tribunal.

IV.- Mediante atento oficio que se gire a la Sala Regional de origen, remítasele copia de esta resolución para su conocimiento.

V.- Notifíquese.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del 18 de junio de 2009, por unanimidad de cinco votos a favor, de los Magistrados Guillermo Domínguez Belloc, Olga Hernández Espíndola, Alfredo Salgado Loyo, Juan Manuel Jiménez Illescas y Silvia Eugenia Díaz Vega.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 1 de julio de 2009, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Firma la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-371

COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES.- CASO EN EL QUE SE INDICAN DOS DOMICILIOS EN LA DEMANDA.- Conforme al artículo 34 de la Ley Orgánica de este Tribunal, en vigor a partir del 7 de diciembre de 2007, para determinar la Sala Regional que conocerá del juicio en razón del territorio, debe atenderse al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante o bien, su domicilio particular cuando no cuente con aquel, y se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal, salvo que la parte demandada demuestre lo contrario, de lo cual se deriva que para el caso en que la actora señale como suyos, en cualquier parte de la demanda, dos domicilios, y respecto de uno de ellos especifique que es para oír y recibir notificaciones, si ambos se encuentran comprendidos en diferentes jurisdicciones de las Salas Regionales, el domicilio que debe presumirse como el domicilio fiscal para efectos de determinar la competencia de la Sala Regional que conocerá del juicio por razón de territorio, es el diverso al señalado específicamente para oír y recibir notificaciones.

Incidente de Incompetencia Núm. 287/09-11-03-1/3858/09-17-08-5/1470/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de junio de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de octubre de 2009)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-332
Incidente de Incompetencia Núm. 21661/08-17-03-9/222/09-S2-09-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, en sesión de 14 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. María Delfina Moreno Flores.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de julio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 122

VI-P-2aS-333
Incidente de Incompetencia Núm. 1576/08-10-01-5/4660/08-06-01-8/1073/09-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de julio de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de julio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 122

VI-P-2aS-334
Incidente de Incompetencia Núm. 635/09-18-01-8/415/09-21-01-9/1977/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 122

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-372

RECURSO DE RECLAMACIÓN.- CASO EN EL CUAL NO DEBE OTORGARSE EL TÉRMINO DE TRES DÍAS PARA QUE ACREDITE QUE SE HA GARANTIZADO EL INTERÉS FISCAL.- El artículo 28, fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de materia fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Por su parte, el artículo 25 de la citada ley, previene en la parte conducente que la Sala Regional dictará resolución definitiva en la que decrete o niegue las medidas cautelares solicitadas, decida, en su caso, sobre la admisión de la garantía ofrecida, la cual deberá otorgarse dentro de un plazo de tres días. Ahora bien, si la actora desde que solicitó la medida cautelar indicó que no estaba obligada a garantizar el interés fiscal, por tratarse de un aprovechamiento y la Sala le otorga la suspensión provisional a condición de que garantice el interés fiscal y al no hacerlo le niega la definitiva, la actora al interponer el recurso de reclamación a que se refiere el artículo 62 de la citada Ley, estaba obligada a acreditar que garantizó el interés fiscal, y si no lo hace, es evidente que no resulta procedente otorgarle el término de tres días para que lo exhiba, pues precisamente el actor funda su reclamación en el sentido de que no se encuentra obligado a garantizar el interés fiscal de que se trata.

Recurso de Reclamación Núm. 1018/08-19-01-3/335/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de agosto de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Elda Hernández Bautista. (Tesis aprobada en sesión de 24 de septiembre de 2009)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

A juicio de los Magistrados que integran este Cuerpo Colegiado, los argumentos de la recurrente son **INFUNDADOS** en atención a las siguientes consideraciones:

En principio, es de señalarse que no le asiste la razón a la reclamante cuando sostiene que no es necesario para el otorgamiento de la medida cautelar que se constituya la garantía del interés fiscal, puesto que la multa que es materia del juicio principal es derivada de una acción de la Procuraduría Federal del Consumidor, por lo que ésta tiene el carácter de aprovechamiento, según lo establece el artículo 3º del Código Fiscal de la Federación, es decir, que no tiene la categoría de crédito fiscal.

Al efecto, es de precisarse la resolución impugnada en el juicio, tal y como se precisó en el resultando 1° de este fallo, la constituye el oficio 1503575, expediente PFC.TAB.B.3/001516-2007, de fecha 30 de mayo del 2008, emitido por el Jefe de Departamento de Servicios, de la Delegación Tabasco de la Procuraduría Federal del Consumidor, a través del cual se impone una multa en cantidad de $500,000.00, por infringir la Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo que es de concluirse que en la especie se trata de una multa administrativa impuesta por una autoridad administrativa dependiente de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Ahora bien, el artículo 3º del Código Fiscal de la Federación establece que las multas por infracción a las normas administrativas federales tienen el carácter de aprovechamientos, así se aprecia de su interpretación y a continuación se transcribe tal precepto.

[N.E. Se omite transcripción]

De lo anterior, se desprende que las multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal, pertenecen al concepto de aprovechamientos, definidos por el artículo 3º del Código Fiscal de la Federación antes invocado, esto es, como los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los ingresos que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.

Ahora bien, el artículo 4º del Código Fiscal de la Federación establece:

[N.E. Se omite transcripción]

Conforme a dicho precepto, son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan, entre otros, de aprovechamientos, por lo que si la multa que impone una autoridad administrativa, distinta de la fiscal, tiene el carácter de aprovechamiento, es evidente que una vez determinada en cantidad líquida constituye un crédito fiscal, el cual debe ser cubierto o garantizado dentro de los plazos establecidos en la Ley, o de lo contrario la autoridad estará facultada para proceder a su cobro mediante el procedimiento administrativo de ejecución, tal y como lo establece el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, el que dispone en la parte conducente:

[N.E. Se omite transcripción]

Por lo que, cuando se pretende suspender la ejecución de una multa como en el caso, la impuesta por el Jefe de Departamento de Servicios de la Delegación Estatal Tabasco de la Procuraduría Federal del Consumidor, que es una multa administrativa no fiscal, es indispensable garantizar el interés fiscal el cual se constituye únicamente con el monto de la sanción impuesta, pues dicha multa administrativa no genera recargos, esto último en términos del párrafo noveno del artículo 21 del citado Código, el que dispone:

[N.E. Se omite transcripción]

Por su parte, el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

En términos del anterior precepto invocado, no se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales, ni tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo de 45 días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación. Que si a más tardar del vencimiento de ese plazo se acredita la impugnación que se hubiera intentado y se garantiza el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución.

Cabe hacer mención que los requisitos legales a que se refiere dicho precepto están previstos en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, el que establece en la parte conducente:

[N.E. Se omite transcripción]

Ahora bien, la multa administrativa a que hace referencia la sentencia interlocutoria fue impuesta por la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor, lo que significa que se trata de la multa administrativa no fiscal, sin embargo al constituir un crédito fiscal, para exigirse su cobro se requiere del procedimiento administrativo de ejecución.

En esa virtud, cuando se solicita la suspensión de la ejecución de una multa impuesta por infracciones a disposiciones legales o reglamentarias que no sea de carácter fiscal, debe garantizarse el interés fiscal y esta garantía debe comprender únicamente su monto, al no pagar recargos en términos del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación.

Una vez determinada la naturaleza de la multa administrativa que constituye la resolución impugnada, esta Juzgadora considera conveniente citar lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

[N.E. Se omite transcripción]

Del análisis del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se aprecia que la fracción VI, faculta a este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo de ejecución contra actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, la cual procederá, y surtirá sus efectos, **si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables**.

Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 28, fracciones IV y VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para conceder la suspensión de la ejecución de dicho crédito fiscal, deberán cumplirse ciertos requisitos, entre otros, que haya sido solicitado por la actora en la demanda, o por escrito presentado en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia ante la Sala del conocimiento del juicio y cuando se ha constituido o se constituya la garantía del interés fiscal, situación esta última que la actora no acredita.

El precepto en mención considera que la garantía ofrecida debe ser suficiente mediante billete de depósito o póliza de fianza expedida por institución autorizada, para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que pudieran ocasionarse a la demandada o a terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio contencioso administrativo.

Cabe hacer mención que para conceder la suspensión se exige otorgar garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que pudieran ocasionarse a la demandada con la suspensión, pues de lo contrario, se ocasionaría un perjuicio

al Estado en caso de que el demandante no obtuviera sentencia favorable en el juicio, ya que se le privaría de un ingreso que tiene derecho a recibir.

En el caso, de otorgarse la suspensión sin el otorgamiento de la garantía, quedaría detenido el cobro de un crédito fiscal, al diferirse su ejecución, con notorios perjuicios para el Estado, pues se dejaría de percibir un ingreso que por ley le corresponde.

En ese sentido, es evidente la necesidad de otorgar la garantía del interés fiscal como requisito para conceder la suspensión, pues en términos del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas Regionales de este Tribunal al otorgar la suspensión definitiva se encuentran obligadas a resguardar los derechos de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, salvaguardar el derecho que tiene el Estado para percibir un crédito fiscal que le corresponde.

Aclarando, que la garantía del interés deberá estar constituida únicamente con el monto de la sanción impuesta, pues de conformidad con el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, para suspender el cobro de la multa administrativa sólo debe garantizarse el interés fiscal, el cual se constituye únicamente con el monto de la sanción impuesta, pues la multa administrativa no genera recargos, de acuerdo con la parte final del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación.

Por lo que, es legal que la Sala haya negado la suspensión, porque no se acreditó que se encuentra garantizado el interés fiscal con el billete de depósito o póliza de fianza que debía expedirse a favor de la otra parte que pudiera tener derecho a la reparación del daño o a la indemnización citadas y que esta garantía debía corresponder únicamente el monto de la multa impuesta.

Por otra parte, en cuanto al argumento expresado por la reclamante en el sentido de que la autoridad administrativa al emitir la multa originalmente controvertida, incurrió en diversos actos viciados de origen que por sí mismos deben dar lugar a la

nulidad lisa y llana de la resolución administrativa y de su correspondiente sanción, por lo que al imponérsele la obligación de garantizar un crédito fiscal se le causan daños mayores que impedirían continuar con su actividad económica y ocasionarle un quebranto irreparable, la validez de dicho planteamiento es motivo del análisis del fondo del asunto, sin que esta Juzgadora esté en aptitud de reconocer la validez o no de dicha circunstancia, puesto que se encuentra limitada a resolver sólo sobre la legalidad de la negación de la suspensión.

Igualmente resulta inoperante el argumento de la recurrente tendiente a señalar que la multa impuesta a su representada resulta excesiva, amen de que se dictó sin observar la gravedad de la supuesta falta que se le atribuye, la cual es inexistente, además de no considerar las condiciones económicas de su representada, pues dicho argumento es materia de estudio del fondo de la cuestión planteada.

Ahora bien, en relación a lo señalado por la actora referente a que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión que el propio artículo 124 de la Ley de Amparo, por lo que es procedente declarar la nulidad de la sentencia emitida con fecha 9 de octubre de 2008 y concederle la suspensión definitiva del acto reclamado, apoyándose para tal efecto en la tesis de Jurisprudencia 56/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica "**RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS**".

Al respecto, es de indicarse que dicho argumento resulta **INFUNDADO**, puesto que dicha Jurisprudencia únicamente establece que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige mayores requisitos para conceder

la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo, actualizándose entonces la excepción al principio de definitividad prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley citada en último término, por lo que es factible acudir directamente al juicio de amparo sin agotar previamente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sin hacer ningún otro señalamiento o conclusión.

En ese sentido, queda a consideración del actor decidir entre interponer el juicio contencioso administrativo o acudir directamente al juicio de garantías; es decir, que opte ya sea por uno o por otro; sin embargo, una vez elegido e iniciado cualquiera de los dos juicios, resulta inconcuso que deberá de tramitarse de acuerdo a las disposiciones adjetivas que rijan al procedimiento seleccionado, esto en atención al principio de legalidad, puesto que cada juicio tiene sus propias normas procedimentales; sin que pueda interpretarse lo anterior como lo hace la recurrente, en el sentido de que debe concederse al promovente del juicio la medida suspensional solicitada, sin que sea necesario que éste cumpla con los requisitos que al efecto prevé la Ley de la materia, es decir, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En tal virtud, si en el caso el actor optó por el juicio contencioso administrativo, y solicitó la suspensión del acto impugnado dentro del mismo juicio, resulta innegable que debe sujetarse a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en especial a lo dispuesto por el artículo 28, esto es, que el interés fiscal se encuentre debidamente garantizado; sin que sea dable pretender que se resuelva la suspensión del juicio contencioso administrativo observando lo establecido en la Ley de Amparo; resultando incorrecto lo aseverado por la demandante en el sentido de que debe concedérsele la suspensión definitiva del acto reclamado, por el simple hecho de exigir mayores requisitos el artículo 28 que la Ley de Amparo, situación que además no se contempla en la jurisprudencia citada.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Juzgadora concluye que es infundado el recurso de reclamación interpuesto, por lo que se confirma la sentencia

interlocutoria dictada el 9 de octubre de 2008, a través de la cual no se otorgó la suspensión definitiva.

[...]

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 20, fracción VI de la Ley Orgánica de este Tribunal, en relación con los artículos 28, fracción VI y 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- Es procedente pero **INFUNDADO** el recurso de reclamación interpuesto por la actora en contra de la sentencia interlocutoria de 9 de octubre de 2008, dictada por la Sala Regional Chiapas-Tabasco, en consecuencia;

II. Se confirma la sentencia interlocutoria de 9 de octubre de 2008, que no concedió la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado.

III.- NOTIFÍQUESE.- A las partes para su conocimiento.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de agosto de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor de los Magistrados Guillermo Domínguez Belloc, Olga Hernández Espíndola, Alfredo Salgado Loyo, Juan Manuel Jiménez Illescas y Silvia Eugenia Díaz Vega.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 18 de agosto de 2009, y con fundamento en lo previsto por los artículos 27, fracción III y 48 fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY ADUANERA

VI-P-2aS-373

MEDIDA CAUTELAR POSITIVA PARA DEJAR SIN EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL IMPORTADOR EN LOS PADRONES DE IMPORTADORES O EN EL DE SECTORES ESPECÍFICOS. ELEMENTOS QUE DEBEN VALORARSE PARA SU OTORGAMIENTO.- Conforme al artículo 59, fracción IV de la Ley Aduanera, el artículo 78 del Reglamento de la Ley Aduanera, y la regla 2.2.4 de las Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior para 2007, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2007, y la Cuarta Resolución de modificaciones a dichas Reglas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2007, los particulares que pretendan importar mercancías al territorio nacional deberán estar inscritos en el Padrón de Importadores o en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos del Servicio de Administración Tributaria. Así, en las referidas disposiciones jurídicas se tipifican diversas conductas en virtud de las cuales los importadores deben ser suspendidos en dichos Padrones. Además, se establecen determinadas conductas que en razón de su gravedad son sancionadas con la suspensión definitiva o inmediata del importador en el Padrón de que se trate, en aras de salvaguardar el orden público y el interés general. En estas circunstancias, si el importador solicita una medida cautelar positiva para que se deje sin efectos dicha suspensión, este Tribunal deberá analizar y valorar la naturaleza, así como gravedad de la conducta sancionada, pues la medida cautelar sólo deberá otorgarse en aquellos casos en los cuales la conducta sancionada no sea grave, dado que la afectación al orden público e interés general únicamente se actualiza tratándose de conductas graves.

Recurso de Reclamación Núm. 1941/08-18-01-4/723/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de agosto de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.-

Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de septiembre de 2009)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

Antes de abordar la litis planteada por la autoridad recurrente es necesario realizar las siguientes precisiones para contextualizar el presente fallo.

De entrada, es menester apuntar que del análisis a las constancias del expediente se desprende que **NO** consta la resolución por la cual fue suspendido el actor del padrón de importadores.

Asimismo, se tiene que el actor impugnó la resolución negativa ficta recaída a la solicitud que presentó ante la Administración General de Aduanas el 09 de mayo de 2008, para que fuera dejada sin efectos su suspensión en el padrón de importadores, cuya imagen es la siguiente:

[N.E. Se suprime imagen]

De la lectura al formato, presentado para solicitar que fuera levantada su suspensión en el padrón de importadores (instancia cuya negativa ficta es impugnada en el juicio), se desprende que el actor manifestó que se allanó a la irregularidad que motivó dicha suspensión, además la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dio su “visto bueno” (sic).

Así, la autoridad en el presente recurso de reclamación apunta que con el otorgamiento de la medida cautelar positiva se vulneró el orden público, pues el actor fue suspendido de dicho padrón, porque no presentó sus declaraciones provisionales del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, por los meses de marzo a septiembre de 2008.

En tales consideraciones, se tiene que el actor solicitó a la Sala Regional del Golfo Norte la medida cautelar en los términos siguientes:

[N.E. Se omite transcripción]

Así, el actor solicitó una **medida cautelar positiva** para el efecto de que se le permitiera importar mercancías en el padrón de importadores, ya que no se contravienen disposiciones de orden público e interés general, ello con fundamento en los artículos 24 y 25, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

De ahí que la Sala Regional del Golfo Norte, en la sentencia interlocutoria del 01 de diciembre de 2008, resolvió a la letra lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De las transcripciones insertadas se desprende que la A-quo concedió la medida cautelar positiva por lo siguiente:

- Que el actor interpuso el juicio en contra de un acto negativo prohibitivo, consistente en la suspensión del padrón importadores, la cual es una sanción administrativa.

- Que por lo anterior es procedente el otorgamiento de la medida cautelar solicitada sobre los efectos de la suspensión del padrón de importadores.

- Que no se contraviene el interés general, pues la sociedad está interesada en que los bienes y derechos de los particulares no sean afectados de manera significativa.

- Que por lo anterior, el otorgamiento de la medida cautelar no supone una puesta en peligro de los derechos de la sociedad.

- Que negar la medida cautelar implicaría una afectación de imposible reparación al actor.

Una vez precisado lo anterior, y con la finalidad de determinar la eficacia del agravio en estudio, es necesario remitirse a los artículos 25 y 26 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente en el momento de la emisión de la sentencia interlocutoria combatida, que son del tenor siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se desprende que este Órgano Jurisdiccional puede emitir todo tipo de medidas cautelares con el objeto de mantener la situación de hecho existente, y así impedir que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o cause un daño irreparable al actor.

Tiene aplicación el precedente V-P-2aS-727 emitido por esta Segunda Sección, publicada en la Revista 78, Quinta Época, Año VII, Junio de 2007, página 314:

"**MEDIDAS CAUTELARES. SU OTORGAMIENTO CON BASE EN SU OBJETO.**" [N.E. Se omite transcripción]

En segundo lugar, se aprecia que también se podrán otorgar **medidas cautelares positivas** en los supuestos de situaciones jurídicas duraderas que generen daños substanciales al actor o una lesión importante del derecho que pretende por el simple transcurso del tiempo.

Es aplicable el precedente VI-P-2aS-64 sustentado por esta Sección, publicado en la Revista 8, Sexta Época, Año I, Agosto de 2008, página 152:

> "**MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISIS DEL NEXO ENTRE LA MATERIA DEL JUICIO PRINCIPAL Y LA MEDIDA ESPECÍFICA SOLICITADA.**" [N.E. Se omite transcripción]

En ambos casos se condiciona o se limita el otorgamiento de la medida cautelar a que no se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, esto es, **la medida cautelar solicitada debe negarse si se causa perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público**.

Resulta aplicable el precedente VI-P-2aS-207 emitido por esta Juzgadora, publicado en la Revista 17, Sexta Época, Año II, Mayo de 2009, página 392:

> "**MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS.- NO PROCEDE SU OTORGAMIENTO, CUANDO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 24, PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL CAUSARSE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVENIRSE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.**" [N.E. Se omite transcripción]

Con relación al significado de "**orden público**" que debe considerar este Tribunal para determinar si concede o no la medida cautelar solicitada, es necesario apuntar que es un concepto jurídico indeterminado que sólo adquiere precisión a la luz de cada caso.

Es aplicable la jurisprudencia I.3o.A. J/16 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 383:

"**SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA.**" [N.E. Se omite transcripción]

Por tal motivo, el orden público y el interés general se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por la naturaleza del acto impugnado y las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, por lo que a efectos de su significación el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad.

Es aplicable la tesis I.4o.A.63 K emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, página 1956:

"**ORDEN PÚBLICO. ES UN CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO QUE SE ACTUALIZA EN CADA CASO CONCRETO, ATENDIENDO A LAS REGLAS MÍNIMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL.**" [N.E. Se omite transcripción]

De modo que, para dilucidar si en el caso específico el otorgamiento de la medida cautelar de mérito se irroga un daño al interés general o al orden público, primeramente se debe señalar que ha sido criterio constante de los Tribunales Federales, que corresponde al juzgador examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto.

Corrobora la conclusión alcanzada en la jurisprudencia 2a./J. 81/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Año XVI, Julio de 2002, página 357:

> "**SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.**" [N.E. Se omite transcripción]

Consecuentemente, para determinar si con el otorgamiento de la medida cautelar positiva se causa perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público es necesario valorar la situación jurídica duradera alegada por el actor y los daños que se causan al mismo, conforme al marco jurídico aplicable a esa situación de hecho, además de que la autoridad tiene la carga de la prueba para acreditar que el otorgamiento de la medida cautelar combatida vulnera el orden público.

En esta tesitura será analizado, solamente para efectos de este fallo, el marco jurídico vigente en 2007, pues el actor fundó la petición a la cual recayó la negativa ficta en las disposiciones jurídicas vigentes en ese año, habida cuenta que la autoridad no acreditó, en el presente recurso de reclamación, que la conducta que ocasionó la suspensión del actor en el padrón de importadores se haya realizado bajo la vigencia del régimen jurídico de 2008.

Así, el artículo 59, fracción IV de la Ley Aduanera, el artículo 78 del Reglamento de la Ley Aduanera, la regla 2.2.4 de las *Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior para 2007*, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2007, y la *Cuarta Resolución de modificaciones a dichas Reglas*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2007, disponen lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Acorde a lo previsto en las disposiciones jurídicas de mérito se advierte, en primer lugar, que para importar mercancías al territorio nacional, el importador deberá, entre otros requisitos, estar inscrito en el padrón de importadores o en el padrón de importadores de sectores específicos.

Así, el importador **para obtener su inscripción** a dichos padrones deberá cumplir con los requisitos siguientes:

- Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,

- Acreditar ante las autoridades aduaneras que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes,

- Cumplir con los requisitos previstos en el Reglamento de la Ley Aduanera, y

- Cumplir con los requisitos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.

En segundo lugar, se prevén diversos supuestos en los cuales **procederá la suspensión en el Padrón de Importadores y/o en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos**, para lo cual la Administración Central de Contabilidad y Glosa, por regla general, deberá tramitar el procedimiento de suspensión en el padrón de importadores, concediéndole al importador un plazo de diez días hábiles para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga.

Sin embargo, **la suspensión del Padrón de Importadores o en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos procederá de forma inmediata**, sin la necesidad del trámite de dicho procedimiento, si el importador actualiza alguno de los supuestos siguientes:

- Si presentó aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes.

- Si presentó el aviso de suspensión de actividades en el Registro Federal de Contribuyentes.

- Si cambió de domicilio fiscal sin presentar el aviso correspondiente.

- Si no registra en el Registro Federal de Contribuyentes los establecimientos en los cuales realice operaciones de comercio exterior.

- Si no es localizado en su domicilio fiscal o el de sus establecimientos no es localizable o es inexistente.

- Si tiene créditos fiscales exigibles no garantizados por infracciones por más de $100,000.00.

- Si mediante resolución se le determina un crédito fiscal por la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en los artículos 176, 177, 179 y 182, fracción II de la Ley Aduanera, omitiendo el pago de contribuciones y cuotas compensatorias por más de $100,000.00 y dicha omisión represente más del 10% del total de las que debieron pagarse y dicho crédito siendo exigible, no se encuentre garantizado.

- Si no efectúa importaciones durante más de 12 meses contados a partir de la fecha de inscripción en el Padrón de Importadores o de su última operación, a menos que presente un aviso en escrito libre a la Administración Central de Contabilidad y Glosa, en el que se justifique dicha situación, antes del vencimiento del mencionado plazo.

- Si se opone al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras.

- Si presenta por dos años consecutivos sus declaraciones fiscales sin ingresos, sin considerar el periodo preoperativo.

- Si no cumple o no haya cumplido con las obligaciones previstas en los programas IMMEX o ECEX o cuando la Secretaría de Economía haya iniciado un procedimiento de cancelación de dichos programas.

- Si la Secretaría de Economía haya cancelado el programa IMMEX o ECEX, correspondiente. Tratándose del Programa IMMEX, cuando no hayan solicitado su inscripción conforme a la regla 2.2.1. de las referidas Reglas.

- Si altera los registros o documentos que amparen sus operaciones de comercio exterior; o en su contabilidad o registros presenten irregularidades que imposibiliten el control de sus operaciones de comercio exterior.

- Si no efectúa la importación de mercancías por las cuales obtuvo el Padrón de Importadores de Sectores Específicos durante más de 12 meses contados a partir de la fecha de inscripción en dicho Padrón o de su última operación, a menos que presente un aviso en escrito libre a la Administración Central de Contabilidad y Glosa, en el que se justifique dicha situación antes del vencimiento del plazo mencionado.

- Si tiene como representante legal o como socio a un miembro de alguna empresa que haya sido suspendida por alguna causal prevista en la regla 2.2.4 y no la hubiera desvirtuado.

- Si al estar inscrito en el padrón sectorial de vinos y licores, se hubiera efectuado su baja en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas.

- Si la causal de suspensión haya sido conocida durante el ejercicio de las facultades de comprobación contenidas en el artículo 42, fracciones II y III del Código Fiscal de la Federación.

A su vez, se advierte que la regla 2.2.4 en comento diferencia entre "**suspensión no definitiva**" y "**suspensión definitiva**" del padrón de importadores.

Además se establecen de manera precisa únicamente los supuestos que causan la "**suspensión definitiva**" en el padrón de importadores, y por tanto los demás supuestos deben estimarse incluidos por exclusión en las conductas que sólo generen la "**suspensión no definitiva**" del padrón de importadores.

Así, procederá la "**suspensión definitiva**" del padrón de referencia, si el importador actualiza alguno de los supuestos siguientes:

- Si no presenta el aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes.

- Si no lleva la contabilidad, registros, inventarios o medios de control, a que esté obligado conforme a las disposiciones fiscales y aduaneras; o los oculte, altere o destruya total o parcialmente.

- Si se opone al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras.

- Si al estar inscrito en el Padrón de Importadores, permita a otro dado de baja por irregularidades, seguir efectuando sus operaciones de comercio exterior; o se compruebe que utilice su registro en el Padrón de Importadores o en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos, para ser utilizado por contribuyentes que fueron dados de baja de dichos padrones, o que aún no realicen o concluyan su trámite de inscripción.

- Si altera los registros o documentos que amparen sus operaciones de comercio exterior; o en su contabilidad o registros presenten irregularidades que imposibiliten el control de sus operaciones de comercio exterior.

- Si, tratándose de exportación definitiva o retorno de mercancía al extranjero, se detecte que dicha mercancía no salió del país o se determine que no

se llevó a cabo el retorno de al menos el 90% de las mercancías declaradas en la documentación aduanera.

- Si desocupa el local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio, después de la notificación de una orden de visita, o bien después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos.

- Si es suspendido en más de tres ocasiones del Padrón de Importadores o del Padrón de Importadores de Sectores Específicos, dentro de un periodo de cinco años contado a partir de la primera suspensión, por alguna causal de suspensión a que se refiere la regla 2.2.4 en cita.

Conforme a lo expuesto se arriba a la conclusión de que deben considerarse **graves** las conductas, en virtud de las cuales procede la suspensión definitiva del padrón de importadores, así como aquéllas que causan la suspensión de manera inmediata sin la tramitación del procedimiento administrativo correspondiente.

De ahí que se arriba al criterio siguiente: **únicamente** es improcedente la medida cautelar positiva respecto a la suspensión definitiva del padrón de importadores o si la suspensión del referido padrón fue realizada de manera inmediata, ello en términos de los supuestos de la regla 2.2.4 de las *Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior para 2007*, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2007.

Por consiguiente, para determinar la procedencia de la medida cautelar positiva, en cada caso deberá tomarse en cuenta si la suspensión del padrón de importadores es definitiva, o bien, si la suspensión de dicho padrón fue inmediata, pues en estos dos supuestos se está en presencia de causas "graves" respecto a las cuales no procede la medida cautelar por vulnerarse el orden público, ya en estos casos es evidente su afectación.

Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 52/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 296:

> "**ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA**." [N.E. Se omite transcripción]

Así pues, la medida cautelar positiva **SÍ** procederá respecto a la suspensión del padrón de importadores en los casos de que la conducta que haya generado dicha suspensión no sea grave en términos de la regla 2.2.4 aplicable al caso en concreto, pues en este supuesto es evidente que no se lesiona el interés general ni el orden público.

Por lo expuesto se arriba también al criterio siguiente: tratándose de la medida cautelar positiva respecto a la suspensión del padrón de importadores, la autoridad tiene la carga de la prueba para acreditar que la parte actora incurrió en una conducta grave, esto es, que la misma es tipificada en la regla 2.2.4 aplicable como de aquellas conductas que ocasionan la suspensión inmediata o bien la suspensión definitiva.

Una vez establecidos los alcances de las disposiciones jurídicas aplicables al caso que nos ocupa, se procede a la calificación de los agravios formulados por la recurrente.

En primer término, la autoridad afirma que debe revocarse la sentencia interlocutoria combatida, porque la naturaleza jurídica de la suspensión del padrón de importadores es de orden público y por tanto se afecta el interés general.

Sobre el particular es de mencionarse que para el otorgamiento de medidas cautelares es indebido negarla por el sólo hecho de que el marco jurídico califique como de "orden público" la actividad o hecho respecto al cual versa la medida

cautelar solicitada, sino que deberá sopesarse el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con los actos concretos de aplicación, con el perjuicio que podría afectar al peticionario con la ejecución del acto impugnado y la afectación de sus derechos en disputa.

Tiene aplicación la jurisprudencia I.4o.A. J/56 emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, página 986:

> "**SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE AFECTAN EL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, DEBE SOPESARSE EL PERJUICIO REAL Y EFECTIVO QUE PODRÍA SUFRIR LA COLECTIVIDAD, CON EL QUE PODRÍA AFECTAR A LA PARTE QUEJOSA CON LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EL MONTO DE LA AFECTACIÓN DE SUS DERECHOS EN DISPUTA**." [N.E. Se omite transcripción]

En consecuencia, la parte del agravio en estudio es **INFUNDADA**, ya que la sola calificación como de orden público de la suspensión del padrón de importadores es insuficiente para estimar que fue ilegal que la A-quo haya otorgado la medida cautelar positiva solicitada por el actor, dado que la vulneración o no del orden público es una cuestión que debe dilucidarse en cada caso, atendiendo a las peculiaridades del hecho o situación que se pretende mantener con la medida cautelar, el daño alegado por el peticionario y posible daño que pudiera resentir el interés general por su otorgamiento, lo cual denota la ineficacia del planteamiento de mérito.

Es aplicable la jurisprudencia VI.3o.A. J/44 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, página 1052:

> "**SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA ES INDEBIDO ATENDER, SOLAMENTE, A LA CALIDAD**

DE ORDEN PÚBLICO DE QUE ESTÁ INVESTIDA LA LEY EN QUE SE FUNDA EL ACTO RECLAMADO." [N.E. Se omite transcripción]

Por otra parte, la autoridad argumenta que la medida cautelar positiva viola el orden público, pues la actora fue suspendida de dicho padrón porque no presentó sus declaraciones provisionales del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, por los meses de marzo a septiembre de 2008.

En este sentido, se debe precisar de nueva cuenta que el actor en el juicio impugnó la resolución negativa ficta recaída a la solicitud presentada ante la Administración General de Aduanas el 09 de mayo de 2008, para que fuera dejada sin efectos su suspensión en el padrón de importadores y/o padrón de importadores específicos.

Así, del análisis a las constancias de los autos del recurso de reclamación como del expediente principal, se advierte que **NO** fue ofrecida la resolución por la cual el actor fue suspendido del padrón de importadores, de modo que no existe certeza respecto a la causa que originó dicha suspensión.

Ahora bien, considerando que la autoridad tiene la carga de la prueba para acreditar que con el otorgamiento de la medida cautelar se vulnera el orden público, es evidente que debió exhibir ante esta Juzgadora el medio probatorio que acreditara que la conducta por la cual fue suspendido el actor del padrón de importadores era grave, lo cual no aconteció en la especie.

En consecuencia, la autoridad debió exhibir la resolución por la cual el actor fue suspendido del padrón de importadores, a efecto de que esta Juzgadora en el marco jurídico aplicable, analizado en este Considerando, examinara si en efecto existía violación al orden público en razón de la naturaleza y alcances del supuesto que originó la referida suspensión del padrón de importador.

Por lo tanto, es **INFUNDADO** el agravio de mérito, toda vez que la autoridad recurrente no aportó los medios probatorios que acreditaran la vulneración al orden público, atento además que la sola calificación del orden público de la suspensión del padrón de importadores es insuficiente para determinar la improcedencia de la medida cautelar positiva solicitada por el actor.

Es aplicable la jurisprudencia V. 2o. J/8 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, página 185:

> "**SUSPENSIÓN. OBLIGACION DE LA AUTORIDAD DE APORTAR PRUEBAS SUFICIENTES PARA ACREDITAR EL PERJUICIO AL INTERES SOCIAL.**" [N.E. Se omite transcripción]

A mayoría de razón, es importante destacar que la causa alegada por la autoridad (consistente en que el enjuiciante no presentó sus declaraciones provisionales del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, por los meses de marzo a septiembre de 2008) **NO** causa la suspensión definitiva del padrón de importadores, ni tampoco genera dicha suspensión de forma inmediata, de conformidad con el artículo 59, fracción IV de la Ley Aduanera, el artículo 78 del Reglamento de la Ley Aduanera, la regla 2.2.4 de las *Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior para 2007*, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2007, y la *Cuarta Resolución de modificaciones a dichas Reglas*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2007

De ahí que no se está en presencia de una violación al orden público, pues la causa de la suspensión alegada por la autoridad recurrente no es grave, además que no genera la suspensión inmediata del padrón de importadores.

Con lo anterior se concluye lo **INFUNDADO** de los señalamientos de la autoridad recurrente, y por tal motivo fue apegada a derecho la decisión de la A-quo en la sentencia recurrida, de ahí que sea procedente confirmarla.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 23 fracciones VII y VIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de diciembre de 2007, vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I. Es **procedente** pero **infundado** el Recurso de Reclamación planteado por la autoridad demandada, de ahí que:

II. Se **confirma** la sentencia interlocutoria del 01 de diciembre de 2008, dictada por la Sala Regional Golfo Norte, y en consecuencia:

III. Mediante oficio remítasele copia de esta resolución a la Sala Regional Golfo-Norte para su conocimiento y a efecto de que se agregue a la carpeta correspondiente.

IV. NOTIFÍQUESE. Con copia autorizada de la presente resolución a las partes, para su conocimiento.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en **sesión del 11 de agosto de 2009**, por **unanimidad de cinco votos a favor** de los CC. Magistrados Guillermo Domínguez Belloc, Olga Hernández Espíndola, Alfredo Salgado Loyo, Juan Manuel Jiménez Illescas, y Silvia Eugenia Díaz Vega.

Fue Ponente en el presente asunto la C. Magistrada **Olga Hernández Espíndola**, cuya ponencia fue aprobada.

Se formuló el presente engrose el **25 de agosto de 2009**, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción III y artículo 48, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente a partir del día 07 de diciembre del 2007. Firma la C. Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega,

Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

VI-P-2aS-374

SUSPENSIÓN. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, TRATÁNDOSE DE INFRACCIONES GRAVES O CASOS DE REINCIDENCIA.- En el caso de que se solicite la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada consistente en la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el sector público, por el término de un año, y en tal resolución se precisa que el servidor público es reincidente, para la determinación de la procedencia o no de la concesión de la medida suspensiva, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el cual señala en su último párrafo, que no procederá la suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando se trate de infracciones graves o casos de reincidencia, por lo que de otorgarse la suspensión solicitada, en estos dos supuestos, se contravendrían disposiciones de orden público, ante la prohibición expresa de la norma legal aplicable al caso concreto; esto es, si se surte la hipótesis legal, se tiene que aplicar la consecuencia jurídica ahí prevista, que en el caso es, que no se otorgue la suspensión de la ejecución de la resolución que impone una sanción, cuando se trate de infracciones graves o sea reincidente el servidor público; de ahí que al configurarse tal hipótesis, el servidor público tiene la carga probatoria para desvirtuar la afirmación de la autoridad de que es reincidente. De acuerdo con lo anterior, si el actor es reincidente en la imposición de una infracción administrativa, es evidente que debe negarse la medida cautelar solicitada.

Recurso de Reclamación Núm. 2778/08-06-02-6/935/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de agosto de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de septiembre de 2009)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-2aS-375

Recurso de Reclamación Núm. 2510/08-13-02-8/1531/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1º de septiembre de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y un voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 1º de septiembre de 2009)

VI-P-2aS-376

Recurso de Reclamación Núm. 26265/06-17-04-6/2100/08-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos.- Magistrado Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de septiembre de 2009)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-108
Recurso de Reclamación Núm. 29337/06-17-07-4/212/08-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1º de julio de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Ponencia asumida por el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 12 de agosto de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 11. Noviembre 2008. p. 548

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-377

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL.- TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE COMERCIO EXTERIOR DEPENDIENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NO APLICA LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica de este Tribunal, la regla general que determina la competencia territorial de las Salas Regionales de dicho Tribunal, es el lugar donde se ubique el domicilio fiscal del demandante, con la excepción prevista, entre otras, en su fracción III, en el sentido de que cuando se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria o por las Unidades Administrativas adscritas a dicha Administración General, será competente la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que haya dictado la resolución impugnada. En ese contexto si la resolución impugnada la emitió la Administración Central de Comercio Exterior, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, resulta inaplicable la excepción señalada, toda vez que dichas autoridades no se encuentran adscritas a la Administración General de Grandes Contribuyentes, conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente en 2008.

Incidente de Incompetencia Núm. 5009/08-06-01-5/3992/09-17-02-8/1191/09-S2-10-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de agosto de 2009, por unanimidad

de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Claudia Palacios Estrada.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de septiembre de 2009)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

Conforme a lo establecido en el precepto transcrito, la regla general que determina la competencia territorial de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es el lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante mismo que se entenderá como el domicilio señalado en la demanda salvo que la parte demandada demuestre lo contrario; además señala tres casos de excepción, cuando se trate de personas morales, que formen parte del sistema financiero o que tengan el carácter de controladoras o controladas de conformidad con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta; o en caso que el demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país y por último cuando se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria o por las unidades administrativas adscritas a dicha Administración General, en estos supuestos será competente la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que haya dictado la resolución impugnada o en su caso quien la pretenda ejecutar.

En la especie, la Primera Sala Regional del Noreste estima que se actualiza el supuesto previsto en la fracción III, del artículo 34, antes transcrito, por lo que para determinar en el caso la autoridad que emitió el acto impugnado y si ésta es una unidad administrativa adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes, resulta necesario conocer el contenido del escrito de demanda, que en el apartado respectivo señala:

[N.E. Se omite transcripción]

Asimismo, se estima conveniente conocer el contenido de la resolución impugnada, la cual en la parte que interesa se reproduce a continuación:

[N.E. Se omite transcripción]

De la transcripción que antecede, se advierte que la actora señala como acto combatido, la resolución contenida en el oficio número 500-06-2008-20605, de 24 de junio de 2008, emitida por el Administrador Central de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria.

Ahora bien, para determinar si la citada autoridad emisora de la resolución impugnada, es una unidad administrativa adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes, como lo exige la fracción III, del artículo 34 de la Ley Orgánica de este Tribunal, resulta necesario conocer el contenido del artículo 19, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente en 2008, en el que se establecen las unidades administrativas que están adscritas a dicha Administración General.

Dicho numeral en la parte conducente establece:

[N.E. Se omite transcripción]

De la transcripción que antecede, se advierte que no se señala como unidad administrativa adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes, a la Administración de Comercio Exterior que emitió la resolución impugnada, aunado al hecho de que en ésta, se advierte que la citada Administración, depende de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, lo cual se encuentra previsto en los artículos 2 y 16 del citado ordenamiento Reglamentario, que a continuación se reproduce:

[N.E. Se omite transcripción]

De la transcripción que antecede, queda de manifiesto que se encuentran adscritas a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, entre otras unidades administrativas, la Administración Central de Comercio Exterior, esta última emisora de la resolución impugnada, según se advierte del ejemplar que corre agregado a folios 49 a 64, de las constancias que integran los autos del expediente en que se actúa.

En tal virtud, resulta que en la especie, no se actualiza el supuesto de excepción previsto en la fracción III, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo tanto, aplica la regla general para determinar la Sala Regional competente para conocer del presente asunto, esto es, el lugar en el que se ubique el domicilio fiscal de la demandante.

[...]

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 29 fracción I y 30 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 23 fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 23 fracción VI y 24 fracción VI, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- Ha resultado procedente y **fundado** el incidente de incompetencia por razón de territorio planteado por la Segunda Sala Regional Metropolitana.

II.- Es competente por razón de territorio para conocer del presente juicio, la Primera Sala Regional del Noreste, por lo que debe devolvérsele el expediente en que se actúa, para dicho efecto.

III.- Mediante oficio que se destine a la Segunda Sala Regional Metropolitana, remítasele copia de esta resolución para su conocimiento.

IV.- NOTIFÍQUESE.-

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de agosto de 2009, por unanimidad de cinco votos a favor de la ponencia de los CC. Magistrados, Guillermo Domínguez Belloc, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas, Alfredo Salgado Loyo y Silvia Eugenia Díaz Vega.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el 20 de agosto de 2009 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Firma la C. Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el C. Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-378

COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES.- EL REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ES IDÓNEO PARA ACREDITAR SU DOMICILIO FISCAL, EXCEPTO CUANDO SU CONTENIDO INDICA TRATARSE DE UN DOCUMENTO INTERNO CARENTE DE VALIDEZ OFICIAL.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, primer párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en vigor a partir del 7 de diciembre de 2007, la regla general para determinar la competencia territorial de las Salas Regionales de este Órgano Colegiado, lo es el domicilio fiscal del demandante, el cual conforme a lo previsto en el último párrafo del precepto legal citado, se presumirá que es el que se señale en la demanda, salvo que la parte demandada demuestre lo contrario. Para desvirtuar dicha presunción es válido que la autoridad exhiba el Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente que emita la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria que acredite el domicilio fiscal del demandante. Sin embargo, dicho Reporte General de Consulta no resulta ser un documento idóneo para desvirtuar la presunción antes señalada, si en el contenido del mismo se indica que se trata de un documento de uso interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, careciendo de validez oficial.

Incidente de Incompetencia Núm. 2502/08-11-01-8/1681/08-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1º de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de octubre de 2009)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

I. Expuesto lo anterior, se procede el estudio de los argumentos de incompetencia sostenidos por el Director General del Centro S.C.T. Estado de México en los que señala esencialmente lo siguiente:

Que hasta el 06 de diciembre de 2007 la hoy actora señalaba en sus demandas que su domicilio fiscal se localizaba en Alfonso Reyes Norte 2202, Bella Vista, Monterrey, Nuevo León, por tanto, solicitó a la Primera Sala Regional Hidalgo México requerir a la actora para que señalara su domicilio fiscal, de igual forma, solicitó se girara oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que informara el domicilio fiscal de la actora; asimismo, consideró competentes para conocer del juicio a las Salas Regionales del Noreste.

Para este Cuerpo Colegiado es INFUNDADO el incidente de incompetencia formulado por el Director General del Centro S.C.T. Estado de México, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conforme a lo siguiente:

La regla general contenida en el artículo 34, primer párrafo de la Ley Orgánica de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determina que, las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio **atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante**, disponiéndose en el último párrafo del propio artículo que, **se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal salvo que la parte demandada demuestre lo contrario**.

De la lectura integral realizada al escrito de demanda se observa que, la demandante **NO SEÑALÓ SU DOMICILIO FISCAL**, sin embargo, **SEÑALA DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN TOLUCA, ESTA-**

DO DE MÉXICO, tal como se desprende del contenido de la primera hoja de la demanda <folios 001 del expediente en que se actúa>:

[N.E. Se omite transcripción]

Ahora bien, a efecto de acreditar que el domicilio fiscal de la actora se localiza en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, derivándose de ello la incompetencia por razón de territorio de la Primera Sala Regional Hidalgo México para conocer del juicio, el Director General del Centro S.C.T. Estado de México solicitó a la Primera Sala Regional Hidalgo México **requiriera a la enjuiciante para que señalara la ubicación de su domicilio fiscal; de igual forma solicitó se girara atento oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informara el domicilio fiscal de la demandante**.

En atención a la anterior solicitud, mediante proveído de 04 de agosto de 2008, el Magistrado Instructor determinó no requerir a la actora para que informara sobre su domicilio fiscal, considerando que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien cuenta con elementos para señalar el domicilio fiscal de la accionante. No obstante, en el mismo proveído, el Magistrado Instructor **acordó requerir al Administrador Local Jurídico de Naucalpan para que en el término de tres días le informara acerca del domicilio fiscal de la actora**, acuerdo que fue redactado en los términos siguientes:

[N.E. Se omite transcripción]

El requerimiento al Administrador Local Jurídico de Naucalpan lo realizó la Primera Sala Regional Hidalgo México mediante el oficio **11-1-2-39575/08, de 04 de agosto de 2008**.

En respuesta al anterior requerimiento, mediante oficio 700-52-00-00-00-2008-53950 de 17 de septiembre de 2008, la Subadministradora de la Administración Local

de Servicios al Contribuyente de Naucalpan en suplencia del titular de dicha Administración, informó acerca del domicilio fiscal de la actora.

El oficio 700-52-00-00-00-2008-53950 de 17 de septiembre de 2008, señala lo siguiente:

[N.E. Se omite imagen]

El oficio antes reproducido se valora en términos del artículo 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de cuyo contenido se desprende lo siguiente:

La Subadministradora de la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Naucalpan en suplencia del titular de dicha Administración señala que, en la base de datos del Servicio de Administración Tributaria, ***CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., con clave en el Registro Federal de Contribuyentes CCM 080101 IL8, tiene su domicilio fiscal en Alfonso Reyes No. 22, Colonia Bella Vista, C.P. 64410, Monterrey, Nuevo León***.

A dicho oficio, la Subadministradora de la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Naucalpan anexó el Reporte General de Consulta realizada a la base de datos del Servicio de Administración Tributaria.

Por último, en el propio oficio se indica que, la información proporcionada sólo podrá ser utilizada para los efectos que se solicita, debiendo guardar así la más estricta confidencialidad sobre la misma, en el entendido que, el quebrantamiento de dicha reserva conlleva a penas administrativas o penales las cuales se contemplan en los artículos 8º, fracción V de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como los artículos 210 y 211 del Código Penal Federal.

Ahora bien, el Reporte General de Consulta realizada a la base de datos del Servicio de Administración Tributaria exhibido por la Subadministradora de la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Naucalpan, señala:

[N.E. Se omiten imágenes]

El reporte antes reproducido se valora en términos del artículo 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de cuyo contenido se desprende lo siguiente:

Que el contribuyente ***CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. con clave en el Registro Federal de Contribuyentes CCM 080101 IL8, tiene su domicilio fiscal en Alfonso Reyes No. 22, Colonia Bella Vista, C.P. 64410, Monterrey, Nuevo León***; inició operaciones el 01 de enero de 2008 y se trata de un contribuyente activo, cuya actividad preponderante es la industria de la cerveza y la malta.

En el propio reporte se indica que, se trata de un documento únicamente para uso interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, careciendo de validez oficial.

Por lo antes expuesto, para este Cuerpo Colegiado el oficio 700-52-00-00-00-2008-53950 de 17 de septiembre de 2008, suscrito por la Subadministradora de la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Naucalpan en suplencia del titular de dicha Administración, no es idóneo para acreditar el domicilio fiscal de la actora, pues aun cuando fue emitido en cumplimiento a un requerimiento efectuado por la Primera Sala Regional Hidalgo México, dicho oficio únicamente hace referencia al Registro Federal de Contribuyentes y al domicilio fiscal de la empresa actora que constan en la base de datos del Servicio de Administración Tributaria al **17 de septiembre de 2008**, es decir, a la fecha de emisión del propio oficio, sin embargo, con dicho documento no se acredita que ese sea el domicilio fiscal que tenía la

enjuiciante al momento de la presentación de la demanda, es decir, al **02 de abril de 2008**.

De igual forma, el Reporte General de Consulta realizada a la base de datos del Servicio de Administración Tributaria tampoco es un documento idóneo para acreditar el domicilio fiscal de la actora a la fecha de presentación de la demanda, pues aun cuando de su contenido se indica que, el contribuyente, ***CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. con clave en el Registro Federal de Contribuyentes CCM 080101 IL8, tiene su domicilio fiscal en Alfonso Reyes No. 22, Colonia Bella Vista, C.P. 64410, Monterrey, Nuevo León;*** inició operaciones el 01 de enero de 2008 y se trata de un contribuyente activo, cuya actividad preponderante es la industria de la cerveza y la malta, el propio reporte indica **se trata de un documento de uso interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, careciendo de validez oficial**.

Por lo anterior, si el Reporte General de Consulta realizada a la base de datos del Servicio de Administración Tributaria carece de validez oficial, la información contenida en dicho reporte no puede ser utilizada por este Cuerpo Colegiado para determinar el domicilio fiscal de la enjuiciante a la fecha de presentación de la demanda.

En ese orden de ideas, con los anteriores documentos, el Director General del Centro S.C.T. Estado de México no logra acreditar que el domicilio de la actora al momento de presentación de la demanda se localizara en Monterrey, Nuevo León.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por esta Segunda Sección, que se transcribe a continuación:

> "**COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES. SI LA AUTORIDAD DEMANDADA LA CUESTIONA, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE LA UBICACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL DE LA PARTE ACTORA ES DISTINTA A LA SEÑALADA EN LA DEMANDA, ÉSTA SE ENCUENTRA OBLIGADA A ACREDITARLO, EN**

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE TRIBUNAL." [N.E. Se omite transcripción]

Por tanto, si en el caso a estudio, la actora en su demanda omite señalar su domicilio fiscal, pero señala domicilio para recibir notificaciones, sito en **la Avenida Cuauhtémoc número 140, Colonia Del Carmen, Toluca, Estado de México, Código Postal 50050**, debe considerarse éste como su domicilio fiscal para efectos de determinar la competencia para conocer del juicio, atento a la presunción *iuris tantum* establecida en el último párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica de este Tribunal Federal.

[...]

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 23, fracción XI, 24, fracción XI, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 29, fracción I, 30 y 39 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 23, fracción VII, de la Ley Orgánica de este Tribunal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, se resuelve:

I. Es PROCEDENTE pero INFUNDADO el incidente de incompetencia planteado por el Director General del Centro S.C.T. Estado de México;

II. Es PROCEDENTE pero INFUNDADO el incidente de incompetencia planteado por el Director General del Centro S.C.T. Querétaro;

III. Es competente para seguir conociendo del presente asunto la Primera Sala Regional de Hidalgo-México de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

IV. Devuélvansele a la Primera Sala Regional de Hidalgo-México, las constancias que integran el juicio en que se actúa, a fin de que continúe con su trámite hasta la conclusión del mismo;

V. NOTIFÍQUESE. Con copia autorizada a las Partes, para su conocimiento.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1º de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor de los Magistrados Guillermo Domínguez Belloc, Olga Hernández Espíndola, Alfredo Salgado Loyo, Juan Manuel Jiménez Illescas y Silvia Eugenia Díaz Vega.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 3 de septiembre de 2009, y con fundamento en lo previsto por el artículo 27 fracción III y 48, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente a partir del 07 de diciembre de 2007, firma la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-2aS-379

DECLARACIÓN DE ABANDONO DE LA SOLICITUD DE PATENTE.- ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- De conformidad con los artículos 6, fracción III y 8 de la Ley de la Propiedad Industrial y 14 de su Reglamento el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberá editar mensualmente la Gaceta de la Propiedad Industrial con el objeto de dar a conocer cualquier información de interés relacionada a invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, marcas, avisos, nombres comerciales y denominaciones de origen. Sobre este aspecto es importante destacar que en los preceptos en cita se prevé que deben publicarse todas las cuestiones relativas a invenciones sin limitarlas a las resoluciones en las cuales se otorgue la patente solicitada, o bien, se declare abandonada la solicitud de patente respectiva. En este contexto, y en términos del primer párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Sala Regional en Materia de Propiedad Industrial debe conceder la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada, en la que se declaró abandonada la solicitud de patente formulada por la actora, para el único efecto de que no sea publicada en la mencionada Gaceta, ya que con ello se evitan daños de imposible reparación a la enjuiciante, pues de efectuarse la publicación se provocaría que terceros consideren firme dicha resolución antes del análisis de fondo en la sentencia.

Recurso de Reclamación Núm. 953/08-EPI-01-4/1591/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de septiembre de 2009)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

Antes de entrar al estudio de la litis es necesario conocer el planteamiento de solicitud de medidas cautelares ante la A-quo.

Así, el texto de solicitud de medidas cautelares, que corre agregado del folio 28 a 32, es el siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De la anterior transcripción se desprende que la parte actora solicitó a la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana la medida cautelar de la resolución impugnada en los términos siguientes:

A) Que se le concediera la medida cautelar para efecto de que la patente, que fue declarada abandonada en la resolución impugnada, no fuese explotada por terceros.

B) Que se suspendiera la publicación de la resolución impugnada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

De ahí que la A-quo, en la sentencia interlocutoria del 02 de septiembre de 2008 resolvió lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Conforme a la lectura de lo anterior se desprende que la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana **otorgó la medida cautelar para efecto de que la patente,**

que fue declarada abandonada en la resolución impugnada, no fuese explotada por terceros.

Sin embargo, negó la suspensión con relación a la publicación del acto controvertido en la Gaceta de la Propiedad Intelectual, ya que ello no se ordenó en ésta.

Finalmente y antes de entrar al estudio de la litis es de puntualizarse que queda intocado el punto Resolutivo I de la sentencia interlocutoria del 02 de septiembre de 2008, a través del cual se concedió la medida cautelar para el efecto de que la patente que fue declarada abandonada en la resolución impugnada no fuese explotada por terceros, en virtud que la actora y la autoridad demandada no se inconformaron respecto de éste.

Así, la recurrente esencialmente planteó que la A quo debió conceder la suspensión solicitada para que la resolución impugnada no sea publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, ya que es un acto de inminente realización.

Sobre este tópico los artículos 6 fracción III y el artículo 8 de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 14 de su Reglamento disponen lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Los dispositivos jurídicos transcritos prevén que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial editará mensualmente la Gaceta de la Propiedad Industrial, en la que se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial, **como son las cuestiones relativas a invenciones**, modelos de utilidad y diseños industriales, marcas, avisos y nombres comerciales y denominaciones de origen.

De lo anterior se infiere que no existe limitante o acotación en cuanto a que solamente deben publicarse las resoluciones en las cuales se concedan patentes, o bien, se declare el abandono de la solicitud de patente, como lo apunta la A-quo,

pues los preceptos en cita refieren que deben publicarse todas las cuestiones relativas a esas patentes, y en tal virtud no es válido distinguir donde la ley no lo hace.

Por lo tanto, es claro que la publicación de la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde se tenga por abandonada la solicitud del registro de la patente solicitada por el gobernado, como acontece en la especie, es una consecuencia lógica-jurídica que deriva de los mencionados dispositivos jurídicos, tal y como es sostenido por la recurrente.

Una vez establecido lo anterior, a continuación se examina si es procedente o no la concesión de la medida cautelar en relación a la multicitada publicación, y para tal fin se impone acudir al primer párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyo texto es el siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Atento al numeral apenas transcrito, se infiere que, contrariamente a lo resuelto por la A quo, es procedente la medida cautelar solicitada por la hoy recurrente, consistente en la suspensión de la resolución impugnada, para el único efecto de que no se publique en la Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, toda vez que, haciendo una interpretación a contrario sensu del artículo en cita, se desprende que, se concederán las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, en los casos en que no se cause perjuicio al interés general o se contravengan disposiciones de orden público.

Efectivamente, la concesión de la suspensión del acto reclamado tiene por objeto mantener la situación jurídica del particular en el estado en que se encuentra a la fecha de la presentación de la demanda, para salvaguardar sus derechos y conservar la materia de una posible declaratoria de nulidad del acto controvertido, por lo que una vez otorgada la medida cautelar, sus efectos se traducen en la paralización de toda actuación de la autoridad administrativa tendiente a la ejecución del acto materia

de impugnación, hasta en tanto se decida jurisdiccionalmente si se encuentra o no ajustado a derecho.

Es por dicha circunstancia que la suspensión sólo procede contra actos positivos que implican una acción, una orden, una privación o una molestia, como en el caso, pues únicamente éstos son susceptibles de paralización, no así los negativos que constituyen abstenciones, negativas simples o prohibiciones de las autoridades, a través de las cuales se rehúsan a hacer algo u omiten efectuar lo solicitado por los gobernados.

Sirve de apoyo a lo anterior, el precedente VI-P-2aS-80, emitido por esta Segunda Sección de la Sala Superior, publicado en la Revista 9, Sexta Época, Año I, Septiembre de 2008, página 426:

> "**SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.- RESULTA PROCEDENTE EN CONTRA DE LA ORDEN DE PUBLICACIÓN DEL MISMO EN LA GACETA DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**" [N.E. Se omite transcripción]

Consecuentemente, el agravio en estudio es **FUNDADO** y **SUFICIENTE** para revocar la sentencia interlocutoria del 02 de septiembre de 2008, únicamente con relación a la suspensión de la publicación de la resolución impugnada en la Gaceta de la Propiedad Industrial y con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la garantía individual de impartición de justicia pronta y expedita contenida en el artículo 17 Constitucional, y así evitar una dilación mayor en la resolución a la solicitud de concesión de la medida cautelar de mérito, en este fallo se ocupa de la concesión de la medida cautelar indebidamente negada por la Sala Regional, pues de lo contrario se vulneraría la garantía individual referida, en razón por el tiempo transcurrido para la resolución de la medida cautelar de suspensión que nos ocupa.

Sirve de apoyo, el precedente VI-P-2aS-8, publicado en la Revista que edita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, correspondiente a la Sexta Época, Año I, No. 3, Marzo 2008, página 97:

"**EFECTOS DE LA SENTENCIA ESTIMATORIA DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN, INTENTADO CONTRA LA CONCESIÓN O NEGATIVA DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS.**" [N.E. Se omite transcripción]

Conforme a los razonamientos expuestos, **se concede** la medida cautelar solicitada **para el efecto** de que la resolución impugnada no sea publicada en la Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues de consumarse antes del análisis de fondo en el juicio, irrogaría perjuicio al demandante.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 23, fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente; en relación con el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I. Ha resultado **PROCEDENTE** y **FUNDADO** el Recurso de Reclamación promovido por la actora, en contra de la sentencia interlocutoria del 02 de septiembre de 2008 dictada por la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana; y en consecuencia:

II. Se revoca la sentencia interlocutoria recurrida sólo respecto a la negativa de la suspensión definitiva, con relación a la publicación de la resolución impugnada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de ahí que;

III. Se otorga la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que la resolución impugnada no sea publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

IV. Envíese copia del presente fallo a la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, para que ésta sea integrada a la carpeta de suspensión correspondiente del juicio **953/08-EPI-01-4** (antes **27836/07-17-11-1**).

V. NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de la presente resolución a las Partes, para su conocimiento.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en **sesión del 03 de septiembre de 2009**, por **unanimidad de cinco votos a favor** de los Magistrados Guillermo Domínguez Belloc, Olga Hernández Espíndola, Alfredo Salgado Loyo, Juan Manuel Jiménez Illescas, y Silvia Eugenia Díaz Vega.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada **Olga Hernández Espíndola**, cuya ponencia fue aprobada.

Se formuló el presente engrose el **14 de septiembre de 2009**, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción III y artículo 48, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente a partir del día 07 de diciembre del 2007. Firma la C. Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-380

COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES, SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LO PACTADO POR LAS PARTES EN UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece su Ley Orgánica, entre las que se contemplan las dictadas sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, celebrados por las dependencias de la Administración Pública Federal, es decir lo que es materia de dicho juicio es la legalidad de la resolución administrativa combatida y no así la validez o legalidad del contrato en cuestión. Por ende, si las partes que lo celebraron acuerdan someterse a Tribunales Federales con determinada jurisdicción, renunciando a la que les correspondería en razón de su domicilio al contratar o futuro, para efecto de la interpretación, ejecución y cumplimiento del citado contrato, ello no significa que tal acuerdo de voluntades determine la competencia territorial de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que ésta deriva de la Ley Orgánica mencionada, que fija las bases para determinar la competencia territorial de dichas Salas, sin que se contemple la posibilidad de renuncia a la jurisdicción que corresponda.

Incidente de Incompetencia Núm. 1058/08-06-02-6/146/09-S2-10-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Claudia Palacios Estrada.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de septiembre de 2009)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-71
Incidente de Incompetencia Núm. 1523/07-14-01-8/1109/07-S2-10-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de enero de 2008, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Claudia Palacios Estrada.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de mayo de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 9. Septiembre 2008. p. 306

VI-P-2aS-143
Incidente de Incompetencia Núm. 2049/07-13-01-5/387/08-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de octubre de 2008, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Luis Malpica y de Lamadrid.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
(Tesis aprobada en sesión de 16 de octubre de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 14. Febrero 2009. p. 376

VI-P-2aS-144
Incidente de Incompetencia Núm. 2889/07-13-01-9/411/08-S2-10-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de octubre de 2008, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Claudia Palacios Estrada.
(Tesis aprobada en sesión de 16 de octubre de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 14. Febrero 2009. p. 376

VI-P-2aS-236
Incidente de Incompetencia Núm. 4166/08-11-02-5/2200/08-S2-09-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, en sesión de 7 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. María Teresa Martínez García.

(Tesis aprobada en sesión de 7 de mayo de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 19. Julio 2009. p. 253

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-381

CUOTAS COMPENSATORIAS DEFINITIVAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. ES COMPETENCIA DE LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, CONOCER DE LA RESOLUCIÓN DICTADA CON MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN VÍA RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA CONTINUACIÓN DE SU VIGENCIA.- El artículo 23 fracción I, de la Ley Orgánica de este Tribunal, en vigor desde el 7 de diciembre de 2007, establece como competencia de las Secciones dictar sentencia definitiva en los juicios contencioso-administrativos federales que traten las materia señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, salvo cuando se controvierta exclusivamente la aplicación de cuotas compensatorias. Por otra parte, el artículo 14 fracciones X y XII de la Ley Orgánica de este Tribunal, establece la competencia material del Tribunal para conocer de tales resoluciones en materia de comercio exterior y las que decidan los recursos administrativos en contra de tales resoluciones, respectivamente. En consecuencia, si en un juicio se controvierte la resolución recaída a un recurso administrativo de revocación interpuesto en contra de una diversa resolución que determinó la continuación de la vigencia de cuotas compensatorias definitivas por otros cinco años, a que se refiere el artículo 94 fracción XI, de la Ley de Comercio Exterior, en relación con el diverso 89 F, fracción IV del mismo ordenamiento legal, es evidente la competencia de las Secciones para dictar sentencia definitiva en el juicio conforme al artículo 23 fracción I, de la Ley Orgánica de este Tribunal, en virtud de controvertirse la resolución recaída a un recurso administrativo contra una resolución en materia de comercio exterior.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 25724/06-17-11-7/1314/09-S2-10-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de septiembre de 2009, por mayoría de 4

votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Claudia Palacios Estrada.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de septiembre de 2009)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-232
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 8219/07-17-07-5/71/09-S2-07-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de mayo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 19. Julio 2009. p. 174

VI-P-2aS-355
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6879/07-17-07-6/2107/08-S2-10-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1° de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.
(Tesis aprobada en sesión de 1 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 204

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-382

INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE. NO SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A OTORGAR GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN QUE SE LES CONCEDA CON APOYO EN EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN VI DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Del contenido de los artículos 3º y 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, se desprende que las Instituciones de Banca Múltiple, son integrantes del Sistema Bancario Mexicano, y que por ello se consideran de acreditada solvencia y no estarán obligadas a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos, excepto cuando se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra. En atención a lo anterior, cuando una de las citadas instituciones, solicita la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a la ejecución o cobro de créditos fiscales, y no se encuentra en liquidación o en procedimiento de quiebra, en los términos expresamente señalados en la fracción VI, del artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si se cumplen los requisitos de procedencia respectivos, se debe conceder la suspensión solicitada, la que surtirá efectos, sin que para ello sea necesario que se otorgue garantía del interés fiscal.

Recurso de Reclamación Núm. 2704/07-17-04-4/872/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de septiembre de 2009)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-2aS-383

Recurso de Reclamación Núm. 6095/08-17-03-4/1826/09-S2-06-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de septiembre de 2009)

PRECEDENTE:

VI-P-2aS-45
Recurso de Reclamación Núm. 591/07-11-02-4/1098/07-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de febrero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Francisco Javier Marín Sarabia.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de abril de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 6. Junio 2008. p. 159

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-2aS-384

MULTAS IMPUESTAS A INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS. DEBE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL PARA EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.- De conformidad con el artículo 3º del Código Fiscal de la Federación, las multas impuestas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tienen la naturaleza de aprovechamientos; sin embargo, conforme al artículo 4º del propio Ordenamiento tienen carácter de créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir. Asimismo, el artículo 14 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros dispone que, mientras las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, no sean puestas en liquidación o declaradas en quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligadas, por tanto, a constituir depósitos o fianzas legales, hecha excepción de las responsabilidades que puedan derivarles de juicios laborales, de amparo o por créditos fiscales. Por lo tanto, el otorgamiento de la suspensión de la ejecución de una multa impuesta por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a una sociedad o institución mutualista de seguros procederá siempre que la solicitante constituya la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado su carácter de crédito fiscal, y por encontrarse dentro del supuesto de excepción que previene el artículo 14 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Recurso de Reclamación Núm. 8890/07-17-11-7/1745/09-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Thelma Semíramis Calva García.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de septiembre de 2009)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-2aS-385

Recurso de Reclamación Núm. 23565/06-17-11-7/2093/09-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de octubre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Thelma Semíramis Calva García.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de octubre de 2009)

VI-P-2aS-386

Recurso de Reclamación Núm. 12423/08-17-07-2/2223/09-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de noviembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretario: Lic. Luis Edwin Molinar Rohana.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de noviembre de 2009)

PRECEDENTE:

VI-P-2aS-17
Recurso de Reclamación Núm. 31031/06-17-09-4/1209/07-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de enero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de febrero de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 4. Abril 2008. p. 84

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-387

VIOLACIÓN PROCESAL EN LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE PETICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. CASO EN QUE LA OMISIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR DE REQUERIR UN INFORME A LA AUTORIDAD A QUIEN SE IMPUTE EL ACTO ADMINISTRATIVO, ES INSUFICIENTE PARA REVOCAR LA SENTENCIA COMBATIDA VÍA RECURSO DE RECLAMACIÓN.- En términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción VIII de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la suspensión solicitada por la parte actora se tramitará por cuerda separada y con arreglo a las disposiciones del Capítulo III de la propia ley, relativo a las Medidas Cautelares y en el cual se encuentra inserto el artículo 25, cuyo primer párrafo establece que en el auto admisorio del incidente, el Magistrado Instructor ordenará correr traslado a quien se impute el acto administrativo, para que rinda un informe en el plazo de tres días, transcurrido el cual con informe o sin él, la Sala Regional deberá dictar la resolución definitiva dentro del plazo de cinco días. En tal virtud, si se dicta la resolución sin requerirse a la autoridad para que rinda su informe relativo, ello constituye una violación procesal, sin embargo, por sí sola no es suficiente para revocar la sentencia interlocutoria combatida vía recurso de reclamación, si el único efecto de tal determinación sería que se repusiera el procedimiento para que la Sala Regional considerara el informe que, en su caso, hubiera rendido la autoridad, toda vez que las Secciones de la Sala Superior pueden resolver tanto los planteamientos en él contenidos, así como los vertidos en el recurso y, según proceda, confirmar o revocar la interlocutoria cuestionada por algún aspecto sustantivo propio de la medida cautelar que se hubiere otorgado.

Recurso de Reclamación Núm. 33216/07-17-02-1/1089/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a

favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de septiembre de 2009)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- […]

A juicio de este Cuerpo Colegiado es **FUNDADO** el agravio de la recurrente, pero **INSUFICIENTE** para revocar la sentencia interlocutoria recurrida, por las razones que se expresan a continuación.

A través del proveído dictado el 12 de noviembre de 2008 el Magistrado Instructor otorgó la suspensión provisional pero **omitió ordenar correr traslado a la autoridad a quien se imputa el acto administrativo o los hechos objeto de la controversia, requiriéndole el informe que debería rendir en un plazo de tres días**.

Con dicha omisión se contravino lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, numeral conforme al cual, **sólo es posible que una Sala Regional de este Tribunal Administrativo, dicte resolución definitiva que resuelva el incidente de petición de medidas cautelares**, decretando o negando las medidas cautelares solicitadas, **después de haber recibido el informe que previamente haya solicitado a la autoridad a la que se imputa el acto administrativo o los hechos objeto de controversia o, en su caso, cuando la autoridad respectiva**, a pesar de habérsele requerido dicho informe, **no lo haya rendido y haya transcurrido el término que se le concedió para ello**.

Lo anterior tiene importancia, si se toma en consideración que la finalidad de que las autoridades a las que se les impute el acto administrativo o los hechos objeto de controversia, rindan un informe respecto de los incidentes de petición de medidas cautelares planteados en el Juicio Contencioso Administrativo, es que la Sala Regional que conozca de éstos, al momento de resolver en definitiva los incidentes, tome en consideración el informe que en su caso haya sido rendido por la autoridad.

Atendiendo a lo anterior, resulta claro que en la especie ha habido, una violación al procedimiento que debe llevarse a cabo dentro del incidente de petición de medidas cautelares, en la medida que la autoridad emisora de las resoluciones impugnadas, en este caso, el titular de la Administración Local de Recaudación del Sur del Distrito Federal **estuvo impedido para formular el informe correspondiente, y que el contenido de éste fuera considerado en la sentencia interlocutoria que resolviera sobre la suspensión definitiva de las resoluciones impugnadas**.

Por lo anterior, queda de manifiesto que efectivamente, para dictar la sentencia interlocutoria ahora recurrida, la Segunda Sala Regional Metropolitana no requirió a la autoridad demandada para que rindiera su informe con motivo de la medida cautelar de suspensión.

Lo anterior constituye una violación procesal cometida por la Sala Regional en perjuicio de una de las partes, en este caso de la autoridad demandada, transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 25, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 28, fracción VIII de la propia ley, que establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

En ese orden de ideas, le asiste la razón a la autoridad en cuanto a la violación procesal que atribuye a la Segunda Sala Regional Metropolitana, sin embargo, dicha irregularidad no es suficiente para revocar la sentencia interlocutoria reclamada con el

propósito de que la Administración Local de Recaudación del Sur del Distrito Federal rinda el informe correspondiente.

En efecto, al resultar fundado el agravio analizado esta Segunda Sección se ocupa del análisis de los restantes argumentos formulados en el recurso de reclamación sobre aspectos sustantivos propios de la medida cautelar otorgada, ello con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la garantía individual de impartición de justicia pronta y expedita y así evitar una dilación mayor en la resolución a la solicitud de concesión de la medida suspensiva, pues de ordenarse a la Sala **Regional reponer el procedimiento a partir de la solicitud del informe a que se refiere el artículo 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo**, ello sería conculcatorio de la garantía individual referida, en razón del tiempo transcurrido para la resolución de la solicitud de suspensión planteada por la enjuiciante.

[...]

En merito de lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 23, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor a partir del 07 de diciembre de 2007, en relación con el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I. Es procedente el recurso de reclamación formulado por el Administrador Local Jurídico del Sur del Distrito Federal, en contra de la sentencia interlocutoria dictada el 12 de noviembre de 2008;

II. Los agravios vertidos por el recurrente son **FUNDADOS EN PARTE** pero **INSUFICIENTES** para revocar la sentencia interlocutoria recurrida, en consecuencia;

III. Se **CONFIRMA** la sentencia interlocutoria de 12 de noviembre de 2008, que concedió la suspensión definitiva de la ejecución de las resoluciones impugnadas;

IV. Envíese copia del presente fallo a la Sala Regional de origen, para que sea integrada a la carpeta de suspensión correspondiente;

V. No ha lugar a devolver la carpeta de suspensión, considerando que sólo se remitieron a esta Sala Superior copias certificadas de las constancias de dicha carpeta.

VI.- Notifíquese. Con copia autorizada de la presente resolución y en su oportunidad archívese como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor de los Magistrados Guillermo Domínguez Belloc, Olga Hernández Espíndola, Alfredo Salgado Loyo y Silvia Eugenia Díaz Vega, estando ausente el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 24 de septiembre de 2009, y con fundamento en lo previsto por los artículos 27, fracción III y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-388

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL.- CUANDO NO SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS EXCEPCIONES PREVISTAS, EN EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA VIGENTE, DEBERÁ ESTARSE A LA REGLA GENERAL CONTENIDA EN EL PROPIO ARTÍCULO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, primer párrafo, de la Ley Orgánica de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por regla general la competencia territorial de las Salas Regionales para conocer de un juicio contencioso administrativo se fija atendiendo al domicilio fiscal del demandante. El propio artículo 34, en sus fracciones I, II y III establece como excepción que, deberá atenderse a la sede de la autoridad demandada, tratándose de personas morales que formen parte del sistema financiero, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o tengan el carácter de controladoras o controladas, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, y determinen su resultado fiscal consolidado; que el demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país; y que se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria o por las unidades administrativas adscritas a dicha Administración General. Por lo anterior, cuando en el caso no se actualice alguno de los supuestos de excepción, debe estarse a la regla general establecida en el artículo 34, primer párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el cual se dispone que, las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante.

Incidente de Incompetencia Núm. 710/09-05-03-1/1677/09-06-01-1/2070/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de septiembre de 2009, por unanimi-

dad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de septiembre de 2009)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-2aS-389

Incidente de Incompetencia Núm. 1274/09-09-01-9/1060/09-10-01-4/2163/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de septiembre de 2009)

VI-P-2aS-390

Incidente de Incompetencia Núm. 2737/08-15-01-4/1343/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de octubre de 2009)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-224
Incidente de Incompetencia Núm. 809/08-09-01-3/1149/08-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 31 de marzo de 2009, por unanimidad de 5 votos a

favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 31 de marzo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 18. Junio 2009. p. 613

VI-P-2aS-367
Incidente de Incompetencia Núm. 635/09-18-01-8/415/09-21-01-9/1977/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 230

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-391

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL. LOS DOCUMENTOS CERTIFICADOS DE PANTALLA DEL SISTEMA DE CÓMPUTO DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, LOGRAN DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN LEGAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 34, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- Del referido precepto, en sus párrafos primero y último, se desprende que las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, debiendo presumirse que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal, salvo que la parte demandada demuestre lo contrario. En este sentido, si la autoridad para desvirtuar dicha presunción legal, ofrece como prueba un documento certificado de pantalla del sistema de cómputo del Registro Federal de Contribuyentes, denominado "REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE", tal documento, valorándose en términos de lo dispuesto por los artículos 46, fracción I y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, logra desvirtuar la citada presunción legal, si del mismo se advierte que la demandante tenía manifestado el domicilio fiscal respectivo ante el Servicio de Administración Tributaria al momento de presentarse la demanda, que esa información consta en medios electrónicos y fue impresa para ofrecerse como medio de convicción en el juicio, estimándose fiable el método en que fue generada y archivada en razón de la certificación contenida en la copia exhibida, y que la información relativa es accesible para su ulterior consulta, al obrar en la base de datos de la referida dependencia.

Incidente de Incompetencia Núm. 851/09-12-01-7/1031/09-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, en sesión de 29 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de septiembre de 2009)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-2aS-392

Incidente de Incompetencia Núm. 31317/08-17-02-9/1787/09-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de octubre de 2009)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-339
Incidente de Incompetencia Núm. 30361/08-17-03-5/444/09-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de junio de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 145

VI-P-2aS-340
Incidente de Incompetencia Núm. 2496/08-11-02-8/780/09-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, en sesión de 29 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.

(Tesis aprobada en sesión de 29 de septiembre de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 145

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-2aS-393

VISITA DOMICILIARIA. ES ILEGAL EL OFICIO QUE COMUNICA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRÁCTICA DE AQUÉLLA, SI SE EMITE CON MOTIVO DE UNA REVISIÓN DE DICTAMEN INICIADA CON ANTERIORIDAD.- Si las autoridades fiscales ejercen sus facultades de comprobación para revisar el dictamen sobre estados financieros formulado por contador público, con fundamento en los artículos 42, fracción IV y 52-A del Código Fiscal de la Federación, y una vez cumplido el orden secuencial establecido en las fracciones I a III de este último precepto, deciden practicar una visita domiciliaria en términos de la fracción III del mencionado artículo 42, a fin de obtener información y documentación suficiente para observar la situación fiscal de los contribuyentes; dichas autoridades deben continuar con las reglas establecidas para ese efecto en los artículos 43 a 47 del propio Código y demás normas que regulan la visita domiciliaria, sin que sea válida la ampliación de ésta computando el plazo desde que inició la revisión del dictamen, ya que se trata de facultades de comprobación distintas e independientes, con tratamientos específicos, reguladas por preceptos legales diversos y no deben confundirse aunque se ejerzan conjuntamente, por tanto, la prórroga relativa debe emitirse con las particularidades propias del desarrollo de la visita y en todo caso a partir de que ésta inició, máxime que es ilógico e imposible jurídicamente ampliar un plazo a partir de una fecha que no corresponde a la de su vencimiento.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7072/07-11-01-8/1410/09-S2-06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1° de octubre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto C. Grandini Ochoa.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de octubre de 2009)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

Con base en las anteriores reproducciones, se sintetiza en principio lo argumentado por la parte actora, quien sostiene:

Que debe declararse la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, en razón de que la misma deriva de una visita domiciliaria iniciada el 7 de junio de 2006 y concluida hasta el 19 de diciembre del mismo año, esto es, fuera del plazo legal de 6 meses previsto en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, según su texto vigente hasta el 29 de julio de 2006.

Que no puede surtir efecto legal alguno el oficio de 29 de junio de 2006, relativo a la ampliación de plazo respecto de las facultades de comprobación iniciadas el 10 de enero de 2006, toda vez que tales facultades consistieron en una revisión de dictamen fiscal que no puede confundirse con una visita domiciliaria, aunado a que sería un absurdo notificar una prórroga de ésta a los 23 días de haberse iniciado y además el contenido de tal oficio, en relación con la determinación del crédito fiscal, evidencia que los motivos para su emisión constituyeron un pretexto, pues la información obtenida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores resultó inocua.

Los argumentos de la autoridad demandada se sintetizan de la siguiente forma:

Que fue legal la aplicación del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación para efectos de ampliar el plazo para concluir el procedimiento fiscalizador que motivó la resolución impugnada, pues la autoridad para revisar el dictamen de estados financieros siguió el orden establecido en el artículo 52-A del mismo ordenamiento, conforme al cual es posible practicar una visita domiciliaria si la

documentación e información proporcionada por el contador público registrado y la propia demandante resultara insuficiente.

Que la autoridad se sujetó en la práctica de la visita domiciliaria a las formalidades previstas en los artículos 43, 44 y 46 del Código Fiscal de la Federación, sin embargo, las facultades de comprobación no dieron inicio con la orden de visita, sino el 10 de enero de 2006, con la notificación a la actora de la copia de la solicitud de documentación formulada al contador público registrado contenida en el oficio de 23 de noviembre de 2005.

Que en tal virtud si el inicio de facultades de comprobación fue el 10 de enero de 2006, el plazo de 6 días hubiera fenecido el 10 de julio del mismo año, pero fue ampliado por 6 meses más a partir de esta última fecha, por lo que la prórroga vencía el 10 de enero de 2007, luego, si el acta final de visita se levantó el 19 de diciembre de 2006, entonces no operó en beneficio de la actora lo dispuesto por el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación.

Que el oficio de ampliación del plazo de las facultades de comprobación sí se encuentra debidamente fundado y motivado, aunado a que la ley no prevé los supuestos particulares para que proceda una prórroga, por lo que la autoridad no está obligada a expresar porqué fue necesaria, pero no obstante ello, la fiscalizadora sí consideró la documentación e información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aunque la misma no fue suficiente para determinar omisión de contribuciones.

A juicio de los integrantes de esta Segunda Sección el concepto de impugnación en análisis resulta **fundado** y suficiente para declarar la nulidad solicitada, toda vez que tal y como lo sostiene la parte actora, la visita domiciliaria de la que deriva la resolución impugnada resulta violatoria de lo establecido por el artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación, siendo conveniente a efecto de dar claridad a lo anterior, transcribir dicho precepto en su texto aplicable vigente en el año 2006, sin considerar las reformas que sufrió tal numeral publicadas en el Diario Oficial de la

Federación el 28 de junio de ese mismo año, ya que el artículo segundo fracción VI de las disposiciones transitorias respectivas, señaló que lo dispuesto en el artículo 46-A reformado, entre otros preceptos, se aplicaría al ejercicio de las facultades de comprobación que se iniciaran a partir de la entrada en vigor del Decreto.

[N.E. Se omite transcripción]

De conformidad con lo dispuesto por el anterior precepto, las visitas domiciliarias que lleven a cabo las autoridades fiscales deben ser concluidas, por regla general, dentro del plazo de seis meses contados a partir del inicio de las facultades de comprobación, pues en caso contrario, si llegado el plazo referido no ha sido levantada el acta final, la consecuencia es que la visita se entiende concluida en ese momento, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron.

Lo anterior es la regla general a observarse en la práctica de visitas domiciliarias, sin embargo, en algunos casos el plazo es mayor y en otros casos no siempre es el definitivo, pues es susceptible de ampliarse y suspenderse bajo determinadas circunstancias.

Precisado lo anterior se hace necesario señalar las principales actuaciones practicadas dentro de la visita domiciliaria de la que deriva la resolución impugnada, así como algunos actos de fiscalización llevados a cabo por la autoridad en perjuicio de la hoy actora ajenos a dicha visita:

- **10 de enero de 2006**.- Se notifica a GRUPO PALMAS, S.A. DE C.V., copia del oficio número 324-SAT-15-II-5-8764, de 23 de noviembre de 2005, por medio del cual la Administración Local de Auditoría Fiscal de Toluca del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en los artículos 42, fracción IV, último párrafo y 52-A, fracción I inciso b), del Código Fiscal de la Federación, citó al Contador Público Rodolfo Beltrán Dávalos para que exhibiera sus papeles de trabajo a fin de revisar el dictamen fiscal que formuló respecto de los estados financieros de la hoy actora

por el ejercicio fiscal de 2001. Dicho documento se reproduce a continuación:

[N.E. Se omite transcripción]

- **31 de marzo de 2006**.- Se notifica a GRUPO PALMAS, S.A. DE C.V., copia del oficio número 324-SAT-15-II-3-2-1816, de 15 de marzo de 2006, por medio del cual la Administración Local de Auditoría Fiscal de Toluca, con fundamento en los artículos 42, fracción IV, último párrafo y 52-A, fracción I inciso c), del Código Fiscal de la Federación, solicitó información, datos y documentación al Contador Público Rodolfo Beltrán Dávalos, a fin de revisar el dictamen fiscal que formuló respecto de los estados financieros de la hoy actora por el ejercicio fiscal de 2001. Dicho documento se reproduce parcialmente:

[N.E. Se omite transcripción]

- **27 de abril de 2006**.- En virtud de que el mencionado Contador Público no proporcionó a la autoridad la información, datos y documentación solicitados, se notificó a GRUPO PALMAS, S.A. DE C.V., el oficio número 324-SAT-15-II-2618 de 21 de abril de 2006, por medio del cual la Administración Local de Auditoría Fiscal de Toluca, con fundamento en los artículos 42, fracción II y último párrafo, 48, fracciones I, II y III y 52-A, fracción II, del Código Fiscal de la Federación le solicitó información, datos y documentación a fin de revisar el dictamen fiscal que le fue formulado respecto de los estados financieros de la hoy actora por el ejercicio fiscal de 2001 y así continuar ejerciendo las facultades de comprobación previstas en la fracción IV del referido artículo 42. Dicho documento se reproduce enseguida:

[N.E. Se omite transcripción]

- **7 de junio de 2006**.- En virtud de que a juicio de la autoridad no fueron proporcionados la información, datos y documentación solicitados previamente, se notificó a GRUPO PALMAS, S.A. DE C.V., el oficio número 324-SAT-15-II-3864 de 2 de junio de 2006, que contiene la orden número IDD1600002/06, por medio del cual la Administración Local de Auditoría Fiscal de Toluca, con fundamento en los artículos 42, fracción III, 43, 44, 45, 46 y 52-A, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, determinó la práctica de una visita domiciliaria a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta la hoy actora como sujeto directo en materia de impuesto al activo, impuesto especial sobre producción y servicios, impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, y como obligado solidario en materia de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, por el ejercicio fiscal de 2001. Dicho documento se reproduce enseguida:

[N.E. Se omite transcripción]

- **30 de junio de 2006**.- En virtud de que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Toluca solicitó a la Administración Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, que por su conducto se requiriera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información y documentación respecto de diversas cuentas bancarias de GRUPO PALMAS, S.A. DE C.V., que una vez proporcionada tendría que ser analizada, depurada y valorada; por oficio número 324-SAT-15-II-4891 de 29 de junio de 2006, con fundamento en el artículo 46-A, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, amplió por seis meses más contados a partir del 10 de julio de 2006, "*el plazo de conclusión de la revisión que se le ha estado practicando por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001, respecto de la cual se iniciaron las facultades de comprobación con la notificación a esa contribuyente de la copia del oficio número 324-SAT-15-II-5-8764, de fecha 23 de noviembre de 2005,*

notificado legalmente a esa contribuyente, previo citatorio el día 10 de enero de 2006, y que actualmente se lleva a cabo al amparo de la orden número IDD1600002/06 contenida en el oficio número 324-SAT-15-II-3864 de fecha 02 de junio de 2006". Dicho documento se reproduce enseguida:

[N.E. Se omite transcripción]

- **7 de diciembre de 2006**.- Día en el que al no haberse levantado el acta final, o en su caso, de no haberse notificado la ampliación de la visita, se hubiera entendido concluida, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron.

- **19 de diciembre de 2006**.- Fecha en que se levantó el acta final de la visita domiciliaria, misma que en copia certificada obra en autos a fojas 1,100 a 1,647 y de la cual, dada su extensión, sólo se reproduce su primer folio.

[N.E. Se omite transcripción]

A su vez las actuaciones que han quedado sintetizadas se aprecian de lo señalado en las primeras cinco hojas de la resolución impugnada, que a continuación se insertan para mayor referencia:

[N.E. Se omite transcripción]

De conformidad con las anteriores precisiones queda en evidencia como al levantar las autoridades fiscales el acta final de la visita domiciliaria de la que derivó la resolución impugnada, hasta el 19 de diciembre de 2006, lo hicieron una vez que había transcurrido el plazo máximo para su conclusión, mismo que no se amplió legalmente.

En efecto, tenemos que si la visita domiciliaria inició el 7 de junio de 2006 y no se amplió legalmente, debió concluirse a más tardar el 7 de diciembre de 2006, sin embargo, como el acta final se levantó el 19 de diciembre de 2006, fue 12 días después de que por disposición de ley quedó sin efectos la orden de visita y las actuaciones que de ella se derivaron.

Ahora bien, de los argumentos de la demandada se desprende una cuestión en controversia que debe ser aclarada, en la medida en que de ella depende el hecho de que la visita domiciliaria se excediera o no del plazo máximo para su duración.

Tal cuestión es si por el hecho de que la autoridad primero revisó el dictamen de estados financieros de la hoy actora por el ejercicio fiscal de 2001, presentado por el Contador Público Registrado Rodolfo Beltrán Dávalos, y después siguiendo el orden establecido en el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, practicó la visita domiciliaria, entonces ambas modalidades del ejercicio de facultades de comprobación deben considerarse como una sola revisión, fusionándose, y en ese tenor la ampliación notificada el 30 de junio de 2006 para que surtiera efectos a partir del 10 de julio de 2006, habría permitido que concluyera la revisión hasta el 10 de enero de 2007, incluyendo la visita domiciliaria.

Esta Juzgadora considera que no le asiste la razón a la autoridad, por las siguientes consideraciones:

PRIMERA. El artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, en su texto aplicable al caso que nos ocupa, dispone:

[N.E. Se omite transcripción]

Del anterior precepto se desprende, en lo que interesa al caso en análisis, que cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación revisen el dictamen sobre los estados financieros de los contribuyentes, primeramente requerirán al contador público que lo haya formulado, notificando al contribuyente copia del requerimiento respectivo, cualquier información que debiera estar incluida

en los estados financieros dictaminados para efectos fiscales, la exhibición de los papeles de trabajo propiedad del contador público elaborados con motivo de la auditoría, así como la información pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente.

Luego, si la información y documentos no fueren suficientes o no se hubieren presentado en tiempo, las autoridades podrán requerirlos directamente al contribuyente, notificando copia al contador público.

Además las autoridades podrán solicitar en cualquier tiempo a los terceros relacionados con el contribuyente o responsables solidarios, la información y documentación para verificar si son ciertos los datos consignados en el dictamen y demás documentos. La solicitud se hará por escrito con copia al contribuyente.

Seguido el orden anterior, si a juicio de las autoridades no fuera suficiente la información y documentación, podrán practicar visita domiciliaria.

De lo antes detallado se desprende que se contempla un orden secuencial para el ejercicio de facultades de comprobación diversas con que cuentan las autoridades fiscales, no así que el hecho de seguir ese orden implique que se esté ante un solo ejercicio de facultades o que las mismas se fusionen como lo afirma la demandada en su contestación, tan es así que la fracción IV del artículo 52-A antes reproducido, prevé la posibilidad de practicar visita domiciliaria en los términos del Código Fiscal de la Federación, lo cual supone seguir las reglas específicas e individuales de dicha visita, con independencia de las actuaciones practicadas con motivo del ejercicio de la facultad de comprobación diversa relativa a la revisión del dictamen formulado por contador público.

SEGUNDA. El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, dispone lo siguiente en su texto aplicable:

[N.E. Se omite transcripción]

Según se observa del numeral apenas transcrito, las autoridades fiscales cuentan con una serie de facultades de comprobación bien diferenciadas en cada una de las fracciones del propio precepto. En lo que es de nuestro interés se destacan la visita domiciliaria y la revisión de los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes, fracciones III y IV respectivamente, ambas distintas entre sí, pues la visita domiciliaria se desarrolla en los artículos 43, 44, 45, 46 y 47 del Código Fiscal de la Federación y la revisión de dictamen se regula en el 52-A del mismo ordenamiento.

De hecho, la situación de independencia entre las diversas facultades de comprobación de las autoridades fiscales, se deja ver con claridad en el último párrafo del referido artículo 42, al señalar que las autoridades fiscales podrán ejercer tales facultades **conjunta**, indistinta o **sucesivamente**, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.

Tal previsión debe interpretarse en el sentido de que, en el ejemplo que da el presente caso, una revisión de dictamen se inicia hasta que se notifique al contribuyente un acto relativo a la misma, al igual que una visita domiciliaria iniciará al notificarse al destinatario la orden correspondiente, de modo que si las autoridades fiscales notifican a los contribuyentes actos que correspondan a facultades de comprobación distintas entre sí, antes de informar la conclusión de una de ellas, deberá entenderse que se está ante un ejercicio **conjunto** de facultades, pero cada una de ellas seguirá regida por las disposiciones específicas que las regulen y sus propias formalidades.

El aserto relativo a que una visita domiciliaria inicia al notificarse al destinatario la orden correspondiente, queda de manifiesto con lo señalado en el artículo 44, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, que en su texto aplicable dispone:

[N.E. Se omite transcripción]

TERCERA. El artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, que ya ha sido transcrito en páginas anteriores pero vale la pena retomarlo en este punto, en

cuanto al plazo de conclusión de una visita domiciliaria y de una revisión de contabilidad en las oficinas de las autoridades, dispone lo siguiente en sus párrafos primero, segundo y último de su texto aplicable:

[N.E. Se omite transcripción]

Conforme al anterior dispositivo las visitas domiciliarias deben ser concluidas, por regla general, dentro del plazo de seis meses a partir del inicio de esa modalidad de facultades de comprobación, pues en caso contrario, vencido ese plazo sin haber sido levantada el acta final, la visita se entiende concluida en ese momento, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron. Además se prevé la posibilidad de ampliar dicho término por seis meses y por una ocasión más, mediante oficio expedido por la autoridad que ordenó la visita.

Como se ve, el plazo legal de conclusión de una visita considerando la ampliación que puede tener lugar, se encuentra regulado en función de su inicio con la notificación de la orden de visita, no así en función de la notificación al contribuyente de un acto relativo al ejercicio de otro tipo de facultades de comprobación.

En este sentido el oficio de ampliación número 324-SAT-15-II-4891, detallado en páginas anteriores y notificado a la hoy actora el 30 de junio de 2006, no puede servir legalmente para tener por ampliado el plazo de duración de la visita domiciliaria de que deriva la resolución impugnada, por dos razones fundamentales:

a) Porque en dicho oficio lo que se amplió fue "e*l plazo de conclusión de la revisión que se le ha estado practicando* <a la hoy actora> *por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001, respecto de la cual se iniciaron las facultades de comprobación con la notificación a esa contribuyente de la copia del oficio número 324-SAT-15-II-5-8764, de fecha 23 de noviembre de 2005, notificado legalmente a esa contribuyente, previo citatorio el día 10 de enero de 2006*"; es decir, **se amplió la revisión del dictamen de estados**

financieros que inició el 10 de enero de 2006, **no así la visita domiciliaria** y por eso la prórroga sería a partir del 10 de julio de 2006.

b) Para que el citado oficio número 324-SAT-15-II-4891, fuera idóneo para tener por ampliado el plazo de duración de la visita domiciliaria, era imprescindible que se hubiese tomado en consideración que la misma inició el **7 de junio de 2006,** con la notificación a GRUPO PALMAS, S.A. DE C.V., del oficio número 324-SAT-15-II-3864 de 2 de junio de 2006, que contiene la orden número IDD1600002/06; luego, la ampliación sólo pudo haber sido a partir del **7 de diciembre de 2006** <*en que hubiera fenecido el plazo inicial de 6 meses*>, no así a partir del 10 de julio de 2006, pues es ilógico e imposible jurídicamente ampliar un plazo a partir de una fecha en que aún no vence, es decir, no puede ampliarse a partir del 10 de julio de 2006, un plazo que vence hasta el 7 de diciembre de ese mismo año.

En este orden de ideas, es evidente que la autoridad fiscal confundió las facultades de comprobación que estaba ejerciendo conjuntamente, de manera que amparándose en el orden secuencial previsto en el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, pretendió fusionar la revisión del dictamen de estados financieros con la práctica de la visita domiciliaria, confusión que se manifiesta en la medida en que en la redacción del multicitado oficio de ampliación 324-SAT-15-II-4891, se dijo que la revisión del dictamen de estados financieros "*...actualmente se lleva a cabo al amparo de la orden número IDD1600002/06 contenida en el oficio número 324-SAT-15-II-3864 de fecha 02 de junio de 2006...*"; lo cual no fue acertado, pues una revisión de dictamen no pudo dejar de serlo para convertirse en una visita domiciliaria.

Robustece lo anterior la tesis número IV.1o.A.9 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XIV, septiembre de 2001, página 1,321, que señala:

"**FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. LAS CONTEMPLADAS EN LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS INDEPENDIENTES, POR LO QUE LA NOTIFICACIÓN DE UNO, NO PUEDE SERVIR COMO PRIMER ACTO DE INICIO DEL OTRO**." [N.E. Se omite transcripción]

Así como la tesis número XX.1o.63 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXII, diciembre de 2005, página 2,790, que dice:

"**VISITA DOMICILIARIA. LA NOTIFICACIÓN PARA SU AMPLIACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE REALIZARSE ANTES DE QUE CONCLUYA EL PLAZO DE SEIS MESES Y SU CÓMPUTO DEBE INICIAR A PARTIR DE QUE ÉSTE CONCLUYE.**" [N.E. Se omite transcripción]

Igualmente es ilustrativa la tesis número I.1o.A.88 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XVII, enero de 2003, página 1,893, que dice:

"**VISITA DOMICILIARIA, AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA.**" [N.E. Se omite transcripción]

Así como las siguientes tesis aisladas de este Tribunal:

V-TASR-XXXIV-1873

"**FACULTADES DE COMPROBACIÓN. NO PUEDEN EJERCERSE VARIAS DE ELLAS EN UN SOLO PROCEDIMIENTO, NI MEZCLARSE LOS MISMOS.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V, No. 57, Septiembre 2005, pág. 248]

V-TASR-XXX-1002

"**OFICIO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- ES ILEGAL SI SE EMITE DENTRO DE UNA VISITA DOMICILIARIA, CON MOTIVO DE UNA REVISIÓN DE GABINETE INICIADA CON ANTERIORIDAD.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en R.T.F.J.F.A. Cuarta Época, Año IV, Tomo II, No. 40, Abril 2004, pág. 667]

Con base en todo lo anterior se tiene que la resolución impugnada se apoyó en los resultados de una visita domiciliaria que, en atención a los razonamientos vertidos con anterioridad, quedó sin efectos por disposición expresa de la ley, pues no se concluyó dentro del plazo límite previsto para tal efecto, razón por la cual tal resolución se ubica en el supuesto previsto por la fracción IV del artículo 51, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al dictarse en contravención de las disposiciones aplicables, resultando procedente declarar su nulidad lisa y llana con base en el artículo 52, fracción II, del mismo ordenamiento.

[...]

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 48, fracción I, inciso a), 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 14, fracción I y 23, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor, se resuelve:

R E S O L U T I V O S:

I.- La parte actora acreditó su pretensión, en consecuencia:

II.- Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, precisada en el Resultando 1° de este fallo, por las razones expuestas en el último Considerando del mismo.

III.- NOTIFÍQUESE con copia certificada de esta resolución a las partes, devuélvanse los autos originales del juicio a la Primera Sala Regional Hidalgo-México y en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 1° de octubre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor de los Magistrados Olga Hernández Espíndola, Alfredo Salgado Loyo, Juan Manuel Jiménez Illescas y Silvia Eugenia Díaz Vega. Estuvo ausente el Magistrado Guillermo Domínguez Belloc.

Fue Ponente en este asunto al Magistrado Alfredo Salgado Loyo, cuya ponencia fue aprobada.

Se formuló el presente engrose el 13 de octubre de 2009 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor, firma la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos de la misma Sección, quien autoriza y da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-394

EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA DECLARATORIA DEFINITIVA DE RETIRO POR INUTILIDAD POR CAUSAS AJENAS AL SERVICIO RESPECTO DE UN MARINO (INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA).- Con fundamento en los artículos 188, 189, 193 a 200 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, es que se dicta por la Secretaría de Marina, por conducto de su Director General de Recursos Humanos, de la Oficialía Mayor, la declaratoria de retiro por inutilidad por causas ajenas al servicio de un marino con motivo de un procedimiento administrativo de procedencia de retiro, mediante la cual se resuelve la inconformidad formulada por la interesada y que tiene el carácter de definitiva al resolver las objeciones planteadas en los términos del artículo 193 de dicha ley. La ejecución de la declaratoria definitiva de retiro en el caso de no ser controvertida, se traduciría en remitir el asunto a la Junta Directiva del Instituto mencionado para que esta por su parte emita su resolución y en su momento oportuno la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sancione los acuerdos que concedan, nieguen o modifiquen, suspendan o declaren insubsistentes los haberes de retiro correspondiente. Razón por la cual, los efectos de la suspensión que se otorgue en el procedimiento contencioso administrativo, conforme al artículo 28, fracción IX, incisos a), b) y c) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, únicamente pueden ser para que el marino actor continúe prestando sus servicios como miembro activo del ejército mexicano, percibiendo los haberes correspondientes y la atención médica que requieren él y su familia, incluyendo medicamentos, consultas, hospitalización y todo lo que resulte necesario para su padecimiento, con independencia de que en el juicio principal se continúe con el procedimiento contencioso y se emita el fallo correspondiente sobre la legalidad o no de la declaratoria impugnada y sin perjuicio de que los mandos militares competentes lo reubiquen acorde a su estado de salud.

Recurso de Reclamación Núm. 1316/08-19-01-9/1713/09-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. María Teresa Martínez García.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de octubre de 2009)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-32
Recurso de Reclamación Núm. 726/07-17-10-2/999/07-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de enero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de febrero de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 5. Mayo 2008. p. 75

VI-P-2aS-361
Recurso de Reclamación Núm. 3182/08-12-02-2/1019/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 213

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-395

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN EN BASE AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE OTORGARSE, CONFORME A DICHO PRECEPTO Y NO EN BASE A LOS ARTÍCULOS 24 Y 25 DE DICHA LEY.- Si en la demanda de nulidad un particular solicita la suspensión del procedimiento administrativo con base en el artículo 28 de la Ley en cita, el Magistrado Instructor al otorgar la suspensión provisional o la Sala en la interlocutoria respectiva deberá atender a dicha solicitud o en su caso expresar los motivos o fundamentos por los cuales no otorgó dicha suspensión con base en este artículo y lo hace con fundamento en lo que disponen los diversos 24 y 25 de la Ley en mención que se refieren a las medidas cautelares.

Recurso de Reclamación Núm. 369/09-13-02-7/1855/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de octubre de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de octubre de 2009)

PRECEDENTE:

V-P-2aS-632
Recurso de Reclamación Núm. 4034/06-17-02-9/885/06-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 13 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.-

Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de marzo de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 75. Marzo 2007. p. 378

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-396

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. TRATÁNDOSE DE LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN EN LA CAPTACIÓN DE RECURSOS DEL PÚBLICO EN GENERAL, IMPUESTA POR VIOLACIÓN A LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA.- En términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción IX de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, podrá otorgarse la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo siempre y cuando con dicho otorgamiento no se afecte al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; es por ello entonces que, tratándose de aquellas sanciones que sean impuestas a las Sociedades Cooperativas con apoyo en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de manera específica las de suspender la captación de recursos de sus socios o del público en general, no son susceptibles de ser suspendidas en cuanto a su ejecución, ya que no debe pasar inadvertido que la legislación que regula esas sociedades tiene como finalidad la de proteger y dar seguridad al destino de los recursos económicos obtenidos a partir del desprendimiento que hacen los particulares de una parte de su patrimonio y su aportación a un fondo común, cuestión ésta que evidentemente constituye una cuestión de interés general.

Recurso de Reclamación Núm. 19281/07-17-04-4/1414/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de octubre de 2009)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-136
Recurso de Reclamación Núm. 1778/07-17-10-4/1044/08-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de septiembre de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de octubre de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 14. Febrero 2009. p. 332

VI-P-2aS-137
Recurso de Reclamación Núm. 31423/06-17-02-2/1128/07-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de octubre de 2008, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Isabel Messmacher Linartas.
(Tesis aprobada en sesión de 30 de octubre de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 14. Febrero 2009. p. 332

VI-P-2aS-205
Recurso de Reclamación Núm. 31436/06-17-06-6/1537/08-S2-06-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de marzo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de marzo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 17. Mayo 2009. p. 389

VI-P-2aS-336
Recurso de Reclamación Núm. 1173/07-17-08-6/278/09-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

nistrativa, en sesión de 2 de junio de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.

(Tesis aprobada en sesión de 2 de junio de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 131

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-397

RECURSO DE RECLAMACIÓN.- SI AL PROMOVERSE SE IMPUGNA LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA SALA REGIONAL, DEBE TRAMITARSE COMO INCIDENTE DE INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO.- Cuando alguna de las partes interponga recurso de reclamación en contra del auto que admitió la demanda y en el mismo impugnen la competencia territorial de la Sala Regional, ésta debe tramitar dicho medio de defensa como incidente de incompetencia por razón de territorio de acuerdo con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, suspender la tramitación del juicio y remitir a la Presidencia del Tribunal copia certificada de la demanda y de las constancias que estime pertinentes, a fin de que el asunto se someta al conocimiento de la Sección en turno de la Sala Superior y ésta, de conformidad con lo establecido por el artículo 23, fracción VII, de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, determine cuál es la Sala Regional que debe conocer del asunto. De este modo, la Sala Regional no debe resolver el recurso de reclamación que impugnó la admisión de demanda por estimarse que no es la competente, por razón de territorio, pues al margen de la resolución que dictara, es decir, ya sea que se declare incompetente o no, actuará de manera contraria a derecho.

Incidente de Incompetencia Núm. 618/09-08-01-4/2380/09-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto C. Grandini Ochoa.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de octubre de 2009)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

SEGUNDO.- Esta Segunda Sección de la Sala Superior estima que el presente incidente de incompetencia por razón de territorio es procedente en términos de lo dispuesto por los artículos 29, fracción I, 30 y 39, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que fue promovido por una de las partes y antes de que quedara cerrada la instrucción en términos del artículo 47 del mismo ordenamiento legal.

No obsta a lo anterior el hecho de que la instancia que nos ocupa haya sido promovida como recurso de reclamación en términos del artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en contra del auto que admitió la demanda, pues lo cierto es que los argumentos vertidos por la autoridad se dirigen a impugnar la competencia territorial de la Sala Regional del Centro I, lo que debe tramitarse como incidente de incompetencia por razón de territorio de acuerdo con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, conforme al cual se permite a cualquiera de las partes hacer notar esa situación; de este modo, fue correcto que la Sala Regional no tramitara la petición ni la resolviera como recurso de reclamación, pues al margen de la resolución dictada en ese caso, declarándose incompetente o no, hubiera actuado de manera contraria a derecho.

Es aplicable en lo substancial la jurisprudencia V-J-SS-23, sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año III, N° 34, octubre de 2003, página 7, que señala:

"**RECURSO DE RECLAMACIÓN.- SI AL PROMOVERSE SE IMPUGNA LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA SALA REGIO-**

NAL, DEBE TRAMITARSE COMO INCIDENTE DE INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO".- [N.E. Se omite transcripción]

La anterior jurisprudencia se considera aplicable en su parte substancial, no obstante que se refiera al último párrafo del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación, pues si bien es cierto dicho numeral fue derogado a partir del 1° de enero de 2006, por virtud de lo dispuesto por los diversos artículos primero y segundo transitorios de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 1° de diciembre de 2005; también es cierto que aquél numeral establecía en su parte conducente un supuesto idéntico al contemplado en el artículo 30, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Finalmente es de hacer notar en cuanto a la procedencia de este incidente, que fue promovido por una autoridad legitimada conforme al penúltimo párrafo del artículo 5° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, conforme al cual la representación de las autoridades demandadas corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en su Reglamento.

En la especie la interposición del incidente debe atribuirse a la Administradora Local Jurídica de Aguascalientes del Servicio de Administración Tributaria, siendo el caso que en el oficio que contiene la promoción se encuentra debidamente fundada y motivada la competencia por materia, grado y territorio de dicha autoridad, invocándose entre otros preceptos, el numeral 24, primer párrafo y fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, que dispone:

[N.E. Se omite transcripción]

Según se lee, el precepto que nos ocupa faculta a las Administraciones Locales Jurídicas del Servicio de Administración Tributaria para ejercer las acciones, ex-

cepciones y defensas que correspondan en los juicios ante la Sala Regional de este Tribunal cuya sede se encuentre dentro de la circunscripción territorial de aquéllas, interpuestos contra resoluciones o actos de cualquier unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, razón por la cual válidamente la Administración Local Jurídica de Aguascalientes, con circunscripción territorial en el propio Estado de Aguascalientes (donde se encuentra la sede de la Sala Regional del Centro I), puede representar en juicio a cualquier autoridad demandada de dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el caso, a la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Guadalajara Sur.

[...]

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 29, fracción I y 30, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 23, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente; se resuelve:

R E S O L U T I V O S :

I.- Es **procedente** pero **infundado** el incidente de incompetencia planteado por la parte demandada, en consecuencia:

II.- Es competente por razón de territorio para seguir conociendo del juicio contencioso administrativo que nos ocupa, la **Sala Regional del Centro I**, a la que deberán devolvérsele los autos con copia certificada de esta sentencia para que continúe substanciando el procedimiento y en su momento emita el fallo correspondiente.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 15 de octubre de 2009, por unanimidad

de 5 votos a favor de los Magistrados Guillermo Domínguez Belloc, Olga Hernández Espíndola, Alfredo Salgado Loyo, Juan Manuel Jiménez Illescas y Silvia Eugenia Díaz Vega.

Fue Ponente en este asunto el Magistrado Alfredo Salgado Loyo, cuya ponencia fue aprobada.

Se formuló el presente engrose el 21 de octubre de 2009 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor, firma la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos de la misma Sección, quien autoriza y da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-398

ENTIDADES FEDERATIVAS.- NO ESTÁN OBLIGADAS A OTORGAR GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL, AL SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- El artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si bien regula los supuestos en que procede la solicitud de suspensión de la ejecución, y puntualiza la tramitación de dicha vía incidental, no se refiere a los sujetos obligados al otorgamiento de garantía y/o, en su caso, a las personas exceptuadas de dicha obligación. Tampoco el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, al establecer los medios de garantía que pueden rendirse para garantizar el interés fiscal, se refiere a los sujetos que se encuentran obligados y/o exceptuados del aseguramiento del interés fiscal. Por tanto, cuando la suspensión de la ejecución en el juicio contencioso administrativo es concedida a una Entidad Federativa con fundamento en el artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha invocación resulta totalmente aplicable y se encuentra plenamente justificada, al admitirse la supletoriedad de dicho ordenamiento en los artículos 1° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 5° del Código Fiscal de la Federación. De suerte que si el citado artículo 4° previene que las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, como personas morales oficiales, no serán sujetas a mandamiento de ejecución ni providencia de embargo en su contra, y estarán exentas de presentar las garantías que la ley exija a las partes; debe concluirse que en el juicio contencioso administrativo, dichas entidades no están obligadas a otorgar garantía para obtener la suspensión de la ejecución.

Recurso de Reclamación Núm. 1109/09-12-02-9/2207/09-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de octubre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.-

Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de octubre de 2009)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-2aS-399

Recurso de Reclamación Núm. 16716/07-17-11-9/1295/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de octubre de 2009)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

CUARTO.- [...]

Por otra parte, son infundados los argumentos que la autoridad recurrente sostiene en el sentido de que no debió otorgarse a la entidad actora "*el beneficio o prerrogativa prevista por el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente*", porque, según afirma, existe una "*norma fiscal expresa que regula la manera en que se garantiza el interés fiscal*".

La incidentista aduce que la aplicación al caso del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relacionado con el diverso 141 del

Código Fiscal de la Federación, excluyen la aplicación supletoria del mencionado artículo 4 del Código adjetivo federal; sin embargo, a consideración de este órgano jurisdiccional, la interpretación que realiza la autoridad es incorrecta.

Los artículos en comento son del contenido siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Observamos que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si bien regula los supuestos en que procede la solicitud de suspensión de la ejecución, y puntualiza la tramitación de dicha vía incidental, no se refiere a los sujetos obligados al otorgamiento de garantía y/o, en su caso, a las personas exceptuadas de dicha obligación.

Tampoco el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, al establecer los medios de garantía que pueden rendirse para garantizar el interés fiscal, se refiere a los sujetos que se encuentran obligados y/o exceptuados del aseguramiento del interés fiscal.

Se deduce así que no existe disposición en ninguno de los ordenamientos invocados, que señale en términos expresos que las personas morales oficiales, concretamente las entidades federativas, al comparecer en el juicio contencioso administrativo como demandantes, estén obligadas a ofrecer garantía del interés fiscal.

Ahora bien, la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles se encuentra admitida en materia fiscal por el artículo 5° del Código Fiscal de la Federación; supletoriedad que se condiciona a los casos en que "*su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal*":

[N.E. Se omite transcripción]

De suerte que la invocación en la sentencia reclamada del artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles resulta totalmente aplicable; conclusión que se justifica por las consideraciones jurídicas subsecuentes:

En principio, los supuestos para que opere la supletoriedad de leyes han sido descritos por el Poder Judicial de la Federación en la forma siguiente:

1°.- Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente.

2°.- Que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate.

3°.- Que las normas existentes en el primero, sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria.

4°.- Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no se contrapongan a las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.

Lo anterior es acorde al criterio jurisprudencial que a continuación se reproduce:

"**SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE**." [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F., Octava Época Tomo 76, Abril de 1994, Tesis I.4o.C. J/58, pág.33]

En este contexto se tiene que en el juicio contencioso ante este Tribunal el artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece:

[N.E. Se omite transcripción]

Conforme a la transcripción que antecede, en el juicio ante este tribunal, a falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo que no contravenga a las que regulan el juicio contencioso administrativo establecido en la citada Ley.

En este contexto, resulta que en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que rige el juicio contencioso en que se actúa, existe disposición expresa que permite la aplicación supletoria de las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, cumpliéndose con ello el primer requisito.

Ahora bien, conforme al artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, como personas morales oficiales, no serán sujetas a mandamiento de ejecución ni providencia de embargo en su contra, y estarán exentas de presentar las garantías que la ley exija a las partes.

Esta disposición que se estima aplicable supletoriamente al caso concreto, establece la situación procesal de las personas morales oficiales dentro de un procedimiento judicial, cuando les sea exigible el otorgamiento de garantías.

En la especie, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece en su artículo 28, como derecho de las demandantes, el otorgamiento de la suspensión de la ejecución de los actos impugnados, cuando se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal, lo que evidencia la exigencia de garantías asimilables a las referidas en el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se analiza.

Lo anterior actualiza en la especie, el segundo requisito para que opere la supletoriedad, puesto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contempla la institución jurídica que debe ser complementada con la regulación de la situación procesal de las personas morales oficiales, en un proceso judicial o jurisdiccional, como el que se lleva a cabo en este Tribunal, que se encuentra

específicamente desarrollada en el Código Federal de Procedimientos Civiles que se aplica supletoriamente.

Adicionalmente, debe atenderse a lo que ordena el artículo 25, fracción I del Código Civil:

[N.E. Se omite transcripción]

Por lo tanto, si la fracción I del artículo 25 del Código Civil establece que son personas morales (entendiéndose como oficiales en atención a la naturaleza misma de las que cita): la Nación, los Estados, los Municipios y demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, resulta jurídicamente correcto concluir que las Entidades Federativas referidas en el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, al ser personas morales oficiales, se encuentran contempladas entre los sujetos que gozan de la exención de exhibir las garantías que prevé el último código citado.

Como se anotó con antelación, la situación procesal de las Entidades Federativas en el juicio contencioso administrativo federal, no se encuentra regulada en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que actualiza el supuesto de procedencia para la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, señalada en el punto número 3, antes precisado.

Por último, por cuanto al 4º requisito para que opere la supletoriedad, esta Juzgadora estima que también se surte dicho supuesto, en virtud de que la disposición cuestionada no es contraria a las bases esenciales del sistema legal que sustentan el juicio contencioso administrativo federal en que se actúa.

Lo anterior es así, en principio, porque no hay disposición alguna en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que expresamente establezca que la obligación de las partes contendientes, de otorgar garantía del interés fiscal, es independiente de la calidad con la que actúen, ni tampoco existe prohibición en el

sentido de que en el juicio no operen al respecto las exenciones previstas en otros ordenamientos para las personas morales oficiales.

Aunado a lo anterior, la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como ya quedó señalado, acepta la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles el cual expresamente concede a las Entidades Federativas la exención de prestar garantías; beneficio que incluso aplica para los efectos de la suspensión en el juicio de amparo, que se encuentra regulada por el artículo 9º de la Ley de Amparo en los siguientes términos:

[N.E. Se omite transcripción]

En ese contexto, resulta que el Gobierno del Estado de Puebla, parte integrante de las entidades federativas, por su naturaleza especial de persona moral oficial, atendiendo a las funciones que constitucionalmente tiene conferidas, constituye su patrimonio con bienes de dominio público o privado que se utilizan en la prestación de los servicios públicos que tiene a cargo, o para el ejercicio de dichas funciones que por su propia naturaleza son inembargables.

Lo anterior es así, toda vez que las actividades económicas que realiza el Gobierno Estatal no representan capacidad contributiva, puesto que la riqueza que en su caso genere sirve directamente a las finalidades públicas que realiza, por lo que se encuentra exento de exhibir garantía para obtener la suspensión de la ejecución, máxime si se toma en cuenta que las prerrogativas previstas que le concede el multicitado artículo 4º, impiden incluso los actos de ejecución.

En efecto, el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme a lo razonado anteriormente, establece que "*nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo*", disposición que constituye, en sí misma, un impedimento para la ejecución del crédito recurrido, independientemente del otorgamiento de una garantía, atendiendo a que los bienes estatales tienen como característica que son inembargables.

En tal virtud, esta Sección considera correctos los razonamientos de la Segunda Sala Regional de Oriente en la sentencia interlocutoria recurrida, cabiendo la cita por analogía y en lo conducente, de los criterios que sobre el tema ha sostenido el Poder Judicial de la Federación, en asuntos similares:

"**SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE JALISCO DENOMINADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA, AL SER UNA PERSONA MORAL OFICIAL, ESTÁ EXENTO DE OTORGAR LAS GARANTÍAS PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F., Novena Época, Tomo XXI, Junio de 2005, Tesis III.2o.T.31 K, pág. 864]

"**SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR SU NATURALEZA DE PERSONA MORAL OFICIAL, ESTÁ EXENTA DE PRESTAR GARANTÍA PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F., Novena Época, Tomo XVII, Junio de 2003, Tesis XV.2o.24 K, pág. 1074]

"**PERSONAS MORALES OFICIALES. LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO DEBE HACERSE EXTENSIVA A LA LEY AGRARIA, CUANDO UNA ENTIDAD AGRARIA CONSIDERADA CON AQUEL CARÁCTER SOLICITA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F., Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, Tesis XVII.24 A, pág. 2786]

"**INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS. AUN CUANDO LAS PERSONAS MORALES OFICIALES ESTÁN EXENTAS DE OTORGAR LAS GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS EN LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, ELLO NO OBLIGA AL TERCERO PER-**

JUDICADO A VENTILAR SU RECLAMO EN UN PROCEDIMIENTO DISTINTO." [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F., Novena Época, Tomo XXI, Mayo de 2005, Tesis III.4o.C.4 K, pág.: 1472]

"**SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO ESTÁ EXENTO DE OTORGAR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F., Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, Tesis V.2o. J/45, pág. 805]

Esta Segunda Sección, en un caso análogo, adoptó también el criterio que sustenta esta resolución, en las tesis siguientes:

"**MUNICIPIOS. CUANDO SOLICITEN LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, DEBE CONCEDERSE APLICANDO SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 4° DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en la R.T.F.J.F.A., Sexta Época, Año II, No. 14, Febrero 2009, pág. 247]

"**MUNICIPIOS. PROCEDE OTORGAR LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL QUE LE ES DETERMINADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, SIN OTORGAMIENTO DE GARANTÍA.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en la R.T.F.J.F.A., Sexta Época, Año II, No. 14, Febrero 2009, pág. 247]

"**MUNICIPIOS. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO PROCEDE CONDICIONARLA AL OTORGAMIENTO DE GARANTÍA.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en la R.T.F.J.F.A., Sexta Época, Año II, No. 14, Febrero 2009, pág. 248]

Es también aplicable, en lo conducente, el criterio sostenido por la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal que a continuación se reproduce:

> "**GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. LOS MUNICIPIOS NO TIENEN QUE EXHIBIRLA PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN.**" [N.E. Se omite transcripción]

En consecuencia, procede concluir que conforme a lo dispuesto por el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, el Gobierno del Estado de Puebla, parte actora en el juicio contencioso en que se actúa, no se encuentra obligado a exhibir la garantía del interés fiscal para que surta efectos la suspensión concedida por la Segunda Sala Regional de Oriente en la sentencia interlocutoria recurrida, misma que debe confirmarse.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 20 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- Es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por la Administradora Local Jurídica de Puebla Norte del Servicio de Administración Tributaria, autoridad demandada;

II.- Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha 22 de junio de 2009 emitida por la Segunda Sala Regional de Oriente de este Tribunal.

III.- Mediante atento oficio que se gire a la Sala Regional de origen, remítasele copia de esta resolución para su conocimiento.

IV.- Notifíquese.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del 20 de octubre de 2009, por unanimidad

de cuatro votos a favor, de los Magistrados Guillermo Domínguez Belloc, Olga Hernández Espíndola, Alfredo Salgado Loyo y Silvia Eugenia Díaz Vega. Estuvo ausente el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 27 de octubre de 2009, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Firma la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-400

MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISIS DEL NEXO ENTRE LA MATERIA DEL JUICIO PRINCIPAL Y LA MEDIDA ESPECÍFICA SOLICITADA.- El artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que pueden decretarse las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor; por lo que siendo estos sus objetivos y finalidades resulta claro que tales medidas cautelares guardan una relación estrecha con la materia de la controversia principal de la cual constituyen una cuestión accesoria, por lo que al momento de examinar y resolver sobre su otorgamiento, debe analizarse el nexo entre la materia del juicio y la suspensión solicitada, en la medida en que su dictado sólo tiene sentido si contribuye a preservar esa materia para el efecto de que pueda ejecutarse la sentencia definitiva que llegue a dictarse; y en el supuesto de que no sea así, carece de sustento decretarlas, sin que baste el mero hecho de haber sido solicitadas y estar prevista legalmente la facultad jurisdiccional de concederlas.

Recurso de Reclamación Núm. 5183/07-17-03-8/670/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de octubre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de octubre de 2009)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-64
Recurso de Reclamación Núm. 38930/06-17-10-3/44/08-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de marzo de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de marzo de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 8. Agosto 2008. p. 152

VI-P-2aS-347
Recurso de Reclamación Núm. 1941/08-18-01-4/723/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de agosto de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de agosto de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 192

VI-P-2aS-348
Recurso de Reclamación Núm. 10883/08-17-09-1/817/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de agosto de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de agosto de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 192

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-401

MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS.- NO PROCEDE SU OTORGAMIENTO, CUANDO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 24, PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL CAUSARSE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVENIRSE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.- El artículo 24, primer párrafo de la ley mencionada, establece por voluntad del legislador federal que no podrán decretarse medidas cautelares para mantener la situación de hecho existente que puedan dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, cuando el otorgamiento de la misma cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. En ese orden de ideas, si en la especie queda acreditada la actualización de dicha excepción para decretar las medidas cautelares necesarias porque quede demostrado que el solicitante de las medidas cautelares contravino disposiciones de orden público que por tanto causen perjuicio al interés social, ello será suficiente para negar el otorgamiento de dichas medidas cautelares, como ocurre en el caso de contravención a disposiciones de la Ley General de Población. (37)

Recurso de Reclamación Núm. 5183/07-17-03-8/670/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de octubre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de octubre de 2009)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-207
Recurso de Reclamación Núm. 5566/07-06-02-4/1169/08-S2-06-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de marzo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de marzo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 17. Mayo 2009. p. 392

VI-P-2aS-350
Recurso de Reclamación Núm. 1941/08-18-01-4/723/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de agosto de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de agosto de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 195

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-402

MEDIDAS CAUTELARES. SU OTORGAMIENTO CON BASE EN SU OBJETO.- El artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el objeto del otorgamiento de las medidas cautelares es mantener la situación de hecho existente que impida que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor. Por lo que, si una Sala otorga la medida cautelar solicitada y la actora a través del recurso de reclamación señala

que es insuficiente y solicita se amplíe la misma, deberá acreditar el daño que durante el juicio le pueda causar el hecho de que no se le otorgue como lo solicita, pues contrario a ello, se dejaría el litigio sin materia, pues es precisamente sobre el derecho del que va a tratar el fondo del asunto, cuando se dicte sentencia definitiva.

Recurso de Reclamación Núm. 5183/07-17-03-8/670/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de octubre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de octubre de 2009)

PRECEDENTES:

V-P-2aS-727
Recurso de Reclamación Núm. 1317/06-19-01-1/60/07-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de mayo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de mayo de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 78. Junio 2007. p. 314

VI-P-2aS-349
Recurso de Reclamación Núm. 1941/08-18-01-4/723/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de agosto de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de agosto de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 193

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-403

INCOMPETENCIA TERRITORIAL.- CONOCERÁN DEL INCIDENTE LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR QUE POR TURNO CORRESPONDA.- Con fundamento en el artículo 23, fracción VII de la Ley Orgánica de este Tribunal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, en vigor desde el 7 siguiente del mismo mes y año, son facultades de las Secciones, entre otras resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas Regionales. En ese orden de ideas, si una de las partes en el juicio plantea la incompetencia en razón del territorio a que se refiere el artículo 30, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente desde enero de 2006, corresponderá conocer de la misma a las Secciones de la Sala Superior que por turno corresponda.

Incidente de Incompetencia Núm. 4919/09-17-02-9/1274/09-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de octubre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de octubre de 2009)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-142
Incidente de Incompetencia Núm. 30742/06-17-07-8/1052/08-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de octubre de 2008, por unanimidad de 5 votos a

favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 16 de octubre de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 14. Febrero 2009. p. 373

VI-P-2aS-226
Incidente de Incompetencia Núm. 1937/08-07-02-9/18381/08-17-08-3/404/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de abril de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 23 de abril de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 18. Junio 2009. p. 639

VI-P-2aS-250
Incidente de Incompetencia Núm. 5531/08-11-02-9/99/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de mayo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 20. Agosto 2009. p. 233

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-404

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA. CREDENCIAL EMITIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA NO DESVIRTÚA LA PRESUNCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- El primer párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica de este Tribunal dispone que, las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante. A su vez, el último párrafo del propio artículo 34 dispone que, se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal salvo que la parte demandada demuestre lo contrario. En esos términos, no es ajustado a derecho que, las Salas Regionales se declaren incompetentes para conocer del juicio considerando para ello que, del contenido de la credencial para votar se desprende el domicilio fiscal del demandante, persona física, ya que este documento se expide por el Instituto Federal Electoral para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, de conformidad con los artículos 176 y 180 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mientras que, el domicilio fiscal de las personas físicas se determina en el artículo 10, fracción I del Código Fiscal de la Federación en los siguientes términos: a) si la persona física realiza actividades empresariales, se considera domicilio fiscal el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios; b) cuando la persona física no realice actividades empresariales, se considera domicilio fiscal el local utilizado para el desempeño de sus actividades; por último, en los casos en que la persona física realice las actividades anteriores sin contar con un local, se considera que su domicilio fiscal se localiza en su casa habitación. Por tanto, ante la omisión del demandante de precisar en la demanda su domicilio fiscal, y ante la imposibilidad de determinarlo en forma fidedigna, debe considerarse al domicilio señalado en la demanda como el domicilio fiscal para efectos de determinar la competencia de la Sala que debe conocer del juicio, conforme a la presunción *iuris*

tantum establecida en el último párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica de este Tribunal Federal, máxime sino no se ha emplazado a la demandada, a quien corresponde desvirtuar, en su caso, dicha presunción.

Incidente de Incompetencia Núm. 15282/09-17-10-3/2391/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de octubre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de octubre de 2009)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-2aS-405

Incidente de Incompetencia 42/09-17-04-5/1471/09-13-02-4/2250/09-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de octubre de 2009)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-266
Incidente de Incompetencia Núm. 24906/08-17-09-3/257/09-08-01-7/834/09-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de mayo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 21. Septiembre 2009. p. 149

VI-P-2aS-304

Incidente de Incompetencia Núm. 20136/08-17-06-7/8445/08-11-02-7/2134/08-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de marzo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.

(Tesis aprobada en sesión de 4 de junio de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 161

VI-P-2aS-305

Incidente de Incompetencia Núm. 3359/08-01-01-4/417/09-02-01-9/1417/09-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de agosto de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.

(Tesis aprobada en sesión de 6 de agosto de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 161

LEY DE COMERCIO EXTERIOR

VI-P-2aS-406

CUOTAS COMPENSATORIAS NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LAS DETERMINA.- TIENE EFICACIA EN EL TIEMPO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE COMETIÓ LA ILEGALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN DE INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING, AL RETROTRAERSE SUS EFECTOS AL MOMENTO DE LA VIOLACIÓN COMETIDA.- Las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que declaran la nulidad de una resolución determinante de cuotas compensatorias, trasciende hacia el pasado en virtud de que dicho juicio tiene como finalidad declarar si la resolución impugnada, en su caso, la resolución recurrida y el procedimiento que les da origen, se ha ajustado o no a ley atendiendo al principio de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Por tanto, si se encuentra que el procedimiento de origen de investigación antidumping resultó ilegal al haberse iniciado y tramitado por una autoridad inexistente que da lugar a la ilegalidad de la resolución final de determinación de cuotas compensatorias, esa nulidad declarada por el Órgano Jurisdiccional se retrotrae con efectos ex tunc, esto es, desde el origen de la violación cometida. En consecuencia, la determinación final de cuotas compensatorias que concluyó el procedimiento viciado no puede surtir efecto legal alguno, ni puede servir de fundamento para aplicar las cuotas compensatorias que quedaron sin efectos. Sin que sea óbice para esa consideración, que la resolución determinante de cuotas compensatorias se hubiere publicado en el Diario Oficial de la Federación, para iniciar su vigencia al tratarse de una resolución de carácter general, en virtud de que dada la declaratoria de nulidad ex tunc formulada por el Órgano Jurisdiccional que constituya cosa juzgada y que esa resolución es de aplicación general a todos sus destinatarios sin distinción, cuando la misma queda sin efectos, también beneficia a todos los destinatarios que controvierte los actos de aplicación de las cuotas sustentado en la inexistencia de la determinación de las cuotas compensatorias, con independencia del momento en que la autoridad administrativa da cumplimiento a la sentencia firme de nulidad de determinación de cuotas compensatorias.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 33145/06-17-09-6/1376/09-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de octubre de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de octubre de 2009)

LEY DE COMERCIO EXTERIOR

VI-P-2aS-407

EFECTOS "ERGA OMNES" DE LAS SENTENCIAS QUE DECLARAN LA NULIDAD DE UNA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE O CONFIRMA UNA CUOTA COMPENSATORIA DEFINITIVA.- Las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación normalmente limitan sus efectos a las partes en el juicio; sin embargo, de la misma manera que los límites subjetivos de la cosa juzgada se extienden a todas las personas en las acciones sobre estado civil y disposiciones testamentarias y, en derecho público, las resoluciones dictadas por el Tribunal Federal Electoral afectan a todos los participantes en una elección, así en materia de prácticas desleales al comercio exterior, cuando se declara la nulidad de una resolución que establece o confirma una cuota compensatoria definitiva, la sentencia también tiene efectos generales. Los efectos generales o como señalan las partes: "erga omnes", son excepcionales y únicamente se dan cuando la naturaleza de lo resuelto no puede lograrse sin dichos efectos. Las resoluciones administrativas antes citadas, cuya nulidad se decreta por este Tribunal, derivan de un procedimiento en forma de juicio el cual, de conformidad con la ley y los tratados suscritos por México, contienen algunas características excepcionales: intereses colectivos o difusos, cuasi acciones de clase (puesto que se da en sede administrativa) y resoluciones con efectos generales. En efecto, el procedimiento se inicia por cualquier productor o conjunto de productores que representen por sí mismos o agrupados, cuando menos el 25% de la producción afectada; se instruye con la participación de las denominadas partes interesadas, entendiendo por las mismas, a los productores, importadores y

exportadores de la mercancía correspondiente; finalmente, se resuelve con resoluciones con efectos “erga omnes”. Las disposiciones reglamentarias, por su parte, prevén un procedimiento posterior a la sentencia, disponible para las demás partes interesadas, no participantes en el juicio, el cual tiene como propósito proteger los intereses de dichas personas.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 33145/06-17-09-6/1376/09-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de octubre de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de octubre de 2009)

PRECEDENTE:

IV-P-2aS-200
Queja No. 100 (20)4/96/17856/95/99-S2-06-01-QC.- Resuelta por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 23 de septiembre de 1999, por mayoría de 4 votos a favor y 1 más con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Rubén Aguirre Pangburn.- Secretaria: Lic. Isabel Urrutia Cárdenas.
(Tesis aprobada en sesión privada de 4 de octubre de 1999)
R.T.F.F. Cuarta Época. Año II. No. 19. Febrero 2000. p. 121

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-408

HECHO NOTORIO.- LO CONSTITUYE PARA LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA UNA SENTENCIA EMITIDA POR ELLA.- El artículo 50, primer párrafo de la Ley

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente a partir del primero de enero de 2006, establece que las sentencias de este Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda en relación con la resolución impugnada, otorgándose la facultad de invocar hechos notorios. Ahora bien, las sentencias emitidas por la Sala Superior de este Tribunal, constituyen un hecho notorio para los Magistrados que la integraron e intervinieron en la discusión y votación de la misma. Por lo anterior, las resoluciones emitidas por este Órgano Colegiado pueden invocarse como hecho notorio al momento de resolver un diverso juicio contencioso administrativo sometido a su conocimiento.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 33145/06-17-09-6/1376/09-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de octubre de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de octubre de 2009)

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-409

PRUEBA DOCUMENTAL SUPERVENIENTE, OFRECIDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- OPORTUNIDAD PARA PRESENTARLA.- El artículo 40, tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir del primero de enero de 2006, establece, que las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia y que en ese caso se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho convenga. En consecuencia, si con posterioridad a iniciarse el juicio Contencioso Administrativo se publica en el Diario Oficial de la Federación la resolución que deja sin efectos la resolución general en que se apoya la

resolución combatida en el juicio; la actora válidamente puede ofrecer esa documental como prueba superveniente para tratar de desvirtuar la legalidad de la resolución combatida en el juicio, siempre y cuando al momento de presentarla no se haya dictado sentencia.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 33145/06-17-09-6/1376/09-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de octubre de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de octubre de 2009)

LEY DE COMERCIO EXTERIOR

VI-P-2aS-410

RESOLUCIÓN FINAL DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING QUE DETERMINA CUOTAS COMPENSATORIAS. SU NULIDAD DECRETADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, TIENE EFECTOS GENERALES QUE SE RETROTRAEN AL MOMENTO DE LA ILEGALIDAD COMETIDA.- El artículo 28 de la Ley de Comercio Exterior, establece que las personas físicas o morales que importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional estarán obligadas al pago de una cuota compensatoria conforme a lo dispuesto en el mismo ordenamiento legal. El artículo 67 de la Ley de Comercio Exterior dispone que las cuotas compensatorias definitivas estarán vigentes durante el tiempo y en la medida necesaria para contrarrestar el daño a la rama de producción nacional. Por su parte, el artículo 238, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, actual artículo 51, fracción primera de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente a partir del 1° de enero de 2006, establece como una causal de anulación la incompetencia del funcionario que haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución. En

consecuencia, si con motivo de un diverso juicio contencioso administrativo se declaró la nulidad de la resolución final de una investigación antidumping sobre importaciones y al estimarse que la autoridad que actúo en su tramitación era inexistente, tal nulidad se retrotrae hasta el momento de la ilegalidad cometida, esto es, al inicio del procedimiento de investigación antidumping que tramitó la autoridad inexistente. Razón por la cual, la resolución final que concluyó ese procedimiento ilegal no puede servir de fundamento válido de una resolución emitida por la autoridad fiscal que aplica esas cuotas compensatorias. En consecuencia, si con motivo de un diverso juicio contencioso administrativo se emitió sentencia declarando la nulidad de la resolución en la que se establece cuota compensatoria, por estimarse que el procedimiento de investigación antidumping que dio lugar a las mismas fue tramitado por una autoridad inexistente; y dicha resolución es confirmada por el Poder Judicial de la Federación, lo cual trae como consecuencia que la Secretaría de Economía emita un acuerdo en el que se deja sin efectos la resolución en la que se establecieron las cuotas compensatorias, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que evidencia que la resolución de determinación de cuotas no pueda servir de fundamento a la resolución impugnada en la que se finque un crédito fiscal por la aplicación de dichas cuotas compensatorias.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 33145/06-17-09-6/1376/09-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de octubre de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de octubre de 2009)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

De las transcripciones anteriores, se desprende que la actora en su escrito de ofrecimiento de pruebas supervenientes manifestó que la resolución impugnada en el presente juicio resulta ilegal, porque la liquidación de los créditos fiscales combatidos se basan en una resolución que ha dejado de surtir efectos, como lo es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, consistente en la "**RESOLUCIÓN FINAL DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES DE MANZANAS DE MESA DE LAS VARIEDADES RED DELICIOUS Y SUS MUTACIONES Y GOLDEN DELICIOUS, MERCANCÍA CLASIFICADA ACTUALMENTE EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 0808.10.01 DE LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA INDEPENDIENTEMENTE DEL PAÍS DE PROCEDENCIA**".

Que se dejó sin efectos la resolución final publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, mediante la diversa "RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR LA *PRIMERA SECCIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EL* 29 *DE MARZO DE 2005, EN EL JUICIO DE NULIDAD (COMERCIO EXTERIOR) 24651/03-17-09-9/4/05-S1-02-01 PROMOVIDO POR COMERCIALIZADORA DE FRUTAS FINAS TARAHUMARA, S.A. DE CV., Y OTRAS, Y A LA DIVERSA DEL 20 DE MARZO DE 2007, EN RELACIÓN CON LA QUEJA PRESENTADA POR LAS MISMAS EMPRESAS*", publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de julio de 2007.

Que lo anterior, además se corrobora del contenido de la copia certificada del oficio número UPCI.310.07.2278 de fecha 30 de julio de 2007, emitida por la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, de la Secretaría de Economía, por el cual se resolvió la consulta a la Unión Nacional de Comerciantes, Importadores y Exportadores de Productos Agrícolas, A.C., mediante el cual la Secretaría de Economía acepta expresamente que los efectos de la resolución que ha sido declarada insubsistente mediante el Diario Oficial de la Federación de 3 de julio de 2007, deja-

ran de aplicarse sin hacer distinción de importador alguno, esto es que dicha resolución no podrá afectar la esfera jurídica de los importadores que se vean afectados por su emisión y concretamente, de la actora, por ese simple hecho de haberse dejado insubsistente independientemente de que hayan participado o no en el procedimiento de investigación sobre prácticas desleales sobre comercio exterior.

La autoridad demandada al desahogar la vista que se le corrió con las pruebas supervenientes ofrecidas por la actora, argumentó que resulta clara la ineficacia probatoria de las pruebas ofrecidas por la actora e ineficaz lo manifestado para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, porque al momento en que efectuó la importación de la mercancía estaba obligada al pago de la cuota compensatoria y al no haberlo hecho es procedente y legal su aplicación. Que en todo caso aun con la existencia de la sentencia que posteriormente declaró la nulidad de la resolución que establece esa cuota, únicamente genera el ya no pago con posterioridad a la firmeza de tal sentencia, es decir, que los efectos de la nulidad se proyectan hacía el futuro sin que sea posible retrotraerlos a normas que en el momento de su aplicación son plenamente válidas, pues en el momento de que el contribuyente se ubicó en su supuesto, es plenamente válida. Que por lo que hace al escrito de 30 de julio de 2007, tampoco tiene eficacia probatoria porque la actora no acredita formar parte de la Unión Nacional de Comerciantes Importadores y Exportadores de Productos Agrícola, A.C.

Esta Segunda Sección de la Sala Superior, estima **FUNDADO** el concepto de impugnación por las siguientes consideraciones:

En principio es de señalar que en los términos del artículo 40, tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, resulta válido que la actora ofrezca pruebas supervenientes siempre que no se haya dictado sentencia y que en ese caso se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de 5 días exprese lo que a su derecho convenga, lo cual permite a la actora formular manifestaciones tendentes a precisar el alcance de dichas pruebas supervenientes que se encuentren vinculadas con los hechos materia de la resolución impugnada, como en el

caso lo hizo la actora al precisar que las pruebas supervenientes ofrecidas afectaban la ilegalidad de la resolución impugnada porque con las mismas se demostraba la inexistencia de la resolución general de determinación de cuotas compensatorias en que se sustentó la liquidación impugnada. Artículo 40, tercer párrafo, que en su parte conducente a continuación se cita:

[N.E. Se omite transcripción]

Al respecto resulta aplicable la tesis aislada del Poder Judicial de la Federación que a continuación se cita y que se aplica por analogía en virtud de referirse al artículo 230 del Código Fiscal de la Federación, relativo a las pruebas supervenientes que corresponde al artículo actual 40, tercer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo:

> "**PRUEBAS DOCUMENTALES SUPERVENIENTES, EN JUICIOS DE NULIDAD, OPORTUNIDAD PARA PRESENTARLAS.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F. Novena Época, Tomo II, Octubre de 1995, Tesis VI.2o.18 A, pág. 603]

También es de señalar que la **LITIS** en el presente juicio consiste en determinar si la resolución impugnada, en la cual la autoridad fiscal aplicó cuotas compensatorias, determinadas previamente por la Secretaría de Economía mediante la "**RESOLUCIÓN FINAL DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES DE MANZANAS DE MESA DE LAS VARIEDADES RED DELICIOUS Y SUS MUTACIONES Y GOLDEN DELICIOUS, MERCANCÍA CLASIFICADA ACTUALMENTE EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 0808.10.01 DE LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA INDEPENDIENTEMENTE DEL PAÍS DE PROCEDENCIA**", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, se apegó o no a ley al fijar los diversos créditos fiscales por conceptos de omisión en el pago de cuotas compensatorias.

Para lo anterior, se hacen necesario precisar cuáles fueron los fundamentos y motivos de la resolución liquidatoria impugnada, que aplicó las cuotas compensatorias determinadas por la Secretaría de Economía.

Del contenido de la resolución liquidatoria impugnada, que obra a fojas 36 a 195 del expediente principal, se desprende lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De la transcripción anterior, se desprende que **EL ADMINISTRADOR CENTRAL DE CONTABILIDAD Y GLOSA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS**, del Servicio de Administración Tributaria, emitió la resolución liquidatoria contenida en el oficio 326-SAT-IV-4-43551 de 31 de julio de 2006, suscrita en suplencia por ausencia del Administrador, por el Administrador de Glosa, mediante la cual derivado de la revisión y análisis a los pedimentos de importación y documentación anexa a los mismos se detectó que:

1.- Las manzanas importadas son de la variedad a que se refiere la resolución final determinante de cuotas compensatorias y que ello se desprendía de las facturas comerciales anexas a los pedimentos.

2.- Que se declaró como país de origen de las manzanas importadas la clave USA que corresponde a los Estados Unidos de América.

3.- Que en el pedimento a nivel partida se declaró la clave “TL” que se refiere que la mercancía importada al amparo de un Tratado de Libre Comercio.

4.- Que se observó que las mercancías son originarias de los Estados Unidos de América por así declararse en los certificados de origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, algunos anexos a los pedimentos en cuestión.

5.- Que las manzanas provienen de las empresas declaradas en el campo 1 del certificado de origen al señalarse que las mismas son exportadoras de mercancías

con lo que se presume que las empresas que realizan las exportaciones de mercancías fueron las que emitieron las facturas anexas a los pedimentos y en consecuencia se trata de empresas distintas a las que están sujetas a una tasa del 0% de las cuotas compensatorias de conformidad con la resolución final determinante de cuotas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002.

6.- Que por ello el importador se encuentra sujeto al pago de una cuota compensatoria de 46.58% sobre el valor en aduana de las mercancías importadas de conformidad con el punto 273 inciso b) de la "**RESOLUCIÓN FINAL DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES DE MANZANAS DE MESA DE LAS VARIEDADES RED DELICIOUS Y SUS MUTACIONES Y GOLDEN DELICIOUS, MERCANCÍA CLASIFICADA ACTUALMENTE EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 0808.10.01 DE LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA INDEPENDIENTEMENTE DEL PAÍS DE PROCEDENCIA**", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, emitida por la Secretaría de Economía.

7.- Que de la misma revisión documental realizada por la autoridad fiscal a las operaciones de importación de que se trata se observó que en el bloque de partidas, en el campo 24 de los pedimentos se declaró para la cuota compensatoria como forma de pago la clave "2" y que de conformidad con el apéndice 13 contenido en el anexo 22 de las Reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2003, ello significa "fianza".

8.- Que adjunto a los pedimentos de importación se acompañó copia simple de la ejecutoria emitida en el recurso de revisión número 526/2003 por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, en fecha 27 de noviembre de 2003, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 317/03-II-B promovido por la hoy actora. Que derivado de ello la autoridad fiscal procedió a la revisión de dicho juicio de amparo en el que se reclamó como primer acto de aplica-

ción la "**RESOLUCIÓN FINAL DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES DE MANZANAS DE MESA DE LAS VARIEDADES RED DELICIOUS Y SUS MUTACIONES Y GOLDEN DELICIOUS, MERCANCÍA CLASIFICADA ACTUALMENTE EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 0808.10.01 DE LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA INDEPENDIENTEMENTE DEL PAÍS DE PROCEDENCIA**", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, emitida por la Secretaría de Economía.

9.- Que las importaciones de que se trata se realizaron al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por ser originaria de los Estados Unidos de América y al ser tramitadas durante 2004, cuando la tasa ad valorem del Impuesto General de Importación, para esas operaciones era del 0% conforme al mismo tratado.

10.- **Que sin embargo, resulta aplicable la cuota compensatoria para dichas mercancías** conforme a la "**RESOLUCIÓN FINAL DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES DE MANZANAS DE MESA DE LAS VARIEDADES RED DELICIOUS Y SUS MUTACIONES Y GOLDEN DELICIOUS, MERCANCÍA CLASIFICADA ACTUALMENTE EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 0808.10.01 DE LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA INDEPENDIENTEMENTE DEL PAÍS DE PROCEDENCIA**", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, emitida por la Secretaría de Economía.

11.- La autoridad fiscal determinante del crédito en pleno ejercicio de las facultades de comprobación, conforme al artículo 152 de la Ley Aduanera determinó en cantidad líquida **la omisión en el pago de la cuota compensatoria a razón del**

46.58% sobre el valor en aduana de las mercancías importadas que establece la resolución final multicitada publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002.

12.- Que por ello se emitió el escrito de hechos y omisiones GC-0640I-017 de 25 de mayo de 2006, en el que se presumió cometida la infracción respecto de los pedimentos de importación definitiva referidos en los que fue importador el actor y se presumió la existencia de un crédito fiscal por conceptos de cuota compensatoria omitida actualizada, multa y recargos; escrito en el cual se comunicó al Agente Aduanal y a la importador del término de ley para ofrecer pruebas y expresar alegatos; que no se formularon alegatos para desvirtuar las irregularidades del escrito de hechos u omisiones, confirmándose las irregularidades detectadas y asentadas en dicho escrito.

13.- Que como consecuencia de lo anterior, en la parte considerativa de la resolución impugnada la autoridad determinó confirmar las irregularidades antes señaladas, resaltando que el escrito de hechos y omisiones se encuentra fundado y motivado y que por tanto, el importador será responsable directo del crédito fiscal determinado y el agente aduanal responsable solidario.

14.- Que el agente aduanal es el representante legal del importador. Que no se actualiza ningún supuesto de exclusión de responsabilidad a que se refiere el artículo 54 de la Ley Aduanera.

15.- **Que la irregularidad consistió básicamente en que no se pagó la cuota compensatoria del 46.58% sobre el valor en Aduana de la mercancía declarado en los pedimentos, a la que se encontraba sujeta la mercancía.**

16.- Que tampoco se actualizan las exclusiones de responsabilidad solidaria del agente aduanal a que se refieren las fracciones II, III y IV, del artículo 54 de la Ley Aduanera, que en cuanto a esta última fracción sólo se refiere a la exclusión de responsabilidad respecto del país de origen declarado en el pedimento, conforme al

artículo 68 del Reglamento de la Ley Aduanera. Que la irregularidad en el caso, no versa en torno al origen de la mercancía porque dicho origen declarado en el pedimento no está en duda. Que en consecuencia, el agente aduanal tiene una responsabilidad solidaria que deriva de la obligación principal del importador.

17.- Que por tanto, resulta procedente el cobro de la cuota compensatoria que se dejó de pagar en términos del artículo 52 de la Ley Aduanera, resultando el agente aduanal como responsable solidario con excepción de las multas, en los términos del último párrafo, del artículo 53 de la Ley Aduanera, sin que opere a su favor ninguna de las excluyentes de responsabilidad del artículo 54, porque su conducta no encuadra en ninguna de las excepciones establecidas en dicho numeral, resultando como responsable directo el importador hoy actor y como responsable solidario el agente aduanal.

18.- Como consecuencia de lo anterior, se liquidaron los siguientes créditos fiscales en cantidad total de $161’503,077.07, por conceptos de:

a) Aplicación de cuotas compensatorias omitidas actualizadas;

b) Multa por omisión total en el pago de dichas cuotas compensatorias con fundamento en los artículos 178, fracción IV y 176 fracción I de la Ley Aduanera, y;

c) Recargos de la misma cuota compensatoria omitida actualizada;

d) Así como la determinación del importe del valor comercial de las mercancías importadas dada la imposibilidad material para que esa mercancía pasara a propiedad del fisco federal dado que la misma fue desaduanada e introducida a territorio nacional desconociendo su ubicación, conforme al artículo 183-A, último párrafo de la Ley Aduanera.

19.- Por lo que se determina al importador hoy actor la cantidad de $161’503,077.07, por los conceptos antes precisados.

20.- También se determina a cargo de la agente aduanal como responsable solidario la cantidad total de $116’322,378.57, por los conceptos de cuota compensatoria omitida debidamente actualizada, del concepto del valor comercial de la mercancías y recargos, quedando libre del pago de la multa originada por la omisión en el pago de la cuota compensatoria.

Del contenido de la resolución impugnada, esta Segunda Sección desprende que la determinación del crédito fiscal se sustenta medularmente en la consideración de que resultaban aplicables a las importaciones realizadas por la importadora las cuotas compensatorias determinadas por la Secretaría de Economía, mediante la resolución final de determinación de cuotas compensatorias definitivas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, al tratarse de la mercancía referida en dicha resolución final bajo la fracción arancelaria 0808.10.01, originarias de los Estados Unidos de América.

Por tanto, si la actora sostiene la ilegalidad de la resolución liquidatoria combatida por la debida fundamentación y motivación, al aplicar las cuotas compensatorias con apoyo en la resolución final de determinación de cuotas compensatorias publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, que se dejó sin efectos, esta Juzgadora estima que le asiste la razón a la actora por las siguientes consideraciones:

A fin de resolver esa litis, resulta conveniente precisar el contenido de las pruebas supervenientes ofrecidas por la actora, que se hará analizando en primer término la resolución de cumplimiento de sentencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2007 y en segundo lugar el oficio de 30 de julio de 2007, de respuesta a la consulta planteada por la Unión Nacional de Comerciantes, Importadores y Exportadores de Productos Agrícolas, A.C.

I.- La primer prueba superveniente es del tenor siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Cabe precisar, que el escrito inicial de demanda se presentó el 13 de octubre de 2006, como se prueba a foja 1 del escrito inicial de demanda con el sello de recepción correspondiente y que la prueba superveniente ofrecida por la actora se publicó en el Diario Oficial de la Federación con posterioridad a dicha presentación de demanda, esto es, el 3 de julio de 2007, por lo que se evidencia que dicha probanza sí tiene tal carácter en los términos del artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

De la transcripción de dicha primer prueba superveniente, se desprende que en la misma la Secretaría de Economía, con nitidez en sus puntos resolutivos correspondientes al número 13, inciso a) dejó sin efectos la "**RESOLUCIÓN FINAL DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES DE MANZANAS DE MESA DE LAS VARIEDADES RED DELICIOUS Y SUS MUTACIONES Y GOLDEN DELICIOUS, MERCANCÍA CLASIFICADA ACTUALMENTE EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 0808.10.01 DE LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA INDEPENDIENTEMENTE DEL PAÍS DE PROCEDENCIA**", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, emitida por la Secretaría de Economía, al determinar lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Con lo anterior, no cabe duda que la Secretaría de Economía, ha dejado sin efectos la resolución final determinante de cuotas compensatorias definitivas impuestas a las importaciones de manzanas que se indican y que ello se hace en cumplimiento a una sentencia emitida por la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal de 29 de marzo de 2005, en el juicio de nulidad 24651/03-17-09-9/4/05-S1-02-01 promovido por Comercializadora de Frutas Finas Tarahumara, S.A. de C.V. y otras, y a la diversa del 20 de marzo de 2007, en relación con la queja presentada por las mismas empresas.

Ahora bien, en atención a lo señalado en la sentencia mencionada que dejó sin efectos la resolución determinante de cuotas compensatorias, este Órgano Colegiado tiene a la vista esa sentencia definitiva firme de 29 de marzo de 2005, que obra a fojas 13 a 51 del expediente de atracción, número 24651/03-17-09-9/4/05-S1-02-01 promovido por Comercializadora de Frutas Finas Tarahumara, S.A. de C.V., Compañía Frutícola Tarahumara, S.A. de C.V., Importadora y Exportadora de Frutas y Legumbres de México, S.A. de C.V., y Frutas Finas del Noroeste S.A de C.V., y que se tuvo a la vista por ser hecho notorio, se desprende que en la misma se consideró que las actoras habían probado su acción, declarando la nulidad, tanto de la resolución impugnada que resolvió el recurso de revocación, como de la resolución recurrida consistente en la resolución final antidumping de determinación de cuotas compensatorias publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, retrotrayendo sus efectos desde el momento de inicio del procedimiento de investigación antidumpig. Lo anterior, al estimarse inexistente la autoridad que tramitó el procedimiento del que derivó la resolución final de investigación antidumping mencionada, como se prueba a continuación de la parte conducente de esa sentencia que se cita conforme a las siguientes tesis:

> "**HECHO NOTORIO.- LO CONSTITUYE PARA LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA UNA SENTENCIA EMITIDA POR ELLA.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en la R.T.F.J.F.A, Quinta Época, Año IV, No. 46, Octubre 2004. pág. 128]
>
> "**HECHO NOTORIO. SE CONSTITUYE CON LO RESUELTO POR EL ÓRGANO JUZGADOR EN DIVERSO JUICIO Y LA EJECUTORIA QUE LE DÉ FIRMEZA.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en la R.T.F.J.F.A, Quinta Época, Año III, No. 26, Febrero 2003, pág. 155]
>
> "**HECHO NOTORIO.- LO CONSTITUYE PARA LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA UNA SENTENCIA EMITIDA POR ELLA.**" [N.E. Se omite trans-

cripción, consultable en la R.T.F.J.F.A, Quinta Época, Año V, Tomo II No. 49, Enero 2005, pág. 482]

[N.E. Se omite transcripción].

De la transcripción anterior, de la sentencia definitiva firme de 29 de marzo de 2005, se desprende que efectivamente la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, **DEJÓ SIN EFECTOS:**

1.- La resolución impugnada en el juicio referido recaída al recurso de revocación interpuesto por diversas empresas mexicanas y,

2.- La "**RESOLUCIÓN FINAL DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES DE MANZANAS DE MESA DE LAS VARIEDADES RED DELICIOUS Y SUS MUTACIONES Y GOLDEN DELICIOUS, MERCANCÍA CLASIFICADA ACTUALMENTE EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 0808.10.01 DE LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA INDEPENDIENTEMENTE DEL PAÍS DE PROCEDENCIA**", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, emitida por la Secretaría de Economía, que tenía el carácter de recurrida.

La anterior determinación se sustentó en que se encontró que la Dirección General Adjunta Técnica Jurídica, adscrita a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, no se prevé como autoridad creada legalmente en el Reglamento Interior de dicha Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de 1995. Que en tal virtud, la autoridad que tramitó el procedimiento de investigación derivado de la denuncia de prácticas desleales de comercio internacional era jurídicamente inexistente, ya que la Dirección General Técnica Adjunta, de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacio-

nales, no estaba contemplada como autoridad en el Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ni en el Acuerdo que adscribe específicamente sus unidades administrativas vigentes en la época en que esa autoridad actuó.

También es de observar que en la sentencia definitiva firme de 29 de marzo de 2005, se declaró la nulidad de la resolución recurrida publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, con fundamento en el artículo 238, fracción I, y 239 fracción II, del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien a fin de comprender el efecto que tiene en el presente juicio la sentencia definitiva firme dictada en el diverso juicio contencioso administrativo por la Primera Sección de la Sala Superior, la cual ha quedado transcrita en párrafos anteriores, se hacen necesario señalar a mayor abundamiento el significado de las locuciones *EX TUNC Y EX NUNC,* en relación con los efectos de las sentencias:

Conforme al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su tomo correspondiente a las letras D-H, Editorial Porrúa, México, 2000, p. 1374, encontramos la referencia a las locuciones *EX TUNC Y EX NUNC,* como a continuación se aprecia:

[N.E. Se omite transcripción]

De la transcripción anterior conforme al Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, encontramos la referencia las locuciones EX TUNC entendida literalmente como "desde siempre"; que significa que los efectos de un acto jurídico se producen o cesan retroactivamente. Que en el Derecho Romano esa locución se aplicaba a los actos jurídicos sujetos a condición suspensiva, sosteniéndose que surtían sus efectos desde que se habían convenido. Por exten-

sión dicha locución se empezó a aplicar a otros actos jurídicos como las leyes o sentencias judiciales; refiriéndose en cuanto a las leyes a su entrada en vigor, esto es, a su eficacia en el tiempo, respecto de la cual puede ser que la norma tenga valor para el pasado, retroactividad de la ley o que su eficacia sea con referencia a relaciones surgidas con anterioridad a la ley que entra en vigor.

Por su parte, la locución EX NUNC entendida literalmente como "desde ahora", significa que los efectos de un acto jurídico se producen o cesan a partir de determinado momento presente. Que en Derecho Romano esa locución se aplicaba a los actos jurídicos sujetos a condición suspensiva, sosteniéndose que surtían sus efectos a partir del cumplimiento de la condición. También por extensión dicha locución se aplicó con posterioridad a las leyes o sentencias judiciales; refiriéndose en cuanto a las leyes a su entrada en vigor, esto es, a su eficacia en el tiempo, respecto de la cual puede ser que la norma tenga valor para el futuro, o sea en cuanto a las relaciones jurídicas todavía no surgidas o que surgirán.

Llevada la locución EX TUNC a los actos jurídicos como las sentencias emitidas por este Órgano Jurisdiccional, como la dictada por la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, es de señalar que los efectos de esos fallos se producen hacia el pasado, esto es, que la eficacia de la sentencia dictada por el Órgano Jurisdiccional se refiere a los actos surgidos con anterioridad a la emisión del fallo, en virtud de que con motivo del juicio contencioso administrativo se analiza la legalidad de un acto administrativo previamente emitido, respecto del cual analizando los actos y procedimientos que le dan origen puede llegarse a la conclusión de que el acto o resolución impugnado en el juicio es fruto de un acto viciado, si se encuentra alguna ilegalidad en los actos de trámite, procedimiento de origen o en el contenido mismo del acto impugnado, ello en relación con los artículos 14 y 16 Constitucionales.

Por tanto, si en el caso la Primera Sección de la Sala Superior en un juicio contencioso administrativo, declaró la nulidad de la resolución impugnada y de la resolución recurrida en ese juicio, por considerar que esta última derivó de un procedimiento de origen viciado al haberse sido iniciado y tramitado por una autoridad inexistente, que provocó que la resolución recurrida determinante de las cuotas compensatorias resultara ilegal, esa nulidad decretada tiene efectos EX TUNC, esto es, tiene efectos hacia el pasado, en el sentido de que la declaratoria de nulidad se traduce en que los actos dictados en el procedimiento de origen y la resolución determinante de la cuota compensatoria con la que concluyó ese procedimiento, no pueden producir sus efectos, desde el momento de la comisión de la irregularidad atribuida que en la especie se traduce en el inicio y tramitación del procedimiento antidumping.

Es decir, que la declaratoria de nulidad de la resolución determinante de las cuotas compensatorias tiene eficacia en el tiempo a partir del momento en que se cometió la ilegalidad en el procedimiento de origen y por ello podríamos señalar que esos efectos de la nulidad se retrotraen al momento de la violación cometida.

Por tanto si en la especie, en cumplimiento a la sentencia referida, se dejó sin efectos la "**RESOLUCIÓN FINAL DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES DE MANZANAS DE MESA DE LAS VARIEDADES RED DELICIOUS Y SUS MUTACIONES Y GOLDEN DELICIOUS, MERCANCÍA CLASIFICADA ACTUALMENTE EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 0808.10.01 DE LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA INDEPENDIENTEMENTE DEL PAÍS DE PROCEDENCIA**", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, emitida por la Secretaría de Economía, que es precisamente en la que pretendió sustentarse la autoridad fiscal al aplicar las cuotas compensatorias a cargo de la hoy actora. **ELLO EN VIRTUD**

DE HABER QUEDADO NULO TODO EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING POR DERIVAR DE UNA AUTORIDAD INEXISTENTE, se evidencia la ilegalidad de la resolución liquidatoria impugnada en el presente juicio que se apoyó en la resolución determinante de cuotas que fue declarada nula con efectos EX TUNC, esto es a partir de la violación cometida que se dio con el inicio y tramitación del procedimiento antidumping origen de la determinación de cuotas compensatorias.

Sin que sea óbice para lo anterior, la argumentación que hace la autoridad cuando desahoga la vista sobre la primera prueba superveniente ofrecida por la actora, en el sentido de que: resulta ineficaz tal probanza porque a su juicio, la demandante pretende apoyarse en una resolución emitida con posterioridad al surgimiento de su obligación de pago de la cuota compensatoria con motivo de la importación de mercancías a ella sujeta. Que al momento de llevarse a cabo su operación de comercio exterior el importador debe sujetarse a las disposiciones vigentes y aplicables sin excepción alguna. Por tanto, al instante de realizar la importación de mercancías que se encuentren sujetas al pago de cuota compensatoria, era indispensable cubrir la cuota. Que las cuotas compensatorias se aplican a partir de la resolución al procedimiento de investigación en materia de prácticas desleales de comercio exterior en donde se establece su determinación, resultando aplicable a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Que en el caso concreto la actora se encontraba obligada a calcular en el pedimento respectivo el monto de la cuota respecto de las mercancías sujetas a la misma. Que las cuotas compensatorias una vez establecidas tienen el carácter de obligatorias para todos los importadores que se ubiquen en ellas. Sin perjuicio que de no hacerlo la autoridad procederá válidamente a su aplicación ante el incumplimiento a una disposición legalmente válida en el momento de la operación de comercio.

Lo anterior, en virtud de que a juicio de esta Segunda Sección si bien es cierto, el pago de las cuotas compensatorias definitivas determinadas por la Secretaría de Economía, derivadas de la conclusión de un procedimiento de investigación antidumping resultan obligatorias para todos los importadores que introduzcan al

país las mercancías objeto de dichas cuotas; y que en el momento de la importación de la mercancías estarán sujetas al pago de cuotas compensatorias conforme a las resoluciones de la Secretaría de Economía, que previamente hayan determinado las cuotas compensatorias; también lo es, que la litis versa en el juicio en determinar si el acto liquidatorio combatido de **aplicación** de cuotas compensatorias que realizó la autoridad fiscal se encuentra debidamente fundada y motivada en los términos del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 16 Constitucional, al apoyarse en una resolución general dejada sin efectos por derivar de un procedimiento ilegal en el que actuó una autoridad inexistente.

Resulta oportuno mencionar para referirnos a la naturaleza de la resolución determinante de cuotas compensatorias, que fue dejada sin efectos por la sentencia definitiva firme de la Primera Sección de la Sala Superior, antes citada, que esa resolución es de carácter general, resulta aplicable para todos aquéllos que se ubiquen en la hipótesis normativa de importación de manzanas de mesa originarias de los Estados Unidos de América independientemente del país de procedencia, respecto de la clasificación arancelaria que precisa la misma resolución, hasta en tanto no se demuestre su ilegalidad.

- Por tanto, cuando se declara la nulidad de la resolución determinante de cuotas compensatorias de carácter general, ello se traduce en su ilegalidad que trasciende para todos aquellos que se ubiquen en la hipótesis normativa a los que se destina la resolución genérica y no únicamente en aquellos que hubieren promovido el procedimiento administrativo antidumping o que hubieran promovido el juicio contencioso administrativo en el que se declaró la nulidad de esa resolución determinante, porque dicho acto anulado como “resolución genérica” no puede ser nulo para parte de sus destinatarios y válido para otros.

En virtud de que la eficacia jurídico material de la sentencia estimatoria por virtud de la cual se declaró la nulidad de esa resolución genérica, se extiende *erga omnes*, esto es, se extiende genéricamente a todos los destinatarios de la misma y tendrá esa sentencia firme la fuerza de cosa juzgada con efectos *ultra partes y no*

inter partes. En esa razón cualquier destinatario de la resolución determinante de cuotas compensatorias puede invocar a su favor la no aplicación de la misma, considerando que constituye cosa juzgada su ilegalidad al derivar en el caso concreto de la resolución determinante de cuotas compensatorias por las importaciones de manzanas de mesa de actuaciones ilegales, como lo fue la actuación de una autoridad dentro del procedimiento administrativo antidumping, que resultó inexistente, lo que se traduce en la ilegalidad de la resolución final de dicha investigación antidumping, que no pueden surtir efecto legal alguno para ningún destinatario.

A mayor abundamiento a continuación se precisará el significado etimológico y definición de la expresión ***ERGA OMNES,*** conforme a diversos Diccionarios Jurídicos. El Diccionario de Derecho de Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, Editorial Porrúa, México 1985, señala al respecto lo siguiente:

> "ERGA OMNES. Expresión latina usada para referirse a la eficacia que tienen determinados actos, frente a todos, aun aquéllos que no son parte en los mismos".

Ahora bien, el Diccionario Jurídico consultado de la página de Internet http://www.popjuris.com/diccionario/derechos-reales/definicion-de-erga-omnes/, señala sobre el significado etimológico y definición de la expresión *ERGA OMNES* lo siguiente:

> "**Etimología**
> "Término en latín que significa 'respecto de todos', 'frente a todos' o 'contra todo el mundo'.
> "**Definición**
> "Facultad de exigir un derecho con respecto a cualquier persona, y no frente a una persona en específico."

El Diccionario de Latin jurídico consultado de la página de internet: http://books?id=P-EPaGBlfHsC&pg=A51&lpg=PA51&dq=

erga+omnes+diccionario+juridico&source=bl&ots=62hz1_Ijhsv&sig=7tGTNBY7j7Nhf8qEm0RbyGGskT8&hls&ei=3oLTSumNFZ2qtgfTkJHCBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAgQ6AEwAD gK# sobre el significado de la expresión ERGA OMNES, señala lo siguiente:

"ERGA OMNES.- Con respecto, concerniente a todos."

En consecuencia, si del contenido íntegro de la resolución liquidatoria impugnada se desprende que la aplicación de cuotas compensatorias se sustentó básicamente en la "**RESOLUCIÓN FINAL DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES DE MANZANAS DE MESA DE LAS VARIEDADES RED DELICIOUS Y SUS MUTACIONES Y GOLDEN DELICIOUS, MERCANCÍA CLASIFICADA ACTUALMENTE EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 0808.10.01 DE LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA INDEPENDIENTEMENTE DEL PAÍS DE PROCEDENCIA**", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, emitida por la Secretaría de Economía y por su parte, esta Juzgadora aprecia que esa resolución que sirvió de fundamento a la aplicación de cuotas compensatorias quedó sin efectos, así como su procedimiento de investigación antidumping iniciado en 1997, conforme a la sentencia definitiva firme de 29 de marzo de 2005, que constituye cosa juzgada, y que en vía de cumplimiento a ese fallo es que con fecha 3 de julio de 2007, la Secretaría de Economía, emite la prueba superveniente ofrecida por la actora consistente en la Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2007, que dejó sin efectos la multicitada resolución final publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, resulta evidente que la liquidación combatida en el presente juicio carece del debido fundamento legal para aplicar las cuotas compensatorias, que tienen un origen ilegal, derivado de una sentencia con efectos *ERGA OMNES* dirigida a todos los importadores de los productos de que se trata y no sólo a los que participaron en el juicio en el que se declaró dicha nulidad.

- Sin que sea óbice para lo anterior, el argumento de la autoridad en el sentido de que al momento de la importación que en el caso ocurrió durante los meses de 2004, la resolución final de determinación de cuotas compensatorias, estuviera vigente al haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, pues a partir del día siguiente a su publicación las cuotas compensatorias determinadas por la Secretaría de Economía, eran obligatorias para los importadores de las mercancías sujetas a esas cuotas, salvo las excepciones que la misma resolución hacía.

Sin embargo, esa situación de vigencia de cuotas compensatorias a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, **ESTO ES A PARTIR DEL 13 DE AGOSTO DE 2002, NO SUBSANA LA ILEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING INICIADO EN 1997, NI DE LA RESOLUCIÓN QUE LO CONCLUYÓ EL 2002**. Lo anterior, porque la nulidad de la resolución final de determinación de cuotas compensatorias de la Secretaría de Economía, tuvo su origen en que el procedimiento de investigación antidumping se tramitó por una autoridad inexistente. Por lo cual, los efectos de la nulidad **SE RETROTRAEN HASTA EL MOMENTO DE LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING, QUE OCURRIÓ EN 1997 Y SU RESOLUCIÓN QUE LO CONCLUYÓ EN 2002, LOS CUALES NO PUEDE TENER EFECTO JURÍDICO ALGUNO, NI SERVIR DE FUNDAMENTO DE LA LIQUIDACIÓN COMBATIDA EN ESTE JUICIO**.

Máxime, que la vigencia de la resolución de determinación de cuotas compensatorias no impide que a través de los medios de defensa respectivos se controvierta el procedimiento de investigación antidumping y la resolución final de determinación de cuotas compensatorias de la Secretaría de Economía, como en el caso se hizo por las empresas actoras, en el diverso juicio 24651/03-17-09-9/4/05-S1-02-05 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS FINAS TARAHUMARA, S.A. DE C.V., COMPAÑÍA FRUTÍCOLA TARAHUMARA, S.A. DE C.V., IMPORTA-

DORA Y EXPORTADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Y FRUTAS FINAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

Por tanto, si con posterioridad a la entrada en vigor de la resolución final de determinación de cuotas compensatorias, se declaró ilegal tal determinación por derivar de un procedimiento en el que actuó una autoridad inexistente jurídicamente, resulta evidente que tal resolución final no puede servir de fundamento de la resolución liquidatoria impugnada en este juicio, en la que la autoridad aduanera pretende aplicar cuotas compensatorias que se determinaron por la Secretaría de Economía, en un procedimiento de investigación antidumping practicado por una autoridad inexistente jurídicamente, en virtud de que ello se traduce en una indebida fundamentación y motivación de la liquidación combatida en el presente juicio.

De lo contrario se permitiría que los actos administrativos se sustenten en resoluciones generales ilegales declaradas nulas por Órgano Jurisdiccional, aun cuando se encuentran indebidamente fundados y motivados, vulnerando el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 16 Constitucional, como en el caso, se transgredió, dado que la resolución impugnada pretende de la aplicación de cuotas compensatorias al importador cuando la resolución de determinación de las mismas ha quedado sin efectos, desde el inicio de procedimiento antidumping iniciado en 1997.

Si bien es cierto, que la primera prueba superveniente ofrecida por la actora consistente en la resolución que da cumplimiento a la sentencia de la Primera Sección de la Sala Superior publicada el 29 de marzo de 2005, que se emite por la Secretaría de Economía, que dejó sin efectos la resolución final publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, indicando que tal determinación de cumplimiento de la sentencia entrara en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el 4 de julio de 2007; también lo es, que ello es para determinar el momento del cumplimiento que no impide retrotraer los efectos de la nulidad desde el inicio del procedimiento antidumping que ocurrió en 1997 en donde se cometió la ilegalidad por inexistencia de la autoridad que tramitó ese proce-

dimiento. Máxime que la sentencia de nulidad no especificó que la nulidad decretada surtiría efectos hasta que la autoridad publicara en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo o decreto que dejara sin efectos la resolución final, sino que por el contrario fuera clara al especificar la nulidad de la resolución recurrida determinante de cuotas compensatorias derivada del vicio en el procedimiento por la actuación ilegal de la autoridad inexistente declarando con ello la nulidad no sólo de la resolución final antidumping, sino además del procedimiento que le dio origen.

En consecuencia, si el fundamento de la resolución impugnada liquidatoria de la autoridad fiscal en este juicio, se sostiene en la resolución determinante de cuotas compensatorias de la Secretaría de Economía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, que ha sido considerada ilegal por ser fruto de un procedimiento antidumping ilegal practicado por una autoridad inexistente jurídicamente, ello se traduce en la indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada.

- Por lo que hace al argumento de la autoridad en el sentido de que las sentencias de este Tribunal sólo benefician a quienes promovieron el juicio de nulidad y que en esa época hubieren importado la mercancía sujeta a la cuota compensatoria porque en tal caso tenían un medio de defensa pendiente de resolución pero que esa hipótesis no se actualizó con la actora, es de señalar por esta Segunda Sección que tampoco le asiste la razón a la autoridad en virtud de que si bien la hoy actora INTEGRACIÓN DE COMERCIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., no promovió el diverso juicio contencioso administrativo 26651/03-17-09-9/4/05-S1-02-01, porque en este último fueron demandantes las empresas COMERCIALIZADORA DE FRUTAS FINAS TARAHUMARA, S.A. DE C.V., COMPAÑÍA FRUTÍCOLA TARAHUMARA, S.A. DE C.V., IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. y FRUTAS FINAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.; también lo es, que la actora en el presente juicio que nos ocupa, tiene el carácter de importadora de la mercancía a que se refiere en la resolución final al procedimiento antidumping, en la que se impuso a esas mercancías las

cuotas compensatorias definitivas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002.

- En relación con la argumentación de la autoridad demandada en el sentido de que la sentencia que declaró la nulidad de la resolución determinante de las cuotas compensatorias sólo tiene efectos *inter partes,* es de señalar por este Órgano Jurisdiccional que no le asiste la razón a la demandada, porque atendiendo a la naturaleza de la resolución determinante de las cuotas compensatorias que tiene un alcance general para todos sus destinatarios, esto es para quienes se ubiquen en la hipótesis de importación de mercancías provenientes del país del que se hubiere determinado dichas cuotas, esto es, tiene efectos *erga omnes* la sentencia declarativa de nulidad que dictó la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, en el sentido de que la declaratoria de nulidad de la resolución determinante de cuotas compensatorias que formuló la Secretaría de Economía en cumplimiento a la sentencia de la Primera Sección, también tiene efectos con alcances generales para todos aquellos importadores de las manzanas provenientes de los Estados Unidos de América, a que se refiere la resolución determinante de cuotas compensatorias, por ser destinatarios a los que afecta, tanto la invalidez de la resolución, como en su caso su validez.

Razón por la cual si esa resolución general es el sustento fundamental de la resolución liquidatoria impugnada en el presente juicio, conforme a la cual se aplicaron por parte de la autoridad fiscal las cuotas compensatorias previamente determinadas por la Secretaría de Economía y tal resolución final se dejó sin efectos, retrotrayendo sus efectos desde el inicio del ilegal procedimiento antidumping de 1997, por sentencia definitiva firme, la resolución impugnada es ilegal aun cuando **la actora no hubiere participado como demandante en el diverso juicio referido en el que se declaró la nulidad de la resolución final multicitada de carácter general**.

Lo anterior, porque los efectos de las resoluciones determinantes de cuotas compensatorias que emite la Secretaría de Economía son de aplicación general para todos sus destinatarios, que se ubiquen en las hipótesis de

importación que la misma resolución establezca para proteger a la Industria Nacional, desde su entrada en vigor como para el caso que se dejen sin efectos. Ello en virtud de la naturaleza general de tal determinación de la que se ha resuelto que su aplicación no se limita a los importadores interesados que hubieren comparecido durante el procedimiento administrativo de investigación antidumping, sino que la imposición de las cuotas se establece para todas aquellas personas que importen mercancías provenientes del país que incurrió en las prácticas desleales. Lo cual aplica a contrario sensu, cuando esa resolución general queda sin efectos que beneficia a todos aquéllos destinatarios de la resolución general a quienes aplicaba la resolución; como se desprende de los artículos 131 de la Constitución Federal, 28, 39, 66 y 67 de la Ley de Comercio Exterior, que a continuación se citan:

[N.E. Se omite transcripción]

Por tanto, si la resolución determinante de las cuotas compensatorias se declaró nula con efectos *ex tunc*, (a partir de la violación cometida) y efectos *erga omnes* (para todos los destinatarios de la resolución atendiendo a su carácter general que aplica para sus destinatarios), tal nulidad beneficia a todos los importadores que se ubiquen en la hipótesis de importación de mercancías de que se trate como en el caso, el importador hoy actor, respecto del cual, la autoridad reconoce expresamente que realizó la importación de manzanas a que se refiere la resolución final publicada en el Diario Oficial de la Federación de 12 de agosto de 2002, que se declaró nula por la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal.

Al respecto, resultan aplicables a contrario sensu, las tesis y precedente siguientes en el sentido de que si la resolución determinante de cuotas compensatorias es de aplicación general para todos los importadores o consignatarios de las mercancías a que se refiera la resolución con independencia que hayan intervenido en la investigación respectiva o no; también su nulidad beneficia a todos esos importadores o consignatarios de mercancías a que se refiere la misma resolución dejada sin efec-

tos cuando se argumente en ese sentido; tesis y precedente que a continuación se cita:

> "**CUOTAS COMPENSATORIAS DETERMINADAS POR LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL AL EMITIR RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PRÁCTICAS DESLEALES EN COMERCIO INTERNACIONAL. SON DE APLICACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS IMPORTADORES O CONSIGNATARIOS DE LAS MERCANCÍAS A QUE SE REFIERA LA RESOLUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE HAYAN INTERVENIDO EN LA INVESTIGACIÓN RESPECTIVA O NO.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F., Novena Época Tomo XII, Septiembre de 2000, Tesis: VI.A.79 A, pág.736]

> "**CUOTAS COMPENSATORIAS, LA RESOLUCIÓN QUE LAS DETERMINA ES DE APLICACIÓN GENERAL.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en la R.T.F.F., Cuarta Época, Año I, No. 2. Septiembre 1998, pág. 179. IV-P-2aS-9]

También resultan aplicables al caso los precedentes IV-P-2aS-200, publicado en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Cuarta Época, Año II, No. 19, febrero de 2000, visible en la página 121 y V-P-1aS-281 publicado en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Cuarta Época, Año V, No. 59, noviembre de 2005, visible en la página 250.

> "**EFECTOS 'ERGA OMNES' DE LAS SENTENCIAS QUE DECLARAN LA NULIDAD DE UNA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE O CONFIRMA UNA CUOTA COMPENSATORIA DEFINITIVA.**" [N.E. Se omite transcripción]

> "**RESOLUCIÓN QUE DETERMINA CUOTAS COMPENSATORIAS.- SU NULIDAD DECRETADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUS-**

TICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA TIENE EFECTOS GENERALES." [N.E. Se omite transcripción]

Por tanto, esta Segunda Sección estima que los efectos de la nulidad de la resolución final de investigación antidumping de que se trata se **RETROTRAEN HASTA EL MOMENTO DE LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING, QUE OCURRIÓ EN 1997 Y SU RESOLUCIÓN QUE CONCLUYÓ EN 2002, LOS CUALES NO PUEDEN TENER EFECTO JURÍDICO ALGUNO, EN VIRTUD DE LA NATURALEZA DE LA ILEGALIDAD COMETIDA CONSISTENTE EN LA INEXISTENCIA DE LA AUTORIDAD QUE TRAMITÓ EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN.**

II.- En cuanto a la segunda diversa prueba superveniente consistente en el oficio de contestación de consulta, a continuación se transcribe el mismo:

[N.E. Se omite transcripción]

De la transcripción anterior, de la segunda prueba superveniente ofrecida por la actora se desprende que se trata de un oficio emitido el 30 de julio de 2007, con posterioridad a la presentación de la demanda que se formuló el 13 de octubre de 2006, y que consiste en una respuesta que emitió el Director de Procedimientos y Enlace Contencioso, de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, a la Unión Nacional de Comerciantes Importadores y Exportadores de Productos Agrícolas, A.C., que corrobora que efectivamente con fecha 3 de julio de 2007 la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución por la que se dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal de 29 de marzo de 2005 y que dejó sin efectos la Resolución Final de la Investigación Antidumping sobre las importaciones de manzanas de mesa originarias de los Estados Unidos de América publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002.

En cuanto a la objeción que hace la autoridad respecto de esa prueba superveniente, esta Juzgadora estima que tal objeción es **INFUNDADA**, pues se reitera que la actora no necesita ser parte de la Unión Nacional de Comerciantes Importadores y Exportadores para que le resulte aplicable el beneficio de la declaratoria de nulidad de la resolución final de la investigación antidumping publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, en virtud de que la nulidad decretada es de carácter *EX TUNC* y *ERGA OMNES*, es decir surte efectos desde la violación cometida y para todos los destinatarios de la resolución, esto es, tiene efectos generales para todos los importadores que se ubicaran en la hipótesis que establecía dicha resolución final, como en el caso la hoy actora, que importó las manzanas de mesa originarias de los Estados Unidos de América.

En consecuencia, reiteramos que esa resolución de determinación de cuotas compensatorias no puede servir de fundamento legal a la liquidación de aplicación de cuotas compensatorias de la autoridad fiscal, cuando existe prueba fehaciente de que fue dejada sin efectos *EX TUNC*, a partir del procedimiento de investigación antidumping de origen en el que se cometió la ilegalidad que dio fruto a la resolución final de investigación antidumping, también ilegal.

Ahora bien, en virtud de que corresponde en el presente juicio analizar la validez de la resolución impugnada atendiendo a sus fundamentos y motivos y que esta Juzgadora encuentra que el fundamento invocado por la autoridad liquidadora para la aplicación de las cuotas compensatorias ha sido declarado nulo con efectos *EX TUNC* y *ERGA OMNES* por este mismo Tribunal, con fundamento en el artículo 238, fracción I y 239, fracción II del Código Fiscal de la Federación, la resolución final multicitada no puede servir de fundamento al acto administrativo impugnado en este juicio.

Luego entonces, esta Juzgadora estima que la resolución impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada al sustentarse en la resolución general de investigación antidumping publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, declarada nula, junto con el procedimiento de investigación

antidumping iniciado en 1997, lo que se traduce en la invalidez de ese procedimiento y de su resolución, que no puede tener efecto legal alguno.

Por todo lo anterior, esta Segunda Sección de la Sala Superior estima que la actora probó su pretensión al haber demostrado en el presente juicio que la resolución impugnada es ilegal porque la autoridad fiscal pretendió liquidarle un crédito fiscal por concepto de aplicación de cuotas compensatorias, multa y recargos, que se sustentan medularmente en la "**RESOLUCIÓN FINAL DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES DE MANZANAS DE MESA DE LAS VARIEDADES RED DELICIOUS Y SUS MUTACIONES Y GOLDEN DELICIOUS, MERCANCÍA CLASIFICADA ACTUALMENTE EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 0808.10.01 DE LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA INDEPENDIENTEMENTE DEL PAÍS DE PROCEDENCIA**", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2002, emitida por la Secretaría de Economía, en la que se determinó la cuota compensatoria de mercancía como la importada por la actora, que se declaró nula por la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal al derivar de un procedimiento de investigación antidumping ilegal practicado por una autoridad inexistente. Todo lo cual, se traduce en la indebida fundamentación y motivación de la resolución liquidatoria impugnada violatoria del artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 16 Constitucional.

Por tanto con fundamento en el artículo 51, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 52, fracción II del mismo ordenamiento legal, se declara la nulidad lisa y llana de la resolución liquidatoria combatida en este juicio.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 14, fracción I, 23, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre

de 2007, 48 fracción II, inciso c), 50, 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I. La actora probó su pretensión, en consecuencia;

II.- Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, precisada en el Resultando 1º de este fallo.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada del presente fallo, devuélvanse los autos a la Novena Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, una vez que haya quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el presente asunto y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de octubre de 2009, por mayoría de 4 votos a favor de los Magistrados: Guillermo Domínguez Belloc, Alfredo Salgado Loyo, Juan Manuel Jiménez Illescas y Silvia Eugenia Díaz Vega, y 1 voto en contra de la Magistrada: Olga Hernández Espíndola, quien se reservó su derecho para formular voto particular.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 4 de noviembre de 2009, y con fundamento en lo previsto por los artículos 27, fracción III y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-411

RECURSO DE RECLAMACIÓN. CASO EN EL QUE NO PROCEDE TRATÁNDOSE DE LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.- De conformidad con los artículos 24 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el propósito medular de la suspensión, como medida cautelar que es, lo constituye el mantener la situación de hecho existente a fin de impedir que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia, por tanto, si la parte actora pretende a través del recurso de reclamación instaurado en contra de la sentencia interlocutoria que le negó la suspensión, lograr la revocación de esa decisión y que se le conceda la medida cautelar de referencia sobre la rescisión de un contrato de obra pública y sus efectos relativos a la suspensión en la continuación de los trabajos objeto de ese convenio, debe declararse infundada tal pretensión, toda vez que la misma lleva implícito un efecto restitutorio que no es propio de esa medida cautelar, sino de la sentencia que resuelva el fondo de la controversia; lo anterior, con mayor razón cuando se trata de actos que se consumaron al haberse comunicado al contratista la decisión del organismo público contratante de rescindir el acuerdo celebrado.

Recurso de Reclamación Núm. 5/09-19-01-3/1933/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de octubre de 2009)

PRECEDENTE:

VI-P-2aS-35
Recurso de Reclamación Núm. 1724/07-13-01-8/1085/07-S2-06-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de enero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Francisco Cuevas Godínez.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.- Engrose: Magistrado Luis Malpica y de Lamadrid.- Secretario: Lic. José Antonio Rivera Vargas.
(Tesis aprobada en sesión de 25 de marzo de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 5. Mayo 2008. p. 118

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-412

RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES OPORTUNO EL QUE SE DEPOSITA EN EL SERVICIO POSTAL MEXICANO PARA SU ENVÍO DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- El segundo párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que, cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse por el Servicio Postal Mexicano, mediante correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante. En los términos expuestos, es apegado a derecho y a la equidad considerar que, también existe a su favor la posibilidad de presentar por correo certificado todas las promociones o recursos que sean necesarios para ejercer plenamente su derecho. Por lo anterior, resulta procedente el envío del recurso de reclamación a través del Servicio Postal Mexicano mediante correo certificado con acuse de recibo, siempre que el promovente

tenga su domicilio fiscal fuera de la sede de la Sala Regional, y que el depósito se realice dentro del plazo legal establecido.

Recurso de Reclamación Núm. 5/09-19-01-3/1933/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de octubre de 2009)

PRECEDENTES:

V-P-2aS-760
Recurso de Reclamación Núm. 3758/06-13-01-2/496/07-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de junio de 2007, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de junio de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 80. Agosto 2007. p. 98

V-P-2aS-808
Recurso de Reclamación Núm. 6335/06-12-02-5/945/07-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de noviembre de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de noviembre de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 84. Diciembre 2007. p. 130

VI-P-2aS-7

Recurso de Reclamación Núm. 487/07-03-01-3/781/07-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de enero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.

(Tesis aprobada en sesión de 15 de enero de 2008)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 3. Marzo 2008. p. 95

VI-P-2aS-176

Recurso de Reclamación Núm. 33237/06-17-09-2/1398/08-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de enero de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.

(Tesis aprobada en sesión de 29 de enero de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 16. Abril 2009. p. 231

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

VI-P-2aS-413

GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL NO TIENE QUE OTORGARLA PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- El artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que, las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías exigidas a las partes. Por otra parte, el artículo 2º del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal dispone que, el Distrito Federal es una entidad federativa, mientras que, el artículo 15, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, prevé la existencia de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. Por lo anterior, el titular de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, se ubica en el supuesto previsto en el artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, al ser una institución de la entidad federativa denominada Distrito Federal, por lo que no puede ser objeto de mandamiento de ejecución o de embargo alguno, siendo procedente concederle la suspensión de la ejecución impugnada sin el otorgamiento de la garantía del interés fiscal.

Recurso de Reclamación Núm. 2282/08-17-08-1/1836/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de octubre de 2009)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-2aS-414

Recurso de Reclamación Núm. 16716/07-17-11-9/1295/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de octubre de 2009)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

A juicio de este Cuerpo Colegiado es **INFUNDADO** el recurso formulado por la autoridad, por las razones que se expresan a continuación.

Para ello, resulta pertinente revisar el contenido del artículo 28, fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispositivo en el cual se señala lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

El artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que, tratándose de créditos fiscales es procedente la suspensión, la cual surtirá efectos sólo si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes aplicables.

En el caso a estudio, el actora impugna en juicio actuaciones dentro del procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo una multa impuesta por el Poder Judicial, por tanto, tiene el carácter de aprovechamientos conforme al artículo 3o., del Código Fiscal de la Federación, que dispone lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Por otra parte, conforme al artículo 4o., del Código Fiscal de la Federación, tienen el carácter de **créditos fiscales** los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados **que provengan** de contribuciones, **de aprovechamientos** o de sus accesorios, como se muestra a continuación:

[N.E. Se omite transcripción]

Por otra parte, resulta importante señalar que, el artículo 144, primer párrafo, en relación con el diverso 145, primer párrafo, ambas disposiciones del Código Fiscal de la Federación señalan lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De las disposiciones antes transcritas se desprende lo siguiente:

Que no se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales;

Que no se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo de cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación;

Que las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados en ley, mediante procedimiento administrativo de ejecución;

Por otra parte, el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación a que se refiere la autoridad en su agravio, señala lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

En el artículo antes transcrito se establecen los medios y los requisitos por los cuales los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal, que al efecto son los siguientes:

a) Depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general que se efectúen en las cuentas de garantía del interés fiscal a que se refiere el artículo 141-A del propio Código Fiscal de la Federación;

b) Prenda o hipoteca;

c) Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y excusión;

d) Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia;

e) Embargo en la vía administrativa;

f) Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se advierte asimismo que, en el penúltimo párrafo del artículo 141 del propio Código Fiscal de la Federación, antes transcrito, adicionado a partir del 29 de junio de 2006, se dispone que, *en los casos en que de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se solicite ante este Tribunal Federal la*

suspensión contra el cobro de contribuciones o aprovechamientos, el interés fiscal se deberá asegurar mediante el depósito de las cantidades que se cobren ante la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.

En ese orden de ideas, si bien el artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que, tratándose de créditos fiscales es procedente la suspensión, la cual surtirá efectos sólo si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes aplicables, no menos cierto es que el demandante en su escrito de demanda solicitó la suspensión señalando que en términos del artículo 4o., del Código Federal de Procedimientos Civiles no se encuentra obligado a otorgar garantías ni a efectuar depósitos para el cumplimiento de sus obligaciones, lo cual realizó en los siguientes términos:

[N.E. Se omite transcripción]

En los términos así expuestos, el Secretario de Gobierno del Distrito Federal, solicitó la suspensión de las resoluciones impugnadas con fundamento en el artículo 4o., del Código Federal de Procedimientos Civiles, disposición que en su primer párrafo establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

En la disposición antes transcrita se dispone que, *las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera*; ***pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías exigidas a las partes***.

Ahora bien, el otorgamiento de la suspensión por la Sala Regional se encuentra ajustada a derecho, atento a las siguientes consideraciones.

El Secretario de Gobierno del Distrito Federal, es una autoridad del Distrito Federal, es decir, una de sus instituciones, y a esto cabe agregar que, **el Distrito Federal es una entidad federativa, con las peculiaridades que lo distinguen como sede de los Poderes de la Unión**, toda vez que los artículos 42, fracción I, 43 y 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente, establecen lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Ahora bien, conforme al artículo 2o. del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el Distrito Federal es una entidad federativa, al disponerse textualmente lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Por otra parte, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal es una unidad integrante de la Administración Pública del Distrito Federal, encargada de auxiliar al Jefe de Gobierno en el ejercicio de sus atribuciones, tal como se dispone en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, que señala lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Por lo antes expuesto, es indudable que, el titular de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, en su carácter de demandante en el presente juicio, se ubica en el supuesto previsto en el artículo 4o., del Código Federal de Procedimientos Civiles, al ser una institución de la entidad federativa denominada Distrito Federal, por lo que no puede ser objeto de mandamiento de ejecución o de embargo alguno, además de estar exento de otorgar garantía alguna para asegurar el interés fiscal del crédito cuya ejecución llevó a cabo la autoridad demandada y que aquél impugna en el juicio contencioso administrativo.

Al respecto, resulta aplicable la tesis VI-TA-2aS-13 sustentada por este Cuerpo Colegiado, la cual ha sido publicada en la Revista correspondiente a la Sexta Época, Año II, No. 14, Febrero 2009, p. 488, que se transcribe a continuación:

> "**GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL NO TIENE QUE OTORGARLA PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.**" [N.E. Se omite transcripción]

En este orden de ideas, fue ajustado a derecho que la Sala Regional concediera la suspensión definitiva, ya que atento a la naturaleza del Secretario de Gobierno del Distrito Federal, dicha autoridad se encuentra liberada de otorgar garantía alguna, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4o., del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Al resultar infundado el agravio formulado por la recurrente, este Cuerpo Colegiado confirma en sus términos la sentencia interlocutoria que otorgó la suspensión de la resolución impugnada.

En mérito de lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 23, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor a partir del 07 de diciembre de 2007, en relación con el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- Es procedente pero INFUNDADO el recurso de reclamación intentado por el Subadministrador en suplencia del titular de la Administración Local Jurídica del Centro del Distrito Federal, en consecuencia;

II.- Se confirma la sentencia interlocutoria de 04 de febrero de 2009;

III.- Envíese copia del presente fallo a la Octava Sala Regional Metropolitana, para que sea integrada a la carpeta de suspensión correspondiente;

IV.- No ha lugar a devolver la carpeta de suspensión, considerando que sólo se remitieron a esta Sala Superior copias certificadas de las constancias de dicha carpeta.

V.- Notifíquese. Con copia autorizada de la presente resolución y en su oportunidad archívese como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor de los Magistrados Guillermo Domínguez Belloc, Olga Hernández Espíndola, Alfredo Salgado Loyo, Juan Manuel Jiménez Illescas y Silvia Eugenia Díaz Vega.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 3 de noviembre de 2009, y con fundamento en lo previsto por los artículos 27, fracción III y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-415

SALA REGIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. AL TENER COMPETENCIA ESPECIALIZADA A NIVEL NACIONAL POR RAZÓN DE TERRITORIO, LE CORRESPONDE CONOCER DE LOS ASUNTOS EN DICHA MATERIA.- En términos del artículo 24 Bis del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual tiene su sede en la Ciudad de México, Distrito Federal y cuenta con competencia en todo el territorio nacional para tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones a que se refiere el citado precepto. En tal virtud, al tener dicha Sala especializada competencia a nivel nacional, debe asumir el conocimiento de los asuntos que correspondan a su materia en cualquiera de los supuestos a que se refiere el artículo 34 de la Ley Orgánica del propio Tribunal, es decir, con independencia de que se esté en los casos en que aplica la regla general de atender al domicilio fiscal del demandante, o ante las excepciones de considerar su domicilio particular, o bien, la sede de la autoridad.

Incidente de Incompetencia Núm. 31801/08-17-01-4/2338/09-03-01-6/2605/09-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de noviembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto C. Grandini Ochoa.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de noviembre de 2009)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

Atendiendo a lo dispuesto en los acuerdos antes transcritos, este Órgano Colegiado considera que el conflicto de competencia planteado por la Sala Regional del Noroeste III es **fundado** y por lo tanto **es la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual la competente para conocer del juicio**, tomando en cuenta los siguientes razonamientos:

Según se desprende del primero de los acuerdos antes transcritos, a la Sala especializada en Materia de Propiedad Intelectual le corresponde conocer de las resoluciones definitivas a las que se refieren las fracciones XI y XII del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal y que hubiesen sido emitidas con fundamento, entre otras leyes, en la Ley de la Propiedad Industrial.

Resulta que en el caso concreto el acto impugnado es el oficio con número de folio 20765, de 10 de octubre de 2008, emitido dentro del expediente P.C.241/2008(I-50)2392, por el Coordinador Departamental de Inspección y Vigilancia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante el cual se tiene por no admitida una prueba ofrecida por las hoy actoras en su contestación a la solicitud de declaración administrativa de infracción instaurada en su contra, y se determina no acordar de conformidad la petición de llamar al procedimiento a distintas personas morales con el carácter de terceros perjudicados; siendo el caso que dicho documento fue emitido con fundamento, entre otras leyes, en la Ley de la Propiedad Industrial, como se aprecia de su contenido a folios 28 y 29 de las actuaciones del juicio.

Atendiendo a las anteriores circunstancias y haciendo énfasis en que el acto impugnado fue emitido por una autoridad perteneciente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual conforme al artículo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial (*citado en el propio documento*), es la **autoridad administrativa en esa mate-**

ria; consecuentemente, la Sala Regional especializada en dicha materia es la que debe conocer del asunto y determinar si el acto impugnado encuadra en alguno de los supuestos correspondientes del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Ahora bien, conforme al segundo y tercero de los acuerdos invocados, la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual inició funciones el 5 de enero de 2009 y deberán remitírsele los asuntos en los que no se hubiese cerrado la instrucción al 30 de noviembre de 2008 y los nuevos que se reciban en las diversas Salas Regionales.

En el caso concreto, habiéndose recibido la demanda en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas el 13 de noviembre de 2008, según consta en el sello de recepción estampado en la misma a folio 1 del expediente principal, y toda vez que la Sala receptora declinó la competencia y remitió el asunto a la Sala Regional del Noroeste III sin acordar respecto de la admisión de la demanda, el juicio no había quedado radicado al 30 de noviembre de 2008, por lo que se estima que no se está en el primero de los supuestos señalados.

En tal sentido, siendo una demanda nueva de la cual aún no se resuelve respecto de su admisión y que recibió la Sala incidentista el 19 de agosto de 2009, según se hizo constar por la propia juzgadora en el acuerdo del día 25 del mismo mes y año, se considera que el asunto encuadra en la fracción IV del artículo Tercero Transitorio del Acuerdo G/59/2008.

En efecto, del Acuerdo G/59/2008 se desprende que la intención del Pleno fue que se remitieran a la nueva Sala especializada todos los asuntos en materia de propiedad intelectual, tanto nuevos, como aquellos en los que no se hubiese concluido la instrucción del juicio, a fin de que fuera dicha Sala la que los tramitara y resolviera, por lo que esta Sección estima que le asiste la razón a la incidentista en el sentido de que corresponde a dicha Sala especializada el conocer del presente asunto.

Lo anterior con independencia de que el demandante haya señalado en su escrito de demanda un domicilio ubicado en Culiacán, Sinaloa, y que dicho Estado

esté dentro de la circunscripción territorial de la Sala Regional del Noroeste III, conforme a los artículos 23, fracción III y 24, fracción III, del Reglamento Interior de este Tribunal; toda vez que en términos del Acuerdo G/17/2008 antes transcrito, se reformó dicho Reglamento a fin de adicionarle el artículo 24-Bis y establecer que la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual tiene **competencia material especializada en todo el territorio nacional**, a diferencia del resto de las Salas Regionales. El precepto en comento se transcribe a continuación conforme al texto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 24 de marzo de 2008:

[N.E. Se omite transcripción]

Por otra parte resulta necesario tener presente lo que dispone el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor:

[N.E. Se omite transcripción]

De la transcripción anterior se desprende que el aspecto que por regla general se toma en cuenta para determinar la competencia territorial de las Salas Regionales de este Tribunal, es el lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, con algunas precisiones y excepciones que el propio numeral establece, de manera que en ciertos casos puede resultar competente la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad demandada.

En este orden de ideas y tomando en cuenta la materia del presente juicio cuyo conocimiento corresponde a la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, resulta que al tener ésta competencia especializada a nivel nacional, en cualquier supuesto desde el punto de vista territorial corresponde a ella tomar conocimiento del asunto y para dicho fin deberán remitírsele los autos que integran el expediente principal.

[...]

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 29, fracción I y 30, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 23, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente; se resuelve:

RESOLUTIVOS:

I.- Es **procedente** y **fundado** el incidente de incompetencia planteado por la Sala Regional del Noroeste III, en consecuencia:

II.- Es competente por razón de materia y territorio para conocer del presente asunto, la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, a la que deberán remitírsele los autos que integran el expediente principal.

III.- Envíese copia certificada del presente fallo a la Sala Regional del Noroeste III y a la Primera Sala Regional Metropolitana, para su conocimiento.

IV.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 3 de noviembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor de los Magistrados Guillermo Domínguez Belloc, Olga Hernández Espíndola, Alfredo Salgado Loyo, Juan Manuel Jiménez Illescas y Silvia Eugenia Díaz Vega.

Fue Ponente en este asunto el Magistrado Alfredo Salgado Loyo, cuya ponencia fue aprobada.

Se formuló el presente engrose el 9 de noviembre de 2009 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor, firma la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos de la misma Sección, quien autoriza y da fe.

SEGUNDA PARTE

CRITERIOS AISLADOS DE SALA SUPERIOR Y DE SALAS REGIONALES

SALA SUPERIOR

PLENO

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASS-42

DESECHAMIENTO DE UN RECURSO. SI SE CONFIRMA SU LEGALIDAD NO OPERA EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA REGULADO POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE PERMITE ANALIZAR CONCEPTOS DE ANULACIÓN PLANTEADOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.- El último párrafo del artículo 1º de la Ley en referencia establece que cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala Regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, procediendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Por su parte, el penúltimo párrafo del artículo 50 de la citada Ley establece que tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. Con base en esos preceptos, que establecen el principio de "litis abierta" si la actora interpone juicio contencioso administrativo en contra de la resolución recaída a un recurso de revocación intentado por ella, en la que se desechó por improcedente dicho medio de defensa y al efecto este Tribunal administrativo determina la legalidad de dicho desechamiento, el Tribunal no estará obligado a analizar los conceptos de impugna-

ción planteados vía recurso, aun cuando cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión contenidos en el acto administrativo recurrido, pues tal circunstancia solo es procedente cuando se determine la ilegalidad del desechamiento, atendiendo a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 1º antes precisado, no así cuando se determine la legalidad del desechamiento.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 34507/06-17-08-4/955/09-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de agosto de 2009, por mayoría de 5 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 4 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009)

PRIMERA SECCIÓN

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TA-1aS-22

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL. COPIA CERTIFICADA DEL REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE. ES UN DOCUMENTO OFICIAL IDÓNEO PARA EFECTOS DE EVIDENCIAR LA ACTUAL UBICACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL DEL ACTOR.- Conforme al último párrafo del artículo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que cuando una Sala esté conociendo de un juicio que sea competencia de otra, cualquiera de las partes puede acudir ante el Presidente del Tribunal, exhibiendo copia de la demanda y de las constancias que estime pertinentes, a fin de que las Secciones, acorde con lo señalado en la fracción VII del artículo 23 de la Ley Orgánica del citado órgano jurisdiccional, resuelvan qué Sala es la competente para conocer del juicio. En este tenor, si la autoridad interpone incidente de incompetencia por razón de territorio, argumentando que el domicilio fiscal del actor no es el que señaló en su escrito de demanda, y para efectos de evidenciar la actual ubicación del domicilio fiscal del actor y con ello demostrar la incompetencia de la Sala Regional para conocer del juicio, por razón de territorio, exhibe copia certificada del Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente, donde aparecen los movimientos efectuados al R.F.C., tal constancia oficial al ser expedida por la autoridad tiene el valor de documental pública, que debe considerarse para determinar qué Sala Regional de este Órgano Colegiado es la competente territorialmente para conocer del juicio contencioso administrativo, sin que sea válido estimar fundado un incidente de incompetencia territorial, apoyado en que con posterioridad, es decir, durante la substanciación del juicio, la parte actora cambie su domicilio fiscal, en razón a que, debe atenderse al domicilio de la parte demandante al momento de la presentación de la demanda.

Incidente de Incompetencia Núm. 1309/08-12-01-6/1520/08-S1-01-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de marzo de 2009, por mayoría de 3 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Julián Rodríguez Uribe.

(Tesis aprobada en sesión de 2 de abril de 2009)

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TA-1aS-23

RECURSO DE RECLAMACIÓN EXTEMPORÁNEO.- El artículo 62, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el término para la interposición del recurso de reclamación es de 5 días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la sentencia interlocutoria que conceda o niegue la suspensión definitiva, por lo que si se presenta fuera del plazo señalado, lo procedente es que se deseche por extemporáneo.

Recurso de Reclamación Núm. 1473/08-02-01-8/873/09-S1-03-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de agosto de 2009, por mayoría de 3 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Alma Rosa Navarro Godínez.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de agosto de 2009)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

SEGUNDO.- Del estudio que esta Juzgadora realiza a las constancias que obran en autos, se percata que es **improcedente** el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora, ya que dicho recurso si bien fue interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 20 de noviembre del 2008, dictada por los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Noroeste II, en la que se negó la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado solicitada por el actor, también lo es que su interposición se realizó fuera del plazo de los cinco días siguientes a aquél en

que surtió efectos la notificación de la sentencia recurrida, previsto en el transcrito artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En efecto, consta a fojas 564 de la carpeta de reclamación en que se actúa, el oficio N° 2-1-2-38891/08 de 03 de diciembre de 2008, en el que se ordenó la notificación a la empresa actora de dos acuerdos de 14 y 20 de noviembre de 2008 y de la sentencia recurrida de 20 del mismo mes y año.

Asimismo, en la foja 566 de autos, obra la copia certificada del acuse de recibo MN107261697MX, depositado el día 3 de diciembre de 2008 ante la Administración de Correos, relativa al citado oficio 2-1-2-38891/08, sin que en ese documento aparezca ningún dato en la firma del destinatario, es decir, no hay fecha ni firma de la persona que lo recibió.

Ante tal omisión, tal como consta en el Resultando N° 10 de esta sentencia, con acuerdo de 21 de mayo de 2009 (folio 610), la Presidenta de la Primera Sección ordenó girar oficio al Servicio Postal Mexicano, para que en el término de tres días informara sobre la fecha en que fue recibida por el destinatario la mencionada pieza postal MN107261697MX, con el apercibimiento que para el caso de no desahogar tal requerimiento, se le aplicaría la multa de apremio prevista en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.

Con oficio N° 151209 de 1° de junio de 2009 (folio 612), el Gerente de Atención a Clientes, del Servicio Postal Mexicano, solicitó a esta Primera Sección se le indicara la fecha de depósito de la citada pieza postal, lo cual le fue informado con oficio N° SGA-1as-1492/09 de fecha 3 de junio de 2009 y, por diverso oficio N° 151209 de 22 del mismo mes y año (folio 612), dicho Gerente de Atención, informó a esta Primera Sección que la Oficina Postal del destino les indicó que la pieza postal MN107261697MX, fue entregada a su destinatario el **05 de diciembre de 2008**.

En esos términos, se tiene que si la notificación de la sentencia recurrida a la parte actora, se realizó mediante la multicitada pieza postal MN107261697MX, el día

viernes **05 de diciembre de 2008**, dicha notificación tal y como lo señala el artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, surtió efectos al día hábil siguiente, a saber el día lunes 8 de diciembre de 2008; corriendo el término de cinco días para la interposición del recurso del día martes 9 del mismo mes y año al lunes **5 de enero de 2009**, sin que en el cómputo del término que antecede se hayan incluido los días 6, 7, 13 y 14 de diciembre de 2008 y 3 y 4 de enero de 2009, por corresponder a sábado y domingo y, del lunes 15 al miércoles 31 de diciembre de 2008, por corresponder al segundo periodo vacacional de este Tribunal; así como los días jueves 1° y viernes 2 de enero de 2009, los cuales fueron declarados inhábiles por Acuerdos G/1/2009 y G/63/2008, respectivamente, emitidos por el Pleno de la Sala Superior.

En consecuencia, si el recurso de reclamación se presentó ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Noroeste II, el día **9 de enero del 2009**, tal como obra en el escrito que consta a fojas 590 de la carpeta de reclamación en que se actúa, es evidente que su presentación resulta ser extemporánea, siendo necesario precisar además, que no consta en el escrito por el que se presentó dicho recurso, la fecha en que la empresa actora fue notificada de la sentencia recurrida.

Incluso en el auto de 14 de enero de 2009, que obra a fojas 599 del expediente en que se actúa, consta que el escrito por el que el representante legal de la empresa actora interpuso el recurso de reclamación, fue recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Noroeste II, de este tribunal, el **9 de enero de 2009**, por lo que no hay duda que el recurso de reclamación se presentó fuera del plazo establecido en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y que por ello, resulta ser extemporáneo.

Resultan aplicables la tesis de jurisprudencia V-J-2aS-26 publicada en la Revista de este Tribunal N° 80. Quinta Época. Año VII. Agosto de 2007, página 36 y la tesis pendiente de publicarse, ambas emitidas por este Órgano Jurisdiccional, las cuales son del tenor siguiente:

"**V-J-2aS-26**
"**RECURSO DE RECLAMACIÓN EXTEMPORÁNEO.-**" [N.E. Se omite transcripción]

"**RECURSO DE RECLAMACIÓN EXTEMPORÁNEO.-**" [N.E. Se omite transcripción]

En esos términos, dado que la actora interpuso el recurso de reclamación a que se refiere el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, fuera del plazo de los cinco días siguientes hábiles a la notificación del acuerdo respectivo, procede declarar que el mismo es improcedente, lo que impide entrar al estudio y resolución del mismo.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 23, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, vigente al día siguiente de su publicación, se resuelve:

I.- Resultó improcedente el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia interlocutoria de 20 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Regional del Noroeste II de este Tribunal.

II.- Remítase copia certificada de este fallo a la referida Sala Regional, una vez que haya quedado firme la presente resolución y, en su oportunidad, archívese la carpeta de reclamación.

III. - Notifíquese.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión efectuada el **veinte de agosto de dos mil nueve**, por mayoría de 3 votos de los CC. Magistrados Nora Elizabeth Urby Genel,

Manuel L. Hallivis Pelayo y Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez; y 2 votos en contra de los Magistrados CC. Alejandro Sánchez Hernández y Jorge Alberto García Cáceres, quien se reservó su derecho para formular voto particular.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Manuel L. Hallivis Pelayo, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el **veinticinco de agosto de dos mil nueve**, con fundamento en lo previsto por los artículos 26 y 27 fracción III y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Firma la Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, Presidenta de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Lic. Sonia Sánchez Flores, Secretaria Adjunta de Acuerdos quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN NÚM. 1473/08-02-01-8/873/09-S1-03-05

El Magistrado Jorge Alberto García Cáceres se reservó su derecho para formular voto particular en el presente asunto, el cual se expresa en los siguientes términos:

VOTO PARTICULAR

Para mejor comprensión del motivo de mi desacuerdo expreso lo siguiente:

En el considerando segundo del fallo mayoritario se precisa que, del estudio de las constancias de autos se advierte que es improcedente el recurso de reclamación interpuesto por la actora, ya que si bien dicho recurso fue interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 20 de noviembre de 2008, dictada por los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Noroeste II, en la que se negó la

suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado solicitado por el actor, también lo es que su interposición se realizó fuera del plazo de cinco días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación de la sentencia recurrida, previsto en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En ese sentido, el fallo mayoritario señala que en la carpeta de reclamación consta el oficio No. 2-1-2-38891/08 de 03 de diciembre de 2008, en el que se ordenó la notificación a la empresa actora de dos acuerdos de 14 y 20 de noviembre de 2008 y de la sentencia recurrida de 20 del mismo mes y año.

Asimismo, la mayoría advierte que en los autos del juicio, obra copia certificada del acuse de recibo MN107261697MX, depositado en día 03 de septiembre de 2008 ante la Administración de Correos, relativa al citado oficio 2-1-2-38891/08, sin que en ese documento aparezca ningún dato en la firma del destinatario, es decir, **que no hay fecha ni firma de la persona que lo recibió**.

Se relata que ante tal omisión, la Presidenta de la Primera Sección ordenó girar oficio al Servicio Postal Mexicano para que en el término de tres días informara sobre la fecha en que fue recibida por el destinatario la mencionada pieza postal MN107261697MX, por lo que mediante oficio No. 151209 de 22 de junio de 2009, el Gerente de Atención a Clientes del Servicio Postal Mexicano, informó a esta Primera Sección, que la Oficina Postal del destino les indicó que la pieza postal MN107261697MX fue entregada al destinatario el 05 de diciembre de 2008.

En ese sentido, el fallo motivo de desacuerdo considera que si la notificación de la sentencia recurrida se realizó mediante pieza postal MN107261697MX, el día viernes **05 de diciembre de 2008**, **surtiendo efectos el día 08 de diciembre del año en cita**; el término de cinco días para la interposición del recurso corrió del día martes **09 del mismo mes y año al lunes 05 de enero de 2009** (páginas 5 y 6), luego entonces, si el recurso de reclamación se presentó ante la Oficialía de Partes para la Sala Regional del Noroeste II, el día **09 de enero de 2009, su presentación fue extemporánea**.

No obstante, considero que si en el caso no existe fecha ni firma asentada por parte de la persona que recibió la pieza postal, relativa al acuse de recibo MN10726169MX, depositado el 03 de diciembre de 2008, relativo a la notificación de la sentencia recurrida de 20 de noviembre de 2008, el informe del Servicio Postal no puede servir para subsanar esa ilegalidad manifiesta, de tal forma **que si no existe acuse de recibo firmado por el actor o su representante legal, no puede tenerse por extemporáneo el recurso**.

Ello lo considero así, toda vez que el mismo fallo advierte que en los autos del juicio obra copia certificada del acuse de recibo MN107261697MX, depositado en día 03 de septiembre de 2008 ante la Administración de Correos, relativa al citado oficio 2-1-2-38891/08 por cual se ordenó notificar la sentencia interlocutoria hoy recurrida, sin que en ese documento aparezca ningún dato en la firma del destinatario, **es decir no hay fecha ni firma de la persona que lo recibió**, siendo que de conformidad con lo supuesto en el artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, el servicio de acuse de recibo de envíos o de correspondencia registrados, consiste en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario o de su representante legal y en entregar ese documento al remitente, como constancia, el precepto legal en cuestión se transcribe a continuación, el cual es del siguiente tenor:

Ley del Servicio Postal Mexicano

CAPÍTULO XIII

"**Acuse de recibo de piezas registradas y con derechos por cobrar**

"**ARTÍCULO 42.-** El servicio de acuse de recibo de envíos o de correspondencia registrados, consiste en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario o de su representante legal y en entregar ese documento al remitente, como constancia.
"(...)"

En ese sentido, de conformidad con el artículo 42 ya transcrito, se deben cumplir con los siguientes requisitos a efecto de que las notificaciones de los actos administrativos notificados por correo certificado sean legales: 1.- Ser entregados a los destinatarios y 2.- Que se recabe su firma, por lo que si del acuse de recibo no se advierte la firma del destinatario, dicha notificación es ilegal toda vez que no cumple con dichos requisitos, esto es, que fuera entregado al destinatario y que el caso concreto se haya recabado la firma de éste.

En otras palabras, para que las notificaciones hechas por correo certificado con acuse de recibo, tengan eficacia jurídica, es necesario que se ajusten a lo establecido en los artículos 27, 42, 59, fracción I y 61, fracción I, de la Ley del Servicio Postal Mexicano, es decir, que la correspondencia registrada sea entregada únicamente al destinatario, o a su representante legal, y en su domicilio, así como que recibida por cualquiera de esas dos personas **sea recabada en un documento especial la firma de recepción**, que se entregará a su vez al remitente como constancia.

Apoya lo anterior la siguiente jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, cuyo rubro, contenido y datos de identificación son los siguientes:

"No. Registro: 177,244
"Jurisprudencia
"Materia(s): Administrativa
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXII, Septiembre de 2005
"Tesis: VI.3o.A. J/48
"Página: 1316

"**NOTIFICACIONES POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO EN EL JUICIO FISCAL. REQUISITOS QUE DEBEN**

COLMAR PARA QUE GOCEN DE EFICACIA LEGAL.- Para que las notificaciones, que en términos del artículo 134, fracción I, del Código Fiscal de la Federación sean hechas por correo certificado con acuse de recibo, tengan eficacia jurídica, es necesario que se ajusten a lo establecido en los artículos 27, 42, 59, fracción I y 61, fracción I, de la Ley del Servicio Postal Mexicano, es decir, que la correspondencia registrada sea entregada únicamente al destinatario, o a su representante legal, y en su domicilio, así como que recibida por cualquiera de esas dos personas sea recabada en un documento especial la firma de recepción, que se entregará a su vez al remitente como constancia. De igual modo, habrán de asentarse los datos mínimos en el acuse que permitan conocer el acto administrativo que se notifica al contribuyente, verbigracia, el número de control del oficio o de la resolución notificada, o bien, el que corresponde al crédito fiscal, ya que ese aspecto, por sentido común, deviene de obligada trascendencia para la certeza jurídica del particular, esto es, ya que sólo de esa manera puede garantizarse, de la mejor forma posible, que la pieza postal sea del conocimiento del destinatario y que existan medios para autentificar la legalidad de ese acto procesal. Entonces, debe tomarse en cuenta, dado el específico tratamiento de esta forma de comunicación, que es ineludible la debida identificación del acto administrativo que se notifica, pues en tratándose del correo certificado no hay obligación de razonar otros hechos, como pudiera ser el previo citatorio o el acta circunstanciada; de ahí que al menos deben anotarse los datos que permitan saber a ciencia cierta de qué se trata el acto que se le participa al particular; aceptar una conclusión contraria significaría que se aportara cualquier acuse de recibo por correo certificado en el que no estuviera identificado el acto administrativo que se notifica para sostener la legalidad de esta última actuación, lo que dejaría en un estado de indefensión e incertidumbre al contribuyente y propiciaría que la autoridad actuara con arbitrariedad, al quedar a su voluntad el decidir unilateralmente cuál fue el documento notificado.

“TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.”

Asimismo resulta aplicable la siguiente tesis emitida por este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo rubro y contenido es el siguiente:

"**V-TASR-XIII-2208**

"**NOTIFICACIONES POR CORREO CERTIFICADO. LAS RECIBIDAS POR EL ACTOR, SON LEGALES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO.-** El artículo 134, fracción I del Código Fiscal de la Federación, determina que : '(...) Las notificaciones de los actos administrativos se harán: Personalmente o por correo certificado o electrónico, con acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos (...)' lo que implica que las notificaciones pueden ser, entre otras, por correo certificado con acuse de recibo, sin sujetarse a lo previsto por el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, sino a la Ley del Servicio Postal Mexicano, en específico el artículo 42 mismo que señala que: '(...) El servicio de acuse de recibo de envíos o de correspondencia registrados, consiste en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario o de su representante legal y en entregar ese documento al remitente, como constancia. En caso de que, por causas ajenas al organismo no pueda recabarse la firma del documento, se procederá conforme a las disposiciones reglamentarias (...)', lo que implica que de conformidad con el artículo 42 ya transcrito, se deben cumplir con los siguientes requisitos a efecto de que las notificaciones de los actos administrativos notificados por correo certificado sean legales: 1.- Ser entregados a los destinatarios y 2.- Que se recabe su firma, por lo que si del acuse de recibo se advierte la firma del destinatario, dicha notificación es legal toda vez que cumple con dichos requisitos, esto es, que fueron entregados al destinatario y que se recabó la firma del destinatario, por lo que la notificación efectuada en dichos términos es legal. (105)

"Juicio No. 4872/05-12-01-5.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de marzo de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Francisco Xavier Melo y Melo.- Secretaria: Lic. Gloria Balvanera Franco.

"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 69. Septiembre 2006. p. 202"

Es importante señalar que es la propia mayoría quien en la hoja 5 segundo párrafo de su fallo, resalta que el acuse de recibo correspondiente a la sentencia recurrida, no contiene la fecha ni firma de recibido por el interesado, de tal modo que se trata de una ilegalidad manifiesta, que una vez advertida, no puede conducir a declarar extemporáneo el recurso de reclamación con base en el informe de un tercero como lo es el Gerente de Atención a Clientes del Servicio Postal Mexicano, pues la actuación del Servicio Postal Mexicano está normada en los términos anteriormente expuestos, ello para el beneficio y seguridad de todos lo usuarios del correo.

Y si bien la oportunidad del mismo es de orden publicó, solamente puede considerarse improcedente una promoción por extemporánea, cuando se cuente con los elementos ciertos, que permitan al Juzgador concluir que el interesado estuvo en aptitud de interponer el medio de defensa en tiempo y que no lo hizo, pero en la especie, no se conoce qué persona y con qué carácter habría recibido la pieza postal que contenía la sentencia que pretendió reclamar por la actora.

Ante este hecho, en lugar de pedir un informe al Servicio Postal Mexicano, se debió reexpedir la notificación de la sentencia recurrida al actor o bien, tener al demandante por conocedor de dicha sentencia interlocutoria, en la fecha de presentación de su recurso de reclamación, pero no declararlo improcedente por extemporáneo.

MAG. JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TA-1aS-24

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL. PARA DETERMINAR LA SALA REGIONAL CORRESPONDIENTE DEBE ATENDERSE AL DOMICILIO FISCAL DEL DEMANDANTE AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- El artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece como regla general para determinar la competencia por territorio de las Salas Regionales de este Tribunal, que deberá atenderse al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, por lo que, con la norma legal aludida, es dable concluir que el domicilio para determinar la Sala Regional competente por territorio para conocer del juicio contencioso administrativo, es el domicilio fiscal que tuvo el accionante al momento de la presentación de la demanda, sin que sea válido estimar fundado un incidente de incompetencia territorial, apoyado en que durante la substanciación del juicio la parte actora cambie su domicilio fiscal, pues de aceptarse este criterio, durante la tramitación del juicio se podrían presentar incidentes de incompetencia tantas veces como el enjuiciante cambiara de domicilio.

Incidente de Incompetencia Núm. 850/09-12-03-7/1302/09-S1-04-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de septiembre de 2009, por mayoría de 3 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretaria: Lic. Rossina Montandon Spinoso.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de septiembre de 2009)

SEGUNDA SECCIÓN

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TA-2aS-21

FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO, EN LIQUIDACIÓN. EN SU CARÁCTER DE ORGANISMO DESCENTRALIZADO Y DE ENTIDAD PARAESTATAL QUE COMPONE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, NO TIENE QUE OTORGAR GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN.- El artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que, las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías exigidas a las partes. En el caso, Ferrocarriles Nacionales de México -en liquidación- es un organismo público descentralizado, por así disponerse en el artículo 1o. de la Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México, no siendo óbice que, a través del decreto del Congreso de la Unión publicado el 4 de junio de 2001, se determinó a partir del 05 de junio de 2001 la extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, disponiendo que conservaría su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación artículo 1°, así como la abrogación de la Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México, publicada el 14 de enero de 1985 artículo 5º, pues es el caso que, el artículo cuarto transitorio de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, publicada el 12 de mayo de 1995 determinó que, Ferrocarriles Nacionales de México, organismo público descentralizado, continuará administrando y operando los ferrocarriles mexicanos al amparo de su

Ley Orgánica, hasta en tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgue concesiones y permisos a terceras personas respecto de las vías férreas, el servicio público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares que actualmente opera dicho organismo. Por otra parte, el 10 de agosto de 2007 se publicó la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, en las que se establece que Ferrocarriles Nacionales de México, -en proceso de desincorporación- es una entidad de la Administración Pública Federal Paraestatal. Por lo anterior, Ferrocarriles Nacionales de México -en liquidación- se ubica en el supuesto previsto en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, al ser un organismo público descentralizado que compone la Administración Pública Paraestatal, por tanto, no puede ser objeto de mandamiento de ejecución o de embargo alguno, siendo procedente concederle la suspensión de la ejecución impugnada sin el otorgamiento de la garantía del interés fiscal.

Recurso de Reclamación Núm. 37/08-07-02-9/1351/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de agosto de 2009, por mayoría de 3 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de octubre de 2009)

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TA-2aS-22

INSTITUCIONES DE FIANZAS. DEBEN CONSIDERARSE DE ACREDITADA SOLVENCIA POR LAS FIANZAS QUE OTORGAN.- POR ELLO DEBE CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE PAGO POR EL CUAL SE PRETENDE HACER EXIGIBLE LA FIANZA.- El artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución contra actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Por su parte, el artículo 12 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece con nitidez que las instituciones de fianzas por las fianzas que otorguen, se considerarán de acreditada solvencia y que en los casos diversos a ese otorgamiento de fianzas, mientras las instituciones de fianzas, no sean puestas en liquidación o declaradas en quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligadas, a constituir depósitos o fianzas legales, hecha excepción de las responsabilidades que puedan derivarles de juicios laborales, de amparo o por créditos fiscales. En ese orden de ideas, si en un caso una afianzadora actora en un juicio contencioso administrativo solicita la suspensión provisional y la definitiva a fin de que no se ejecute el requerimiento de pago de una cantidad en relación con una póliza de fianza expedida por la propia actora para garantizar diversos créditos fiscales determinados por la autoridad a cargo del fiado, debe concederse la suspensión en los términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Recurso de Reclamación Núm. 3281/09-11-03-9/2044/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

nistrativa, en sesión de 1º de octubre de 2009, por mayoría de 3 votos a favor, un voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 1 de octubre de 2009)

SALAS REGIONALES

SEGUNDA SALA REGIONAL METROPOLITANA

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VI-TASR-II-17

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN I, INCISO B), NUMERAL 1 DE LA LEY DE LA MATERIA, RELATIVO A LA ENAJENACIÓN DE ALIMENTOS.- De conformidad con el dispositivo citado en relación con la Jurisprudencia 34/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN I, INCISO B), NUMERAL 1 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO AL GRAVAR CON LA TASA DEL 0% LA ENAJENACIÓN DE ALIMENTOS EN ESTADO SÓLIDO O SEMISÓLIDO Y CON LA DEL 10% O 15% A LOS ALIMENTOS EN ESTADO LÍQUIDO, VIOLA EN PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1996)", todos los alimentos están gravados con la tasa del 0% y para determinar si las bebidas no alcohólicas, adicionadas con vitaminas y/o sales minerales son alimentos, el artículo 215, fracciones I y II de la Ley General de Salud, que no rige en materia fiscal directa ni supletoriamente, resulta insuficiente por incompleto para resolver la litis al señalar que es alimento cualquier sustancia sólida, semisólida o líquida que proporcione al organismo elementos para su nutrición, pues dicho dispositivo no dice de qué naturaleza son esos elementos, ni cuáles son, ni en qué consisten y tampoco indica los porcentajes mínimos que deben contener de los mismos, si deben contenerlos todos o sólo algunos o alguno de ellos y en atención a lo anterior debe precisarse que no todo producto que proporciona vitaminas y/o sales minerales al organismo es ali-

mento, pues por tal deben entenderse las sustancias sólidas, semisólidas o líquidas de origen animal o vegetal, que sirven para nutrir al organismo proporcionándole proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y sales minerales necesarias para su desarrollo, funcionamiento y mantener su existencia, es decir, para reparar las pérdidas que padece a consecuencia de su actividad fisiológica, mismos que se agrupan en lípidos o grasas, glúcidos o hidratos de carbono y prótidos o alimentos nitrogenados, contenidos en mantequilla, aceites, dulces, carnes blancas y rojas, pescados y mariscos, huevos, leche y sus derivados, verduras, frutas, hortalizas y cereales. El agua adicionada con vitaminas y/o sales minerales no es alimento, como tampoco lo son la sal de mesa (cloruro de sodio), o las tabletas de vitaminas, sino en el mejor de los casos, se trata de un complemento o suplemento alimenticio que sirve para hidratar el cuerpo y equilibrar su calor, pero no basta para nutrirlo o mantener su existencia por lo que no puede aplicarse a los mismos la tasa del 0% del Impuesto al Valor Agregado prevista para alimentos, y para agua potable no compuesta, ni gasificada.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 27715/07-17-02-3.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 14 de septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. Leopoldo Ramírez Olivares.

GENERAL

VI-TASR-II-18

NORMAS HETEROAPLICATIVAS.- PRIMER ACTO DE APLICACIÓN.- La Norma Oficial Mexicana es un acto administrativo, que puede controvertirse cuando se exige su cumplimiento a través de un diverso acto administrativo de aplicación, debiéndose entender con esto que se trata de decisiones emitidas por órganos de la Administración Pública Federal en ejercicio de sus facultades, por los que crean situaciones jurídicas individuales o colectivas, imponiendo obligaciones, modificando, transmitiendo o extinguiendo las existentes o afectando o limitando derechos de

particulares, dicho acto puede ser simple o declarativo de efectos inmediatos, por ejemplo la designación de un funcionario, o, complejo, de tracto sucesivo o ejecutivo, cuyo cumplimiento puede exigirse en forma coactiva, por ejemplo el ejercicio de las facultades de comprobación o de verificación, del cumplimiento de dicha norma, en este caso, dicho ejercicio constituye un acto complejo constituido por un procedimiento que se inicia con la notificación de la orden de verificación y culmina con una resolución que es la que en su caso, le causa perjuicio al particular y no la visita de verificación, sin que obste para ello que la orden y la visita de verificación hayan sido lo primero que conoció el particular, pues tales actos no tienen el carácter de resolución definitiva, por lo que el particular tiene que esperar la conclusión del procedimiento administrativo el que culmina con la emisión de la resolución, para estar en condiciones de controvertir tanto esta resolución como los actos anteriores, máxime que es la resolución la que le causa perjuicios y no la Norma Oficial considerada en abstracto.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 31731/08-17-02-3.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 17 de septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos Mena Adame. Secretario: Lic. Leopoldo Ramírez Olivares.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-II-19

NOTIFICACIÓN PERSONAL.- ES ILEGAL SI LAS CONSTANCIAS RELATIVAS SON ILEGIBLES.- Si bien es cierto que en términos generales las notificaciones personales efectuadas por las autoridades administrativas son legales sí cumplen con los requisitos previstos por los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, también lo es que dicha regla admite una excepción cuando tanto el citatorio como la cédula correspondientes contienen fechas estampadas en forma manuscrita por el notificador, con números arábigos encimados y por

lo mismo ilegibles, y por tanto ilegales, pues ello contraviene lo dispuesto por los artículos 271 y 272 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, que establecen que las fechas y cantidades se escribirán con letra y que las frases equivocadas no se rasparán y sobre ellas sólo se pondrá una línea delgada, salvándose al fin, con toda precisión el error cometido y, el no hacerlo así torna ininteligibles o equívocas tales constancias y por lo tanto, contrarias a los principios de seguridad y certeza jurídicas, al no poderse determinar de manera indubitada las fechas ciertas tanto del citatorio como de la cédula, por lo que la notificación resulta ilegal.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 22665/08-17-02-3.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. Leopoldo Ramírez Olivares.

SEXTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

VI-TASR-VI-2

ACTIVO.- EL IMPUESTO RESPECTIVO DEBE TENER UN SUJETO DE CAUSACIÓN CUANDO HAYA REALIZACIÓN COMPROBADA DE LA ACTIVIDAD GRAVADA AUNQUE ÉSTA SE EFECTÚE A TRAVÉS DE DIVERSOS SUJETOS.- Los artículos 7 Bis de la Ley del Impuesto al Activo y 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señalan que se debe pagar el impuesto al activo, cuando a través de un fideicomiso se realice una actividad empresarial. Ahora bien, cuando a través de un fideicomiso traslativo de dominio y de garantía de un inmueble, la fiduciaria funge únicamente como titular de la propiedad derivada y la fideicomisaria, que también participó en la creación del fideicomiso, es a la que se le permite el uso, disfrute y explotación de los bienes fideicomitidos, los cuales destina a una actividad empresarial, debe concluirse necesariamente que sí existe causación del impuesto al producirse la actividad gravada por estar destinado el inmueble a la explotación de un hotel comercial; sin que pueda aducirse que no existe sujeto del impuesto ya que quien realiza la actividad empresarial, la fideicomisaria, no es la propietaria de los activos, sino la fiduciaria que no la realiza. En consecuencia, la fideicomisaria, no puede exonerarse del pago del tributo, manifestando que a través del fideicomiso no se realizan actividades empresariales y que ella no es la propietaria del inmueble sino la fiduciaria, porque es evidente que sí obtiene un beneficio económico con el uso, aprovechamiento y explotación turística de los bienes fideicomitidos. Estimar lo contrario, llevaría a concluir que no hay sujeto causante del hecho imponible de la norma fiscal, lo cual es jurídicamente inadmisible, desde el momento en que se acredita la realización de actividades gravadas.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30376/07-17-06-9.- Resuelto por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de octubre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara.- Secretaria: Lic. Griselda Velasco López.

LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

VI-TASR-VI-3

ACTIVO.- INTERPRETACIÓN CORRECTA DEL ARTÍCULO 2º, PRIMER PÁRRAFO, DE SU LEY.- El hecho de que el primer párrafo del artículo 2, de la Ley del Impuesto al Activo, disponga que el contribuyente determinará el impuesto por ejercicios fiscales aplicando al valor de su activo en el ejercicio, la tasa correspondiente, no implica que deba entenderse que la frase "*su activo*" que utiliza el texto del citado precepto, se refiera de manera exclusiva a la propiedad plena de los activos, pues literalmente ese pronombre "*su*" lo que indica gramaticalmente hablando es la posesión aparente de algún bien, no necesariamente de su propiedad; por lo que la interpretación literal, no es suficiente para sostener que solo al propietario pleno del inmueble le podrá ser imputable el hecho imponible, ya que, conforme a la gramática española el sólo empleo de ese pronombre no prejuzga sobre la propiedad jurídica. Luego entonces, aunque el particular no goce de la propiedad plena de determinados bienes, debe pagar el impuesto si usa, disfruta o explota de manera exclusiva esos bienes, con un fin empresarial; lo que no se produciría si expresamente el artículo 2° de la Ley del Impuesto al Activo, estableciera de manera textual que sólo el propietario pleno de los bienes, tendrá a su cargo el pago del gravamen.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30376/07-17-06-9.- Resuelto por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de octubre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara.- Secretaria: Lic. Griselda Velasco López.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-VI-4

INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS FISCALES.- NO PUEDE SER TAL QUE CONDUZCA A UN FRAUDE A LA LEY O A UN ABUSO DEL DERECHO.- La interpretación de las normas fiscales, sancionada por el artículo 5º del Código Fiscal de la Federación, si bien prevé que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares, son de aplicación estricta, por lo cual nuestro máximo Tribunal ha señalado que se debe partir del texto de la norma para realizar su interpretación por cualquiera de los métodos de interpretación jurídica, esto no significa que se deba realizar un análisis interpretativo fragmentario, aislado y parcializado del texto de la norma. Así, de aceptar que bajo nuestra legislación pueda subsistir el fraude a la ley o el abuso del derecho, extendiéndose por "*fraude a la ley*", la realización de uno o una serie de actos lícitos que respetan el texto de la ley, pero no su sentido y por "*abuso del derecho*", la forma de ejecutar o ejercer un derecho que contraviene el espíritu o principios del Derecho*: "summun ius, summa injuria"*, se llegaría al extremo de permitir a los particulares so pretexto de interpretaciones letristas, que mediante una serie de actos jurídicos, evadan el imperio de la ley y su sentido.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30376/07-17-06-9.- Resuelto por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de octubre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara.- Secretaria: Lic. Griselda Velasco López.

DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXI-30

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR INEXISTENCIA DEL CRÉDITO IMPUGNADO.- ES INFUNDADA DICHA CAUSAL, SI A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN SE REQUIERE EL PAGO DEL CRÉDITO CONTROVERTIDO.- En principio, es trascendental establecer que cuando en el juicio contencioso administrativo se impugna un crédito en términos del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, del cual el promovente tuvo conocimiento de su existencia a través de un mandamiento, requerimiento de pago y acta de embargo, es obligación de la demandada acreditar su existencia. Ciertamente, la determinación de los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, inicialmente corresponde hacerla a los propios contribuyentes enterando su importe en las fechas que la ley establece; otra forma es, mediante la determinación que hace la autoridad al ejercer sus facultades de comprobación emitiendo la liquidación correspondiente, la que necesariamente y por mandato de ley deberá dársele a conocer al contribuyente para que se pague o garantice dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación. Ahora bien, en el caso de que el crédito impugnado sirvió de sustento para emitir el procedimiento administrativo de ejecución instaurado contra la actora, es precisamente su cobro el que motiva tal acto de autoridad, por lo cual el instituto demandado no puede aducir la inexistencia del mismo, puesto que requiere su pago a través del procedimiento de ejecución aludido; de donde se sigue que no es procedente que en la contestación a la demanda afirme su inexistencia o bien la falta de afectación al interés jurídico del promovente, ya que al realizar actos tendientes al cobro de dicho

crédito, se asume que el mismo fue determinado y notificado previamente por la autoridad y por tanto tiene la obligación de exhibirlo en juicio.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30670/08-17-10-1.- Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Roberto Bravo Pérez.- Secretaria: Lic. Graciela Monroy Santana.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

VI-TASR-XXI-31

EL CONCEPTO DE AMORTIZACIONES DE CRÉDITO AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, NO ESTÁ SUJETO A LA FIGURA DE LA CADUCIDAD PREVISTA POR EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.- A diferencia de las aportaciones, tratándose de amortizaciones su determinación no está sujeta a tal institución jurídica por que si bien de conformidad con el artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es obligación del patrón, determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, en los términos de la Ley y sus reglamento, así como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo, y además es obligación del patrón hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios, conforme a lo previsto en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal de Trabajo, que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el Instituto, así como enterar el importe de dichos descuentos en las entidades receptoras que

actúen por cuenta y orden del Instituto, en la forma y términos que establece la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y sus disposiciones reglamentarias, es facultad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, determinarlas en caso de incumplimiento según lo dispone el artículo 30 fracción I, segundo párrafo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como calcular su actualización y recargos que se generen, señalar las bases para su liquidación, fijarlos en cantidad líquida y requerir su pago; facultad que se extingue en el término de cinco años no sujeto a interrupción, contado a partir de la fecha en que el propio Instituto tenga conocimiento del hecho generador de la obligación, plazo que sólo se suspenderá cuando se interponga el recurso de inconformidad previsto en esta Ley o se entable juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sin embargo, al ser las amortizaciones cantidades descontadas a los trabajadores de su salario, por concepto de préstamo, y que deben ser retenidas y enteradas por los patrones al multicitado Instituto, por lo que al ser las amortizaciones diferentes a las aportaciones patronales, no les es aplicable la figura de la caducidad, pues el precepto que la regula establece que "...*Las facultades del Instituto para comprobar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, así como para determinar las aportaciones omitidas y sus accesorios, se extinguen en el término de cinco años...*"; por tanto, al no consignar el precepto en comento, la figura jurídica de la caducidad para determinar el importe de los descuentos omitidos, el mismo resulta inaplicable por cuanto hace a las amortizaciones omitidas.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 17956/08-17-10-8.- Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 10 de agosto de 2009, sentencia aprobada por unanimidad de votos, y tesis aprobada por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Yolanda Vergara Peralta.- Secretario: Lic. Michael Flores Rivas.

LEY DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXI-32

QUEJA Y JUICIO DE NULIDAD.- NO SE PUEDE CONSIDERAR COMO INTERPOSICIÓN CONCURRENTE CUANDO SE PROMUEVE EN UN ÚNICO ESCRITO.- Siguiendo una lógica interpretación de los precedentes III-PSS-478 y III-PSS-477 sustentados por este Tribunal cuyos rubros dicen: "*QUEJA Y JUICIO DE NULIDAD.- SU INTERPOSICIÓN CONCURRENTE*" y "*QUEJA Y JUICIO DE NULIDAD CONCURRENTES*"; se desprende que no se puede considerar como interposición concurrente de las dos vías: la queja y el juicio de nulidad, cuando en un solo escrito (de queja) se contengan ambas instancias, en virtud de que si bien es cierto que no se excluyen una de la otra, también lo es que se deben presentar dos escritos independientes que permitan la coexistencia de las dos vías, habida cuenta que dicha concurrencia, no implica que en un solo escrito se contengan ambas instancias, toda vez que cada una de ellas tiene tramitación diferente, términos diferentes, etapas también diferentes y la simultaneidad no significa necesariamente que se promueva en un único escrito.- De tal forma, resulta inconcuso que no existe posibilidad jurídica para reconocer que con la interposición únicamente del escrito de queja se trate de la promoción concurrente de las dos vías: la queja y el juicio de nulidad a petición del promovente; dado que de considerarlo así, se suprimirían las etapas y términos procesales que regula la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dentro del juicio de nulidad, violándose así los derechos litigiosos de la contraparte, ya que entre otras irregularidades, se reduciría el plazo para contestar la demanda y para ofrecer pruebas, interponer recursos o incidentes, asimismo se le impediría formular alegatos y en su caso, aportar pruebas supervenientes.

Queja Núm. 15192/03-17-10-2.- Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Yolanda Vergara Peralta.- Secretario: Lic. Ismael Vélez Saldaña.

LEY DEL ISSSTE

VI-TASR-XXI-33

PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA CARGA DE LA PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA BASE SALARIAL CONFORME AL TABULADOR REGIONAL CORRESPONDE AL ISSSTE.- Si bien es cierto que conforme a la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis número 2a./J. 100/2009 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pendiente de publicarse y cuyo rubro es: "PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA BASE SALARIAL PARA SU CÁLCULO SE INTEGRA ÚNICAMENTE POR LOS CONCEPTOS DE SUELDO, SOBRESUELDO Y COMPENSACIÓN ESTABLECIDOS EN EL TABULADOR REGIONAL (ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 126/2008)….", la base salarial para calcular el monto de la pensión por jubilación se integra únicamente por los conceptos de sueldo, sobresueldo y compensación, ya establecidos en el tabulador regional, de manera que todos aquellos conceptos no incluidos expresamente en el mismo no pueden considerarse para determinar el salario base, también lo es que bajo estas circunstancias, corresponde al Instituto demandado la carga de la prueba, en términos de lo dispuesto por los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme a los cuales la parte actora debe acreditar los extremos de su acción, y la parte demandada los extremos de sus defensas. En ese sentido, si la parte actora señala que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no demuestra con documental idónea que al fijársele su cuota diaria, se hubiesen aplicado los "Tabuladores Regionales" de sueldos para la región específica, obvio es que a la autoridad demandada le correspondía la carga de la prueba de demostrar en juicio cuáles fueron aquellos conceptos que la integraron y por exclusión se pudiera observar que los aludidos por el actor no se consideraron en la determinación de su pensión al no estar incluidos expresamente en el tabulador regional relativo que se le aplicó y por ende no se tomaron en cuenta para determinar el salario base respectivo, máxime que el Instituto demandado es el único que se

encuentra en aptitud de traer a juicio los elementos con los que integró el tabulador de mérito ya que conforme a lo establecido en el artículo 17 de la ley de la materia es a éste a quien le corresponde la aplicación del mismo para efectos de la determinación de la pensión materia de la resolución combatida, ya que de considerar lo contrario se dejaría en estado de indefensión al enjuiciante al obligarlo a demostrar algo respecto a lo cual no se encuentra en aptitud de probar en el juicio por no tenerlos a su alcance.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1322/09-17-10-2.- Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Yolanda Vergara Peralta.- Secretario: Lic. Ricardo Juárez Martínez.

LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXI-34

EL INCUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, NO OCASIONA LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, AL TRATARSE DE UNA NORMA DE LAS QUE LA DOCTRINA DENOMINA IMPERFECTA.- Si bien el artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece que toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días, a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique; lo cierto es que si la autoridad excede el plazo referido, ello no ocasiona la ilegalidad del acto administrativo, ya que tal disposición resulta ser de aquellas de las que doctrinalmente se les denomina normas imperfectas, por lo que hace a los efectos que pueda producir, al no establecer sanción alguna en caso de incumplimiento por parte de la autoridad administrativa, mucho menos que tal omisión traiga consigo la nulidad del acto que al efecto se dicte fuera del plazo en comento; por lo que al no establecerse en el dispositivo de referencia que de no notificarse el acto dentro del plazo máximo de diez

días contado a partir de la emisión de la resolución, se generaría su nulidad, la circunstancia de que se hubiera notificado fuera del plazo establecido por el numeral referido, no encuadra en alguna de las causales de ilegalidad que prevé el artículo 51, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En este orden de ideas, se estima que la notificación realizada fuera del término legalmente establecido, en estos casos, trae como consecuencia la posibilidad de ser convalidada de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es decir, que la irregularidad de la notificación no trae aparejada la anulación del acto materia de esa diligencia.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 114/08-17-10-8.- Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1º de octubre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Yolanda Vergara Peralta.- Secretario: Lic. Michael Flores Rivas.

LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXI-35

CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA QUE OPERE NO SE PRORROGA CON LA EMISIÓN DE UN SEGUNDO ACUERDO DE ALEGATOS.- La figura de la caducidad establecida en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, opera en los procedimientos iniciados de oficio o bien a solicitud de la parte interesada, en el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del diverso plazo para dictar resolución y tiene la finalidad de establecer un término perentorio a la autoridad para emitir su determinación a fin de evitar la incertidumbre jurídica que pudiera surgir por el transcurso del tiempo en agravio de los administrados. Ahora bien, si en el procedimiento administrativo se emiten en fechas diferentes dos acuerdos en los cuales se tienen por rendidos los alegatos, el dictado por segunda ocasión proveyendo sobre el mismo escrito, debe desestimarse

ya que lo que se pretende con este último auto es reactivar un procedimiento cuando ya había operado la caducidad, pues de darle eficacia las consecuencias implicarían hacer nugatoria la figura jurídica citada permitiendo así que con sólo dictar proveídos en los que se tengan por presentados una y otra vez los alegatos de la actora en cualquier tiempo al arbitrio de la autoridad y así nunca operaría la institución procesal de referencia.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 23921/08-17-10-5.- Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 16 de octubre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Yolanda Vergara Peralta.- Secretario: Lic. Daniel de Ávila Heredia.

TERCERA SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO II

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXVII-79

ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS, OBLIGACIÓN DE CITAR EL ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 48, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, CUANDO ÉSTOS SON REQUERIDOS AL CONTRIBUYENTE.- El primer párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2008, señala que cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, estarán sujetos a las disposiciones que ahí se enumeran, precisándose además, en el último párrafo de tal artículo, que para los efectos de lo anterior, se considerará como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente. De ello se advierte que resulta insuficiente que la autoridad al emitir una Solicitud de Información y Documentación, en la que requiera los estados de cuenta bancarios del contribuyente, únicamente señale como parte de su fundamentación el artículo 48, primer párrafo, fracciones I, II y III del Código Fiscal de la Federación, entre otros, ya que omite citar el párrafo en el cual se establezca la posibilidad de que la autoridad fiscal pueda solicitar los estados de cuenta bancarios del contribuyente revisado como parte de la información y documentación a revisar, máxime que existe un párrafo específico que establece tal condición en relación con el primer párrafo, del referido artículo 48, del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior es así, ya que incluso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 85/2008, resolvió que el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 05 de enero de 2004, no faculta a las autoridades fiscales para requerir documentación o

información relativa a las cuentas bancarias del contribuyente; por lo tanto, si actualmente el Código referido, en el último párrafo, del artículo 48, a partir de dicha reforma, ya contempla expresamente dicha facultad en tal párrafo, y la autoridad expresamente en la Solicitud de Información y Documentación que se efectúe al contribuyente requiere ese tipo de información en específico, es que se actualice la obligación legal a cargo de la autoridad de señalar en el acto de molestia, ese último párrafo, del precepto legal referido para tener por colmado el requisito de fundamentación a que alude el artículo 16 Constitucional y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 529/09-05-03-5.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Rocha Rivera.- Secretaria: Lic. Karla Verónica Zúñiga Mijares.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXXVII-80

ALEGATOS. DEBEN CONSIDERARSE INOPORTUNOS LOS ARGUMENTOS CONTENIDOS EN ELLOS TENDIENTES A COMBATIR LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DADOS A CONOCER CON LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.- Si bien es cierto que el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que “los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia”, lo cierto también es que dichos alegatos tienen la finalidad de recapitular en forma sintética las razones jurídicas, legales y doctrinarias que surgen de la contestación de la demanda y de las pruebas rendidas en el juicio, por lo que la Sala del conocimiento está eximida de considerarlos al emitir su fallo, cuando a través de los mismos se señalen argumentos novedosos que no se hicieron valer en la etapa procesal corres-

pondiente, en este caso, en el escrito de ampliación de demanda, por lo que si el actor a través del contenido de su escrito de alegatos pretende combatir la legalidad de los actos y resoluciones dados a conocer al correrle traslado de la contestación de demanda, pasando por alto que cualquier concepto de impugnación en contra de dichos actos, conforme el artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debió de hacerlos valer mediante escrito de ampliación de demanda, consecuentemente es válido que se declaren inoportunos e improcedentes los argumentos contenidos en dicho escrito de alegatos.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6357/08-05-03-3.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Adolfo Rosales Puga.- Secretario: Lic. Carlos Javier García González.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-TASR-XXXVII-81

DECRETO POR EL QUE SE EXIME PARCIALMENTE DEL PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES A QUE SE REFIERE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA CUATRO DE MARZO DE DOS MIL OCHO.- PARA SU APLICACIÓN, ES INNECESARIO SOLICITARLO PREVIAMENTE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- Es infundada la refutación del Instituto Mexicano del Seguro Social al contestar la demanda, en el sentido de que era necesario le solicitara previamente la gobernada la aplicación de tal decreto, que contiene un descuento del cinco por ciento de la cuotas a los patrones, dado que sólo, tenía que acreditar en el juicio como excepción al concepto de anulación de la contraparte, era que la actora no cumplía con lo establecido por el artículo segundo del decreto invocado, esto es, que no estaba registrada ante el Instituto, que era una entidad pública cuyas relaciones laborales se regían por el apartado A del artículo

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o que formaba parte de la administración pública de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios; que no tenía inscritos a todos sus trabajadores ante el Instituto, en los términos de la Ley del Seguro Social, o bien, que tenía a su cargo créditos fiscales firmes a favor del Instituto.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6010/08-05-03-2.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Rocha Rivera.- Secretario: Lic. Mario Rodríguez Junco.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXVII-82

PAGO ESPONTÁNEO. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES DEL CRÉDITO REQUERIDO DE PAGO.- El artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, dispone que las notificaciones surtirán efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas, refiriéndose esto a la notificación de cualquier acto administrativo y no sólo las resoluciones que resulten controvertibles o que busquen un cumplimiento de requerimiento. En tal sentido, si el pago de las obligaciones requeridas fue efectuado por la accionante el mismo día en que se practicó la notificación del tal crédito, según se acredite con el comprobante de pago respectivo, es que se advierte que el mismo fue realizado de forma espontánea, ya que no obstante que la notificación de la resolución impugnada haya sido llevada a cabo en la misma fecha, el legal conocimiento del acto administrativo, conforme al transcrito artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, nace por ministerio de ley justamente cuando surte sus efectos de notificación el acto que haya sido diligenciado, siendo este momento, al día hábil siguiente al en que fueron practicadas; por lo tanto, si el pago se efectuó un día anterior de la fecha en que surtió

efectos la notificación de la resolución impugnada, es que deba concluirse espontáneo el cumplimiento realizado por la actora respecto de las citadas obligaciones.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1670/09-05-03-5.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 18 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Rocha Rivera.- Secretaria: Lic. Karla Verónica Zúñiga Mijares.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXVII-83

REVISIÓN SECUENCIAL DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PREVISTO POR EL ARTÍCULO 52-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EXCEPCIONES A LA OBSERVANCIA DEL ORDEN ESTABLECIDO.- El artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, señala que cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación revisen el dictamen de estados financieros y demás información, deberán estarse a los lineamientos secuenciales ahí previstos; sin embargo, en su penúltimo párrafo establece excepciones a la observancia del orden establecido, y que son, cuando en el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salvedades que tengan implicaciones fiscales, tampoco se seguirá el mencionado orden en el caso de que se determinen diferencias de impuestos a pagar y éstos no se enteren de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 32-A de este Código; de ahí que la autoridad no esté obligada a respetar el procedimiento u orden secuencial establecido en dicho numeral, cuando en el oficio de solicitud de información y documentación señale que del análisis efectuado al dictamen de estados financieros para efectos fiscales se determinaron diferencias de impuestos a pagar y éstas no se enteraron de acuerdo con el artículo 32-A, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1978/09-05-03-8.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 21 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Rocha Rivera.- Secretaria: Lic. Aurora Mayela Galindo Escandón.

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN

VI-TASR-XXXVII-84

LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN, CONSTITUYE UNA POSITIVA O ACEPTACIÓN FICTA QUE NO PUEDE SER REVOCADA O MODIFICADA POR LA AUTORIDAD POR TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL PATRÓN.- De conformidad con dicho precepto legal, presentado el aviso por los patrones para la formulación del dictamen del cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y transcurrido el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al que se presente, sin que hubiere recaído notificación alguna del Instituto, se configura la positiva o aceptación ficta, es decir, se presume que tal aviso fue aceptado satisfactoriamente y podrá emitirse el dictamen sin perjuicio de los supuestos legales por los que no surte efectos el referido aviso establecido en el artículo 158 del mismo Reglamento. Por lo tanto, al tratarse de una resolución favorable y vincular a la autoridad, ésta no puede revocarla o modificarla por sí y ante sí, ya que goza del principio de presunción de legalidad, de manera que debe impugnar su validez en el juicio contencioso administrativo ante este Tribunal, conforme al artículo 36 del Código Fiscal de la Federación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6379/08-05-03-9.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Adolfo Rosales Puga.- Secretario: Lic. Carlos Javier García González.

REGLAMENTO DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA

VI-TASR-XXXVII-85

COMISARÍAS DE SECTOR DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA. NO TIENEN COMPETENCIA PARA FORMULAR OFICIOS DE LIQUIDACIÓN.- Los titulares de las comisarías de sector dependientes de la Policía Federal Preventiva, no son competentes para formular las liquidaciones por las multas administrativas que no hubieran sido pagadas en el plazo correspondiente a que se refiere el segundo párrafo del artículo 76 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en virtud a que en el artículo 29 del Reglamento de la Policía Federal Preventiva no se les concedió expresamente tal facultad, pues la emisión de las mismas le fue encargada a la Coordinación de Seguridad Regional en el artículo 16, fracción XXIX del referido Reglamento.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1800/09-05-03-9.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor Adolfo Rosales Puga.- Secretario: Lic. Carlos Javier García González.

REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

VI-TASR-XXXVII-86

SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA. PARA UNA DEBIDA MOTIVACIÓN EL JEFE DE DEPARTAMENTO DEBE OSTENTARSE ADSCRITO A LA ADUANA DE LA QUE ES TITULAR EL SUPLIDO.- Del artículo 8, quinto párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de octubre de dos mil siete, se advierte la posibilidad de que los titulares de las Aduanas sean suplidos indistintamente por los Subadministradores, Jefes de Sección, Jefes de Sala o Jefes de Departamento adscritos a las mismas, por lo que se observan tres elementos que deben conjugarse para que se actualice legalmente la suplencia por ausencia en términos del párrafo en comento, siendo estos los siguientes: 1. La ausencia del titular de la Aduana; 2. Que la suplencia sea por un Subadministrador, Jefe de Sección, Jefe de Sala o Jefe de Departamento; y 3. Que estos se encuentren adscritos a la Aduana de la que es titular el Administrador suplido. En virtud de lo anterior los Administradores de las Aduanas pueden ser suplidos, de manera indistinta, por los Subadministradores, Jefes de Sección, Jefes de Sala o Jefes de Departamento, que se encuentren adscritos a la misma, es decir, la suplencia de los citados Administradores, por los referidos funcionarios, sólo podrá realizarse en la medida en que estos últimos estén adscritos a la Aduana de la que es titular el suplido, de tal suerte que no puede ser cualquier Jefe de Departamento del Servicio de Administración Tributaria, quien puede realizar dicha suplencia, sino que quien supla deberá estar adscrito al suplido y así señalarse en la propia resolución de tal forma que no deje duda al particular de la adscripción del mismo y así, quedé debidamente justificada su actuación con fundamento en el referido precepto legal.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2311/09-05-03-3.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Adolfo Rosales Puga.- Secretario: Lic. Carlos Javier García González.

SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NORESTE

LEY ADUANERA

VI-TASR-XXIV-9

JUNTA TÉCNICA SOLICITADA POR EL PARTICULAR PARA DEMOSTRAR LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS QUE SE TOMARON EN CUENTA PARA REALIZAR LA CORRECTA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE LA MERCANCÍA SUJETA A REVISIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD ADUANERA. LO QUE ESTABLECE EL PUNTO "E" DE LA UNIDAD OCTAVA DEL MANUAL DE OPERACIÓN ADUANERA, VIGENTE A PARTIR DEL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2006, EN RELACIÓN CON LA REGLA 2.12.19 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR VIGENTES EN EL AÑO DE LOS HECHOS ES LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA TÉCNICA REFERIDA.- En el punto E, de la Unidad Octava, del Manual de Operación Aduanera, vigente a partir del 1º de septiembre de 2006, en relación con la Regla 2.12.19 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior aplicables al año en que sucedieron los hechos, se establecen las normas y/o políticas conforme a las cuales debe realizarse la Junta Técnica Consultiva de Clasificación Arancelaria, ello al contemplar que cuando con motivo del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento, la autoridad aduanera determine una clasificación arancelaria diferente a la que el apoderado o agente aduanal declaró en el pedimento, tanto el agente aduanal, como el importador o exportador, podrán solicitar ante la autoridad aduanera, dentro del plazo de 10 diez días hábiles otorgados para ofrecer pruebas y alegatos, conforme a los artículos 150, último párrafo y 152, segundo párrafo de la Ley Aduanera, la celebración de una junta técnica de clasificación arancelaria, ante lo cual, la Aduana de que se trate, al día hábil siguiente de recibir la solicitud para la celebración de dicha junta técnica, fijará el día y la hora para que se lleve a cabo, debiéndose celebrar la misma

dentro de los tres días hábiles siguientes a su solicitud (Norma Tercera); asimismo, se contempla también de las disposiciones que nos ocupan, que previamente a la celebración de la junta técnica en comento, el solicitante deberá proporcionar a la autoridad aduanera, la información técnica respectiva, consistente en: catálogos, planos, bibliografía, etc., que soporten la clasificación arancelaria de la mercancía declarada en el pedimento motivo del procedimiento, levantándose al respecto, es decir, al momento de la celebración de la multicitada junta técnica, acta circunstanciada de hechos, que será firmada por los participantes, en la cual se hará constar la entrega/recepción de la documentación señalada en la Norma Sexta, así como la fracción arancelaria que se haya determinado del estudio y valoración de los argumentos y documentación presentada por los solicitantes. Por lo tanto, si el agente aduanal, quien tramite el pedimento de importación objeto de revisión, al presentar el escrito de pruebas y alegatos, en relación con el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera llevado a cabo por la autoridad aduanera, solicita la celebración de una Junta Técnica Consultiva para demostrar los motivos y fundamentos que se tomaron en cuenta para realizar la correcta clasificación arancelaria de la mercancía embargada, y posteriormente, el mismo agente aduanal, presenta escrito en el que hace diversas manifestaciones y allega una carta del proveedor ello derivado de requerimiento formulado por la autoridad aduanera (información técnica para estar en aptitud de celebrar la probanza en mención), la Aduana correspondiente, debe proceder conforme lo previsto en la Norma Tercera del punto E, de la Unidad Octava del Manual de Operación Aduanera, vigente a partir del 1º de septiembre de 2006, en razón de que recibe, por parte del agente aduanal, solicitud para la celebración de la Junta Técnica, fijándose, al día siguiente hábil de la fecha en que se recibió la solicitud en comento, día y hora para la celebración respectiva, (tres días hábiles siguientes a la solicitud), posteriormente, con motivo de la celebración, debe levantar acta circunstanciada de hechos, en la que se haga constar la entrega/recepción de la documentación aportada por el particular, la fracción arancelaria que se haya determinado del estudio, la valoración de los documentos exhibidos y el estudio de los argumentos expuestos y no determinar la autoridad aduanera, imposibilidad para llevar a cabo el desahogo de la junta técnica solicitada, desechando la solicitud en cuestión por incumplir con los requisitos para su ofrecimiento y desahogo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 501/08-06-02-6.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de octubre de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Guillermina del Rosario Ruíz Bohórquez.- Secretaria: Lic. Claudia Sánchez Marroquín.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXIV-10

REQUERIMIENTO DE PAGO. ES ILEGAL DILIGENCIAR DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE PAGO EN FORMA SIMULTÁNEA AL CONSTITUIR ACTOS ADMINISTRATIVOS DISTINTOS.- Resulta violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la actuación del ejecutor que efectúa en forma simultánea diversos requerimientos de pago, señalando en éstos la misma hora, ello en virtud de que por sí mismos constituyen actos administrativos distintos al intentar requerir de pago al contribuyente de diversos créditos fiscales, máxime que resulta materialmente imposible la práctica simultánea o paralela de cada uno de los requerimientos de pago combatidos, al tratarse obviamente de créditos fiscales distintos por cantidades diferentes y más aún, por conceptos totalmente diversos, lo que significa una contravención al procedimiento respectivo. En consecuencia, resulta obvio que el procedimiento administrativo de ejecución impugnado es ilegal, ya que para hacer efectivo cada uno de los créditos fiscales exigibles, el ejecutor debió constituirse en el domicilio de la deudora, identificarse plenamente, y luego requerir el pago de cada uno de los créditos fiscales, para así levantar el acta circunstanciada correspondiente, tomando en consideración que existe la posibilidad de que la deudora efectuara el pago de alguno de tales créditos fiscales, de ahí que resulte fundado el argumento hecho valer por el actor y suficiente para declarar la nulidad de los actos controvertidos, ya que la ilegal actuación del ejecutor resulta ser un vicio de procedimiento que afecta la defensa jurídica de la enjuiciante, actualizándose así la hipótesis contenida en la fracción III del numeral 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin

que con ello se impida o se obligue a la autoridad demandada para que en el caso que lo estime necesario y se encuentre en tiempo, lleve a cabo un nuevo procedimiento administrativo de ejecución debidamente diligenciado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5410/07-06-02-9.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27 de enero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Guillermina del Rosario Ruíz Bohórquez.- Secretaria: Lic. Neyda Azucena Grijalva Rodríguez.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

VI-TASR-XXIV-11

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEBE CELEBRARSE, POR LO MENOS, CUATRO DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN AL PROVEEDOR. FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO.- El artículo 111 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que la Procuraduría deberá señalar día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación en la que se procurará avenir los intereses de las partes, la cual deberá tener lugar, por lo menos, cuatro días después de la fecha de notificación de la reclamación al proveedor, entendiéndose que los días a que se alude en el referido numeral 111, deben ser considerados como "naturales", ello de conformidad con el diverso numeral 108 de la Ley en comento, que dice: "…A falta de mención expresa, los plazos establecidos en días en esta Ley, se entenderán naturales. En caso de que el día en que concluya el plazo sea inhábil se entenderá que concluye el día hábil inmediato siguiente…". Luego entonces, para la celebración de una audiencia de conciliación ésta deberá tener lugar por lo menos cuatro días después de la fecha de notificación de la reclamación al proveedor, lo que infiere también, que la autoridad debe de llevar a cabo la citada audiencia respetando dicho plazo, por lo que, si se efectúa una notificación, que surte efectos el mismo día en que se realiza, ello bajo los términos del artículo 38 la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de manera supletoria

que señala: "…Las notificaciones personales surtirán efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezaran a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación. …", entonces, el plazo de cuatro días que establece el diverso numeral 111 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, empieza a correr a partir del día siguiente y si el día en que concluye el plazo es inhábil, se entiende que concluyó el día hábil inmediato siguiente, por lo que la audiencia de conciliación practicada en este último día, resulta ilegal, en razón de que la autoridad no respetaría lo establecido en el multimencionado artículo 111 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, determinando ello la nulidad lisa y llana de la multa impuesta a ese procedimiento.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2422/08-06-02-9.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 18 de febrero de 2009.- Tesis: por unanimidad de votos.- Sentencia: por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Guillermina del Rosario Ruíz Bohórquez.- Secretaria: Lic. Neyda Azucena Grijalva Rodríguez.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

VI-TASR-XXIV-12

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN.- NO ES NECESARIO QUE DICHA AUDIENCIA SE LLEVE A CABO CON LA PRESENCIA FÍSICA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PROVEEDORA EN LA DELEGACIÓN EN QUE SE PRESENTÓ LA QUEJA RESPECTIVA.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 111, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría señalará el día y hora en que se llevará a cabo la audiencia de conciliación entre el consumidor y el proveedor, señalándose que incluso la misma puede ser llevada a cabo por vía telefónica o por cualquier otro medio idóneo para tal efecto. Ahora bien, en el caso concreto el domicilio de la parte actora se encuentra en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, siendo que la

audiencia de conciliación se llevaría a cabo en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, siendo por situaciones como esta, que el numeral 111 mencionado, no exige que la comparecencia a la audiencia de conciliación se realice necesariamente de manera física, sino que se permite que la misma se lleve a cabo mediante vía telefónica o, cualquier otro medio idóneo para tal efecto. Por lo tanto, si en la especie, de las documentales que obran en autos, se observa que el día en que se llevaría la audiencia de conciliación y a la hora citada, la parte actora compareció ante la Delegación en Monterrey, Nuevo León, de la Procuraduría Federal del Consumidor, entonces es claro que la demandante no incurrió en desacato alguno, pues sí cumplió con asistir a la audiencia de conciliación, ello aún y cuando haya sido en otra Delegación, pues como se ha señalado, no era necesaria la presencia física en la Delegación en Matamoros de la Procuraduría Federal del Consumidor para que fuera llevada a cabo, atento a la distancia existente entre el domicilio de la actora y dicha Delegación, por lo que en todo caso y, si la accionante por medio de su representante legal asistió a la Delegación en Monterrey de la Procuraduría Federal del Consumidor, ésta debió de haber proveído lo conducente, proporcionando los elementos para el debido desahogo de la audiencia en coordinación con la Delegación en Matamoros de la misma Procuraduría, sin que sea imputable a la actora la falta de coordinación o comunicación entre dichas Delegaciones.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3617/08-06-02-3.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Guillermina del Rosario Ruiz Bohórquez.- Secretario: Lic. Javier Cruz Cantú.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXIV-13

EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL PÁRRAFO FINAL DEL ARTÍCULO 52-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. REQUERIMIENTO DIREC-

TO AL CONTRIBUYENTE, SIN HACERLO EN FORMA PREVIA AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO QUE EMITIÓ EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE.- (Artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación modificado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas Disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2006). Del precepto 52-A del Código Tributario Federal, se tiene que, entre otras cuestiones que, si bien la autoridad debe respetar el orden previsto en el numeral, es decir, requerir en forma previa al contador público que formuló el dictamen, y después al contribuyente, sin embargo, dicha prelación no tiene que respetarse cuando en el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salvedades que tengan implicaciones fiscales, ni en el caso de que se determinen diferencias de impuestos a pagar y éstos no se enteren de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación. En ese orden de ideas, si del oficio mediante el cual se solicitó documentación al contribuyente, respecto de las contribuciones por pagar dictaminadas, se advierte que la autoridad funda el requerimiento en el precepto legal 52-A del Código Tributario Federal, y lo motiva en que derivado del análisis al dictamen presentado por el contador público registrado, se determinaron diferencias de impuestos a pagar y éstas no se enteraron de acuerdo con el artículo 32-A, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, se actualiza entonces, uno de los supuestos de excepción al orden establecido en el numeral 52, fracciones I y II, de dicho Código, lo que trae como consecuencia reconocer la legalidad del oficio de solicitud de informes en virtud al haberse realizado el requerimiento en forma directa al contribuyente, y no al contador público que formuló el dictamen.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2080/08-06-02-9.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 6 de abril de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Guillermina del Rosario Ruíz Bohórquez.- Secretaria: Lic. Neyda Azucena Grijalva Rodríguez.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-TASR-XXIV-14

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y EL REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO.- CASO EN QUE SE CELEBRE UN CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A PRECIO ALZADO O BAJO PRECIO UNITARIO.- Respecto a la actividad de construcción y las obligaciones que se derivan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por dicha actividad, el artículo 5, fracción I, del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado establece en primera instancia, que los propietarios de las obras de construcción que contraten a los trabajadores que intervengan en dichas obras, deben ser considerados como los patrones, para efecto del cumplimiento relativo. Sin embargo, en dicho numeral se establece una excepción a lo anterior, pues cuando el propietario de la construcción celebre un contrato para la ejecución de las obras correspondientes, a precio alzado o bajo el sistema de precios unitarios, con alguna empresa que cuente con elementos propios para ello, entonces se entenderá que esta empresa es la obligada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley del Seguro Social y el Reglamento en comento, respecto de los trabajadores que participaron en la construcción. Por lo tanto, si en la especie la parte actora logra demostrar en el juicio contencioso administrativo con las documentales pertinentes, que se contrataron los servicios de una empresa que se encargaría con elementos propios de las obras de construcción, entonces ésta es quien para tal efecto tiene el carácter de patrón, viéndose liberada la accionante de las obligaciones del entero de las cuotas obrero patronales que se originen respecto de los trabajadores de la construcción.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3324/08-06-02-9.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el

15 de abril de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Guillermina del Rosario Ruiz Bohórquez.- Secretario: Lic. Javier Cruz Cantú.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXIV-15

ACTA DE VISITA DOMICILIARIA. ES ILEGAL SI EL PERSONAL ACTUANTE ADSCRITO A LA AUTORIDAD, PERMITE QUE POR PARTE DEL PARTICULAR, FIRME EL ACTA FINAL DE VISITA, RELATIVA A LAS ACTUACIONES DE LA AUTORIDAD, UNA PERSONA, EN CALIDAD DE TERCERO, QUE NO ESTUVO PRESENTE, NI AL INICIO, NI DURANTE EL DESARROLLO DE DICHA DILIGENCIA.- En el caso a estudio, la autoridad, hizo del conocimiento del particular, la visita de inspección y verificación, con el objeto de verificar el cumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables al caso, ante lo cual, una vez que inicio tales facultades, realizando el procedimiento respectivo con motivo de sus facultades de verificación, procedió al levantamiento del acta final de visita correspondiente, misma que fue firmada, por parte del particular, por una persona que no tuvo participación alguna al inicio del levantamiento del acta referida, ya que no se desprende, que dicha persona se hubiere apersonado por parte del particular, para llevar a cabo la referida acta final de visita, o que en todo caso, tal persona hubiere sustituido, al cierre de la multicitada acta, a quien estuvo en el lugar en que se llevaba a cabo la visita domiciliaria y con quien dio inicio la multicitada diligencia.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4094/08-06-02-6.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 28 de abril de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Guillermina del Rosario Ruíz Bohórquez.- Secretaria: Lic. Claudia Sánchez Marroquín.

LEY ADUANERA

VI-TASR-XXIV-16

VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE COMERCIO EXTERIOR EN TRANSPORTE.- EL PERSONAL DESIGNADO PARA LLEVARLA A CABO POR EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DEBE ENCONTRARSE ADSCRITO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL SEA TITULAR.- Conforme al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, los Administradores de las Aduanas tienen la posibilidad de auxiliarse indistintamente por el personal que se encuentren a ellas adscritos, quienes realizarán funciones específicas en auxilio de las labores del Administrador. Sin embargo, si la verificación de mercancía de comercio exterior en transporte fue llevada a cabo por personal adscrito a la Administración Central de Visitaduría, habiendo sido designado para tal efecto por el C. Administrador de la Aduana de Ciudad Miguel Alemán a través de la orden de verificación respectiva, entonces es clara la ilegalidad de la actuación de la autoridad aduanera, toda vez que la verificación de las mercancías de comercio exterior fue efectuada por personal que no tenía facultades para ello, ya que al haber sido ordenada tal verificación por la Aduana de Ciudad Miguel Alemán, entonces se debió de haber designado personal que se encontrara adscrito a tal unidad, pues el Administrador de la Aduana de Ciudad Miguel Alemán no cuenta con facultades para designar personal que no se encuentre adscrito a la misma, para realizar funciones específicas en auxilio de su labor. Por lo tanto, si bien se debe de considerar que los Administradores de las Aduanas para la realización de sus funciones, se pueden auxiliar del personal que la necesidad del servicio requiera que se encuentre a su cargo, lo cierto es que en la especie si el personal no se encontraba adscrito a la Aduana de Ciudad Miguel Alemán, sino a la Administración Central de Visitaduría, en consecuencia el Administrador de dicha Aduana no se encontraba facultado para designar a dicho personal como verificador, puesto que no se trata de personal adscrito a dicha unidad para actuar en su auxilio, es decir, no se trataba de personal que se encontrara a su cargo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5508/05-06-02-9.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de mayo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Guillermina del Rosario Ruiz Bohórquez.- Secretario: Lic. Javier Cruz Cantú.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXIV-17

MULTA POR LA NO PRESENTACIÓN AL INICIO DE LA VISITA DOMICILIARIA DE LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMAN PARTE DE LA CONTABILIDAD.- PARA SU IMPOSICIÓN NO ES SUFICIENTE QUE EN LA ORDEN DE VISITA SE HUBIESE SEÑALADO EL ARTÍCULO 45, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SINO QUE ES PRECISO ADEMÁS EL SEÑALAMIENTO DEL DIVERSO NUMERAL 53, INCISO A), DE DICHO ORDENAMIENTO.- El artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación establece que si al ejercerse las facultades de comprobación, las autoridades fiscales solicitan los libros y registros que forman parte de la contabilidad del contribuyente, los mismos deben ser presentados de manera inmediata, siendo dicho precepto el que establece los plazos dentro de los cuales deben ser exhibidas la información y documentación solicitada por las autoridades fiscales al ejercer sus facultades de comprobación y, el inciso a) del mismo de manera específica se refiere al plazo que tienen los contribuyentes para presentar los libros y registros que formen parte de su contabilidad, señalando que debe ser de manera inmediata. Así pues, a fin de encontrarse debidamente fundado el requerimiento de dichos libros y registros, así como el apercibimiento respectivo, en la orden de visita correspondiente, la autoridad fiscal debe de señalar el precepto con base en el cual el contribuyente tenga la obligación de realizar la presentación de dichos documentos de manera inmediata, es decir, el dispositivo legal que establezca justamente el plazo dentro del cual se encontraba compelido a poner a disposición del personal de la autoridad su contabilidad. En consecuencia y, a fin de encontrarse la autoridad en aptitud de

sancionar la conducta omisiva en comento (esto es, la no exhibición de los libros y registros que conforman parte de la contabilidad de manera inmediata, al iniciarse la visita domiciliaria), debió de haber señalado como parte del fundamento de la orden de visita, el artículo 53, inciso a), del Código Tributario Federal, sin que resulte suficiente para tener por debidamente fundado el requerimiento del numeral 45, de tal ordenamiento, pues este último precepto únicamente establece la obligación de los visitados para mantener a disposición de los visitadores la contabilidad, mas no el plazo dentro del cual debe de cumplir el contribuyente con la presentación de la misma.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5274/08-06-02-3.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 22 de mayo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Guillermina del Rosario Ruiz Bohórquez.- Secretario: Lic. Javier Cruz Cantú.

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN

VI-TASR-XXIV-18

REVISIÓN A DICTAMEN.- PARA PROCEDER EL INSTITUTO A REQUERIR AL PARTICULAR LA MISMA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE YA HABÍA REQUERIDO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, DEBE DE MOTIVAR DEBIDAMENTE DICHO PROCEDER.- Del artículo 171, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, se desprende que cuando el Instituto revise el dictamen, debe de requerir en primera instancia al contador público que lo haya formulado, la información y documentación señalada, debiendo de notificar copia de dicho requerimiento al contribuyente; posteriormente se establece que, una vez que se haya requerido al contador público la información y documentación indi-

cada, se podrá proceder a requerir al contribuyente la información y documentación a que se hace referencia en el inciso c), de la fracción I, del numeral en comento, siempre y cuando no haya sido presentada por el contador público. Así pues, en caso de que la información y documentación a que se refiere el inciso c), de la fracción I del precepto en trato, requerida al contador público no haya sido proporcionada, careciendo el Instituto de elementos suficientes para conocer la situación fiscal del particular, podrá proceder a efectuar el requerimiento correspondiente directamente al contribuyente, facultad que no se encuentra a discusión. Sin embargo, efectuando una interpretación de lo dispuesto por los artículos 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, 170 y 171, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, al proceder la autoridad fiscal de conformidad con la fracción II del último numeral mencionado, debe de establecer las razones específicas que la llevaron a proseguir la revisión ahora con el contribuyente, esto es, tiene el deber de motivar las circunstancias por las cuales considera que la información o documentación que le proporcionó el contador público no eran suficientes para conocer su situación fiscal o, si la circunstancia por la que procedió de tal manera era porque dicho contador público no le proporcionó de manera completa lo requerido, ello a fin de no dejar en estado de incertidumbre jurídica al contribuyente, sin que ello implique limitación a las facultades de comprobación de la autoridad, sino únicamente que sus actos cumplan con los requisitos previstos en el artículo 38, del Código Federal Tributario.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5126/08-06-02-3.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de junio de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Guillermina del Rosario Ruiz Bohórquez.- Secretario: Lic. Javier Cruz Cantú.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXIV-19

RECURSO DE REVOCACIÓN. ARTÍCULO 125 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, OPTATIVIDAD DEL.- El precepto legal 125 del Código Fiscal de la Federación, señala, en su primer párrafo que el interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación o promover, directamente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; especificándose que el interesado deberá intentar la misma vía que haya elegido si pretende impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente de otro y, se indica también, que en el caso de que el interesado impugne alguna resolución que haya sido dictada en cumplimiento a una diversa resolución que hubiese sido emitida en algún recurso administrativo, el interesado deberá impugnar dicho acto, por una sola vez, a través de la misma vía. De lo anterior se puede advertir que la norma legal 125 en comento, en su primer párrafo contiene una regla general, dos excepciones y una excepción a una de éstas a saber: a) REGLA GENERAL: (el recurso de revocación es optativo). El interesado puede optar por impugnar un acto administrativo, ya sea, a través del recurso de revocación o por medio de juicio de nulidad ante este Tribunal. b) PRIMERA EXCEPCIÓN (obligación de interponer recurso de revocación). Cuando el interesado desee impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuencia de otro, deberá hacerlo a través de la misma vía de impugnación por la que haya optado. SEGUNDA EXCEPCIÓN (obligación de interponer recurso de revocación). El interesado deberá intentar el recurso de revocación cuando impugne una resolución que haya sido dictada en cumplimiento de una diversa resolución derivada precisamente de un recurso de revocación. EXCEPCIÓN A LA EXCEPCIÓN (recurso de revocación optativo). La obligación de interponer recurso de revocación a que alude la excepción señalada en el párrafo inmediato anterior, constriñe a que debe hacerse por una sola vez, desprendiéndose la denominada “excepción a la excepción” ya que, al encontrarse en el supuesto de que se desee impugnar una segunda resolución emitida en cumplimentación de resolución de recurso de revocación, el interesado ya no se encuentra obligado a hacerlo a

través de recurso de revocación, precisamente porque se dice que es por una sola vez. Esto es, la parte final del primer párrafo del artículo 125 del Código Fiscal de la Federación, contiene una excepción a la regla general que estipula la optatividad que tiene el interesado de interponer el recurso de revocación; dicha excepción, que en líneas anteriores se menciona como "Segunda Excepción", indica que el interesado ya no tiene a su alcance la opción de elegir u optar por interponer recurso de revocación o juicio de nulidad en contra de aquella resolución que se haya dictado en cumplimiento a una diversa resolución que derive de un recurso de revocación, sino que obliga al interesado que quiera impugnar una resolución dictada en cumplimentación, a que la interponga por la misma vía, esto es, lo obliga a que lo haga necesariamente a través del recurso de revocación, sin embargo, la referida "Segunda Excepción", tiene a su vez una excepción, ya que al decir, textualmente, que la impugnación del oficio en comento, es decir, del oficio de cumplimentación, deberá hacerse por una sola vez y por la misma vía de recurso de revocación, permite inferir que, en el caso de que exista el interés de controvertir una segunda resolución dictada en cumplimiento a una resolución emitida en recurso administrativo, ya no debe hacerlo por medio de recurso de revocación, toda vez que, como se dijo con antelación, sólo debe hacerlo por una sola vez, luego entonces, la impugnación que el interesado pretenda hacer de la referida segunda resolución emitida en cumplimentación se convierte en optativa, toda vez que puede ser combatida a través de recurso de revocación o juicio de nulidad, volviéndose así a la regla general a la que se ha venido haciendo referencia y que aduce a que el recurso de revocación es optativo en cuanto a la controversia de un acto administrativo, configurándose así lo que se dice "la excepción a la excepción te lleva o confirma la regla general".

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4927/08-06-02-9.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de julio de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Guillermina del Rosario Ruíz Bohórquez.- Secretaria: Lic. Neyda Azucena Grijalva Rodríguez.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXIV-20

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE NULIDAD.- Es improcedente el juicio de nulidad en contra de la resolución en la cual se comunica el inicio del procedimiento de suspensión en el Padrón de Importadores, debido a la posible actualización de lo previsto en las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes para 2004 y 2007, ya que ésta no tiene el carácter de resolución definitiva, ya que el procedimiento de referencia debe concluir con la emisión del acto administrativo definitivo, que culmine con dicho procedimiento. Así es, la resolución mediante la cual se inicia el procedimiento de suspensión del Padrón de Importadores, no tiene el carácter de resolución definitiva, toda vez que únicamente comunica al actor el inicio de dicho procedimiento, para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones a las cuales están afectos todos los Importadores, es decir, el sólo hecho de comunicar el inicio del procedimiento de suspensión del Padrón de Importadores, no trasciende en el sentido de éste, en virtud de que no se agota con la resolución que se pretende combatir, ni se le está suspendiendo de dicho Padrón. Por tanto, procede también el sobreseimiento del juicio de nulidad cuando se impugnan las referidas Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, al considerar como primer acto de aplicación el oficio mediante el cual se comunica el inicio del procedimiento de suspensión en el Padrón de Importadores, toda vez que en éste no se aplicó lo establecido por dichas Reglas, ya que la autoridad se limitó a hacer referencia a las mismas para efectos de motivar el inicio del procedimiento de suspensión en el Padrón de Importadores sujeto a la parte actora, empero, en el oficio en comento, no se resolvió aplicar lo dispuesto por las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, sino sólo se hace referencia a los motivos por los cuales procederá a la suspensión en el Padrón de Importadores, indicando que dichos motivos se obtienen del contenido de las multirreferidas Reglas, sin embargo, en el citado oficio no se está decretando suspender a la hoy actora del Padrón de Importadores, por tanto no existe la aplicación de las Reglas en cita, de ahí que el juicio de nulidad sea improce-

dente, al no actualizarse lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2226/08-06-02-9.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 10 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Guillermina del Rosario Ruíz Bohórquez.- Secretaria: Lic. Neyda Azucena Grijalva Rodríguez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXIV-21

VISITA DOMICILIARIA. APORTACIÓN DE DATOS POR TERCERO. LA AUTORIDAD NO SE ENCUENTRA OBLIGADA A OTORGAR EL PLAZO DE VEINTE DÍAS QUE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL CASO DE.- Si bien es cierto que las formalidades de las actas de visita se encuentran establecidas en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, que establece en su fracción I, que de toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores; y en su fracción IV, prevé que los hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales y en la última acta parcial que al efecto se levante, se hará mención expresa de tal circunstancia, y entre ésta, y el acta final, deberán transcurrir, cuando menos veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal; también lo es que, como en el caso, al tener la visita domiciliaria como única finalidad que la empresa acta proporcionara y mantuviera a disposición de la autoridad fiscalizadora todos los elementos que integran su contabilidad; la documentación comprobatoria de las operaciones y los datos e informes que la empresa demandante, en su carácter de tercero ha llevado a cabo con otro

contribuyente, todo esto relacionado con la revisión que a este último se le practica, la autoridad no se encontraba obligada a otorgarle el plazo contemplado en el artículo 46, fracción IV, antes citado, pues el objeto de la visita domiciliaria no era verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se encuentra sujeta la empresa actora en el juicio, tan es así que únicamente se levantó el acta parcial de inicio de aportación de datos por terceros y el acta final de aportación de datos por terceros, sin que se hubiera levantado la última acta parcial a que alude dicho precepto, máxime que como la propia actora reconoce en su demanda, en ningún momento se hicieron constar hechos u omisiones que entrañaran incumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de la enjuiciante, por lo que ante tal circunstancia, es evidente que no se ubica en la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 46 referido, para que se le otorgara el plazo de veinte días aludidos.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 811/09-06-02-3.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Guillermina del Rosario Ruiz Bohórquez.- Secretario: Lic. Javier Cruz Cantú.

SEGUNDA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXVIII-3

ESTÍMULOS FISCALES.- A LOS CONTRIBUYENTES DEDICADOS AL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA O PASAJEROS QUE UTILICEN LA RED NACIONAL DE AUTOPISTAS DE CUOTA, LES ES APLICABLE EL ESTÍMULO FISCAL CONCEDIDO EN EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN X DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, CUANDO EL PAGO DEL PEAJE SE REALICE POR UN MEDIO DISTINTO A LOS SEÑALADOS EN LA REGLA 11.9 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA PARA 2006, EN LOS CASOS EN QUE LA CASETA DE COBRO NO CUENTE CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA RECIBIR EL ENTERO A TRAVÉS DE LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA VEHICULAR O MEDIOS ELECTRÓNICOS.- Los estímulos fiscales son beneficios de carácter económico concedidos por la Ley Fiscal al sujeto pasivo de un impuesto, con el objeto de obtener ciertos fines de interés social, requiriéndose para que se den, los siguientes elementos: a) La existencia de un tributo o contribución a cargo del beneficiario del estímulo, el cual se necesita, ya que el estímulo fiscal sólo se origina y concreta en torno a las cargas tributarias que pesan sobre el contribuyente y, b) Una situación especial del contribuyente establecida en abstracto por la disposición legal que otorga el estímulo y que, al concretarse, da origen al derecho del contribuyente para exigirlo. Ahora bien, del contenido del artículo 16, fracción X de la Ley de Ingresos de la Federación, se desprende que la intención del legislador fue la de incentivar el uso de la red nacional de autopistas de cuota, estableciendo un estímulo fiscal a los contribuyentes cuya actividad exclusiva sea la de transporte terrestre de carga o pasaje. Asimismo se aprecia que se confirieron facultades a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público a fin de que emitiera reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de acreditamiento por tramo carretero y demás disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación de este beneficio; reglas que fueron emitidas en la resolución miscelánea fiscal para 2006; particularmente en la 11.9, determinando que el pago de dichos conceptos, debe realizarse a través de medios electrónicos o de la tarjeta de identificación automática vehicular. Sin embargo, resulta un hecho notorio que, dadas las condiciones de rezago y características de la red carretera de cuota del país, no todas las casetas de pago cuentan con los dispositivos necesarios para la recepción del pago a través de los citados medios, lo cual, al no ser atribuible ni imputable a los gobernados, no puede traducirse en una limitante para beneficiarse con el estímulo que el legislador les concedió. En este orden de ideas, la Ley de Ingresos de la Federación, concedió tal estímulo a los contribuyentes cuya actividad exclusiva sea el transporte terrestre de carga o de pasaje y que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota; sin embargo, resulta contrario a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, el hecho de limitar ese estímulo cuando se trate de casetas de cobro que, por cuestión de infraestructura no cuenten con los dispositivos para recibir pagos electrónicos, pues ello implica hacer nugatoria la facilidad otorgada por el legislador. En este contexto, es evidente que el contribuyente no podrá acreditar el porcentaje de gastos erogados en la utilización de la red de autopistas de cuota, cuando contando la caseta respectiva con infraestructura para recibir el pago por los medios antes señalados, el gobernado lo haga en forma distinta; es decir, en efectivo; sin embargo, si no se cuenta con tales instalaciones, ello no es imputable al particular y por ende, no puede irrogarle perjuicio a grado tal de negarle la aplicación del estímulo tributario que nos ocupa, ya que es evidente que en estos casos, no puede efectuar el entero a través de la tarjeta de identificación automática vehicular, ni a través de medios electrónicos, aún cuando la resolución miscelánea para 2006, en su regla 11.9, establezca esa forma de pago.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 180/07-07-02-8.- Resuelto por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de febrero de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Salvador Rivas Gudiño.- Secretaria: Lic. Laura Cristina Castro Rodríguez.

SALA REGIONAL DEL CENTRO I

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

VI-TASR-XXIX-36

DEDUCCIÓN DE PAGOS DE ANTICIPOS A SOCIOS.- EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE PARA 2003 Y 2004, DE QUE SE PAGUE EL IMPUESTO RESPECTIVO POR DICHOS ANTICIPOS, PUEDE CUMPLIRSE CONSERVANDO LA DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO DE LOS TERCEROS A QUIENES SE HAYAN EFECTUADO LOS PAGOS, EN LA QUE CONSTE EL ENTERO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE.- Considerando que el requisito previsto en la fracción V del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para que puedan ser deducibles los pagos por conceptos de anticipos a socios se puede cumplir de dos maneras: que quien pretenda efectuar la deducción calcule y efectúe directamente el pago de las retenciones que origine el pago de los anticipos mencionados, o que dicha persona recabe de los terceros a los que se efectúe el pago de los anticipos, copia de los documentos en que conste el pago de los impuestos generados por las retenciones, se considera que la declaración anual del ejercicio de las personas a quienes se les efectuaron los pagos de los anticipos, puede ser uno de los documentos idóneos para demostrar el cumplimiento de dicho requisito de la segunda forma indicada, aún y cuando tales declaraciones hayan sido presentadas hasta el siguiente ejercicio del que correspondía el pago, en tanto que la mencionada fracción del precepto en comento, no indica con precisión que el retenedor deba de recabar algún documento en específico de las personas a quienes haga el pago de anticipos, sino solamente que recabe el documento con el que se demuestre el pago de tales conceptos, aunado a que dicho precepto no establece que el pago de los mismos, por parte de los terceros, se deba de realizar en las mismas fechas que el retenedor debiera de haber

enterado las retenciones, por lo cual como las declaraciones anuales del ejercicio, son medios idóneos para que los terceros socios de una persona moral hagan el entero de los pagos del impuesto sobre la renta que en un momento dado originaron la retención, de conformidad con el artículo 175 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considera que con la exhibición de dichas declaraciones, se puede demostrar el cumplimiento de la obligación en comento de la segunda forma que para tal efecto establece la fracción V del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1008/08-08-01-8.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de febrero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Ana María Múgica y Reyes.- Secretario: Lic. Luis Arturo Ordaz Ortiz.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

VI-TASR-XXIX-37

DEDUCCIÓN DE PAGOS DE ANTICIPOS A SOCIOS.- LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE PARA 2003 Y 2004 ESTABLECE DOS FORMAS DE CUMPLIR CON EL REQUISITO DE QUE SE PAGUE EL IMPUESTO RESPECTIVO POR DICHOS ANTICIPOS, POR LO QUE EL MISMO SE CUBRE CUANDO SE EFECTÚE EN CUALQUIERA DE ESAS DOS FORMAS.- La fracción V del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece dos formas de cumplir con el requisito previsto en dicha fracción para la procedencia de las deducciones por conceptos de anticipos a socios, que son las siguientes: a) una es la de calcular y efectuar el pago de las retenciones que origine el pago de los anticipos mencionados, de manera directa por parte de la persona que pretenda efectuar tales deducciones, y b) otra, contemplada de manera disyuntiva, (pues está unida a la anterior por una "o", que implica que se puede cumplir con tal obligación, de cualquiera de las dos formas señaladas en dicha fracción), consistente en recabar de los

terceros a los que se efectúe el pago de los anticipos, copia de los documentos en que conste el pago de los impuestos generadores de las retenciones, de lo que se colige que el cumplimiento a dicho requisito de procedencia de las deducciones, se puede dar efectuando cualquiera de las dos acciones que dicho precepto establece, por lo cual, aun cuando bajo el criterio de la autoridad, el particular revisado no hubiera cumplido con dicho requisito de la primera de las formas señaladas, es decir, efectuando directamente la retención y entero de los impuestos causados por los pagos efectuados por concepto de anticipos, si ésta lo realiza de la segunda forma, es decir, habiendo recabado de los terceros a quienes se hizo el pago de los anticipos, copia del documento del que se desprenda el pago de los impuestos relativos a las retenciones, con ello se puede tener por cumplido el requisito previsto en el mencionado precepto legal.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1008/08-08-01-8.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de febrero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Ana María Múgica y Reyes.- Secretario: Lic. Luis Arturo Ordaz Ortiz.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXIX-38

NEGATIVA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES. LOS ARTÍCULOS 66 Y 66-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN HACEN REFERENCIA A ESTA FIGURA, PERO SI EL CRÉDITO QUE PRETENDE ENTERARSE A PLAZOS DEVIENE DE UNA MULTA DE CARÁCTER FORMAL, NO RESULTA PROCEDENTE.- Los artículos 66 y 66-A del Código Fiscal de la Federación hacen alusión a la figura del pago en parcialidades, restringiendo su autorización a que los montos adeudados provengan de contribuciones omitidas y sus accesorios. Sin embargo, cuando los créditos que se buscan pagar en periodos constituyen multas de carácter formal, impuestas con fundamento

en lo dispuesto por el artículo 81, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en virtud de haber enterado los pagos provisionales por concepto de impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta a requerimiento de autoridad, como se advierte de la sentencia recaída en un expediente tramitado ante la propia Sala, queda claro que no obstante que las multas, en términos generales, se consideran accesorios de las contribuciones, ello se da cuando al haberse omitido el entero de esta última se calculan las sanciones por la cantidad que no se pagó, pero si tienen el carácter de formal, se generan por incumplimiento a las normas fiscales, y por ende, no reciben el calificativo de accesorios. Así, en razón de lo señalado, no es dable autorizar el pago en parcialidades de créditos fincados por multas ocasionadas por no acatar lo dispuesto en la legislación tributaria.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1597/08-08-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de febrero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretario: Lic. Roberto Ruvalcaba Guerra.

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

VI-TASR-XXIX-39

FORMATO DENOMINADO "REVOCACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL EN LA SUBDELEGACIÓN" DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CARECE DE FIABILIDAD PARA ACREDITAR QUE EL DEMANDANTE APORTÓ LOS AVISOS DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIÓN SALARIAL, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 210-A DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA MATERIA CONTENCIOSA.- Cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social emite una cédula de liquidación de cuotas por diferencias en el entero de cuotas obrero patronales, y el actor niega haber presentado los avisos de modificación salarial, cuando al contestar la demanda la

autoridad afirma que el promovente sí presentó las modificaciones de mérito, pretendiendo demostrarlo con las consultas en pantalla y sustentando que la información la aportó al Instituto a través de un formato electrónico denominado "REVOCACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL EN LA SUBDELEGACIÓN", pero el particular prueba a través del ofrecimiento de la inspección judicial que el contenido de la página donde se contiene dicho formato solamente funciona para solicitar la inhabilitación del registro patronal por vía digital, se estima que la parte demandada no alcanza a cubrir la carga de la prueba que tiene a su cargo, puesto que la probanza carece de fiabilidad de la fuente para efectos de su valoración, de conformidad con las reglas que marca el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, y por referirse a cuestiones distintas de aquéllas que conforman la litis en el asunto, no puede servir de base para estimar que la autoridad demuestra sus excepciones en juicio.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1620/08-08-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de mayo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretario: Lic. Roberto Ruvalcaba Guerra.

CÓDIGO DE COMERCIO

VI-TASR-XXIX-40

NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR CONSIDERAR QUE UN CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS NO FUE OTORGADO EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL APLICADO SUPLETORIAMENTE AL CÓDIGO DE COMERCIO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 2 del Código de Comercio, sólo resultan aplicables supletoriamente las disposiciones del derecho común federal contenidas en el Código Civil Federal, cuando no exista disposición expresa que las regule, por lo que tratándose de formalidades a reunir para las convenciones mercantiles no son aplicables supletoriamente a la materia

mercantil las disposiciones legales contenidas en el Código Civil Federal que aluden a las formalidades de dichos actos, tratándose de formalidades de los contratos mercantiles, ya que existe disposición expresa en el artículo 78 del Código de Comercio, que establece: "En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.", por lo que a fin de no contravenir dicha norma, no procede para valorar un documento mercantil, aplicar supletoriamente las disposiciones del derecho común en materia federal y mucho menos negar la devolución del impuesto al valor agregado invocado como fundamento disposiciones del Código Civil Federal, para desestimar un contrato mercantil.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1964/08-08-01-9.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de mayo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretaria: Lic. María Concepción Aguilar Aréchiga.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXIX-41

NEGATIVA FICTA. SUPUESTO EN EL QUE RESULTA INNECESARIO OTORGAR A LA PARTE ACTORA TÉRMINO PARA AMPLIAR LA DEMANDA.- Si bien es cierto que el artículo 17, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece como hipótesis de ampliación de la demanda inicial la impugnación de una resolución negativa ficta, la interpretación del precepto debe realizarse con apego a la pretensión del actor. Así, cuando el particular comparezca a juicio demandando una resolución con la característica en comento, y la autoridad demandada en el juicio se allane en cuanto a la actualización de la figura, pero plantee como causal de sobreseimiento haber dejado sin efectos los

créditos recurridos en la instancia administrativa, debe atenderse a que la intención primaria del promovente es la obtención del mejor resultado para sus intereses, que es la declaratoria de nulidad lisa y llana; máxime si en el caso el actor, desde la formulación del recurso, negó tener conocimiento de los actos que combatió, y el Instituto demandado no los aportó a juicio, obligando a la juzgadora a aplicar la jurisprudencia número 2a./J. 209/2007 cuyo rubro reza: "*JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN.*", emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal. En este caso, sin necesidad de dar término al demandante para ampliar su demanda, procede declarar la nulidad lisa y llana tanto de la resolución negativa ficta impugnada como de los créditos recurridos, sin que se lesione el interés jurídico del actor, pues por el contrario, se cumple con la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la impartición de justicia pronta y expedita a los gobernados.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 470/09-08-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de julio de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretario: Lic. Roberto Ruvalcaba Guerra.

PRIMERA SALA REGIONAL HIDALGO-MÉXICO

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-TASR-XII-I-7

PRESCRIPCIÓN CONSIGNADA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. TIENE ALCANCES DISTINTOS A LA PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.- Ante la existencia de un siniestro o accidente de trabajo sufrido por un trabajador que no se encontraba inscrito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a la fecha en que aconteció, nace a favor de dicho instituto la facultad de determinar los capitales constitutivos de las prestaciones en dinero y en especie que hubiera otorgado al mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley del Seguro Social. Igualmente, como causa derivada del riesgo de trabajo sufrido, surge la prerrogativa del trabajador para reclamar el pago de las indemnizaciones correspondientes, a través de las acciones respectivas, las cuales prescriben en el término de dos años, atento al contenido del numeral 519, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. De esto se sigue, que para la fijación en cantidad líquida de los capitales constitutivos, el Instituto Mexicano del Seguro Social debe constreñir su emisión al término de cinco años consagrado en el artículo 297 de la Ley del Seguro Social. Luego, una vez que sean determinados y notificados los capitales constitutivos a cargo del patrón, conforme al artículo 298 de la citada ley, la obligación de enterarlos prescribirá a los cinco años de la fecha de su exigibilidad. Por lo tanto, la prescripción especial, de las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo, contenida en el referido cardinal 519 de la Ley Federal del Trabajo, conlleva alcances diversos a la figura de prescripción en materia fiscal, regulada por el citado artículo 298 de la Ley del Seguro Social, pues la primera únicamente es aplicable en materia laboral al regular la temporalidad en el ejercicio de las acciones de los trabajadores frente a los patrones, y de ninguna manera redunda en las facultades del organismo fiscal autónomo que

emitió una Cédula de Liquidación de Capitales Constitutivos, para exigir su cobro, pues en este caso, el trabajador cae fuera de la relación jurídica que se entabla entre el patrón y el Instituto; en consecuencia, no es jurídicamente factible perseguir dentro del juicio contencioso administrativo, la nulidad de una resolución de esa naturaleza, aludiendo que los capitales constitutivos fueron hechos del conocimiento del patrón, después de dos años de sufrido el siniestro por un trabajador, pues debe atenderse a la norma que señala un término prescriptorio de cinco años, ya que las acciones que derivan del régimen de seguridad social prescriben en los términos que la propia Ley del Seguro Social establece y no así en los que señala la Ley Federal del Trabajo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2746/09-11-01-9.- Resuelto por la Primera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Antonio Rodríguez Martínez.- Secretaria: Lic. Liliana Ponce Monzón.

PRIMERA SALA REGIONAL DE ORIENTE

LEY ADUANERA

VI-TASR-XIII-22

MOMENTO DE APLICACIÓN DE LA REGLA 2.2.3. DE LA SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN EN MATERIA ADUANERA DE LA DECISIÓN 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD EUROPEA, EN RELACIÓN A LA DEVOLUCIÓN DE ARANCELES PAGADOS EN EXCESO EN VIRTUD DEL TRATO PREFERENCIAL OTORGADO POR EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO RELATIVO.- Si bien en la Regla en mención, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha catorce de diciembre de dos mil seis, se establece que el importador podrá solicitar la devolución de los aranceles pagados en exceso, cuando se hubieren importado a territorio nacional mercancías originarias sin aplicar la tasa arancelaria preferencial establecida en la citada Decisión, por no contar con el Certificado al momento de la importación en los casos a que se refieren los artículos 17 (3) y 22 (3) del Anexo III de la propia Decisión, o bien por que éste fue rechazado por Razones Técnicas de conformidad con lo establecido en las Notas Explicativas, debiendo para ello rectificar el pedimento dentro de los 10 meses siguientes a la fecha en que se hubiera expedido el Certificado, dicha regla no puede ser aplicada en forma retroactiva en beneficio del importador, pues al tratarse de una norma de procedimiento, en términos de lo previsto en el artículo 6º del Código Fiscal de la Federación, la regla aplicable es la vigente en el momento en que se realizó la importación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3032/07-12-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el

22 de enero de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretario: Lic. Gilberto Arturo Gómez Aguirre.

LEY ADUANERA

VI-TASR-XIII-23

AGENTE ADUANAL. NO ES RESPONSABLE SOLIDARIO CUANDO PARA DETERMINAR LAS DEFICIENCIAS, IRREGULARIDADES O FALSEDAD DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS QUE, EN SU OPORTUNIDAD, LE HAYA HECHO LLEGAR EL CONTRIBUYENTE, SE LLEVE A CABO EL ANÁLISIS QUÍMICO O DE LABORATORIO PARA SU IDENTIFICACIÓN.- En el artículo 54 de la Ley Aduanera se contemplan las causas que relevan al agente aduanal de responsabilidad, estableciéndose en la fracción I, de dicho numeral que no será responsable cuando las diferencias e incumplimiento deriven de la inexactitud o falsedad de los datos y documentos que le haya proporcionado el contribuyente, lo que constituye la primer exigencia para que pueda materializarse la excluyente en comento; supuesto que a su vez, se encuentra condicionado por la propia norma a que el agente "no hubiera podido conocer dicha inexactitud o falsedad al examinar las mercancías", es decir, que se establece como requisito sine qua non el desconocimiento por parte del agente aduanal de las deficiencias, irregularidades o falsedad de los documentos y datos que, en su oportunidad, le haya hecho llegar el contribuyente, y además que se lleve a cabo el análisis químico o de laboratorio para su identificación; asimismo del numeral citado, se desprende que el desconocimiento del agente aduanal respecto a las anomalías encontradas por la autoridad, solamente pueden tener su origen en las siguientes razones:"a) Por no ser apreciable a la vista y b) Por requerir para su identificación de análisis químico, o de análisis de laboratorio tratándose de las mercancías que mediante reglas establezca la secretaría."; no obstante si bien es cierto que el uso de la conjunción "y", establece la unión de los citados requisitos, existe criterio definido en la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 27/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena

Época, Tomo XXI, Marzo de 2005, página 227, de rubro: "AGENTES ADUANALES. EL ANÁLISIS QUÍMICO O DE LABORATORIO REQUERIDO PARA QUE NO SE ACTUALICE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR FALSEDAD O INEXACTITUD DE DATOS, SÓLO ES EXIGIBLE CUANDO SE TRATE DE LA MERCANCÍA ESPECIFICADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE REGLAS, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY ADUANERA."; la cual de manera medular señala que si bien la conjunción copulativa "y" denota que los requisitos en comento se encuentran vinculados, ello no implica que indefectiblemente deban satisfacerse ambos, ya que la exigencia de que se realicen los mencionados análisis se encuentra limitada a las mercancías incluidas en las reglas que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por el contrario, si no se trata de las mercancías señaladas en las reglas que al caso emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces, para la integración de la excluyente de responsabilidad bastará que se demuestre el primero de los requisitos enunciados; de ahí que si la mercancía presentada en el recinto fiscal, tenía una constitución material de difícil identificación, y se necesitó de un análisis de laboratorio para determinar la composición de la mercancía importada, entonces, al no ser apreciable a simple vista la falsedad o inexactitud de los datos proporcionados por la contribuyente, al examinar la mercancía, se actualiza el supuesto de exclusión de responsabilidad previsto en la fracción I, del artículo 54 de la Ley Aduanera, liberando al Agente Aduanal de la obligación de responder solidariamente por el monto del crédito fiscal determinado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1329/07-12-01-9.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 5 de febrero de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Georgina Yáñez Arroyo.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-24

ORDEN DE VISITA. EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 43, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SE SATISFACE SI EN LA ORDEN ALUDIDA, DEBAJO DEL NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE, SE PRECISÓ SU DOMICILIO.- No se incumple con la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 Constitucional, si dentro de la redacción o texto del contenido de la orden de visita domiciliaria, no se precisa el domicilio del demandante, y éste se precisa debajo del nombre del contribuyente a quien va dirigida la orden de mérito, pues dicha situación determina la cita precisa del lugar donde debe llevarse a cabo la visita domiciliaria, siendo inconcuso que la visita domiciliaria se practicará siempre en el domicilio fiscal de la contribuyente, por así ordenarlo expresamente la Ley, además, de la interpretación concatenada de los artículos 38, 42, fracción III, 43, fracción I, 44 y 45 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que en todos los casos se habla del domicilio fiscal de la contribuyente; por tanto, si en la orden fue citado "debajo del nombre" del contribuyente, el domicilio, sin que éste demuestre que dicho domicilio no corresponde a su domicilio fiscal, entonces, el señalamiento dado en la orden de mérito es suficiente para concluir que sí se especificó cuál es el domicilio en donde se realizaría la visita domiciliaria; y en su caso, le corresponde la carga de la prueba al enjuiciante para demostrar que el domicilio referido en la orden y que es donde se llevó a cabo la diligencia de visita domiciliaria, no corresponde al lugar donde tenga el principal asiento de sus negocios, el que utilice como base fija para el desempeño de sus actividades o el principal asiento de estas, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación; aunado a que no existe ningún precepto legal que indique que si no se cita el domicilio dentro de la redacción de la orden ésta carece de tal requisito.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3767/07-12-01-9.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el

13 de marzo de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Georgina Yáñez Arroyo.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-25

PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVOCACIÓN. LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO APLICA TRATÁNDOSE DE EMBARGO PRECAUTORIO DE BIENES CONFORME AL ARTÍCULO 155 DE LA LEY ADUANERA.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 128 del Código Fiscal de la Federación, el tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones, o titular de los derechos embargados, podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco federal, sin embargo, tratándose del embargo precautorio de bienes que realice la autoridad fiscalizadora durante la práctica de una visita domiciliaria en términos del artículo 155 de la Ley Aduanera, la excepción contemplada por el numeral citado en primer término no resulta aplicable, pues dicho embargo tiene una naturaleza jurídica distinta al que forma parte del procedimiento administrativo de ejecución contemplado en el Código Federal Tributario, y que es al que expresamente se refiere el mencionado artículo 128, al establecer que el tercero podrá hacer valer recurso administrativo de revocación en cualquier tiempo, con la condición de que dicha promoción se realice antes del remate de los bienes, se enajenen los mismos fuera de remate o se adjudiquen a favor del fisco federal, pues estos actos administrativos son propios y exclusivos del procedimiento administrativo de ejecución.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4238/07-12-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el

12 de junio de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretario: Lic. Gilberto Arturo Gómez Aguirre.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XIII-26

CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONSERVADA POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, A FIN DE OTORGARLE VALOR PROBATORIO EN EL JUICIO DE NULIDAD, LA AUTORIDAD DEBE FUNDAR LA FACULTAD RELATIVA.- Si bien es cierto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, es reconocida como un medio de prueba, en el caso de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores pretenda acreditar sus excepciones en el juicio contencioso administrativo, con la certificación de la información comunicada por los particulares que conserve en medios electrónicos, resulta inconcuso que dicha autoridad debe citar la norma legal que la faculta para emitir dicha certificación con la finalidad de cumplir con la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 Constitucional, y reproducida por el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, toda vez que en caso contrario no será factible otorgar valor probatorio pleno a la información presentada en los mencionados términos por la autoridad enjuiciada.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 143/08-12-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de junio de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretario: Lic. Gilberto Arturo Gómez Aguirre.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

VI-TASR-XIII-27

CADUCIDAD.- APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.- El artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone que para la verificación y vigilancia necesarias en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, la Procuraduría Federal del Consumidor actuará de oficio conforme a lo dispuesto en la citada Ley y en los términos del procedimiento previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ahora bien, el Título de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que prevé el procedimiento a que se refiere el artículo 96 antes citado es el tercero denominado "DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO", el cual se encuentra integrado por once capítulos dentro de los cuales encontramos el denominado "De la terminación" y en el cual se ubica el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, disposición que prevé la existencia de la figura jurídica de la caducidad, por lo que bajo esa interpretación legal, resulta evidente que el artículo 60 referido, resulta aplicable supletoriamente a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1187/08-12-01-4.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 22 de octubre de 2008. por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretaria: Lic. Gloria Ma. de la C. Escobar Arrona.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XIII-28

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE NULIDAD POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, EN TRATÁNDOSE DE LA CONFIGURACIÓN DE LA NEGATIVA FICTA. SE ACTUALIZA CUANDO LA RESOLUCIÓN EXPRESA NO SE IMPUGNA DE MANERA OPORTUNA EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA.- Si en el juicio de nulidad se impugna una resolución negativa ficta, pero ni la resolución expresa que concluyó el medio de defensa administrativo ni su constancia de notificación, fueron materia de controversia en la ampliación de demanda, ello se traduce en una falta de impugnación de determinado acto de autoridad, lo que implica que la Juzgadora ante quien se somete la determinación de su validez, debe concluir que ese acto o resolución es legal, puesto que en esta hipótesis no existe la figura de la suplencia de la deficiente queja, y en esos términos ordena el numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando señala que las sentencias que emita este Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda. Bajo esas condiciones, si el enjuiciante controvierte la respuesta que hubiese recaído al recurso de revocación que intentó, es claro que al dársela a conocer en la tramitación del juicio de nulidad, junto con sus constancias de notificación, le correspondía su impugnación en el momento procesal oportuno, es decir, en la ampliación de demanda, y al no actuar con arreglo a esos lineamientos, es claro que consiente la legalidad tanto del momento y manera en que se le notificó el oficio conteniendo la resolución expresa, como los fundamentos y motivos de este último. Lo anterior hace evidente que no se configura el silencio de la autoridad, pues existe un documento recaído a la petición formulada por el particular, y consecuentemente no existe el acto reclamado, ya que el pronunciamiento expreso de la autoridad en cuanto al medio de defensa formulado, se ha acreditado e incluso, que su legal notificación tuvo lugar en el momento jurídicamente correcto, y además con anterioridad a la presentación del escrito de demanda que dio origen al procedimiento contencioso administrativo. En

tales casos, es procedente sobreseer el juicio de nulidad, al haberse actualizado el contenido de la fracción XI, del artículo 8, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relativa a la inexistencia del acto reclamado, desprendida esa circunstancia de las constancias de autos.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1357/08-12-01-3.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de octubre de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Ana Elena Suárez López.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-TASR-XIII-29

PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO. ES ILEGAL LA MULTA IMPUESTA POR HABER PRESENTADO LA DETERMINACIÓN ANUAL DE AQUÉLLA DERIVADA DE LA REVISIÓN ANUAL DE LA SINIESTRALIDAD, CON DATOS INCOMPLETOS.- Es ilegal la multa que se impone a los particulares, motivada en el hecho de que la determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo se ha presentado con datos incompletos, puesto que con tal actuación se dejó en estado de indefensión a la actora, toda vez que se le está determinando una multa sin hacer constar en el acto de molestia cuáles fueron las circunstancias especiales que tomó en cuenta la autoridad para emitir la multa por determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo, dando como resultado un acto indebidamente fundado y motivado, pues al limitarse a indicar que el acto u omisión que se le imputa consiste en “haber presentado con datos incompletos su determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad”, por el periodo correspondiente, no dio cabal cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en relación con el contenido del diverso 16 Constitucional, pues la autoridad fue omisa en especificar y detallar cuáles eran esos datos incompletos respecto a la

determinación de la prima en cuestión, dentro del propio cuerpo de la resolución impugnada.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1584/08-12-01-3.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de octubre de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Ana Elena Suárez López.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-30

COMPROBANTES FISCALES. UNA ABREVIATURA EN EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL NO ACTUALIZA LA INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 83, FRACCIÓN VII Y SANCIONADA EN EL NUMERAL 84, FRACCIÓN IV, AMBOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, prevé que son de aplicación estricta las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, lo cual se conoce como el principio de tipicidad en relación a la materia administrativa, ya que si cierta disposición establece una carga, excepción o sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el particular debe ser idéntica a la previamente establecida en la hipótesis establecida en el precepto que se considere violado, sin que ésta pueda legalmente ampliarse por analogía o por mayoría de razón. Ahora bien, los artículos 29, 29-A, fracción I y 83, fracción VII, todos del Código Fiscal de la Federación al disponer, que los comprobantes deberán contener impreso el domicilio fiscal, entre otros datos, señalando que sin ese requisito el particular se hará acreedor a la sanción prevista en el artículo 84, fracción IV del ordenamiento antes citado, se vinculan con el principio de referencia. Por lo que, si en el comprobante fiscal aparece impresa la razón social de la contribuyente con alguna abreviatura, de ninguna manera se incurre en violación a la fracción I del

artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación, ya que el dispositivo, señala que el comprobante fiscal, entre otros requisitos, debe contener impreso el nombre, denominación o razón social del contribuyente, por lo tanto la Ley no le prohíbe a la contribuyente utilizar abreviaturas en el nombre, denominación y razón social al consignarlo en los comprobantes fiscales, máxime cuando la abreviatura utilizada es plenamente conocida.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1765/08-12-01-4.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 10 de noviembre de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretaria: Lic. Gloria Ma. de la C. Escobar Arrona.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-31

AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA SOLICITUD DE PAGO EN PARCIALIDADES. NO GENERA LA INEXISTENCIA DEL CRÉDITO FISCAL LA FALTA DE.- Si bien es cierto, para que un crédito fiscal sea pagado en parcialidades conforme al artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, requiere la autorización expresa de las autoridades hacendarias, no menos cierto es que la falta de respuesta expresa por parte de la autoridad, respecto a una solicitud de pago en parcialidades, únicamente puede originar la obligación a cargo del contribuyente de realizar el pago total del entero del crédito autodeterminado, no obstante la ausencia de tal autorización no la exime de la obligación del pago. Lo anterior es así, ya que en atención a los principios de identidad, integridad e indivisibilidad del pago a que tiene derecho el fisco en su carácter de acreedor, el contribuyente debe llevar a cabo la exacta realización de la prestación debida y efectuar el pago de manera íntegra y de una sola vez, sin embargo esa regla general admite la excepción de que el particular podrá realizar el pago en parcialidades, de conformidad con el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, si las autoridades fiscales lo autorizan expresamente, previa solicitud del

contribuyente, pues según lo dispuesto en el artículo 2078 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente, no puede obligarse al acreedor a recibir parcialmente el pago, a menos que así se haya pactado expresamente o cuando lo establezca la ley. Esto es, en términos del citado artículo 66, una vez recibida la solicitud del particular para efectuar el pago de un crédito fiscal a través de parcialidades, la autoridad debe emitir una resolución donde expresamente se pronuncie sobre su procedencia, y si acepta o modifica los términos en que el particular le propone extinguir su obligación tributaria otorga su autorización para modificar la forma en que el contribuyente debe cumplir con su obligación tributaria pagando el crédito fiscal determinado mediante parcialidades, por tanto la falta de autorización expresa para pagar en parcialidades no genera la inexistencia del crédito fiscal, sino la imposibilidad del contribuyente de demostrar la obligación de la autoridad para recibir sus pagos parciales.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1605/08-12-01-4.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 18 de noviembre de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretaria: Lic. Gloria Ma. de la C. Escobar Arrona.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-32

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN I DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, CUANDO LA DEMANDA DE NULIDAD NO ESTÁ FIRMADA POR QUIEN LA PROMUEVE.- Para que proceda el juicio contencioso administrativo, se requiere la existencia de un derecho legalmente tutelado, que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad administrativa, faculta a su titular para acudir ante este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a demandar su nulidad, ya que de acuerdo con el sistema establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el ejercicio de la

acción de nulidad, origen del juicio contencioso administrativo, está reservado -entre otros- a quien resiente una lesión en su interés jurídico con motivo de la resolución cuya nulidad demanda. Dicho en otros términos, el interés jurídico se traduce en la existencia de un derecho legítimamente tutelado y la facultad del titular de ese derecho para hacer valer sus defensas cuando lo estima transgredido con la actuación de una autoridad; por tal motivo, si la demanda de nulidad no fue firmada por la persona que se ostentó como representante legal de la parte actora, es inconcuso que el juicio de nulidad es improcedente, ya que no se demostró el interés jurídico para someter ante este Tribunal la legalidad del acto controvertido.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4609/07-12-01-9.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de enero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Georgina Yáñez Arroyo.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

VI-TASR-XIII-33

SOCIEDADES COOPERATIVAS.- SÍ PUEDEN CONTAR CON PERSONAL QUE LES PRESTE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, CON EL CUAL GUARDAN RELACIÓN LABORAL, Y EN ESE SENTIDO DEBEN CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.- Si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en la resolución impugnada, llegó a la conclusión de que la actora, una sociedad cooperativa, debía efectuar el pago de aportaciones y amortizaciones por las personas señaladas en la liquidación, con base en los propios documentos acompañados por el referido enjuiciante, dicha actuación es legal, porque ese tipo de sociedades sí puede contar con trabajadores a su cargo. En efecto, el artículo 65 de la Ley General de Socieda-

des Cooperativas establece que éstas pueden contar con trabajadores asalariados. Además, el artículo 29 fracciones II y III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, señala la obligación de los patrones de enterar aportaciones y amortizaciones a dicho instituto. Asimismo, el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo señala a la letra: "Artículo 8o. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio." De manera tal que, el numeral que define la figura del trabajador no hace distinción alguna acerca de a qué tipo de persona moral (por ejemplo, una asociación civil, sociedad anónima de capital variable, sociedad civil de responsabilidad limitada) debe prestarse un servicio personal subordinado, para guardar el referido carácter de trabajador, sino que tajantemente establece que ese trabajo puede prestarse a una persona física o moral. Es de explorado derecho, que la sociedad cooperativa es una persona moral, de allí que las personas que le prestan servicios personales subordinados, son sus trabajadores.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1973/08-12-01-8.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 16 de enero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Erika Elizabeth Ramm González.- Secretario: Lic. Ricardo Vaquier Ramírez.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XIII-34

SOBRESEIMIENTO. ES INFUNDADA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SI SE ALEGA LA NO FORMULACIÓN DE CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN, EN TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES RECAÍDAS A MEDIOS DE DEFENSA ADMINISTRATIVOS.- Si del análisis realizado al es-

crito de demanda que controvierte la resolución recaída al medio de defensa intentado en sede administrativa, se conoce que el promovente hizo valer conceptos de impugnación, ello debe ser un hecho suficiente para considerar que esta Juzgadora se encuentra obligada a analizarlos en cuanto al fondo, puesto que realizar tal examen en una causal de improcedencia, como lo pretende la autoridad, en el sentido de que no se encuentran encaminados a controvertir la legalidad de la resolución recaída al medio de defensa administrativo, significaría prejuzgar sobre la idoneidad de los argumentos que esgrimió el accionante para hacer valer sus acciones en contra de la legalidad de los actos traídos a juicio. En efecto, determinar si los conceptos de impugnación contenidos en el escrito de demanda fueron o no enderezados en contra de la resolución que recayó al medio de defensa administrativo o en contra de la resolución originalmente recurrida, constituye una cuestión que debe ser analizada al entrar al fondo del asunto, lo cual implica necesariamente no realizar un pronunciamiento previo, como lo sería definirla en una causal de improcedencia.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1105/08-12-01-3.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de enero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Ana Elena Suárez López.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-35

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN ACORDE CON EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SI LA AUTORIDAD CONSIDERA QUE DEBEN SUBSANARSE IRREGULARIDADES DEBE REQUERIRSE AL SOLICITANTE AUNQUE SE HAYA FORMULADO DECLARATORIA POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO.- El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, no establece como facultad a favor de la autoridad, para verificar la procedencia de la devolución, requerir a personas distintas de los interesa-

dos, por lo que, la autoridad fiscal no puede formular un requerimiento de esta naturaleza al contador público que formuló la declaratoria que el contribuyente acompañó a su solicitud de devolución, toda vez que, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2610/08-12-01-2.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de enero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Erika Elizabeth Ramm González.- Secretario: Lic. Francisco Antonio Aguirre Gutiérrez.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XIII-36

ACTAS DE VERIFICACIÓN. NO RESULTAN APLICABLES LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS POR LOS ARTÍCULOS 65 A 69 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CUANDO LA EMPRESA VERIFICADA IMPIDE EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD.- Si en el acta de verificación se hizo notar la negativa de la visitada a la verificación y con motivo de ello los verificadores instruyeron el acta sin la firma de quiénes impidieron el acceso y sin la designación de testigos de asistencia, dicha acta no incumple con las formalidades establecidas por los artículos 65 a 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, puesto que, las actas de verificación deben cumplir los requisitos previstos en dichos numerales, únicamente cuando la verificación se lleve a cabo y no cuando personal de la empresa verificada no permitió el acceso al establecimiento objeto de verificación y tampoco se dieron las facilidades a los verificadores para el desarrollo de su labor, pues en ese caso no existe un procedimiento administrativo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1646/08-12-01-2.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el

26 de enero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Erika Elizabeth Ramm González.- Secretario: Lic. Francisco Antonio Aguirre Gutiérrez.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XIII-37

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. ES INFUNDADO QUE LA AUTORIDAD LO SOLICITE AL CONSIDERAR QUE LA FALTA DE EXIGIBILIDAD DE UN CRÉDITO DERIVADO DE UNA BOLETA DE INFRACCIÓN, IMPLICA LA INEXISTENCIA DE INTERÉS JURÍDICO DEL PARTICULAR A QUIEN FUE DIRIGIDA.- El interés jurídico constituye la titularidad de un derecho a cargo de los gobernados, que le legitima para tomar las acciones legales conducentes, a fin de obtener incluso de los órganos de impartición de justicia, en su caso, la protección de esos derechos. Luego, si la demandada pretende el sobreseimiento del juicio de nulidad atendiendo al hecho de que la boleta de infracción consignada como resolución impugnada, no afecta el interés jurídico del particular, porque a pesar de haberse determinado en cantidad líquida, su exigibilidad no se ha actualizado en función de que no ha actuado en esos términos la autoridad competente, razón suficiente para estimar que no hay agravio que se cause al particular, debe considerarse infundada su pretensión, ya que el interés jurídico implica la posesión de un derecho, que al verse vulnerado con la actuación de la autoridad administrativa, da legitimación al particular para accionar los órganos de impartición de justicia correspondientes con la finalidad para obtener la protección de ese derecho. Entonces, la determinación de una sanción a cargo de la parte demandante sí afecta su interés jurídico, ya que existe una liquidación de parte de autoridad competente, quien consideró que ese gobernado en particular se ubicó en el supuesto jurídico que actualizó una infracción castigable con una multa, y que puede causar una eventual injerencia en el patrimonio del particular, quien se verá, por razón de la determinación emitida, obligado a disminuir su patrimonio, con el fin de cubrir el

monto de la sanción que le fue impuesta con motivo de la acción u omisión en que incurrió y que conforme a ley, se encuentra contemplada como una infracción a las disposiciones jurídicas aplicables. Ello es así porque la afectación al interés jurídico no se encuentra supeditada a la exigibilidad del crédito determinado a cargo de los particulares, ni a la aplicación del procedimiento coactivo para obtener su cobro ejecutivo, puesto que contrario a la pretensión de la demandada, no existe precepto legal alguno que estatuya esa circunstancia, como requisito indispensable para acreditar el interés jurídico de los particulares y como presupuesto necesario para controvertir determinaciones de autoridad administrativa.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2497/08-12-01-3.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27 de enero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Ana Elena Suárez López.

LEY ADUANERA

VI-TASR-XIII-38

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN. SU DEBIDA DETERMINACIÓN.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado para poder afectar válidamente la esfera jurídica del gobernado. Ahora bien, cuando la autoridad aduanera determina que el contribuyente en su carácter de poseedor y/o tenedor de las mercancías de procedencia extranjera, no acredita su legal importación, estancia o tenencia en territorio nacional y que por ello, era responsable de la comisión de las infracciones contenidas en el artículo 176, fracciones I y X, de la Ley Aduanera vigente en 2008, es inconcuso que tal determinación, cumple con los requisitos formales de fundamentación y motivación exigidos por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, fracción IV,

del Código Fiscal de la Federación, al existir la debida adecuación entre los razonamientos expresados por la autoridad aduanera, como de los preceptos invocados como fundamento.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1757/08-12-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 10 de febrero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Leticia Cordero Rodríguez.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-TASR-XIII-39

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD. ES INFUNDADA CUANDO LA AUTORIDAD ALEGA FALTA DE INTERÉS JURÍDICO POR NO ENCONTRARSE "VIGENTE EN EL SISTEMA" EL CRÉDITO FISCAL CONTROVERTIDO.- Si la actora controvierte la legalidad de un crédito fiscal aduciendo su ilegal notificación, y que lo conoció a través de las diligencias de requerimiento de pago y embargo realizadas para hacerlo efectivo, y la autoridad solicita el sobreseimiento del juicio, por falta de interés jurídico en función de que ese adeudo "no se encuentra vigente en su sistema", debe negarse esa petición. En efecto, es incorrecta esa apreciación del numeral 8, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que la manifestación de la autoridad en el sentido de que determinado crédito fiscal "no se encuentra vigente en su sistema" no significa que no se afecte el interés jurídico del particular a quien fue dirigido, pues la existencia del crédito y las repercusiones jurídicas que pueden resultar de él, no se eliminan por el simple hecho de que no se encuentren vigentes en el sistema de la autoridad, porque con las aseveraciones vertidas por la autoridad se desconocen los alcances que puede tener esa circunstancia y si el crédito en sí mismo considerado ha iniciado una vida jurídica (y por ende sus efectos contra el particular), a partir del momento en que fue notificado al particular, máxime si se

toma en consideración que en el caso esos efectos se han actualizado con el inicio del procedimiento administrativo de ejecución que dio origen al juicio, que evidencian que se ha pretendido hacer efectivo su cobro en la vía coactiva.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2594/08-12-01-3.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 10 de febrero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Ana Elena Suárez López.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-40

CARGA DE LA PRUEBA. LE CORRESPONDE A LA AUTORIDAD DEMANDADA DEMOSTRAR QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA CONTIENE FIRMA AUTÓGRAFA DEL FUNCIONARIO EMISOR, CUANDO NO SE ACREDITA SU LEGAL NOTIFICACIÓN.- Cuando el demandante niega que la resolución impugnada no contiene firma autógrafa del funcionario emisor, y exhibe para acreditar su dicho la resolución que manifiesta encontró en su domicilio, la carga de la prueba le corresponde a la autoridad demandada a fin de demostrar que dicha resolución sí tiene firma autógrafa del funcionario que la emitió, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, sin embargo, si la enjuiciada al contestar la demanda manifiesta que con el acta de notificación se acredita la entrega con firma autógrafa de la resolución impugnada y la Sala declara la nulidad de la diligencia de notificación, resulta evidente que el documento que ofreció como prueba la parte actora en la instancia de nulidad en que se actúa, es el que encontró en su domicilio, y en el cual no consta la firma autógrafa del funcionario emisor; entonces se debe concluir que el original de la resolución controvertida obra en poder de la autoridad y por lo tanto se encontraba obligada a exhibirlo, pues sólo de esta manera se podría tener la certeza jurídica de que dicha resolución sí fue firmada autógrafamente por el funcionario competente, sin que en la

especie dicho documento haya sido exhibido, por ende, al no existir elementos de convicción que lleven a esta Juzgadora a corroborar que la resolución impugnada efectivamente se emitió con firma autógrafa del funcionario emisor, en razón de que el documento exhibido es una copia del mismo, debe concluirse que en dicho acto controvertido no existe la circunstancia idónea para autentificarlo, es decir, la firma autógrafa del funcionario emisor, por tanto, lo procedente es declarar su nulidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la misma se dictó en contravención a las disposiciones legales debidas, como resulta ser el artículo 38, fracción V, del Código Fiscal de la Federación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 56/08-12-01-9.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de febrero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Georgina Yáñez Arroyo.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-TASR-XIII-41

CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- DEBE ATENDERSE AL TÉRMINO GENÉRICO DE CINCO AÑOS TRATÁNDOSE DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS.- Existe un vacío en lo establecido en el artículo 297 de la Ley del Seguro Social para regular la forma en que se realizará el cómputo para que se extinga la facultad prevista en el numeral 251, fracción XIX del citado ordenamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, para ordenar y practicar las investigaciones, así como emitir los dictámenes respectivos en el caso de responsabilidad solidaria porque el deudor principal hubiese cambiado su domicilio fiscal sin presentar el aviso correspondiente, por lo que resulta procedente acudir al plazo previsto en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, para conocer cuándo se extinguió

la facultad de la autoridad para determinar la responsabilidad solidaria de socios o accionistas de personas morales deudoras

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1796/08-12-01-2.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de febrero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Erika Elizabeth Ramm González.- Secretario: Lic. Francisco Antonio Aguirre Gutiérrez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-42

CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN.- CUANDO EL ACTOR ARGUMENTE QUE SON ILEGIBLES, DEBE SEÑALAR QUÉ PARTE CONSIDERA ILEGIBLE.- Si la accionante señala que las constancias de notificación y de los citatorios previos exhibidos por la autoridad al contestar la demanda, son completamente ilegibles en los espacios que fueron llenados a mano por el notificador y que por tal motivo se impide la lectura del texto en su integridad y advertir con claridad su contenido, la actora debe precisar cuál es la parte de la constancia de notificación que estima ilegible y además de indicar de qué forma tal circunstancia le resta legalidad a las constancias de notificación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2123/08-12-01-5.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Erika Elizabeth Ramm González.- Secretaria: Lic. Cristina Mireya Juárez Ruíz.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-43

MULTAS FORMALES, IMPUESTAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 82 FRACCIÓN I INCISO B) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- DEBE APLICARSE LA VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- La autoridad al imponer la sanción, fundándola en los artículos 82, fracción I, inciso b) y 70, párrafos primero y tercero del Código Fiscal de la Federación, ante la naturaleza de la sanción impuesta, la cual deriva del incumplimiento en la presentación de la declaración anual del ejercicio a requerimiento de autoridad, la norma aplicable sería la que se encontrara en vigor al momento de la causación de esa infracción. Empero, el particular tenía la obligación de presentar su declaración anual del ejercicio de dos mil siete, a más tardar el día treinta de abril de dos mil ocho, según se desprende del primer párrafo del artículo 175 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Como la autoridad fiscal, detectó la omisión de presentar esa declaración anual, emitió un requerimiento, el cual se notificó el día siete de agosto de dos mil ocho y al no haber dado cumplimiento al requerimiento antes mencionado, el contribuyente cometió una infracción de tracto instantáneo, por lo tanto, el precepto legal aplicable es precisamente el vigente en dos mil ocho y no la vigente en dos mil siete, pues en esa fecha no se cometió la infracción.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3190/08-12-01-8.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Erika Elizabeth Ramm González.- Secretario: Lic. Ricardo Vaquier Ramírez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-44

SUSPENSIÓN DE LA CADUCIDAD TRATÁNDOSE DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, CASO EN QUE NO PROCEDE.- De acuerdo al artículo 26, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, para que se pueda tomar en cuenta un plazo de tres años para la caducidad, es necesario que exista una garantía del interés fiscal y que ésta resulte insuficiente; por lo que en ese contexto, si se finca responsabilidad solidaria y no se acredita que haya o hubiera una garantía del interés fiscal, no se aplicará el plazo de tres años para acreditar la caducidad en cuanto a la responsabilidad solidaria, por lo que resulta aplicable el plazo general de cinco años a que se refiere el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, conforme al citado artículo 26, para tener a una persona física como responsable solidario, se tienen que acreditar dos supuestos, uno que esa persona ejerza la dirección, gerencia general o administración única de la persona moral; en segundo lugar se debe de tener por acreditado que la persona moral, cambió de domicilio fiscal sin presentar el aviso legal a que está obligada, supuesto que va enlazado con el hecho de que, a su vez, ese cambio de domicilio fiscal se realice cuando se hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, asimismo debe haber el cambio de domicilio fiscal después de notificado el crédito que se fincó con motivo de las facultades de comprobación, o bien el cambio de domicilio fiscal se realice antes de que se cubra ese crédito o haya sido dejado sin efectos; por tanto, no sólo tiene que haber el cambio de domicilio fiscal de la persona moral sin presentarse el aviso legal correspondiente, sino que tal cambio se dé, cuando se hubieran iniciado las facultades de comprobación de la autoridad. En el mismo sentido cuando se trata de la suspensión de la caducidad, del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación se deduce que es un elemento importante que la autoridad ejerza facultades de comprobación, pues para que opere esa suspensión es necesario que haya un cambio de domicilio fiscal sin la presentación del aviso legal correspondiente o con un domicilio fiscal incorrecto y que por ese motivo no se pueda iniciar el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, por lo que al no haber en el juicio de nulidad

prueba que demuestre el inicio de las facultades de comprobación de la autoridad demandada, no hay razón para considerar que se pueda suspender el plazo de la caducidad para determinar una responsabilidad solidaria al actor, ya que para que tal suspensión se realice es necesario que haya un cambio de domicilio fiscal de la persona moral siempre que se hubieran iniciado las facultades de comprobación de la autoridad o bien que al no haber aviso de cambio de domicilio fiscal se hubiera impedido a la autoridad el inicio de alguna de sus facultades de comprobación, de ahí que la autoridad se encuentre obligada a respetar el plazo de cinco años para determinar que el hoy actor es responsable solidario de la empresa de que es accionista, contados a partir de que se debió realizar el pago de las cuotas obrero patronales.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1812/08-12-01-1.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretaria: Lic. María Aurora Ayala Rodríguez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-45

DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE. ES ILEGAL SU NEGATIVA AL HABERSE ACREDITADO EN EL JUICIO DE NULIDAD, QUE NO EXISTE INCONSISTENCIA ALGUNA EN LA DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PRESENTADA POR LA CONTRIBUYENTE.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2008, las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. Igualmente, en el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate. Ahora bien, si la autoridad fiscal, al analizar una declaración anual de impuesto sobre la renta, encontró la inconsistencia referente

a que el retenedor manifestó montos diferentes de las retenciones por la relación laboral o comercial con la contribuyente; y si en el juicio contencioso administrativo promovido por la actora, quedó acreditado que no existía inconsistencia alguna, en tanto que el monto de la retención declarada por la contribuyente ahora actora, coincide con el importe manifestado por el retenedor, es inconcuso que la autoridad fiscal negó indebidamente el impuesto sobre la renta solicitado en devolución.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3172/08-12-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Leticia Cordero Rodríguez.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VI-TASR-XIII-46

REPRESENTANTE COMÚN DE LA COPROPIEDAD. ES EL OBLIGADO LEGALMENTE A OBSERVAR LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (vigente en 2004).- De conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2004, el representante común de la copropiedad será quien a nombre de los copropietarios cumpla con las obligaciones establecidas en ese cuerpo legal; obligación que relacionada con el artículo 5, segundo párrafo de la misma ley, se actualiza con la realización de los pagos mensuales de la contribución mediante declaración, que debe presentarse a más tardar los días 17 del mes siguiente a aquél por el que correspondiera el pago. En esos términos, si se causa la contribución con motivo del arrendamiento de un bien inmueble, que además tiene la particularidad de estar sujeto a la figura jurídica de la copropiedad, es inconcuso que la obligación de mérito debe ser cumplida por el representante común de dicha copropiedad, en virtud de un mandamiento expreso de ley, como lo es el numeral 32, antepenúltimo párrafo antes señalado. En efecto, al estar ante la presencia de un bien

cuyos derechos y obligaciones se ejercen en copropiedad por los condueños, y que el legislador ordinario impuso a un sujeto en particular el cumplimiento de la obligación fiscal de efectuar los pagos mensuales definitivos de la contribución aludida, a saber, al representante común de la copropiedad, es consecuente que sobre esa única persona recae el total y debido cumplimiento de la exigencia jurídica, circunstancia que no se elimina con realizar una interpretación del texto normativo y con base en ello considerar que únicamente le corresponde observar la obligación respecto de la parte alícuota que conforme al régimen de copropiedad le perteneciera, sino el compromiso en su integridad. Por ende, si el particular pretende demostrar que no existe perjuicio al fisco federal porque cada uno de los copropietarios hubiese realizado el entero del impuesto conforme al porcentaje del bien inmueble cuyo arrendamiento causó el tributo, y que en esas condiciones la obligación se encuentra cumplida, es claro que realiza una distinción donde la ley no lo hizo, es decir, si el precepto legal aplicado dispone la existencia de dos requisitos para que se dé una consecuencia legal, y ambos se cumplen, entonces el resultado lógico y consecuente de tal actualización, se materializa en el nacimiento de una obligación que debe ser cumplida precisamente por aquél sujeto a quien la ley le impuso ese deber, de manera total y completa, y no conforme a la distinción alegada, es decir, de acuerdo a la parte alícuota que le correspondiera en función de la división de la copropiedad, pues las leyes fiscales son de aplicación estricta, en términos del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, razón suficiente para considerar que si el texto normativo obliga al representante común a cumplir con las obligaciones para los contribuyentes que se encuentren sujetos al pago del impuesto al valor agregado, por un bien sujeto a copropiedad, es solo él quien debe realizar las acciones necesarias para observar tal mandato y cumplir con las obligaciones tanto de forma y de fondo que le sean inherentes dada su situación jurídica particular, sin restricciones ni interpretaciones de ninguna clase.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1530/08-12-01-3.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Ana Elena Suárez López.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-47

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE NULIDAD EN CUALQUIER MOMENTO, CUANDO AFECTE EL INTERÉS JURÍDICO DE UN TERCERO.- En primer término, es de precisar que de acuerdo al artículo 117, fracción II, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, establece que procede el recurso de revocación en contra de los actos de autoridades fiscales, que exijan el pago de créditos fiscales o bien que se dicten dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución, entonces pueden esos actos ser impugnados en ese recurso administrativo, sin embargo la optatividad se coarta con lo dispuesto en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, que establece que cuando un particular impugne el Procedimiento Administrativo de Ejecución porque no se ajustó a la ley, sólo podrán hacerlo mediante la presentación del recurso de revocación ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, por tanto de la interpretación relacionada de los preceptos en comento, se tiene que no se establece la optatividad tratándose de la impugnación de actos de Procedimiento Administrativo de Ejecución por violaciones a la Ley. En cambio, el mismo artículo 117, fracción II inciso c) del Código Fiscal de la Federación, presenta un caso distinto para la procedencia del recurso de revocación, que será cuando afecte el interés jurídico de un tercero, en relación con lo que dispone el artículo 128 del mismo Código, en donde se establece que el tercero que afirme ser propietario de bienes, negociaciones o titular de derechos embargados, puede interponer recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se fije el remate. Así, la propia Ley distingue entre la impugnación del Procedimiento Administrativo de Ejecución por particulares a quien se dirige el procedimiento, cuando aleguen que tal procedimiento se dictó en contravención a la Ley y la impugnación del embargo de bienes por parte de un particular tercero que alegue que dichos bienes son de su propiedad; ya que en el primer supuesto se coarta la optatividad de la interposición del recurso de revocación hasta el momento en que se publique la convocatoria de remate; en cambio, el tercero a quien afecte su interés jurídico el

embargo a sus bienes, puede en todo momento y hasta antes del remate, interponer el recurso de revocación, por lo que no existe una limitación a la opción de elegir entre dicho recurso de revocación y el juicio de nulidad; en esas circunstancias cuando el tercero opte por el juicio de nulidad éste será procedente.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3009/08-12-01-1.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretaria: Lic. María Aurora Ayala Rodríguez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-48

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE PERSONA FÍSICA. SE CONCRETA LEGALMENTE CUANDO LA ASUME EN EL ACTA DE EMBARGO OFRECIENDO UN BIEN INMUEBLE, SIN TENER QUE ACREDITAR EL PORCENTAJE DE SUS INGRESOS.- Los artículos 141, fracción IV, 152, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación y 64 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, establecen los requisitos legales que se deben cumplir cuando se trata de un responsable solidario. En resumen el artículo 152 del Código Fiscal de la Federación, establece que es una obligación del ejecutor que lleve a cabo la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes, el levantar un acta pormenorizada por escrito. Ahora bien, los artículos 141, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y 64 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, se complementan en cuanto a la responsabilidad solidaria de un tercero, ya que ésta es una de las formas con que los contribuyentes pueden garantizar el interés fiscal, siempre y cuando el tercero sea idóneo y solvente, con el requisito de que sea tal tercero quien asuma la responsabilidad. El asumir esa responsabilidad solidaria se concreta cuando el tercero la acepta a través de un escrito firmado, ya sea ante notario público o ante la autoridad recaudadora a la que se le encomendó el cobro,

requiriéndose para tal efecto la presencia de dos testigos. Así, cuando en el Procedimiento Administrativo de Ejecución dirigido a una persona moral para hacer efectivos créditos a su cargo, el ejecutor hace constar, entre los hechos acontecidos al momento de llevarse a cabo el embargo, el que la persona física por su propia voluntad manifestó ser responsable solidario de la persona moral deudora, ofreciendo un bien inmueble de su propiedad, con los datos del instrumento notarial que acredita su propiedad se actualiza el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, ya que con eso, acepta por escrito la responsabilidad solidaria ante la autoridad que tiene encomendado el cobro, ya que el ejecutor precisamente actúa en representación de la Administración Local de Recaudación, que es la autoridad ejecutora, cumpliéndose con los extremos que previene la fracción I del artículo 68 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Además, no es aplicable lo previsto en la fracción III del artículo 64 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, que establece la obligación para el tercero que asuma la obligación de garantizar el interés fiscal, cuando sea una persona física, el que debe de acreditar que la garantía es menor al 10% de sus ingresos declarados en el último ejercicio sin incluir el 75% de los ingresos declarados como actividades empresariales y del 10% del capital afecto a la actividad empresarial, ya que ese supuesto difiere al supuesto de ofrecimiento de un bien inmueble, pues este último no puede estar sujeto a los porcentajes que se citan en dicho precepto.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3009/08-12-01-1.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretaria: Lic. María Aurora Ayala Rodríguez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-49

RECURSO DE REVOCACIÓN. LA AUTORIDAD FISCAL NO ESTÁ OBLIGADA A DAR A CONOCER AL RECURRENTE, LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UNA SOLICITUD DE CONDONACIÓN DE MULTAS, AL NO ACTUALIZARSE LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 117 Y 129, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Cuando se impugne un acto administrativo, del que se alegue que la resolución determinante no fue notificada, debe tratarse, por disposición de la Ley, sólo de aquellos que sean recurribles en términos del artículo 117, del Código Fiscal de la Federación, para que surja la posible aplicación del artículo 129 del propio Código Fiscal. En esos términos, para la procedencia en la aplicación del referido artículo 129, del Código Tributario Federal, tiene que ser una resolución definitiva que se haya manifestado desconocer o que se conoce pero que no fue notificada o que lo fue ilegalmente notificada; pero en ningún caso, será aplicable este dispositivo legal cuando se trate de una resolución dictada por la autoridad fiscal respecto de una solicitud de condonación de multas; máxime que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, del Código Fiscal de la Federación, la solicitud de condonación de multas, no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la autoridad fiscal al respecto, no podrán ser impugnadas por los medios de defensa que establece el Código Tributario Federal.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2830/08-12-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Leticia Cordero Rodríguez.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

VI-TASR-XIII-50

ACUERDO 45175 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, INCUMPLE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5° DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INFONAVIT, AL NO DEMOSTRARSE POR LA AUTORIDAD DEMANDADA LA EXISTENCIA DE LA PROPUESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL MENCIONADO INSTITUTO.- Del análisis al artículo referido, se advierte que establece que los Delegados Regionales, los Representantes de la Dirección General y el Coordinador del Distrito Federal del propio Instituto ejercerán sus facultades dentro de la circunscripción territorial que determine el Consejo de Administración a propuesta del Director General del INFONAVIT, en tal virtud, si el promovente del juicio de nulidad niega lisa y llanamente en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que para la emisión del Acuerdo 45175, por el que se establece la competencia referida y que fue invocado en la resolución controvertida, haya existido propuesta del Director General en la que se plantee al Consejo de Administración la circunscripción territorial de los Delegados Regionales, los Representantes de la Dirección General y el Coordinador del Distrito Federal, y no obstante la carga probatoria trasladada, la autoridad demandada no demuestra que exista la propuesta de trato, resulta inconcuso que el Acuerdo 45175 a través del cual se determina la circunscripción territorial en la que los Delegados Regionales, Representantes de la Dirección General y el Coordinador del Distrito Federal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ejercerán sus atribuciones en materia fiscal, no se ajusta a derecho, al haberse emitido sin observar el procedimiento expresamente establecido en el citado artículo 5° del Reglamento Interior del INFONAVIT.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3093/08-12-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el

27 de abril de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretario: Lic. Gilberto Arturo Gómez Aguirre.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

VI-TASR-XIII-51

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, ES COMPETENTE PARA PRONUNCIARSE SOBRE LOS VICIOS DE LEGALIDAD EN LA EMISIÓN DEL ACUERDO 45175 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, AUN CUANDO EL PROMOVENTE NO LO SEÑALE EN SU DEMANDA COMO RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN FORMA DESTACADA.- En términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el juicio de nulidad procede en contra de los Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación, luego entonces, aun cuando el promovente no lo señale en su demanda como resolución impugnada en forma destacada, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra facultado para analizar los argumentos expresados en contra de la emisión del Acuerdo 45175 emitido por el Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se determina la circunscripción en la que los Delegados Regionales, Representantes de la Dirección General y el Coordinador del Distrito Federal de propio Instituto, ejercerán sus funciones en materia fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 1999 y pronunciarse en la parte considerativa de la sentencia sobre la legalidad del mismo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3093/08-12-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el

27 de abril de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretario: Lic. Gilberto Arturo Gómez Aguirre.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XIII-52

IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS.- PRESCRIPCIÓN PARA SU.- De conformidad con lo previsto por el citado artículo 79, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la facultad de la autoridad para imponer sanciones administrativas prescribe en cinco años, desde el día en que se cometió la falta o infracción administrativa si fuere consumada o, desde que cesó si fuere continua. Ahora bien, al quedar acreditado que para la notificación de la multa impuesta por concepto de infracciones a la Ley de Aguas Nacionales, ya había transcurrido un período mayor al de los cinco años a que se refiere el artículo 79, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es inconcuso que prescribieron las facultades de la Comisión Nacional del Agua para emitir la resolución sancionadora.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 123/09-12-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de mayo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Leticia Cordero Rodríguez.

SALA REGIONAL DEL PACÍFICO

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XVII-1

VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. ES LEGAL SI SE ENTIENDE CON UNA PERSONA QUE SE OSTENTA COMO EMPLEADA DEL CONTRIBUYENTE VISITADO.- El artículo 49, del Código Fiscal de la Federación, establece las reglas a que se encuentra sujeto un procedimiento de fiscalización para verificar la expedición de comprobantes fiscales, y en su fracción II, prevé que al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección. En este tenor de ideas, si del acta levantada se aprecia que la diligencia respectiva se entendió con una persona que se ostentó con el carácter de empleada del contribuyente visitado y es la única que se encontraba en el domicilio al momento de la verificación, se estima que el visitador ajustó su actuación a lo establecido en el numeral que nos ocupa, puesto que resulta obvio que la persona referida era la que estaba al frente del negocio, por ello resultaba innecesario que el personal adscrito a la autoridad fiscalizadora requiriera la presencia del buscado o de su representante legal para llevar a cabo la visita, en virtud de que la misma se puede efectuar con cualquiera de las personas que enlista el multicitado artículo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1244/07-14-01-4.- Resuelto por la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 17 de enero de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Guadalupe Pillado Pizo.- Secretario: Lic. Alejandro Ubando Rivas.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XVII-2

DEVOLUCIÓN, VERIFICACIÓN DE PROCEDENCIA DE LA. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE ÚNICAMENTE PUEDE REQUERIR LA AUTORIDAD FISCAL AL CONTRIBUYENTE.- De conformidad con el artículo 22, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal para verificar la procedencia de las solicitudes de devolución presentadas por el contribuyente, puede válidamente requerir al contribuyente los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con las solicitudes de devolución, sin embargo, la autoridad fiscal únicamente puede requerirle al contribuyente, la documentación e información que las disposiciones legales aplicables le obliguen a obtener, llevar, conservar y proporcionar a las autoridades fiscales, ya que no existe precepto legal que obligue al contribuyente a obtener y presentar cartas membretadas en original de sus clientes en el extranjero debidamente firmadas, donde éstos ratifiquen que efectuaron operaciones con el contribuyente por los periodos en que está solicitando la devolución del impuesto al valor agregado, así como tampoco existe precepto legal que obligue al contribuyente a obtener y presentar copias de las identificaciones oficiales de los clientes en el extranjero con quienes efectuó operaciones comerciales por los periodos en que está solicitando la devolución del impuesto al valor agregado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2059/07-14-01-7.- Resuelto por la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 17 de junio de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Guadalupe Pillado Pizo.- Secretario: Lic. Edgar Eugenio Navarro Ibarra.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-TASR-XVII-3

EL ACUSE RECIBO IMPRESO CRIPTOGRÁFICO O EL REPORTE IMPRESO DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL DISKETTE, CON SU SELLO DE RECIBO, EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DESVIRTÚA LA NEGATIVA DE PRESENTACIÓN DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS QUE HACE EL ACTOR.- No obstante que conforme a lo establecido en el artículo 4º del Reglamento de Afiliación, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la facultad de certificar la información del patrón conservada en medios magnéticos y con fundamento en el artículo 286-L de la Ley del Seguro Social, produce los mismos efectos que los documentos firmados autógrafamente; al negar lisa y llanamente el patrón haber recibido el acuse recibo criptográfico de los trámites que se le atribuyen, las consultas individuales presentadas por la autoridad mediante su contestación, no tienen valor probatorio pleno, ya que al omitir el Instituto Mexicano del Seguro Social, desvirtuar la negativa efectuada en el sentido de haber recibido el Acuse de Recibo Criptográfico, relativo a los movimientos de afiliación supuestamente enviados por medios electrónicos; si tenemos que la parte final del artículo 3º, del Reglamento de Afiliación del Seguro Social, establece que en los casos en los que los patrones exhiban sus movimientos de afiliación en disco magnético, el Instituto tiene la obligación de entregar "*una constancia de los movimientos afiliatorios realizados*", al negar el patrón haber recibido de la autoridad, la constancia de recibo de los movimientos afiliatorios presentados, el medio probatorio idóneo para acreditar la relación laboral negada, es el reporte impreso de la información que contiene el diskette que supuestamente presentó el patrón ante el Instituto, con su respectivo sello de recibo, por lo que al no hacerlo, en términos de lo establecido en el artículos 42, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad no acreditó la relación laboral que se le imputa al patrón, de ahí que, con las consultas individuales ofrecidas como prueba, con fundamento en el tercer párrafo, del artículo 3, del Reglamento de Afiliación del Seguro Social, en relación con lo establecido en el artículo 210-A, del Código de

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, no acreditó la fiabilidad de las consultas individuales que ofreció en copias certificadas mediante su contestación de la demanda.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 841/07-14-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de febrero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Guadalupe Pillado Pizo.- Secretaria: Lic. Norma Alicia Leyva Contreras.

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

VI-TASR-XVII-4

COMPETENCIA DEL JEFE DE LA OFICINA PARA COBROS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SU DEBIDA FUNDAMENTACIÓN PARA FIRMAR EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL SUBDELEGADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- En atención a que el artículo 159 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, está integrado por distintos apartados o elementos en los que se indican qué funcionarios públicos suplirán las ausencias de otros funcionarios públicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para estimar que el Jefe de la Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social, funda debidamente su competencia para firmar en suplencia por ausencia del Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, debe fundar su actuación en el artículo 159, primer párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, por ser el aludido primer párrafo el que prevé que los Jefes de la Oficinas para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social, suplirán las ausencias de los Subdelegados del Instituto Mexicano del Seguro Social en el despacho de los asuntos fiscales.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1982/08-14-01-7.- Resuelto por la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de mayo de 2009, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: María Guadalupe Pillado Pizo.- Secretario: Lic. Edgar Eugenio Navarro Ibarra.

SALA REGIONAL PENINSULAR

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XVI-24

RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO APLICA UNA SANCIÓN COMO MEDIDA DE APREMIO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO SE SURTE LA COMPETENCIA MATERIAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- Si en juicio contencioso administrativo se controvierte una resolución por medio de la cual un Agente del Ministerio Público Federal aplica una sanción como medida de apremio, no se surte ninguno de lo supuestos a los que se refiere el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues si bien dicha autoridad queda ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal para el despacho de los asuntos que le atribuye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se indica en el artículo 1º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y pudiera considerarse que se trata de una resolución emitida por autoridad administrativa, es el caso, que por disposición expresa del artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, quedan excluidas de su aplicación, la materia fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, así como las actuaciones del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales; siendo que la resolución contiene una multa aplicada dentro de la instrucción de una averiguación previa, con motivo de la indagatoria por la comisión de un probable delito, por ello escapa de la competencia material de este Tribunal, por estar vinculada a la materia penal y a las funciones constitucionales que le competen al Ministerio Público.

Recurso de Reclamación Núm. 1099/09-16-01-5.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de octubre de 2009, por unanimidad.- Magistrada Instructora: Juana Griselda Dávila Ojeda.- Secretario: Lic. Luis Alfonso Marín Estrada.

SALA REGIONAL CHIAPAS-TABASCO

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXV-11

DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR.- CASOS EN QUE LA AUTORIDAD PROCEDE EN FORMA INDEBIDA NEGÁNDOLA.- El numeral 22 del Código Fiscal de la Federación establece los lineamientos que deben seguirse tratándose del procedimiento de devolución de pago de lo indebido y de las cantidades que proceden conforme a las leyes fiscales; así, la facultad que se consigna en el sexto párrafo de dicho precepto, -relativo a que las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma-, constituye una facultad reglada y no discrecional; por lo tanto, a efecto de determinar si se cumple con el requisito de indispensabilidad de los gastos, que se prevé en el artículo 31, fracción I, de la Ley de Impuesto sobre la Renta, no es dable jurídicamente que la autoridad a partir de una duda, concluya en forma unilateral la improcedencia de la solicitud y atribuya al promovente la falta de acreditamiento de los requisitos que le permitan establecer si es procedente o no tal solicitud, pues para tal efecto y a fin de verificar la procedencia de la devolución solicitada, se encuentra obligada a observar los lineamientos del procedimiento de devolución y efectuar el requerimiento que se prevé en el sexto párrafo del indicado numeral.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 142/09-19-01-1.- Resuelto por la Sala Regional Chiapas-Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 18 de mayo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María del Carmen Ramírez Morales.- Secretaria: Lic. Alejandra Martínez Martínez.

SALA REGIONAL DEL CARIBE

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISITRATIVO

VI-TASR-XXXVI-65

JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA EL DESCONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO.- OPORTUNIDAD PARA SU PRESENTACIÓN.- El artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé los mecanismos para que las personas que se estiman afectadas por un acto de autoridad, puedan acceder a la impartición de justicia, aun sin tener conocimiento pleno del contenido mismo de dicho acto; para tales efectos, el elemento toral que se exige, radica en que por cualquier medio posible, el interesado conozca de su existencia, verbigracia, por la realización de un acto de autoridad ulterior en que se haga referencia al que se pretende impugnar.- En esa tesitura, si desde determinada fecha, la demandante tuvo pleno conocimiento de la existencia de la resolución determinante impugnada; esto, al aplicarse en su contra el procedimiento administrativo de ejecución donde su representante legal atendió dicha diligencia, resulta inconcuso que al menos, desde ese momento, se encontraba en legal aptitud de promover el juicio de nulidad contra la resolución respectiva, aun cuando no conociera plenamente su contenido; por tanto, no encuentra justificación legal, el hecho de que espere hasta la aplicación de ulteriores actos de ejecución, llevados a cabo más de once meses después, para promover juicio de nulidad, bajo el desconocimiento de la resolución determinante de mérito, lo que trae como consecuencia que se pretenda controvertir un acto consentido, actualizando con ello la causal de improcedencia establecida por el cardinal 8, fracción IV, del ordenamiento legal en cita.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 249/09-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de julio

de 2009, por 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Instructora: Nora Yolanda Molina Raygosa.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXVI-66

COORDINADOR DE AUDITORÍA FISCAL DE LA ZONA NORTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ES UNA AUTORIDAD INEXISTENTE Y, POR ENDE, INCOMPETENTE PARA EMITIR ACTOS DE MOLESTIA.- De conformidad con los artículos 1, 2, 4, 17, 18, fracciones I, XI, XIII y XXIII, y Segundo Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Quintana Roo, vigente en mil novecientos noventa y nueve, no se contempla la figura de Coordinador de Auditoría Fiscal de la Zona Norte, de la Dirección General de Auditoría Fiscal, de la Secretaría de Hacienda del Estado de Quintana Roo, ni tampoco se contempla la existencia jurídica de la precitada autoridad en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, ni en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, ni en el Código Fiscal de la Federación, ni en alguna otra ley que rija para la materia de trato; en consecuencia, si la autoridad antes mencionada no está expresamente señalada como se especifica en el acto de autoridad, con la delimitación de su circunscripción territorial, en los cuerpos normativos en los que se contempla a las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Quintana Roo, ni en una ley emanada del Congreso de la Unión, ni tampoco aparece de autos la existencia de un acuerdo que así lo prevea, se concluye que aquélla no tiene competencia legal alguna para emitir actos de molestia a los particulares, por ser inexistente.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1058/08-20-01-2.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Nicandro Gómez Alarcón.- Secretario: Lic. Rogelio Olvera Márquez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXVI-67

IMPUGNACIÓN SIMULTÁNEA DE LA CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN SOBRE UNA MISMA SITUACIÓN JURÍDICA.- FIGURA APLICABLE EN TRATÁNDOSE DEL REQUERIMIENTO DE PAGO DE UN SALDO INSOLUTO AUTODETERMINADO.- La figura jurídica de la caducidad en materia fiscal, prevista por el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, se actualiza como una sanción o limitante del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, ante su inactividad por determinado lapso, siendo que aun en el supuesto de que exista una autodeterminación del contribuyente, puede darse dicha caducidad, respecto de la facultad de la autoridad para verificar la veracidad de la información y correcta cuantificación de la obligación tributaria autodeterminada; por su parte, la prescripción en la materia de trato, prevista esencialmente por el cardinal 146 del código en cita, se erige como una figura jurídica bajo la cual, lo que se limita es la facultad de cobro de la autoridad, respecto de un crédito fiscal, que bien puede derivar de una autodeterminación del contribuyente, o del ejercicio de las atribuciones legales de la propia autoridad.- En mérito de lo anterior, en tratándose de la impugnación de un mandamiento de ejecución, donde la recaudadora se limitó a requerir de pago del saldo insoluto autodeterminado, con sus respectivos accesorios legales, resulta inconcuso, que la figura legal aplicable es la prescripción, puesto que en dicha resolución, la autoridad no ejerció sus facultades de comprobación, para revisar la veracidad de la información proporcionada por el contribuyente y liquidar diferencias u omisiones a los conceptos reportados en la autodeterminación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 171/09-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1º de septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Yolanda Molina Raygosa.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXXVI-68

NEGATIVA FICTA.- ANÁLISIS DE SU LEGALIDAD A LA LUZ DE LO PLANTEADO EN SEDE ADMINISTRATIVA, SIN QUE SE EXHIBA LA CONSTANCIA DEL ACTO RECURRIDO.- SU CONSECUENCIA LEGAL.- Al impugnarse una negativa ficta configurada, este órgano jurisdiccional se encuentra constreñido a resolver el fondo del asunto; al respecto, el cardinal 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé que si la contestación a la demanda no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el promovente impute de manera precisa a la enjuiciada, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados; por su parte, el diverso cardinal 22 del ordenamiento legal en cita, establece que en tratándose de la impugnación de una negativa ficta, con motivo de dicha contestación, se expresarán los hechos y el derecho en que se apoya la misma; no obstante lo anterior, el simple hecho de que no se dé contestación puntual a un determinado argumento, no implica *per se* que irrestrictamente se deba tener por cierto el mismo y se nulifique el acto controvertido; lo anterior, en virtud de que el propio cardinal 19 en comento, regula como supuesto de excepción para tal hipótesis normativa, que aun ante dicha omisión, el argumento de la demandante, incluso planteado en sede administrativa, puede ser desvirtuado por la convicción que arrojen los elementos probatorios que obren en autos, así como por hechos notorios.- En adición a lo expuesto, el cardinal 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, prevé que quien afirma está obligado a probar; por lo cual, si la accionante alegó en sede admi-

nistrativa diversas ilegalidades incurridas en el acto recurrido, que van desde la impugnación directa de la competencia de la autoridad emisora, e incluso la fundamentación y motivación misma de la multa determinada en su contra, resulta inconcuso, que en todo caso, recaía en la actora la carga procesal de aportar la constancia de tal acto, a efecto de acreditar fehacientemente su dicho; corolario a lo anterior, al no ofrecerse ni exhibirse en el juicio tal prueba, no se cuenta con el elemento de certeza necesario para llevar a cabo el estudio y resolución de los argumentos vertidos en contra de la legalidad de dicho acto; por lo cual, lo conducente es reconocer la validez de la resolución negativa ficta impugnada, así como de la recurrida.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 185/09-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Yolanda Molina Raygosa.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

VI-TASR-XXXVI-69

FIDEICOMISO.- ES OBLIGACIÓN DE LOS FIDEICOMISARIOS PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DERIVADAS DEL.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 346, 348, 349 y 350 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el fideicomiso es una figura jurídica consistente en una operación constituida por medio de un acto unilateral de la voluntad del fideicomitente, el cual destina ciertos bienes a un fin lícito determinado en beneficio de uno o varios fideicomisarios, encomendando la realización del mismo a una institución fiduciaria autorizada para operar como tal. Ahora bien, a través de dicha figura se pueden realizar diversas actividades, entre las que se encuentran las empresariales; al efecto, de la adecuada interpretación que se realice al artículo 13 de la Ley del Impuesto

sobre la Renta se desprende que el "fideicomiso" no tiene obligación de presentar declaración anual respecto del gravamen que regula ese ordenamiento, pues la legislación no le reconoce personalidad jurídica propia ya que simplemente se constituye a través de un contrato; y si bien, en dicho numeral se estipula que la institución fiduciaria tiene el deber de cumplir por cuenta del conjunto de los fideicomisarios, las obligaciones señaladas en dicha Ley, entre las que se encuentra la presentación de declaración anual, no puede darse por sentado que dicha institución debe cumplir con tal deber, ya que en el numeral de mérito se precisa que los fideicomisarios deben acumular a sus ingresos que no deriven del fideicomiso, la parte del resultado fiscal de éste (determinado por la fiduciaria en términos de la obligación que el propio numeral 13 le impone) acreditando los pagos provisionales efectuados por la fiduciaria (al ser obligación de ésta enterarlos); por lo que se concluye que la declaración del ejercicio, en cuanto a las actividades empresariales derivadas del fideicomiso, debe ser presentada por los fideicomisarios, pues ellos son los que reciben los frutos o beneficios del fideicomiso; además, son los obligados a efectuar la "acumulación" y "acreditación"; operaciones que necesariamente se realizan en la declaración del ejercicio; concluir lo contrario, iría contra el contenido de dicho numeral 13, ya que la institución fiduciaria tendría que realizar las obligaciones que se imponen a los fideicomisarios; además, tendría que contar con toda la contabilidad de éstos para conocer la totalidad de sus ingresos, no vinculados al fideicomiso, a efecto de poder acumular el resultado o disminuir las pérdidas, según corresponda, aspectos que salen de la finalidad y naturaleza jurídica del fideicomiso, lo que incluso podría llegar al extremo de que la fiduciaria se convirtiera en administradora o gestora de las actividades empresariales de los fideicomisarios, aspecto que no pretendió el legislador.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 403/09-20-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 10 de septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Yolanda Molina Raygosa.- Secretario: Lic. Marcos Gutiérrez Martínez.

SALA REGIONAL ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-173

ARTÍCULO 90, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL SEGUNDO PÁRRAFO APLICA TANTO PARA PRODUCTOS COMO A SERVICIOS.- De la interpretación del artículo 90, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, el legislador estableció la prohibición de registro de una marca cuando las denominaciones que considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, incluyó para conceptualizar las palabras descriptivas o indicativas las que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, pero se considera que abarca tales características tanto a productos como servicios. En efecto, del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 90 de la Ley citada, se advierte que contiene un listado del tipo de palabras que deben considerarse como descriptivas, el cual tiene un carácter únicamente enunciativo mas no limitativo, a referir los casos en los que no habrá que quedar duda sobre el carácter descriptivo de los términos propuestos a registro; sin embargo, es evidente que existen un gran número de vocablos descriptivos que no resultan registrables, aun y cuando no se refieran a la especie, la calidad, la cantidad, la composición, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, puesto que aplica tanto a los productos o servicios.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1613/08-EPI-01-1.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 17 de abril de 2009, por mayoría de 2 votos a

favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Guadalupe del Consuelo Zurita Mézquita.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-174

OFICIO DE IMPEDIMENTO.- AL SER UN ACTO EMITIDO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, ES INNECESARIO QUE CONTENGA LAS CAUSAS O MOTIVOS DE LA DESCRIPTIVIDAD.- Si bien el oficio de cita de impedimento, puede considerarse un acto administrativo que se encuentra constreñido a los requisitos previstos por el numeral 3º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no por ello se puede llegar al extremo de que en dicho oficio se fundamente y motive a detalle la causa de la descriptividad marcaria que aduce la autoridad en la resolución que culmina el procedimiento administrativo de registro marcario, habida cuenta que dicho oficio es un acto preliminar dentro del procedimiento que no tiene el carácter de definitivo; por lo que en todo caso, es la resolución definitiva recaída al documento de negativa de la marca, el que debe colmar plenamente este extremo de motivación jurídica, pues este es el acto real de afectación, tal como se desprende del procedimiento previsto por los numerales 113, 119, 122 y 125 de la Ley de la Propiedad Industrial. De ahí que si el oficio de cita de impedimento no es una actuación de carácter definitivo, que tiene como único propósito hacer del conocimiento del interesado, los posibles obstáculos legales que pueden actualizarse en la resolución definitiva, es claro que con ello no se le deja en estado de indefensión al solicitante, habida cuenta que es a través de la actuación definitiva, en donde se tiene que colmar el requisito de fundamentación y motivación al extremo de exponer las razones jurídicas pormenorizadas para considerar que se actualiza la descriptividad, mismos que el afectado puede combatir mediante la instancia administrativa, o bien, en la vía jurisdiccional, por lo que basta que en el oficio de cita de

impedimento, se señale el obstáculo que se actualiza, así como el fundamento jurídico que lo soporta.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1322/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de mayo de 2009.- Tesis: por mayoría de votos.- Sentencia: por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-175

INTERÉS JURÍDICO DEL PARTICULAR QUE SOLICITA LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD DE UNA MARCA, SI ARGUMENTA TENER UN MEJOR DERECHO POR USO ANTERIOR.- De conformidad con lo establecido en el artículo 151, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, el registro de una marca será nulo cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró. En virtud de lo anterior, el particular que manifieste tener un mejor derecho por tener un uso anterior que el propietario de la marca cuya nulidad se pretende, tiene acreditado el interés jurídico para demandar la solicitud de declaración administrativa de nulidad de una marca, siendo procedente que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al examinar ese requisito de procedibilidad admita la demanda. En efecto, hay coincidencia entre el análisis del concepto de uso de una marca en el país o en el extranjero por hacer valer el mejor derecho por uso anterior; sin embargo, están en dos etapas,

el primero de procedibilidad de la acción de declaración administrativa de nulidad y el segundo del estudio de fondo para examinar si quien hace valer el mejor derecho por uso anterior, efectivamente comprueba haber usado la marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha presentación, o en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró. Lo anterior evidencia que se está antes dos situaciones jurídicas distintas dado que no se le puede juzgar a priori (resolver el fondo) al particular respecto de un elemento de procedibilidad para proteger el interés jurídico del actor.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1235/08-EPI-01-1.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de mayo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Guadalupe del Consuelo Zurita Mézquita.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-176

CONFUSIÓN MARCARIA.- EL ESTUDIO CONJUNTO DE LAS MARCAS, NO IMPLICA LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE ANALIZAR TODOS LOS ASPECTOS DE SIMILITUD O IDENTIDAD DE SUS ELEMENTOS.- De lo establecido por el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, y por los propios criterios jurisdiccionales, se puede desprende que basta con que se actualice alguno de los aspectos de similitud o identidad gráfica, fonética o conceptual entre las marcas en pugna, para que se pueda determinar la similitud o identidad en grado de confusión, ya que es claro que el público consumidor promedio puede asociar cualquiera de éstos, con la titularidad de la marca, siendo uno de ellos suficiente para que se presente la similitud o identidad, y en consecuencia, su eventual confusión. Sin que lo anterior implique la segmentación de la marca, ya que esto es un aspecto distinto al estudio conjunto de sus elementos, pues lo que dispo-

nen los criterios jurisdiccionales, es que la marca se estudie por el conjunto de sus elementos, es decir, por sus *componentes*, entendiéndose como tales, la denominación completa, su gráfico (en caso de marcas mixtas), o bien, el elemento tridimensional que lo conforme; de ahí que sea innecesario que se estudien todos los aspectos de similitud marcaria (fonético, gráfico o conceptual), ya que éstos no se pueden considerar elementos del signo marcario, sino en todo caso, aspectos que deben considerarse al momento de estudiar "los elementos" que integran las marcas, por lo tanto, son cuestiones distintas.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 369/09-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 8 de junio de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-177

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- PUEDE DECRETARSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO LA IMPROCEDENCIA RESULTE EVIDENTE.- De conformidad con los artículos 8º, 9º y 49, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la procedencia del juicio es un supuesto procesal que debe cumplirse, a fin de poder estudiar las pretensiones de la actora en una sentencia de fondo. Asimismo, de dichos preceptos se desprende la posibilidad para que en cualquier etapa del proceso, se pueda estudiar de oficio la procedencia de la instancia, habida cuenta que en nada beneficiaría a las partes el desarrollo del juicio, si su resultado fuera invariablemente la improcedencia del mismo. Así las cosas, es apegado a derecho el sobreseimiento del juicio, previo al cierre de instrucción, si de autos se desprenden elementos suficientes que permitan colegir,

la evidente improcedencia de la instancia, tal como lo puede ser, la extemporaneidad en la presentación de la demanda, atento a lo previsto por los numerales 8º, fracción IV, 9, fracción II y 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 13 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que el total desarrollo del procedimiento, en nada variaría la resolución de sobreseimiento correspondiente.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2555/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de junio de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-178

MARCAS MIXTAS.- PARA DETERMINAR SU SIMILITUD EN GRADO DE CONFUSIÓN, DEBE ATENDERSE AL CONJUNTO DE SUS ELEMENTOS, ASÍ COMO AL CASO EN CONCRETO.- Para llevar a cabo el estudio de similitud o identidad en grado de confusión, tratándose de marcas mixtas, debe atenderse a la totalidad de los elementos que componen las marcas en cuestión, esto es, a su parte nominativa y a sus gráficos, a fin de determinar cuáles son los elementos que más destacan. De tal suerte que es insuficiente considerar que el elemento de mayor preponderancia, tratándose de marcas mixtas, es siempre la denominación, ya que ésta no puede ser una regla invariable en todos los casos, pues debe atenderse a las características y elementos particulares de cada marca; máxime que este criterio sólo es aplicable en el análisis de la similitud o identidad *gráfica* o *conceptual*, pues es evidente que en el aspecto fonético, para determinar su similitud, sólo puede atenderse a las denominaciones, que son las que son susceptibles de provocar sonidos, al ser pronunciadas.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1979/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 17 de junio de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-179

TRÁMITE.- NO PROCEDE REANUDARSE, SI SE ABANDONÓ LA SOLICITUD QUE LO INICIÓ.- De conformidad con los artículos 64, 181 y 186 de la Ley de la Propiedad Industrial y 8 de su Reglamento, en ningún caso puede reanudarse el trámite o procedimiento terminado por abandono de la solicitud que lo inició; por lo tanto, siendo que la motivación para no acordar de conformidad la solicitud del cambio por fusión de una persona moral a otra persona jurídico colectiva, es precisamente que el trámite de la solicitud de patente de invención normal que inició dicho expediente de patente, se declaró abandonada, la actuación de la autoridad administrativa se encuentra apegada a derecho, al no haber sido impugnada tal declaración de abandono por la parte afectada, por lo tanto, es de considerarse que se consintió plenamente dicha resolución en los términos que se emitió.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1973/08-EPI-01-1.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de junio de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Guadalupe del Consuelo Zurita Mézquita.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-180

FALTA DE APERSONAMIENTO A JUICIO DEL TERCERO INTERESADO.- NO IMPLICA SU CONSENTIMIENTO EN EL OTORGAMIENTO DE LA MARCA O LA NO ACTUALIZACIÓN DE LA CONFUSIÓN MARCARIA.- Cuando en un juicio contencioso administrativo, se tiene como tercero interesado al titular de un registro marcario que fue opuesto como impedimento para el otorgamiento de una diversa marca, la cual fue negada en la resolución impugnada, el hecho de que dicho tercero no se haya apersonado a juicio, no puede tener de ninguna manera acreditado su consentimiento para que se anule la resolución impugnada, o más aun, la falta de actualización de la confusión marcaria entre los signos en pugna; pues la preclusión de su derecho, lo único que trae aparejado es que durante el juicio, el tercero interesado pierda su derecho procesal para defenderse, pero ello no implica que consienta tácita y menos aun, expresamente, el tema de fondo del asunto, es decir, la confusión marcaria, o bien, que por ese hecho, no exista tal confusión; tan es así, que las vías procesales se encuentran expeditas para que el tercero interesado, de considerarlo así, impugne el fallo emitido en la etapa procesal, de resultarle desfavorable, ello con independencia de que se hubiere apersonado a juicio o no.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1241/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de junio de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-181

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LA NULIDAD MARCARIA.- SE OBSERVA SI A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA SE ATIENDE AL PLANTEAMIENTO EFECTIVO PROPUESTO POR EL SOLICITANTE.- Si a través de la resolución que culmina un procedimiento de declaración administrativa de nulidad de una marca, se atendió de manera efectiva a los motivos y argumentos expuestos por la solicitante de la nulidad marcaria en el escrito que le dio origen, no obstante haya citado de manera indebida los preceptos en que funda su acción, se puede considerar que con ello se atiende al principio de congruencia que deben observar las actuaciones administrativas, pues lo que interesa, es que se dé respuesta efectiva a los argumentos planteados, de tal suerte que se atienda a la auténtica *litis*, ya que es claro que de conformidad con el artículo 3º, fracción XVI, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el diverso 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la autoridad tiene la obligación de decidir los puntos propuestos, entendiéndose por éstos, los motivos planteados por la solicitante en la instancia administrativa, así como tiene la obligación de emitir las consideraciones jurídicas aplicables al caso. En consecuencia, debe entenderse que la cita de preceptos en las solicitudes administrativas, si bien pueden ser indicativas de la intención del promovente, lo cierto es que no son decisivas para determinar los puntos sobre los que debe versar la resolución administrativa que decida la instancia, pues se debe atender a la auténtica pretensión que persiga la actora, con base en los argumentos que exponga en su escrito de solicitud.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1016/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual, el 8 de julio de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-182

RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCEDIMENTALES.- NO SE ACTUALIZA, CUANDO LA HIPÓTESIS NORMATIVA QUE REGULA EL SUPUESTO SE SUSCITA UNA VEZ QUE HA ENTRADO EN VIGOR LA NUEVA NORMA QUE REGULA DICHO SUPUESTO.- De acuerdo con los criterios jurisprudenciales emitidos por el Máximo Órgano Jurisdiccional del país, las normas procedimentales son susceptibles de ser aplicables retroactivamente a los supuestos jurídicos que se suscitaron antes de que entrara en vigor la norma que actualmente regula sus consecuencias, habida cuenta que las normas procedimentales no generan derechos subjetivos, sino simplemente regulan condiciones del procedimiento para el ejercicio de las acciones, condicionando lo anterior a ciertos requisitos. De ahí que se colija que, atendiendo al propio criterio jurisprudencial, si la situación jurídica regulada por una norma procedimental se actualiza una vez que entró en vigor la nueva norma procedimental que regula el mismo supuesto, pero con distintas consecuencias, entonces no estamos ante el supuesto de retroactividad de normas, ya que en realidad no se está efectuado la aplicación retroactiva de éstas, sino se está aplicando la *debida* al momento en que se actualiza el supuesto normativo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1016/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual, el 8 de julio de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-183

DESCRIPTIVIDAD DE LAS MARCAS.- SE ACTUALIZA SÓLO SI LAS DENOMINACIONES PROPUESTAS REMITEN DE FORMA DIRECTA E INMEDIATA AL PRODUCTO O SERVICIO A AMPARARSE, O BIEN, A ALGUNA DE SUS CARACTERÍSTICAS.- El impedimento legal de descriptividad de las marcas, previsto por el numeral 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, debe ser entendido como la remisión *directa* e *inmediata* del signo marcario propuesto, al producto o servicio al que se pretenda aplicar, o bien, a alguna de sus características, pues sólo así se puede considerar carente de toda distintividad, pues lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, proporcionaría al público información acerca de sus propiedades y características primarias, las cuales otros comerciantes se encontrarían impedidos a utilizar para promocionar productos o servicios de la misma índole, generándose así, la competencia desleal. A diferencia de los signos evocativos, los cuales se consideran signos marcarios formados de modo arbitrario que despiertan la idea del producto o sugieren su naturaleza o utilidad, pero que se relacionan de modo remoto *indirecto* y *mediático* con la mercancía, por lo que no consisten en elementos o características primarias del producto, sino en todo caso describen o designan una cualidad o elemento secundario o accidental de éste, por lo que, en partida contraria, podría considerarse distintivo y no impediría a los demás competidores utilizarlos en el mercado. Así las cosas, si bien una marca propuesta a registro, pudiera señalar alguna característica del producto o servicio a amparar, pero ésta consiste en un elemento secundario o indirecto del mismo, esto es, que lo mismo puede estar o no estar, entonces debe considerarse que dicha marca es susceptible de registro, atento a que lo que prohíbe el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, es que se lleve a cabo el registro de marcas que designen o señalen de forma directa e inmediata, alguna cualidad o característica del producto, siendo que a las características secundarias o accidentales, sólo se puede arribar a ellas mediante un proceso lógico deductivo, que el público consumi-

dor promedio estaría obligado realizar, no obstante, esta hipótesis no la contempla el precepto antes señalado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 272/09-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 8 de julio de 2009.- Tesis: por unanimidad de votos.- Sentencia: por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-184

INTERÉS JURÍDICO.- ALCANCES DE SU REGULACIÓN EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, APLICADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA.- El artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que los procedimientos iniciados a instancia de parte ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, serán procedentes cuando sean promovidos por quien tenga interés jurídico. En este sentido, el tema del "interés jurídico" ha sido estudiado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las tesis de jurisprudencia 2a./J. 141/2002 "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" y 2a./J. 142/2002 "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL", en donde en apego al sistema doctrinal tradicional, ha sentado el criterio jurisprudencial que debe prevalecer para interpretar los alcances de las figuras del *interés jurídico* e *interés legítimo* en materia procesal, ya que en éstas se establece como premisa, los alcances de dichas figuras. Así, para nuestro Máximo Tribunal, el interés jurídico siempre estará relacionado con la afectación a un *derecho subjetivo*, mismo que debe ser reconocido expresamente por la ley, y que sólo facul-

ta a aquél que demuestre que dicho interés jurídicamente tutelado pueda verse afectado o se afecte de no promoverse la vía, o bien, a fin de obtener un derecho también jurídicamente tutelado (lo que se denomina expectativa de derecho), a diferencia del interés legítimo, mismo que sólo abarca una especie de interés *cualificado*, en el cual no es necesario la tutela de un derecho subjetivo, pues habilita a cualquier persona que se sienta afectada por la aplicación objetiva del derecho, ello a fin de que se reestablezca dicha violación, y se respeten las libertades o derechos de la colectividad, sin que llegue al grado de un interés simple. Tomando en consideración lo anterior, si el tipo de interés que contempla expresamente el artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, aplicable a los procedimientos de declaración administrativa iniciados a instancia de parte, es el de carácter de "jurídico", entonces, en estricta observancia a las tesis de jurisprudencia antes señaladas y a la interpretación que de ellas se establece, la connotación que debe regir en el artículo 188 citado, para los procedimientos administrativos antes referidos, es la equivalente al derecho subjetivo, esto es, la posibilidad que les asiste únicamente a aquéllos que cuenten con un derecho jurídicamente tutelado o susceptible de serlo, reconocido por la ley, de iniciar dichos procedimientos.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 989/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual, el 4 de agosto de 2009, por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-185

SIMILITUD FONÉTICA EN GRADO DE CONFUSIÓN.- PARA EL ESTUDIO RELATIVO, EN TÉRMINOS GENERALES, SE DEBEN APLICAR LAS MISMAS REGLAS DE PRONUNCIACIÓN A LAS MARCAS EN CUESTIÓN.- En términos generales, para el estudio fonético de las marcas, a fin de deter-

minar si se actualiza o no, el impedimento previsto por el numeral 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, se deben aplicar las mismas reglas de pronunciación, pues se debe partir de la premisa que la comparación de las marcas se tiene que hacer considerándolas en un plano de igualdad, es decir, aplicando las reglas de pronunciación que aplicaría un tipo de consumidor promedio, a menos que existan elementos objetivos suficientes, que permitan hacer una pronunciación diferenciada de las marcas, para su estudio comparativo (tales como anuncios de radio, televisión, etcétera, que permitan advertir que en el mercado se le asigna una pronunciación distinta), máxime que no existe dispositivo legal que obligue a comparar las marcas de esa forma, esto es, de manera diferenciada.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1133/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 10 de agosto de 2009, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-186

LEGALIDAD DE LA NEGATIVA DE UN REGISTRO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- DEBE SER ESTUDIADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL TENOR DE LOS ARGUMENTOS QUE SE EXPUSIERON PARA DETERMINARLA.- En atención al principio de congruencia a que se encuentran constreñidas las resoluciones jurisdiccionales y, en términos generales, cualquier resolución emitida por autoridad, el estudio de la legalidad de la negativa de un registro en materia de Propiedad Intelectual, para efectos del juicio contencioso administrativo, debe atender a la fundamentación y motivación que dio lugar a dicha resolución. De tal suerte que si la causa jurídica que dio origen a la negativa citada, la constituyó la actualización del impedimento legal

previsto por el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, y no así la falta de elementos que hagan distintivo al signo propuesto, la litis entonces debe circunscribirse a resolver si en la especie se surtió dicho supuesto, es decir, la *similitud en grado de confusión*, lo que implica necesariamente un estudio conjunto y alternado de los signos en pugna, esto es, un análisis comparativo "enfrentando" dichos signos, atendiendo a sus características fonéticas, gráficas y/o visuales, y no analizando a los signos de manera aislada o de forma independiente, siendo que de quedar desvirtuada dicha confusión, no existe razón legal para negar el registro solicitado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 611/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de agosto de 2009, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-187

DESCRIPTIVIDAD DE LAS MARCAS.- EL PRONUNCIAMIENTO DE LEGALIDAD QUE HACE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, NO REQUIERE DE LA APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, SINO JURÍDICO-ESPECIALIZADOS.- De conformidad con lo previsto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, actualmente cuenta con facultades de *plena jurisdicción*, lo que implica que puede y debe adentrarse al *fondo* del asunto, cuando cuente con los elementos para tales efectos y resolver conforme a derecho. Así las cosas, es claro que puede pronunciarse sobre el aspecto de descriptividad de las marcas, cuando esto se cuestione por las partes, debiendo considerarse que dicho pronunciamiento no es de carácter

técnico, sino jurídico-especializado, pues para tales efectos no se requiere la aplicación de ciencias o artes, sino la aplicación de la norma legal al caso en concreto, conjuntamente con la valoración de pruebas que se aporten por las partes y de las que la juzgadora se allegue en el juicio, sin que esto exima al juzgador de contar con los conocimientos jurídico-especializados, en este caso, sobre la materia de Propiedad Intelectual.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1162/09-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de agosto de 2009, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-188

DESCRIPTIVIDAD DE LAS MARCAS.- PARA QUE SE ACTUALICE, LA DENOMINACIÓN DEBE INDICAR LAS CUALIDADES O CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A PROTEGER DE FORMA DIRECTA Y NO INFERIRSE O DEDUCIRSE DE UNA DENOMINACIÓN SIMILAR.- El impedimento de descriptividad previsto por el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, obliga a la autoridad administrativa a realizar un examen global y conjunto de los elementos que integran la marca cuyo registro se desea obtener, a fin de determinar si de dicha marca puede indicar de forma directa e inminente, entre otros aspectos, las cualidades o características de los productos o servicios que se desean proteger, características que se suponen de uso común por la mayoría de los comerciantes dedicados al mismo ramo. Así las cosas, si por *característica* o *cualidad* entendemos algo que *da carácter o sirve para distinguir a alguien o algo de sus semejantes*, entonces debe interpretarse que para que se actualice la descriptividad de la marca en este supuesto, es necesario que el signo

indique de manera directa alguna de las cualidades o características de los productos o servicios a amparar, que puedan distinguirlos de los demás, sin que ello pueda hacerse a base de inferencias o deducciones de una denominación similar, pues partiendo de la definición anterior, la característica o cualidad del producto o servicio debe ser plenamente identificable y propia del mismo. En consecuencia, no es válido jurídicamente que la autoridad administrativa para motivar su determinación, argumente que una marca es descriptiva porque indica que el producto o servicio que se pretende amparar, tiene una cualidad o característica que se desprende del significado de una denominación similar, ya que esto no es propio del impedimento legal que establece la fracción IV del artículo 90 antes citado, pues en todo caso, daría lugar a la actualización de una marca evocativa y no descriptiva, primera que sí es registrable.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 458/09-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 14 de agosto de 2009, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-189

ESTUDIO DE CONFUSIÓN FONÉTICA DE LAS MARCAS.- DEBE ATENDERSE A LA FORMA EN QUE SE REGISTRAN O PRETENDEN REGISTRAR.- Por regla general, el estudio de confusión fonética de las marcas, debe atender a la forma en que se registraron las marcas, o bien, como se pretenden registrar (en caso de que se encuentren en trámite), pues así se desprende de lo dispuesto por los artículos 88, 89 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Por lo que, aun cuando en su diseño (tratándose de marcas mixtas), la denominación que la integra no estuviera presentada de manera *lineal*, sino contuviera elementos gráficos que le generaran una presentación especial, esto no exime de atender al estudio fonético de las marcas, de la forma en que fueron registradas sus *denominaciones*, o

bien, la forma en que se pretenden registrar, debiéndose considerar que el análisis fonético de las marcas se constriñe a la parte *nominativa* del signo, es decir, a la parte que es posible pronunciar y que genera un *sonido* que es susceptible de incurrir en grado de confusión desde su aspecto fonético.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1331/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 21 de agosto de 2009, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-190

CONFUSIÓN MARCARIA.- LA EXCLUSIÓN EXPRESA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE AMPARA UNA MARCA REGISTRADA, NO EXIME DE QUE SE PUEDA ACTUALIZAR LA SIMILITUD DE LOS MISMOS.- De acuerdo con lo previsto por la segunda parte de la fracción XVI del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, la similitud o identidad en grado de confusión marcaria se acredita cuando dichas marcas se apliquen o pretendan aplicar a productos *idénticos* o *similares*. Así las cosas, el hecho de que el solicitante de un registro marcario excluya de manera expresa de dicha solicitud, los productos o servicios objeto de protección del registro marcario citado como anterioridad, no lo exime de que no se actualice la confusión marcaria, ya que ello en todo caso lo exime de no incurrir en la hipótesis de *identidad* de productos, pero aun subsiste la posibilidad de que se actualice la hipótesis de *similitud* de los mismos, la cual también contempla el citado artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la materia, pues puede suscitarse el caso en que la marca solicitada a registro, aun cuando excluya de manera específica los productos o servicios que ampara la marca registrada, aun así siga amparando productos o servicios *similares* a los que ampara dicha marca, enten-

diéndose como “similar” lo que tiene semejanza o analogía con algo, esto es, un parecido.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 62/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de agosto de 2009, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-191

CONFUSIÓN DE MARCAS.- LEYENDAS NO RESERVABLES.- En materia de confusión de marcas, el examen que se debe realizar es en forma conjunta atendiendo a la totalidad de los elementos de las marcas en controversia denominación, diseño, figura, incluyendo las leyendas no reservables, tomando en cuenta principalmente las semejanzas, viendo alternativamente las marcas, tomando en consideración los elementos principales o esenciales y, suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona de mediana inteligencia, por lo que deberá atenderse a la primera impresión, al efecto que pueda producir en el público consumidor al primer golpe de vista o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente. Lo anterior, dado que no obstante que las leyendas no reservables son aquellos elementos que integrando la marca que no son de uso exclusivo por parte de su titular sí forman parte de los elementos que la integran y que su titular, de conformidad con lo previsto por los artículos 88, 89 y 128 de la Ley de la Propiedad Industrial antes estudiados, está obligado a utilizar de la forma en que le fue concedido.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1604/08-EPI-01-1.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de agosto de 2009, por mayoría de 2 votos a

favor y 1 con los puntos resolutivos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Guadalupe del Consuelo Zurita Mézquita.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-192

MARCA DESCRIPTIVA.- PARA CONSIDERARSE COMO TAL, DEBE REFERIR DE MANERA DIRECTA E INELUDIBLE AL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE PRETENDA AMPARAR, O ALGUNA DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE LO COMPRENDEN.- De conformidad con lo previsto por el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, constituye un impedimento legal para llevar a cabo el registro de las marcas, el hecho que éstas sean descriptivas de los productos o servicios que pretendan amparar, incluyéndose dentro de este supuesto, las palabras que sean descriptivas de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen, época de producción, de los productos o servicios. Así las cosas, atendiendo a la interpretación que de este precepto han efectuado tanto la jurisprudencia como la doctrina, se tiene que sólo aquellas marcas que refieran de manera directa e ineludible al producto o servicio que se pretenda amparar, o bien, algunas de sus características, señaladas enunciativa más no limitativamente por dicho precepto, podrán considerarse descriptivas de los mismos; esto es, la idea de la *descriptividad* implica que sólo una idea es la que se pueda advertir de manera inmediata y directa con la evocación fonética, gráfica o ideológica de la marca, entre la generalidad del público consumidor, de tal suerte que limite a los competidores para comercializar sus productos al amparo de dicha denominación. Partiendo de la premisa anterior, si la autoridad para motivar la negativa marcaria combatida, ha expuesto que la marca es descriptiva porque refiere a una de las características que puede o no tener el producto o servicio que se pretende amparar, esto no es criterio determinante para concluir que se está frente a una marca descriptiva, habida cuenta que sólo aquéllas que refieran de forma directa e ineludible al producto o servicio, o algunas de sus características, y que así sean captadas por la mayor

parte del público consumidor, pueden considerarse descriptivas, pues de otro modo, sólo serán evocativas.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1799/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de agosto de 2009, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-193

DESCRIPTIVIDAD DE MARCAS INNOMINADAS.- CASOS EN LOS QUE CONTIENEN ELEMENTOS ORTOGRÁFICOS.- Si bien la concepción clásica de las marcas innominadas se ha hecho en el sentido de que en éstas sólo se pueden contemplar figuras (con base en un diseño), debe considerarse aquellos casos en los que los particulares solicitan una marca innominada que contiene como elementos integrantes, a los ortográficos, esto es, a los signos que implican palabras y por lo tanto, ideas, y no obstante son solicitadas en esos términos por sus titulares, por intereses de comercialización específicos. En este tenor, para determinar si una marca innominada es o no descriptiva de los productos o servicios a proteger, es importante contemplar también los elementos ortográficos que las integran, ya que debe considerarse que las "palabras", además de cumplir con una función fonética, esto es, de provocar sonidos (que sirven principalmente en el lenguaje de la comunicación), también pueden verse reflejadas a través de imágenes representadas por signos o elementos ortográficos (que generan ideas); de ahí que se pueda colegir que una marca innominada puede estar comprendida por elementos ortográficos y a la vez generar una idea que puede ser indicativa de los productos o servicios que se pretenden amparar y, en consecuencia, descriptiva de los mismos.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 383/09-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-194

PATENTE.- ES LEGAL SU OTORGAMIENTO CUANDO SE CUMPLIERON CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SIN QUE SEA PROCEDENTE PARA SU VALIDEZ, LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN DICHA LEY.- El artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece un régimen extraordinario para la obtención de patentes de inventos que no eran patentables conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracciones VIII a XI de la abrogada Ley de Invenciones y Marcas, estableciendo requisitos de procedencia como eran: a) que se presentara ante la Secretaría la solicitud para obtener una patente sobre las invenciones señaladas, por el primer solicitante de la patente en cualquiera de los países miembros del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, o por su causahabiente, dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley citada en primer término; b) que el solicitante de la patente comprobara ante la Secretaría, en los términos y condiciones que previniera el reglamento de esa Ley, haber presentado la solicitud de patente en cualquiera de los países miembros del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o, en su caso, haber obtenido la patente respectiva, y; c) que la explotación de la invención o la importación a escala comercial del producto patentado u obtenido por el proceso patentado no se hubieran iniciado por cualquier persona en México con anterioridad a la presentación

de la solicitud en nuestro país. De ahí que en el origen de tal disposición transitoria contenida en la exposición de motivos de la citada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, el legislador contempló como uno de diversos objetivos, atraer a nuestro país nuevas tecnologías e inducir su transferencia o licenciamiento hacia empresas mexicanas con el propósito de que en México se reconocieran inventos que no eran patentables conforme a la legislación anterior y para que nuestro país no se encontrara en desventaja respecto de otras naciones por tal motivo, por lo que ante la regulación especial para tramitar patentes que hubieren adquirido un derecho de prioridad en un diverso país, solo resultaban exigibles los requisitos para tal efecto, sin que resulten aplicables las disposiciones contenidas en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial para el trámite ordinario de la tramitación de una patente, toda vez que el imponer mayores requisitos que los contemplados en dicho régimen extraordinario, deja en estado de incertidumbre jurídica al solicitante o titular de la patente, conforme al espíritu o esencia de tal disposición transitoria.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5/08-EPI-01-7 y acumulados 2.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual, el 2 de septiembre de 2009, por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Nancy Lidia Bravo García.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-195

REHABILITACIÓN DE PATENTE.- EL PAGO EFECTUADO DE LAS TARIFAS CORRESPONDIENTES POR CONCEPTO DE VIGENCIA DE DERECHOS, ES SUFICIENTE PARA LA PROCEDENCIA DE DICHA REHABILITACIÓN.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de la Propiedad Industrial una patente caduca por no cubrir el pago de la tarifa correspon-

diente para tener vigentes sus derechos o dentro de un plazo de gracia de seis meses, siendo que se puede solicitar la rehabilitación de la misma, por falta de pago oportuno de la citada tarifa, siempre que la solicitud se presente dentro del término referido y se cubra el pago omitido de la tarifa, más sus recargos, por lo que para la procedencia de la rehabilitación referida basta el pago de las tarifas correspondientes en el término legal establecido para tal efecto y que el mismo sea exhibido en escrito libre ante la autoridad demandada, lo cual trae implícita la solicitud de rehabilitación, siendo excesivo declarar abandonada una patente ante la falta de la solicitud referida con la frase "solicitó la rehabilitación de la patente tal", cuando se presentó ante la autoridad administrativa, el entero de las tarifas correspondientes para mantener vigentes los derechos de la misma.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 905/09-EPI-01-7.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual, el 9 de septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Nancy Lidia Bravo García.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-196

PARA EXAMINAR LA REGISTRABILIDAD DE UN SIGNO PROPUESTO SE DEBE ATENDER A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SEÑALADOS EN LA SOLICITUD.- De una interpretación sistemática del artículo 90, fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial, una denominación que en su conjunto, traducida al español es descriptiva o indicativa de los servicios o productos a amparar, se actualiza cuando está integrada por palabras en otro idioma que traducidas al castellano en el comercio sirven para designar la especie, calidad, cantidad, composición destino, valor, lugar de origen, o la época de producción de los productos o servicios a proteger. Para determinar si una marca en otro idioma traducida al español es descriptiva, se debe examinar en relación directa con los servicios o productos

que el particular precise en el rubro correspondiente de la solicitud de registro de marca presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no así con respecto a cualquier producto o servicio probable que en un futuro pudiera amparar la marca propuesta a registro, de conformidad con el artículo 57 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 686/08-EPI-01-1.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Guadalupe del Consuelo Zurita Mézquita.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-197

TÍTULO DE REGISTRO MARCARIO CADUCO. EFECTOS.- De conformidad con el artículo 133 de la Ley de la Propiedad Industrial la renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará. Cuando un particular exhiba un Título de Registro de Marca, cuya denominación es idéntica a la marca solicitada a registro, al haber transcurrido diez años contados a partir de la fecha de presentación sin haberlo renovado, el mismo se encuentra caduco; por lo que al no encontrarse surtiendo todos sus efectos legales es insuficiente para otorgarle distintividad a la marca propuesta. La negativa del nuevo registro marcario idéntico a la marca caduca, debe ser con base en una resolución administrativa emitida por la autoridad competente debidamente fundada y motivada, para cumplir con lo establecido en el artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 686/08-EPI-01-1.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Guadalupe del Consuelo Zurita Mézquita.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-198

MARCAS, CONFUSIÓN FONÉTICA, SE ACTUALIZA AUNQUE EL NUEVO SIGNO DIFIERA EN UNO O DOS CARACTERES DE LA MARCA REGISTRADA Y VIGENTE.- Se actualiza la confusión fonética entre una marca nominativa propuesta y una mixta registrada, cuando el signo a registrar está integrado por dos palabras, una de las cuales reproduce en forma íntegra la totalidad del elemento nominativo que integra la marca mixta citada como anterioridad, siendo coincidentes en su pronunciación y la otra es un término no distintivo. Asimismo, existe similitud fonética en grado de confusión, aunque sólo uno o dos caracteres que componen la nueva marca sea diferente, si repite a la marca registrada y dichas letras constituyen el elemento más importante o relevante dentro de su conjunto, siendo tal diferencia poco perceptible al oído humano sino más bien ante tal semejanza, fácilmente podría confundirse el público consumidor promedio, al hacer una pronunciación rápida de las mismas, de que se trata de una misma marca o una derivación, es decir, que es una clase o subespecie de la marca ya registrada y, por lo tanto, de un mismo titular.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2495/08-EPI-01-1.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Guadalupe del Consuelo Zurita Mézquita.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASR-EPI-199

MARCAS MIXTAS. CONFUSIÓN GRÁFICA, DIBUJO RELEVANTE.- Se actualiza la similitud gráfica en grado de confusión entre dos marcas mixtas, que están integradas por un diseño y denominación en donde ambos elementos se encuentran en un mismo plano de composición del conjunto, cuando la denominación carece de distintividad en el signo propuesto y su dibujo o diseño sea idéntico o similar que sólo varíe el color del diseño de la marca registrada, siendo tal dibujo el elemento relevante en los signos marcarios, que cuente con tal fuerza como para que el público consumidor promedio a primer golpe de vista quede en su mente la imagen del dibujo que al ver las marcas en controversia en forma alternada, piense que el nuevo signo se trata de una derivación de la marca registrada.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 695/08-EPI-01-1.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Guadalupe del Consuelo Zurita Mézquita.

TERCERA PARTE

CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES APROBADOS DURANTE LA QUINTA ÉPOCA

PRIMERA SALA REGIONAL DE ORIENTE

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

CRÉDITO AL SALARIO. NO PROCEDE SU DEVOLUCIÓN COMO PAGO DE LO INDEBIDO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONFORME A LA TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA FRACCIÓN XXV, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).- Conforme a la disposición transitoria antes señalada, cuando existan cantidades por concepto de crédito al salario pendientes de acreditar en términos del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, el acreditamiento contra el impuesto sobre la renta que resulte a cargo de cada trabajador se hará en términos del referido numeral, hasta agotarlo, de ahí que deba concluirse que el numeral de referencia vigente en 2005, no prevé la devolución del crédito al salario como pago de lo indebido en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, sino únicamente permite el acreditamiento contra el impuesto sobre la renta que resulte a cargo de cada trabajador hasta agotarlo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2705/06-12-01-9.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de abril de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Georgina Yáñez Arroyo.

SALA REGIONAL DEL PACÍFICO

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

MULTAS. PUEDE IMPONERLAS LA AUTORIDAD FISCAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN (VISITA DOMICILIARIA).- Del análisis armónico de los artículos 85, fracción I, y 86, fracción I, ambos del Código Fiscal de la Federación, se desprende que son infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación el no suministrar datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales y quien cometa dicha infracción se hace acreedor a una multa. En este sentido, si al iniciar la práctica de una visita domiciliaria la autoridad fiscal requiere diversa documentación e información al visitado a fin de conocer su situación fiscal y éste no la proporciona, la fiscalizadora válidamente puede imponerle las multas respectivas sin que para ello sea necesario que concluya el procedimiento correspondiente, es decir, la autoridad no está obligada a esperar a que termine la visita domiciliaria para imponer al visitado multas formales por infringir lo dispuesto por el mencionado artículo 85, fracción I, pues no existe precepto legal que indique que la autoridad cuando inicia facultades de comprobación no puede imponer multas sino hasta que concluya la revisión. Por ello, si el contribuyente visitado no proporciona la documentación e información solicitada, es correcta la actuación de la autoridad fiscal al imponer la multa dentro del procedimiento de fiscalización, máxime si en la orden de visita domiciliaria se le previno al particular para que pusiera a disposición de los visitadores todos los elementos que integran su contabilidad a efecto de comprobar que cumplió con las disposiciones fiscales, so pena de incurrir en infracción al señalado numeral.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 271/06-14-01-4.- Resuelto por la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de julio de 2006, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: María Guadalupe Pillado Pizo.- Secretario: Lic. Alejandro Ubando Rivas.

CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES PUBLICADOS DURANTE 2010

Metropolitanas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Primera (SR-I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segunda (SR-II)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Tercera (SR-III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuarta (SR-IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quinta (SR-V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sexta (SR-VI)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Séptima (SR-XVIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octava (SR-XIX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novena (SR-XX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décima (SR-XXI)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Décima Primera (SR-XXII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES PUBLICADOS DURANTE 2010

Foráneas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Noroeste I (Tijuana) (SR-XXV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noroeste II (Cd. Obregón) (SR-VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noroeste III (Culiacán) (SR-XXXI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norte – Centro I (Chihuahua) (SR-XXX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primera del Norte – Centro II (Torreón) (SR-VIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segunda del Norte – Centro II (SR-XXXII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tercera del Norte – Centro II (SR-XXXVII)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Primera del Noreste (Monterrey) (SR-IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segunda del Noreste (Monterrey) (SR-XXIV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Primera de Occidente (Guadalajara) (SR-X)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segunda de Occidente (Guadalajara) (SR-XXVIII)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tercera de Occidente (Guadalajara) (SR-XXXVIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES PUBLICADOS DURANTE 2010
(continuación)

Foráneas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Centro I (Aguascalientes) (SR-XXIX)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Centro II (Querétaro) (SR-XXIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centro III (Celaya) (SR-XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primera Hidalgo – México (Tlalnepantla) (SR-XII-I)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Segunda Hidalgo – México (Tlalnepantla) (SR-XII-II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tercera Hidalgo – México (Tlalnepantla) (SR-XXXIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primera de Oriente (Puebla) (SR-XIII)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Segunda de Oriente (Puebla) (SR-XXVI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tercera de Oriente (Puebla) (SR-XXXIX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primera del Golfo (Jalapa) (SR-XXVII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segunda del Golfo (Jalapa) (SR-XL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pacífico (Acapulco) (SR-XVII)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES PUBLICADOS DURANTE 2010
(continuación)

Foráneas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Sureste (Oaxaca) (SR-XV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peninsular (Mérida) (SR-XVI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Golfo – Norte (Cd. Victoria) (SR-XXXIV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiapas – Tabasco (Tuxtla Gutiérrez) (SR-XXXV)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Caribe (Cancún) (SR-XXXVI)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Pacífico Centro (Morelia) (SR-XLI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad Intelectual (D.F.) (SR-EPI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
TOTAL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

CUARTA PARTE

ACUERDOS GENERALES

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/8/2009

SE DETERMINA NO FIJAR COMO JURISPRUDENCIA UN PRECEDENTE REITERADO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 18, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al someterse a consideración del Pleno de este Órgano Jurisdiccional el precedente y sus respectivas reiteraciones, generados al haberse resuelto en el mismo sentido los juicios contencioso administrativos 575/07-09-01-4/1403/07-PL-06-10, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra, 5094/06-06-02-3/36/08-PL-04-10, por mayoría de 7 votos a favor y 4 votos en contra, y 1130/07-13-02-6/7/08-PL-04-10, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra; a fin de constituir jurisprudencia se determinó que no fuese así, en virtud de que en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre de 2008, se publicó la Jurisprudencia **2a./J. 179/2008** que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 114/2008-SS, bajo el rubro "**ACTA DE IRREGULARIDADES DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. DEBE NOTIFICARSE DENTRO DEL PLAZO DE 4 MESES, SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE LA AUTORIDAD ADUANERA RECIBA LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LOS ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ESAS MERCANCÍAS, Y NO EN EL LAPSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.**", la cual ya sustenta el criterio sostenido en el referido precedente reiterado de este Tribunal, que lleva por rubro "**PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN MATERIA ADUANERA. SU CUMPLIMIENTO TRATÁNDOSE DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN.**", publicado con sus respectivas reiteraciones en la página 222 de la Revista No. 11, de este Tribunal, correspondiente al mes de noviembre de 2008.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día dos de marzo de dos mil nueve, por unanimidad de 11 votos, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith De la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/1/2010

DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN, PARA EL PERIODO DE 2010

En la sesión privada ordinaria, celebrada el martes cinco de enero de dos mil diez, las Magistradas Olga Hernández Espíndola y Silvia Eugenia Díaz Vega, y los Magistrados Luis Carballo Balvanera, Alfredo Salgado Loyo y Juan Manuel Jiménez Illescas, integrantes de la Segunda Sección, de la Sala Superior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, segundo párrafo, y 26, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por unanimidad de cinco votos a favor, acordaron designar como Presidente de la Segunda Sección, de la Sala Superior, al Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, por el período de enero a diciembre de dos mil diez.

Firman para constancia, la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, quien presidió como Decana de la Segunda Sección, y el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

QUINTA PARTE

JURISPRUDENCIAS Y TESIS
DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

JURISPRUDENCIA

PLENO

ISSSTE. BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES QUE OPTEN POR EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 111/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 5

ISSSTE. EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY RELATIVA, NO ES VIOLATORIO DE LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA, POR AUTORIZAR EL EMBARGO DE LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN LAS SUBCUENTAS DE APORTACIONES VOLUNTARIAS, COMPLEMENTARIAS DE RETIRO Y DE AHORRO A LARGO PLAZO POR LA CANTIDAD QUE EXCEDA A 20 VECES EL SALARIO MÍNIMO ELEVADO AL AÑO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 162/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 6

ISSSTE. EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY RELATIVA, AL LIMITAR LA PENSIÓN DE VIUDEZ DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE, ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 150/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 8

ISSSTE. EL ARTÍCULO 254 DE LA LEY RELATIVA, QUE FACULTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A INTERPRETAR Y APLICAR LA NUEVA LEY, NO IMPLICA ELIMINAR LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 181/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 10

ISSSTE. EL ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, AL NO RECONOCER ANTIGÜEDAD A LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR HONORARIOS QUE SE INCORPOREN AL NUEVO RÉGIMEN, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 178/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 11

ISSSTE. EL BONO DE PENSIÓN ES EQUIVALENTE AL VALOR DE LOS BENEFICIOS PENSIONARIOS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).
(P./J. 118/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 13

ISSSTE. EL BONO DE PENSIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS SEXTO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY RELATIVA, NO PUEDE CONSIDERARSE VIRTUAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 121/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 14

ISSSTE. EL SEGURO DE RETIRO REGULADO EN LA LEY RELATIVA, RESPETA LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y NO CONFISCACIÓN DE BIENES CONSIGNADAS EN LOS ARTÍCULOS 123 Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 130/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 15

ISSSTE. EL SISTEMA ESTABLECIDO EN LA LEY RELATIVA PARA EL INCREMENTO DE LAS PENSIONES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14

DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 155/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 17

ISSSTE. ES INEXISTENTE LA LIMITACIÓN ACTUARIAL DEL SEGURO DE SALUD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 137/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 18

ISSSTE. GARANTÍA DE LAS PENSIONES RELATIVAS AL SEGURO DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA O VEJEZ (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 176/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 20

ISSSTE. LA CONTINGENCIA DE LA MUERTE DEL TRABAJADOR O PENSIONADO, SE ENCUENTRA PROTEGIDA CON EL SEGURO DE VIDA O EL DE SOBREVIVENCIA, SEGÚN CORRESPONDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 149/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 21

ISSSTE. LA CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, COMO ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD. (P./J. 166/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 22

ISSSTE. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER LA SUSTITUCIÓN DE UNA PENSIÓN POR UNA INDEMNIZACIÓN, NO ES VIOLATORIA DE LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD SOCIAL NI DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 144/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 24

ISSSTE. LA LEY RELATIVA, AL NO PREVER LA REPRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL ESTADO BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO, DEL PENSIONISSSTE O DEL FOVISSSTE, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).
(P./J. 179/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 25

ISSSTE. LA LEY RELATIVA CUMPLE CON LAS PRESTACIONES MÍNIMAS A QUE SE REFIERE EL CONVENIO 102 SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) ADOPTADO EN GINEBRA SUIZA EL 28 DE JUNIO DE 1952, RATIFICADO POR EL ESTADO MEXICANO EL 12 DE OCTUBRE DE 1961 (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).
(P./J. 185/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 26

ISSSTE. LA LEY RELATIVA EN CUANTO ESTABLECE UN NUEVO RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL SUSTANCIALMENTE DIVERSO AL REGULADO EN LA LEY DE 1983, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 108/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 28

ISSSTE. LA LEY RELATIVA ES REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 184/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 30

ISSSTE. LA OMISIÓN DE LA LEY RELATIVA, DE NO PREVER UN SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO NO ES VIOLATORIA DE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 133/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 31

ISSSTE. LA OMISIÓN DE LA LEY RELATIVA, DE NO PREVER UN SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO NO ES VIOLATORIA DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 132/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 33

ISSSTE. LA OMISIÓN DE LA LEY RELATIVA, DE NO PREVER UNA INDEMNIZACIÓN GLOBAL, NO ES VIOLATORIA DE LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).
(P./J. 131/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 34

ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 125/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 35

ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES Y EL INCREMENTO DE LAS CUOTAS A CARGO DEL TRABAJADOR, NO VIOLAN NORMAS INTERNACIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 124/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 37

ISSSTE. LOS ARGUMENTOS QUE IMPUGNAN LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS DEL PENSIONISSSTE Y FOVISSSTE SON INOPERANTES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 170/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 38

ISSSTE. LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIONES III Y IV, Y DEL 195 AL 199 DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, NO CONFISCACIÓN Y DE SEGURIDAD SOCIAL AL COMPRENDER LAS PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISOS C) Y E) DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 151/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 39

ISSSTE. LOS ARTÍCULOS 76 Y 148 DE LA LEY RELATIVA, NO CONCULCAN LA GARANTÍA DE NO CONFISCACIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUES NO IMPIDEN LA ACUMULACIÓN DE COTIZACIONES CUANDO EL TRABAJADOR SE ENCUENTRA AFILIADO DE MANERA SIMULTÁNEA AL IMSS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 159/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 41

ISSSTE. LOS ARTÍCULOS DEL 141 AL 148 DE LA LEY RELATIVA, AL PERMITIR LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS ENTRE ESTE INSTITUTO Y EL IMSS, NO SON VIOLATORIOS DE LA GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 160/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 42

ISSSTE. LOS ARTÍCULOS SEXTO Y SÉPTIMO TRANSITORIOS DE LA LEY RELATIVA, RESPETAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 116/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 44

ISSSTE. LOS ARTÍCULOS SEXTO Y NOVENO TRANSITORIOS, EN CUANTO ESTABLECEN QUE EL VALOR NOMINAL DE LOS BONOS DE PENSIÓN SE DETERMINARÁ CON BASE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL TRABAJADOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EL VALOR QUE LAS UNIDADES DE INVERSIÓN TENÍAN A ESA FECHA, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY Y DE NO CONFISCACIÓN QUE CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 14 Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 120/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 45

ISSSTE. LOS TRABAJADORES QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA LEY RELATIVA NO ESTUVIESEN COTIZANDO AL INSTITUTO, NO PIERDEN EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LOS PERIODOS COTIZADOS CON ANTERIORIDAD NI SU ANTIGÜEDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 112/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 47

ISSSTE. RESERVAS FINANCIERAS. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 232 DE LA LEY RELATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 138/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 49

ISSSTE. SEGURIDAD DE LAS PENSIONES QUE SE CONTRATAN BAJO EL CONCEPTO DE RENTA VITALICIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 177/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 51

PENSIONISSSTE. EL COBRO DE COMISIONES POR EL MANEJO DE LAS CUENTAS INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES, NO PRIVATIZA EL SISTEMA DE PENSIONES. (P./J. 175/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 52

PENSIONISSSTE. SU ADMINISTRACIÓN NO ESTÁ A CARGO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). (P./J. 167/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXX. Pleno, septiembre 2009, p. 54

PRIMERA SALA

NORMAS FISCALES. EL LEGISLADOR DEBE PREVER EN ELLAS LOS SUPUESTOS DE MAYOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, NO CASOS EXCEPCIONALES. (1a./J. 81/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1a. Sala, septiembre 2009, p. 221

SEGUNDA SALA

CONSENTIMIENTO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS ARTÍCULOS 27 Y 28 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. NO SE ACTUALIZA PORQUE LA QUEJOSA SE HAYA ACOGIDO AL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES PARA EL USO DE MEDIOS DE PAGO

ELECTRÓNICOS EN LAS EMPRESAS QUE SE INDICAN (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2004).
(2a./J. 118/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, septiembre 2009, p. 471

CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE DESDE EL 1o. DE ENERO DE 2007, AL MODIFICAR LOS EFECTOS DE LAS RESPUESTAS QUE RECAEN A AQUÉLLAS, ES CONGRUENTE CON LA REGULACIÓN EN MATERIA FISCAL Y CON EL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS TRIBUTOS. (2a./J. 112/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, septiembre 2009, p. 473

CONTRIBUYENTE. LA DUPLICIDAD DEL PLAZO PARA RECURRIR, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS RELATIVA, ES APLICABLE RESPECTO A TODOS LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES FISCALES, NO SÓLO EN RELACIÓN CON LOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN.
(2a./J. 113/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, septiembre 2009, p. 493

COPIA CERTIFICADA DEL RECIBO DE DEPÓSITO (ACUSE) DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO, EXPEDIDA POR LOS ADMINISTRADORES GENERALES O LOS ADMINISTRADORES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. TIENE VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE UN RECURSO O PROMOCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. (2a./J 119/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, septiembre 2009, p. 530

ESTÍMULOS FISCALES. EL CONOCIMIENTO DE LA BENEFICIARIA SOBRE LOS TÉRMINOS DEL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN

PARA EL USO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS EN LAS EMPRESAS QUE SE INDICAN, NO IMPLICA SU CONSENTIMIENTO RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 28 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2004). (2a./J. 117/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, septiembre 2009, p. 531

FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. EL DELEGADO ESTATAL DEL INSTITUTO RELATIVO, AL EJERCER SUS ATRIBUCIONES EN MATERIA FISCAL Y FUNDAR SU COMPETENCIA TERRITORIAL EN EL ACUERDO 45175 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CITADO INSTITUTO, NO REQUIERE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL CITADO ACUERDO RELATIVA A SU CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECÍFICA POR NO TRATARSE DE UNA NORMA COMPLEJA (DISPOSICIÓN VIGENTE HASTA EL 22 DE OCTUBRE DE 2008). (2a./J. 169/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, octubre 2009, p. 72

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ES INNECESARIO QUE LA AUTORIDAD FISCAL FUNDE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA EN EL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA CONTABILIDAD.
(2a./J. 127/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, septiembre 2009, p. 598

GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. ES INNECESARIO EL DEPÓSITO DEL TOTAL EN EFECTIVO DEL CRÉDITO FISCAL Y SUS ACCESORIOS ANTE LA TESORERÍA CORRESPONDIENTE, PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO, SI LA AUTORIDAD PREVIAMENTE PRACTICÓ EMBARGO SOBRE LA NEGOCIACIÓN CON INTERVENCIÓN CON CARGO A LA CAJA, SIEMPRE QUE A JUICIO

DEL JUEZ DE AMPARO EL INTERÉS FISCAL DEL CRÉDITO EXIGIBLE ESTÉ SUFICIENTEMENTE GARANTIZADO. (2a./J. 167/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, octubre 2009, p. 73

NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESCONOCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 129, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SÓLO LOS DESIGNADOS EN LAS PROMOCIONES FISCALES DE MANERA ESPECÍFICA CONFORME AL CITADO NUMERAL ESTÁN FACULTADOS PARA RECIBIRLAS. (2a./J. 120/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, septiembre 2009, p. 617

PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN. (2a./J. 153/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, octubre 2009, p. 94

PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. (2a./J. 152/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, octubre 2009, p. 95

PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE. (2a./J. 114/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, septiembre 2009, p. 644

QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE INSTRUIRSE COMO JUICIO CUANDO SE

ADVIERTA QUE EL MEDIO DE DEFENSA PROCEDENTE CONTRA EL ACTO DICTADO EN CUMPLIMIENTO SEA UN DIVERSO JUICIO DE NULIDAD, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA DETERMINACIÓN SE HAGA AL PROVEER SOBRE EL ESCRITO DE QUEJA O AL RESOLVER ÉSTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).- En la reforma al Código Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en donde el artículo 239 TER pasó a ser 239-B, se implementó la obligación por parte de la Sala o Sección del entonces Tribunal Fiscal de la Federación (ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) de instaurar como juicio una queja improcedente, sin que en el proceso legislativo se hayan expuesto las razones específicas respecto de dicha modificación, sino únicamente se estableció que la finalidad de la reforma consistía en simplificar los medios de defensa que se interpongan en contra de los actos de la administración pública. Por tanto, atendiendo a dicha finalidad, debe entenderse que existe obligación de tramitar como juicio una queja improcedente cuando se advierta que ésta no es el medio de defensa para controvertir el nuevo acto dictado en cumplimiento, sino que lo es un nuevo juicio; sin que dicha decisión se circunscriba únicamente a la primera determinación que se pronuncia respecto de la queja, sino también cuando al estudiarla en el fondo de ésta se advierta que los agravios son inoperantes en la medida en que el medio de defensa para controvertir en esa parte el nuevo acto lo es un diverso juicio contencioso administrativo; ello en razón de que el hecho de que se haya declarado procedente la queja implica que la autoridad jurisdiccional al resolver en definitiva tiene que pronunciarse sobre todos los argumentos que se hacen valer, de ahí que si algunos son infundados, deberá declarar infundada la queja, pero si otros son inoperantes en razón de que lo que se controvierta sea materia de un diverso juicio de nulidad, entonces, existe la obligación de dicha autoridad jurisdiccional de tramitar el nuevo juicio. (2a./J. 143/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, septiembre 2009, p. 675

RECONOCIMIENTO ADUANERO. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR NO ENCONTRARSE LAS MERCANCÍAS EN EL LUGAR ESTA-

BLECIDO PARA TAL EFECTO ES IMPUTABLE A LOS PROPIETARIOS DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE. (2a./J. 131/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, septiembre 2009, p. 676

RENTA. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
(2a./J. 141/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, septiembre 2009, p. 678

RENTA. EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL UTILIZAR LA EXPRESIÓN "INGRESOS DISTINTOS DE LOS SEÑALADOS EN LOS CAPÍTULOS ANTERIORES", SIN MENCIONAR CUÁLES SON ÉSTOS, NO INFRINGE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001).
(2a./J. 146/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, octubre 2009, p. 98

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO ESTABLECE LIMITATIVAMENTE LAS CONDUCTAS QUE PUEDEN CALIFICARSE COMO GRAVES POR LA AUTORIDAD SANCIONADORA. (2a./J. 139/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, septiembre 2009, p. 678

REVISIÓN DE GABINETE. ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE CONTEMPLA LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DE LA VISITA DOMICILIARIA CUANDO UN CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO DICTAMINA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE. (2a./J. 161/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, octubre 2009, p. 123

REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- De la evolución constitucional y legal del recurso de revisión fiscal se advierte que su procedencia no se acota en términos del artículo 63, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contra las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones o las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que aborden cualquier aspecto relacionado con pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sino que debe comprender también a las conferidas por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por disposición expresa del artículo 14, fracción V, de la Ley Orgánica del referido Tribunal, el cual le otorga competencia para conocer de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas en las que se nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales concedidas por las leyes a favor de los miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, de sus familiares o derechohabientes, sin que obste que dicho supuesto de procedencia se prevea en un ordenamiento legal diverso al que rige el procedimiento, pues el sistema jurídico mexicano debe analizarse conjuntamente a fin de conocer el medio de defensa procedente contra los actos de autoridad. (2a./J. 138/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, septiembre 2009, p. 680

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA VIGENTE HASTA EL 29 DE MAYO DE 2009.- El artículo 63, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece la procedencia del recurso de revisión fiscal cuando se impugne una resolución dictada en materia de la Ley Federal de

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por su parte la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 150/2005, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DICTADAS EN TÉRMINOS DE UNA NORMA FEDERAL DIVERSA A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.", sostuvo que el recurso de revisión procede contra las sentencias de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que declaren la nulidad de las resoluciones administrativas en materia de responsabilidades de los servidores públicos; sin embargo, tal recurso es improcedente tratándose de aquellas sentencias cuando la resolución primigenia en ellas combatida fue dictada por el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República en el procedimiento administrativo previsto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de dicha Institución (abrogada), toda vez que la separación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal que ahí se decreta, por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia previstos en el artículo 32 del ordenamiento últimamente citado, no puede considerarse como derivada de responsabilidades administrativas que ameriten la imposición de una sanción, como puede ser la de remoción, sino que se establece que el incumplimiento de requisitos de permanencia conlleva precisamente la separación del servicio por imposibilidad para continuar en él, dado que la persona respectiva no cumple con los presupuestos legales que garanticen a la sociedad el cumplimiento eficaz de las funciones de procuración de justicia. (2a./J. 147/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, octubre 2009, p. 124

REVOCACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN I, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE CONTRA EL REQUERIMIENTO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL INFORMATIVA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS, Y EN EL QUE

PREVIENE PARA EL PAGO DE LOS HONORARIOS QUE SE GENEREN POR AQUÉL, POR CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA.
(2a./J. 142/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, septiembre 2009, p. 680

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

REVISIÓN FISCAL. EL SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, SI EL DIRECTOR GENERAL DEL PROPIO ORGANISMO NO HA DESIGNADO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PUEDAN SUPLIR LAS FALTAS TEMPORALES DE LOS TITULARES DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2009).- Si bien es cierto que conforme a los artículos primero y tercero del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 1989, la representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ante los Tribunales Colegiados de Circuito y el Tribunal Fiscal de la Federación (ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) tanto a nivel central como delegacional, estaba a cargo del titular de la Subdirección General Jurídica, y que en ausencia de éste su representación era suplida por el subdirector de lo contencioso, también lo es que actualmente tal decreto resulta inaplicable, ya que con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley que rige al citado organismo, vigente a partir del 1o. de abril de 2007, la junta directiva de la institución expidió el Estatuto Orgánico respectivo, que comenzó a regir el 1o. de enero de 2009, en el que ya previó ese sistema de suplencias, al disponer en su artículo 54 que es al director general del organismo a quien corresponde designar al servidor público que supla en sus faltas temporales a los titulares de las unidades administrativas centrales. Por tanto, si el

indicado director general no ha hecho dicha designación, el mencionado subdirector de lo contencioso carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal en suplencia por ausencia del titular de la dirección jurídica. (I.7o.A. J/53)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 7o. T.C. del 1er. C., septiembre 2009, p. 3044

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO

ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. EL REQUISITO DE ASENTAR EN ÉSTA LAS FECHAS DE EXPEDICIÓN Y EXPIRACIÓN DE LA CREDENCIAL DE QUIENES PRACTICAN DICHA ACTUACIÓN, CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 62/2006, SE CUMPLE CON EL OFICIO DONDE SE PRECISAN EL INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS. (XV.5o. J/5)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 5o. T.C. del 15o. C., octubre 2009, p. 1161

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO

REVOCACIÓN EN MATERIA FISCAL. LOS BIENES MUEBLES DE UNA ESCUELA QUE NO SON INDISPENSABLES PARA SU FUNCIONAMIENTO CARECEN DEL CARÁCTER DE INEMBARGABLES PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 157, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR LO QUE LA PROMOCIÓN DE DICHO RECURSO CONTRA SU EMBARGO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, DEBE HACERSE CONFORME A LA REGLA GENERAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 127 DEL CITADO CÓDIGO. (XVI.1o.A.T. J/13)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1er. T.C. del 16o. C., octubre 2009, p. 1300

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO

MULTA POR LA OMISIÓN DE TRANSMITIR EL AVISO ELECTRÓNICO DEL ARRIBO AL TERRITORIO NACIONAL DE UNA EMBARCACIÓN EN LASTRE, PREVISTO EN LA REGLA 2.4.5. DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2007. NO PUEDE FUNDARSE EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 184 DE LA LEY ADUANERA. (XIX.1o.A.C. J/18)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1er. T.C. del 19o. C., octubre 2009, p. 1249

MULTA POR LA OMISIÓN DE TRANSMITIR EL AVISO ELECTRÓNICO DEL ARRIBO AL TERRITORIO NACIONAL DE UNA EMBARCACIÓN EN LASTRE, PREVISTO EN LA REGLA 2.4.5. DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2007. SU NULIDAD POR HABERSE SUSTENTADO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 184 DE LA LEY ADUANERA DEBE SER LISA Y LLANA. (XIX.1o.A.C. J/19)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1er. T.C. del 19o. C., octubre 2009, p. 1279

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SI UNA SALA DE DICHO ÓRGANO DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA BAJO UN ARGUMENTO DISTINTO AL PLANTEADO POR EL ACTOR, INFRINGE EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA QUE RIGE A AQUÉLLAS.- Del principio de congruencia inmerso en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor deducida de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios y corregir errores en la cita de los preceptos que se consideren violados, así como la obligación de examinar en su conjunto los agravios y causas de ilegalidad, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la

contestación, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior lleva a concluir que si una Sala del mencionado órgano declara la nulidad de la resolución impugnada bajo un argumento distinto al planteado por el actor, infringe el citado principio, por ejemplo, cuando con motivo de la imposición de una multa, en la demanda por la que se controvierte se niega lisa y llanamente haber cometido la infracción que la motivó, consistente en no presentar una declaración de impuestos no obstante el requerimiento de la autoridad exactora, y se declara su nulidad bajo el argumento de que el promovente negó la existencia o manifestó desconocer el indicado requerimiento, porque con tal variación se impide a la demandada rebatir los verdaderos argumentos del actor. (XIX.1o.A.C. J/20)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1er. T.C. del 19o. C., octubre 2009, p. 1314

TESIS

PRIMERA SALA

AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN LA DEMANDA FISCAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES. (1a. CLIII/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1a. Sala, septiembre 2009, p. 437

DAÑO MORAL Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, A QUE REMITE EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGAN A LA AUTORIDAD JUDICIAL A INDIVIDUALIZAR LOS MONTOS DE MANERA OBJETIVA Y RAZONABLE. (1a. CLV/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1a. Sala, septiembre 2009, p. 440

FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL. LOS RECURSOS QUE LO INTEGRAN DEBEN ENTREGARSE DIRECTAMENTE AL GOBIERNO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y NO A SUS MUNICIPIOS. (1a. CXLII/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1a. Sala, septiembre 2009, p. 2711

JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CONSTITUYE UN GRAVAMEN INDIRECTO Y, DADA SU NATURALEZA, ES TRASLADABLE TRATÁNDOSE DE ESAS ACTIVIDADES. (1a. CXXX/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1a. Sala, septiembre 2009, p. 444

JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. EL TRATO DIFERENCIADO QUE APLICA EL LEGISLADOR ENTRE LOS INCISOS A) Y B) DE LA FRAC-

CIÓN II DEL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. (1a. CXXXIII/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1a. Sala, septiembre 2009, p. 444

JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. TRATÁNDOSE DE ESAS ACTIVIDADES, EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS NO SE TRADUCE EN DOBLE TRIBUTACIÓN. (1a. CLXXXIV/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1a. Sala, octubre 2009, p. 58

JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. TRATÁNDOSE DE ESAS ACTIVIDADES, EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. (1a. CXXXI/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1a. Sala, septiembre 2009, p. 445

LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONLLEVA IMPLÍCITAMENTE UN SUPUESTO DE CAUSACIÓN, POR LO QUE NO ES POSIBLE ESTUDIAR SU CONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DEL PRINCIPIO RELATIVO.
(1a. CXXXVII/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1a. Sala, septiembre 2009, p. 446

OPCIÓN DE COMPRA DE ACCIONES. LA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 110, FRACCIÓN VII, Y 110-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005. ES UNA REMUNERACIÓN. (1a. CLII/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1a. Sala, septiembre 2009, p. 448

OPCIÓN DE COMPRA DE ACCIONES PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 110, FRACCIÓN VII, Y 110-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005 Y OPERA-

CIONES FINANCIERAS DERIVADAS. CONCEPTO Y NOTAS DISTINTIVAS. (1a. CL/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1a. Sala, septiembre 2009, p. 449

PÉRDIDAS FISCALES. EL ARTÍCULO 30 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2007, AL ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE CONSERVAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE ACREDITE EL ORIGEN DE AQUÉLLAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. (1a. CXXXIX/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1a. Sala, septiembre 2009, p. 450

PÉRDIDAS FISCALES. LOS ARTÍCULOS 30 Y 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2007, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. (1a. CXL/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1a. Sala, septiembre 2009, p. 451

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 27, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. (1a. CXXXII/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1a. Sala, septiembre 2009, p. 451

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER EL ABANDONO DE LA SOLICITUD DE PATENTE POR FALTA DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS REQUISITOS A QUE ALUDE EL PROPIO NUMERAL, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN TANTO QUE NO IMPONE UNA SANCIÓN DESPROPORCIONADA. (1a. CLXXVII/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1a. Sala, octubre 2009, p. 59

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER COMO INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA REALIZAR "ACTOS CONTRARIOS A LOS BUENOS USOS Y COSTUMBRES EN LA INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS", NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. (1a. CXLVII/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1a. Sala, septiembre 2009, p. 452

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER UN TOPE MÁXIMO PARA LAS INDEMNIZACIONES POR DAÑO MORAL, VIOLA EL ARTÍCULO 113 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.
(1a. CLIV/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1a. Sala, septiembre 2009, p. 454

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA FIJACIÓN DE UN TOPE MÁXIMO PARA LOS MONTOS INDEMNIZATORIOS POR DAÑO MORAL, AL OCASIONAR QUE EN CIERTOS CASOS SEAN LOS PARTICULARES QUIENES ASUMAN LOS COSTOS Y RIESGOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD ESTATAL, CONTRAVIENE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA LEY FEDERAL RELATIVA Y CREA INCENTIVOS CONTRARIOS AL MANTENIMIENTO DE LA ADECUADA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. (1a. CLVI/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1a. Sala, septiembre 2009, p. 456

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LOS ARTÍCULOS 13, 15 Y 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PREVÉN EL SISTEMA PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES, NO TRANSGREDEN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. (1a. CXLIX/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1a. Sala, septiembre 2009, p. 457

SEGUNDA SALA

AUDITORÍAS. LOS ÓRGANOS FEDERAL Y ESTATALES RESPONSABLES DE ELLAS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE SUPERIORES DE LOS ENTES FISCALIZADOS. (2a. CXVI/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, octubre 2009, p. 1080

DESPACHO ADUANERO. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY ADUANERA NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO. (2a. CXI/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, octubre 2009, p. 130

INTERESES MORATORIOS POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO INDEBIDO. EL ARTÍCULO 22-A, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. (2a. CVIII/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, septiembre 2009, p. 688

RENTA. EL ARTÍCULO 240, PÁRRAFO TERCERO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO REBASA EL CONTENIDO DE ÉSTA, EN CONSECUENCIA, NO INFRINGE EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (2a. CXII/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, octubre 2009, p. 131

RENTA. LOS ARTÍCULOS 155 Y 157 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 202 DE SU REGLAMENTO, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. (2a. CXVIII/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, octubre 2009, p. 132

VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2008, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD JU-

RÍDICA, INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, NI LA DE NO SER JUZGADO DOS VECES POR LOS MISMOS HECHOS. (2a. CVI/2009)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2a. Sala, septiembre 2009, p. 692

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES O LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 145-A, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 29 DE JUNIO DE 2006. COMO SU FINALIDAD ES GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y NO EL INTERÉS FISCAL, EL HECHO DE QUE SE DECRETE CUANDO NO EXISTA ALGÚN CRÉDITO DETERMINADO, ES IRRELEVANTE PARA EVIDENCIAR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (I.1o.A.170 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1er. T.C. del 1er. C., octubre 2009, p. 1360

FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DISTRITO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS, PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DIVERSAS DE LAS FISCALES EN EL ÁMBITO FEDERAL A CARGO DE TERCEROS. OPERA LA PRESCRIPCIÓN, CON INDEPENDENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE SE UTILICE PARA HACERLA EXIGIBLE. (I.1o.A.174 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1er. T.C. del 1er. C., octubre 2009, p. 1558

PROCEDIMIENTOS DE DEVOLUCIÓN Y DE COMPENSACIÓN DE CONTRIBUCIONES. SON MEDIOS IDÓNEOS PARA CUMPLIR LAS SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA NORMAS TRIBUTARIAS.
(I.1o.A.172 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1er. T.C. del 1er. C., octubre 2009, p. 1626

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY RESPECTIVA SON APLICABLES AUN CUANDO AL MOMENTO DE LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN EL INFRACTOR YA NO SE ENCUENTRE LABORANDO EN EL SERVICIO PÚBLICO. (I.1o.A.176 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1er. T.C. del 1er. C., octubre 2009, p. 1639

REVOCACIÓN. LA ACTUALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS EXCEPCIONAL DE PROCEDENCIA DEL RECURSO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RELATIVA A LOS "ACTOS DE EJECUCIÓN SOBRE BIENES LEGALMENTE INEMBARGABLES", NO ESTÁ SUPEDITADA A LA REALIZACIÓN MATERIAL DE UN EMBARGO, SINO ÚNICAMENTE A LA DEMOSTRACIÓN DE QUE TALES ACTOS INCIDEN SOBRE BIENES QUE NO PUEDEN SER OBJETO DE ESA MEDIDA. (I.1o.A.173 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1er. T.C. del 1er. C., octubre 2009, p. 1642

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EN LA INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE DICHO INSTITUTO, CARECE DE ATRIBUCIONES PARA DECIDIR CUESTIONES INHERENTES AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 27 DE MAYO DE 2005). (I.5o.A.89 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 5o. T.C. del 1er. C., septiembre 2009, p. 3158

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LA SENTENCIA QUE RECONOCIÓ LA VALIDEZ DEL ACTO IMPUG-

NADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. (I.5o.A.91 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 5o. T.C. del 1er. C., septiembre 2009, p. 3179

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

CRÉDITOS FISCALES QUE DERIVAN DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN. EL PLAZO PARA EMITIR Y NOTIFICAR LA DETERMINACIÓN RELATIVA SERÁ EL QUE PREVEA LA NORMA VIGENTE EL DÍA EN QUE SE LEVANTE EL ACTA FINAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN 2006).
(I.7o.A.657 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 7o. T.C. del 1er. C., septiembre 2009, p. 3113

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. SI EL CAUSANTE NO DEMUESTRA CON LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE CADA OPERACIÓN, ACTO O ACTIVIDAD REALIZADO QUE PUDIERA SER SUSCEPTIBLE DE PAGO DE IMPUESTOS Y SÓLO OBRAN LOS REGISTROS RELATIVOS EN SU CONTABILIDAD, LA AUTORIDAD PUEDE LLEVARLA A CABO, CONFORME AL ARTÍCULO 59 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, INTERPRETADO ARMÓNICAMENTE CON LOS PRECEPTOS 28, FRACCIÓN I, DEL PROPIO ORDENAMIENTO Y 26, FRACCIÓN I, DE SU REGLAMENTO. (I.7o.A.652 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 7o. T.C. del 1er. C., septiembre 2009, p. 3121

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL AMPARO, CUANDO EL PARTICULAR OPTÓ POR IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE LE AGRAVIA MEDIANTE ALGÚN RECURSO CUYA DETERMINACIÓN

DEBA COMBATIRSE A TRAVÉS DE AQUÉL.- Si bien es cierto que mediante la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1103, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó factible acudir directamente al amparo sin agotar previamente el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por considerar que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que lo prevé establece mayores requisitos para conceder la suspensión de la resolución definitiva impugnada que la Ley de Amparo, también lo es que constituye una excepción a tal criterio el supuesto en el que el particular optó por impugnar la resolución administrativa que le agravia mediante algún recurso cuya determinación deba combatirse a través del juicio de anulación, en observancia al principio de definitividad rector del juicio de garantías, que obliga al particular a seguir este camino, porque la vía procesal ya ha sido elegida. (I.7o.A.651 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 7o. T.C. del 1er. C., septiembre 2009, p. 3147

MARCAS. PARA ACREDITAR A TRAVÉS DE UN CATÁLOGO QUE LOS PRODUCTOS PARA LOS QUE FUERON REGISTRADAS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL MERCADO Y ASÍ DEMOSTRAR EL USO DE AQUÉLLAS, SE REQUIERE QUE ADEMÁS DE SU EXISTENCIA FÍSICA SE PRUEBE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE AQUÉL FUE MOTIVO DE DISTRIBUCIÓN. (I.7o.A.654 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 7o. T.C. del 1er. C., septiembre 2009, p. 3151

NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA LEGALIDAD DE LA DILIGENCIA RELATIVA QUE SE ENTIENDE CON UN

TERCERO, DEPENDE DE QUE ÉSTA INICIE A LA HORA PRECISADA EN EL CITATORIO PREVIO Y NO DEL MOMENTO EN QUE LA ORDEN SE ENTREGUE A AQUÉL. (I.7o.A.660 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 7o. T.C. del 1er. C., octubre 2009, p. 1593

NOTIFICACIÓN DEL ACTO QUE EL DEMANDANTE MANIFESTÓ DESCONOCER EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ANÁLISIS DE SU LEGALIDAD ES PREEMINENTE AL DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD A LA QUE ATRIBUYE AQUÉL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).- De conformidad con el artículo 209 Bis del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, cuando el actor manifieste desconocer el acto administrativo que pretende impugnar, así deberá expresarlo en su demanda, en donde señalará la autoridad a quien se lo atribuye; en ese supuesto, la enjuiciada al contestar, deberá acompañar constancia del acto administrativo y de su notificación, que el demandante podrá combatir mediante la ampliación respectiva. Asimismo, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del conocimiento, deberá estudiar los conceptos de nulidad formulados contra la notificación, con antelación al examen de la impugnación del acto administrativo. Además, en el caso de que la aludida Sala considere que no existió notificación o que se practicó ilegalmente, estimará que el actor fue sabedor del acto impugnado desde la fecha en que la autoridad se lo dio a conocer al contestar la demanda, quedando sin efectos todo lo actuado con base en aquélla y procederá al estudio de la impugnación que se formule contra tal acto. Por el contrario, si la Sala resuelve que la notificación fue legalmente hecha y, por ende, que la demanda fue presentada extemporáneamente, deberá sobreseer en el juicio en relación con el acto combatido. En otro aspecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 2a./J. 218/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 154, de rubro: "COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.", definió

que las cuestiones de competencia obedecen a un aspecto de orden público que habilitan a las Salas del referido tribunal a examinar de oficio las facultades de la autoridad para emitir el acto administrativo, con independencia de que exista o no agravio del afectado. En ese contexto, debe tenerse presente que la facultad conferida a las Salas Fiscales no es irrestricta, en razón de que de conformidad con el artículo indicado 209 Bis, el análisis de la legalidad de la notificación del acto que el demandante manifestó desconocer en el juicio contencioso administrativo, es preeminente al de la competencia de la autoridad a la que atribuye aquél, atento a que el examen previo de los razonamientos encaminados a controvertir la notificación de la resolución desconocida puede conducir a la juzgadora a determinar que la diligencia de ese acto se practicó legalmente, con lo que llegará a la convicción de que consintió tal determinación al no haberse instado el juicio en su contra en los plazos que prevé la legislación respectiva y, por tanto, decretará el sobreseimiento, lo que pone de manifiesto que el análisis oficioso de la competencia de la autoridad demandada se encuentra supeditado al resultado que derive del estudio preliminar a la notificación del acto que el demandante manifestó desconocer. (I.7o.A.653 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 7o. T.C. del 1er. C., septiembre 2009, p. 3153

POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA. LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL SE DIO DE BAJA A ALGUNO DE SUS MIEMBROS, CON FUNDAMENTO EN EL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA EL EFECTO DE QUE LE SEA PAGADA UNA INDEMNIZACIÓN, SIN INCLUIR SU REINSTALACIÓN, NO IMPLICA APLICACIÓN RETROACTIVA DE DICHO PRECEPTO, AUN CUANDO LA DEMANDA RESPECTIVA SE HAYA PRESENTADO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA INDICADA PORCIÓN NORMATIVA. (I.7o.A.659 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 7o. T.C. del 1er. C., septiembre 2009, p. 3164

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONFORME AL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE PRO-

CEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONTRA SENTENCIAS EMITIDAS EN ASUNTOS DONDE SE HAYA DEMANDADO LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA A UN AGENTE ADUANAL CON MOTIVO DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN EL DESPACHO ADUANERO.- Conforme al artículo 63, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y a la interpretación que de él ha hecho la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurso de revisión fiscal procede contra sentencias definitivas emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que declaren la nulidad de resoluciones emitidas por autoridades hacendarias que hayan impuesto multas por incumplimiento a obligaciones formales de carácter fiscal. Ahora bien, de la ejecutoria emitida al resolver la contradicción de tesis 1/2009, relacionada con la jurisprudencia 2a./J. 54/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, mayo de 2009, página 261, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. PROCEDE EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE HAYAN DECLARADO LA NULIDAD DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O AUTORIDADES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES, QUE IMPONGAN MULTA POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES FORMALES DE CARÁCTER FISCAL.", se advierte que el carácter fiscal de una resolución deriva de las obligaciones formales a cargo de los particulares conforme a las normas tributarias, vinculadas con la obligación sustantiva de pagar contribuciones; de ahí que en la hipótesis de que la imposición de la multa haya tenido como objetivo sancionar la inobservancia de obligaciones de naturaleza formal, cuya finalidad es obtener la información necesaria para que la autoridad hacendaria pueda determinar si un particular ha cumplido o no con sus obligaciones tributarias, se hace necesario e importante su análisis mediante el recurso de revisión fiscal. En ese orden de ideas, es improcedente el señalado recurso conforme a la hipótesis descrita, contra sentencias emitidas en asuntos donde se haya demandado la imposición de una multa a un agente aduanal con motivo de las funciones desempeñadas en el despacho aduanero,

pues dicha sanción no está relacionada con obligaciones sustantivas vinculadas con la recaudación tributaria, ni se impone con el objeto de permitir a las autoridades hacendarias conocer la capacidad contributiva de los gobernados para determinar, en su caso, sus obligaciones sustantivas. Lo anterior es así, ya que conforme a los artículos 53, párrafos primero, fracción II y último, 54, párrafos primero, segundo, fracción I y último, 184, fracción IV, 185, fracción III, 195 de la Ley Aduanera y 185 de su reglamento, los agentes aduanales son responsables solidarios del pago de los impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que se causen con motivo de la introducción de mercancías a territorio nacional o de su exportación, sin comprender las multas; también son responsables de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados; de la determinación del régimen aduanero de las mercancías; de la correcta clasificación arancelaria y de asegurarse que el importador o exportador cuenta con los documentos que acrediten el cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para las mercancías. Por otro lado, carecen de responsabilidad por el pago de las diferencias de contribuciones, cuotas compensatorias, multas y recargos que se determinen, así como por el incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, cuando se surta alguno de los supuestos previstos en el referido artículo 54, fracción I, a excepción de la hipótesis en que utilicen un Registro Federal de Contribuyentes de un importador que no le hubiera encargado el despacho de las mercancías. Asimismo, en el supuesto de que las infracciones provengan de la actuación del agente aduanal en el despacho, la multa será a su cargo, excepto tratándose de las excluyentes de responsabilidad establecidas en el segundo párrafo del mencionado artículo 54. (I.7o.A.661 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 7o. T.C. del 1er. C., octubre 2009, p. 1640

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO

CRÉDITO FISCAL. ES INNECESARIO QUE LA AUTORIDAD HACENDARIA ESPERE A QUE CONCLUYA EL EJERCICIO REVISADO PARA DE-

TERMINAR AQUÉL A UN RETENEDOR, ANTE SU OMISIÓN DE PAGAR EL TRIBUTO RECAUDADO. (II.4o.A.13 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 4o. T.C. del 2o. C., octubre 2009, p. 1514

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE DICHO ÓRGANO JURISDICCIONAL. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER, POR SÍ SOLO, EL JUICIO DE AMPARO E INTERPONER LOS RECURSOS PROCEDENTES EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA INDICADA JUNTA.- La legitimación procesal de las partes en el juicio de amparo es de orden público y, por ello, debe estudiarse, inclusive de oficio, siendo condición necesaria, tratándose de un órgano colegiado, que la personalidad y facultades de quien ostente su representación (servidor público u órgano) consten fehacientemente en un cuerpo normativo, a fin de que pueda, válidamente, intervenir en el procedimiento constitucional y, específicamente, interponer los recursos procedentes. Por tanto, si al tenor de los artículos 30, fracción I, 40 y 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no se prevé que el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que también lo es de la Junta de Gobierno y Administración de dicho órgano jurisdiccional, pueda representar a ésta, la atribución para defender sus intereses debe ejercerse conjuntamente por todos sus integrantes y, por tanto, en esta hipótesis, dicho servidor público carece de legitimación para promover, por sí solo, el juicio de garantías e interponer los recursos procedentes. (III.2o.A.211 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2o. T.C. del 3er. C., septiembre 2009, p. 3167

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO

FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES. EL AVISO RELATIVO PRESENTADO ANTE LA AUTORIDAD FISCAL MEDIANTE ESCRITO LIBRE, AUN CUANDO NO REVISTE LA FORMALIDAD DE UN FORMATO OFICIAL, NO CARECE DE EFICACIA. (III.4o.A.65 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 4o. T.C. del 3er. C., octubre 2009, p. 1560

FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES. ES INAPLICABLE LA LEY GENERAL QUE LAS REGULA PARA LA EFICACIA DEL AVISO DE DICHO ACTO PARA EFECTOS FISCALES. (III.4o.A.64 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 4o. T.C. del 3er. C., octubre 2009, p. 1560

VALOR AGREGADO. LAS APORTACIONES A CAPITAL Y PARA FUTUROS AUMENTOS DE ÉSTE NO ACTUALIZAN LA HIPÓTESIS DE CAUSACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO EN LA MODALIDAD DE "ENAJENACIÓN DE BIENES". (III.4o.A.66 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 4o. T.C. del 3er. C., octubre 2009, p. 1659

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO

DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. TRATÁNDOSE DE LA SOLICITUD HECHA A TRAVÉS DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS, PARA CONSIDERAR QUE ÉSTA CONTIENE LA VOLUNTAD EXPRESA DEL CONTRIBUYENTE DE OBTENERLA Y, POR TANTO, PARA QUE LA AUTORIDAD FISCAL ESTÉ OBLIGADA A ATENDERLA EN EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO, BASTA QUE EN ELLA SE APRECIE SU

NOMBRE, EL SALDO A FAVOR Y SU NÚMERO DE CUENTA BANCARIA PARA EL DEPÓSITO RESPECTIVO. (IV.2o.A.257 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2o. T.C. del 4o. C., septiembre 2009, p. 3122

FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NO ES UN REQUISITO FORMAL CUYA OMISIÓN O INSUFICIENCIA ENCUADRE EN LAS HIPÓTESIS DE ILEGALIDADES NO INVALIDANTES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- La fundamentación de la competencia en un acto de autoridad es una obligación constitucional por disposición expresa del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su validez se encuentra condicionada al hecho de que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite, esto es, que únicamente puede desplegar sus facultades dentro de su respectivo ámbito de competencia y conforme a las diversas disposiciones que la autoricen. Así se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.". En este sentido, el incumplimiento a dicha obligación constitucional da lugar a que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare la nulidad lisa y llana del acto administrativo, según lo ha resuelto la propia Segunda Sala en la diversa jurisprudencia 2a./J. 99/2007, que aparece en el señalado medio de difusión y época, Tomo XXV, junio de 2007, página 287, de rubro: "NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD AD-

MINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA.”. De tales afirmaciones se sigue que la omisión o insuficiente fundamentación de la competencia de la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo no es un requisito formal cuya omisión o insuficiencia encuadre en las hipótesis de ilegalidades no invalidantes previstas en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, respecto de las cuales no procede declarar su nulidad sino confirmar la validez del acto, en tanto que no inciden en la defensa del particular ni trascienden al sentido de la resolución. Lo anterior, dado que éstas se refieren a cuestiones de forma del acto administrativo, es decir, cuando no cumple con las formalidades prescritas por la ley y no a aquellos presupuestos de exigencia constitucional como lo es, en el caso, la fundamentación de la competencia de la autoridad. (IV.2o.A.260 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2o. T.C. del 4o. C., septiembre 2009, p. 3137

NOTIFICACIÓN FISCAL. PARA QUE SURTA EFECTOS EN FORMA CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL CONOCIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEBE SER EXACTO, DIRECTO, PUNTUAL Y NO PRESUNTIVO. (IV.2o.A.261 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2o. T.C. del 4o. C., septiembre 2009, p. 3154

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LAS REGLAS DE UNA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL QUE INFRINJAN EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY, APLICADAS EN PERJUICIO DEL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO, CUANDO DICHO ÓRGANO CONSIDERE QUE NO SE APEGAN AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2004).- De los artículos 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la jurisprudencia 2a./J. 108/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo

XX, septiembre de 2004, página 220, de rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE PRONUNCIARSE SOBRE LOS VICIOS DE LEGALIDAD QUE EN LA DEMANDA RESPECTIVA SE ATRIBUYAN A LAS REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS APLICADAS EN PERJUICIO DEL ACTOR EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNADA EN FORMA DESTACADA.", se advierte que la legalidad de las disposiciones de observancia general inferiores a los reglamentos del presidente de la República, sí puede ser materia de análisis de la sentencia que se emita en un juicio contencioso administrativo federal, cuando el gobernado que lo promueve sufrió en su perjuicio la aplicación concreta de aquéllas, siempre y cuando los vicios que se atribuyan a dichas reglas sean de legalidad, es decir, impliquen confrontarlas con alguna norma superior a ellas pero inferior a la Constitución Federal. En estas condiciones, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para analizar la legalidad de las reglas de una resolución miscelánea fiscal que infrinjan el principio de reserva de ley, aplicadas en perjuicio del actor en el indicado juicio, cuando dicho órgano considere que no se apegan al Código Fiscal de la Federación. Cabe señalar que en virtud de ello, el mencionado tribunal no ejerce un control de la constitucionalidad de la disposición respectiva, cuya atribución está reservada a determinados órganos del Poder Judicial de la Federación, pues no realiza una confronta entre la regla citada y un precepto de la Norma Suprema.
(IV.2o.A.262 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2o. T.C. del 4o. C., septiembre 2009, p. 3189

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE EMPLAZARSE CON EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO RELATIVO A QUIEN EL ACTOR IMPUTE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS EN TRANSPORTE EN MATERIA ADUANERA, PUES ELLO CONSTITU-

YE UNA CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO QUE INCLUSIVE DEBE SER VERIFICADA DE OFICIO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL AMPARO DIRECTO. (VI.1o.A.278 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1er. T.C. del 6o. C., octubre 2009, p. 1508

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR RESPECTIVO. (VI.1o.A.279 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1er. T.C. del 6o. C., octubre 2009, p. 1639

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO

ACTA DE MUESTREO DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. PARA CONSIDERAR QUE SE EMITIÓ POR AUTORIDAD COMPETENTE, ES SUFICIENTE EL HECHO DE QUE EL SUBADMINISTRADOR DE UNA ADUANA LA HAYA LEVANTADO EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE E INVOCADO LOS PRECEPTOS QUE LO FACULTAN PARA ELLO, AUN CUANDO ADEMÁS DE SU FIRMA, APAREZCA LA DEL EMPLEADO DESIGNADO SEGÚN EL RESULTADO DEL MECANISMO DE SELECCIÓN AUTOMATIZADO PARA AUXILIARLO EN EL RECONOCIMIENTO ADUANERO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2007). (VI.3o.A.327 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 3er. T.C. del 6o. C., septiembre 2009, p. 3087

AVALÚO DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS PRACTICADO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS. CUANDO LO LLEVE A CABO LA AUTORIDAD FISCAL ES INNECESARIO QUE EL PROFESIONISTA QUE LO ELA-

BORA CUENTE CON CÉDULA PROFESIONAL DE VALUADOR EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4o., PRIMER PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). (VI.3o.A.326 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 3er. T.C. del 6o. C., septiembre 2009, p. 3099

COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD FISCAL PARA IMPONER MULTAS COMO RESULTADO DE UNA VISITA DOMICILIARIA. PARA CONSIDERARLA DEBIDAMENTE FUNDADA ES INNECESARIO QUE EN LA RESOLUCIÓN SANCIONADORA SE REITEREN LOS PRECEPTOS LEGALES QUE FACULTAN A AQUÉLLA TANTO PARA EJERCER SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN COMO PARA APLICAR SANCIONES, CITADOS AL ORDENAR LA REVISIÓN.- Para considerar debidamente fundada la competencia material de la autoridad fiscal para imponer multas por infracción a las disposiciones tributarias como resultado de una visita domiciliaria, es innecesario que en la resolución sancionadora se reiteren los preceptos legales que la facultan tanto para ejercer sus facultades de comprobación como para aplicar sanciones, citados al ordenar la revisión, pues al demostrarse ante la Sala Fiscal que la orden de visita fue legalmente notificada al contribuyente, la falta de cita de dichas normas no la deja en estado de indefensión, ya que siempre estuvo en condiciones de corroborar si la autoridad actuó dentro de su ámbito competencial, es decir, si se encontraba facultada para sancionarlo como resultado de la verificación de su situación fiscal, tal como concluyó la responsable al valorar conjuntamente tanto la orden, como el oficio de sanción. (VI.3o.A.328 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 3er. T.C. del 6o. C., septiembre 2009, p. 3105

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA RESOLUCIÓN QUE CONDENA A LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEMANDA-

DAS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO AL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR SU ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR, CUANDO NO REALIZAN ACTOS DE AUTORIDAD, ES DEFINITIVA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). (XVI.2o.A.T.7 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2o. T.C. del 16o. C., septiembre 2009, p. 3174

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEMANDADAS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO NO REALIZAN ACTOS DE AUTORIDAD, ESTÁN LEGITIMADAS PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LAS CONDENA AL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR SU ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). (XVI.2o.A.T.6 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2o. T.C. del 16o. C., septiembre 2009, p. 3174

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO

VISITA DOMICILIARIA. CUANDO SE PRACTIQUE PARA VERIFICAR DETERMINADOS MESES Y NO EJERCICIOS FISCALES COMPLETOS A UNA EMPRESA QUE SE DICTAMINE FINANCIERAMENTE, PODRÁ CONCLUIRSE ANTICIPADAMENTE SIEMPRE Y CUANDO SE HAYAN PRESENTADO LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES AL PERIODO SUJETO A REVISIÓN (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 47 Y 52-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). (XVII.1o.P.A.37 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1er. T.C. del 17o. C., septiembre 2009, p. 3195

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO

TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EN TANTO NO ESTÉ CLARAMENTE DEFINIDA SU EXISTENCIA, DEBE DARSE PREPONDERANCIA A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA, ANTES DE TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA RELATIVA POR NO HABER INDICADO EL ACTOR EL NOMBRE Y DOMICILIO DE AQUÉL.- De la interpretación del artículo 14, fracción VII y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en armonía con la garantía de acceso a la justicia prevista en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que el requisito de procedibilidad para el inicio del juicio contencioso administrativo federal, relativo a que el promovente indique el nombre y domicilio del tercero interesado, vincula a que el Magistrado instructor realice un juicio de valor en el que, bajo elementos objetivos extraídos de las constancias que pueda tener a la vista y teniendo en cuenta las manifestaciones del accionante, decida sobre la aplicabilidad al caso particular del aludido requisito, ya que la última parte de la referida fracción VII es categórica al atribuir el señalamiento del tercero interesado únicamente "cuando lo haya", lo que implica privilegiar la premisa de que en tanto no esté claramente definida su existencia, debe darse preponderancia a la mencionada prerrogativa constitucional, antes de tener por no interpuesta la demanda por no haber indicado el actor el nombre y domicilio de aquél, sin perjuicio de que con posterioridad pueda ser llamado, de acuerdo con la información que en vía de contestación de demanda allegue la autoridad, o bien, con la que recabe la Sala competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (XXI.1o.P.A.116 A)

S.J.F. IX Época. T. XXX. 1er. T.C. del 21er. C., octubre 2009, p. 1651

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO

EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA TIENE EL AUTO DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE COARTA EL DERECHO DEL DEMANDANTE DE SEÑALAR DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN CUALQUIER PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL.- Los artículos 2o., fracción XIV, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y 14, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esencialmente coinciden en prever que el demandante en el juicio contencioso administrativo federal tiene el derecho de señalar domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando lo tenga dentro de la jurisdicción de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa competente, en cuyo caso, el domicilio señalado para tal efecto deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de ésta. Ahora bien, en atención al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijado en la tesis P. LVII/2004, publicada en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, octubre de 2004, Novena Época, Materia Común, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", se colige que el auto de la mencionada Sala Regional que coarta el derecho del demandante de señalar domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, aun cuando se refiere a una cuestión de índole procesal, tiene una ejecución de imposible reparación para el particular, en la medida en que su consecuencia es que las subsecuentes notificaciones se le hagan por medio de lista autorizada que se fije en los estrados del aludido órgano jurisdiccional, de tal modo que, a pesar de que la sentencia que llegue a dictarse en ese juicio sea favorable a los intereses de la actora, jamás se le restauraría el derecho derivado de los señalados preceptos, quedando de esa forma consumada la violación de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, por lo que contra dicho acto procede el juicio de garantías indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. (XXI.2o.P.A.94 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 2o. T.C. del 21er. C., septiembre 2009, p. 3131

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN

CONDONACIÓN DE ADEUDOS FISCALES. LA REGLA TERCERA, PUNTO 4, DEL ACUERDO-JG-SAT-IE-3-2007, EMITIDO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, QUE PREVÉ QUE NO PROCEDERÁ LA DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 CUANDO EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRE VINCULADO A UN PROCEDIMIENTO PENAL POR LA PROBABLE COMISIÓN DE UN DELITO DE CARÁCTER FISCAL, INFRINGE LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. (VII.1o.(IV Región) 4 A)
S.J.F. IX Época. T. XXX. 1er. T.C. de la 4a. Región, septiembre 2009, p. 3107

SEXTA PARTE

Transformación de oficio del juicio contencioso administrativo, en juicio sumario, cuando aparezcan a juicio del Magistrado Instructor causas evidentes de anulación de la resolución impugnada*

Magistrado Héctor Silva Meza

* Trabajo presentado en el XVII Congreso Nacional de Magistrados "Visión del Contencioso Administrativo Federal ante los retos del cambio social", Mesa B, Subtema Juicio Sumario.

Existen agravios que son invocados en la demanda de nulidad que indudablemente llevarán como resultado del juicio a declarar nula la resolución impugnada.

Estos agravios son evidentes en ocasiones y están suficientemente estudiados por la doctrina y jurisprudencia, además de que su existencia fáctica no requiere de mayor demostración ya que en la propia resolución impugnada queda evidenciada la existencia del agravio y la necesidad de anular el acto.

Es el caso por ejemplo de la resolución con firma facsimilar; de la resolución con competencia territorial o material indebidamente fundada; la resolución que en materia aduanera, tiene como antecedente un acta levantada extemporáneamente; el crédito fiscal desconocido por el demandante, entre otros muchos casos.

En estos supuestos, resulta estéril la instrucción completa del juicio de nulidad con la pérdida de tiempo y recursos tanto públicos como privados, cuando se puede dejar sin efecto la resolución que contiene vicios de fondo evidentes, mediante la transformación del juicio de nulidad que conocemos, por la tramitación de un juicio de nulidad sumario, transformando a juicio del Magistrado instructor el juicio tradicional en un juicio sumario de manera oficiosa.

Es decir, la propuesta que me permito formular se traduciría para efectos prácticos, en lo siguiente:

1.- Promoción de demanda de nulidad.- Se promueve demanda de nulidad ante el Tribunal iniciándose su gestión;

2.- Análisis de los agravios planteados, observándose una causa de anulación evidente.- El Magistrado instructor ante la existencia de un agravio de anulación evidente, como los ya antes referidos y los que la experiencia cotidiana vaya determinando, dictará el acuerdo inicial de admisión de demanda, en los términos que comúnmente se manejan, adicionado con la declaración en el sentido de que el juicio se transforma en juicio sumario en vista de aparecer una causa de anulación evidente.

Esa declaración de juicio sumario, irá acompañada del requerimiento del Magistrado Instructor formulado a la autoridad demandada, para que conteste de manera prioritaria si está o no de acuerdo con la causal de anulación evidente observada por el Magistrado Instructor.

En el supuesto caso de que la autoridad admita la existencia de la causa evidente de anulación, ante la declaratoria inicial de juicio sumario, el Magistrado Instructor tendrá por cerrada la instrucción y formulará de plano proyecto de sentencia anulando la resolución impugnada en vista del vicio evidente de legalidad, todo esto porque ante el reconocimiento de un vicio de fondo no tiene sentido alguno continuar con la tramitación del juicio que finalmente tendrá el mismo resultado.

Además de que este procedimiento, autorizará al juzgador para emitir sentencia sin el estudio inútil de otros agravios, lo que redundará en una más pronta impartición de justicia.

En otro supuesto, en el caso de que la autoridad no acepte la existencia de la causa evidente de nulidad de la resolución impugnada, deberá producir su contestación completa de la demanda de nulidad y el Magistrado Instructor ante la argumentación de la autoridad demandada, deberá decidir si continúa el juicio de manera sumaria dictando la sentencia correspondiente o, si por el contrario, determina tramitar el juicio de nulidad de manera ordinaria cumpliéndose todas sus fases. Es decir queda a la prudente apreciación del juzgador la vía sumaria u ordinaria, de acuerdo con las manifestaciones y evidencias aportadas por las partes.

Como se puede observar, el procedimiento propuesto, asegura a las partes un equilibrio procesal y les garantiza ser oídos, además de que se imprime celeridad al desahogo del juicio. La acción deducida permite una tramitación más rápida para que sea eficaz mediante el empleo de reglas especiales sencillas que no trastocan la esencia del juicio.

Magistrado Héctor Silva Meza.

SÉPTIMA PARTE

ÍNDICES GENERALES

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRECEDENTES DE SALA SUPERIOR

APARIENCIA del buen derecho y peligro en la demora. El juzgador no debe tomar en cuenta dichos elementos al resolver sobre la suspensión definitiva de la ejecución, solicitada como medida cautelar dentro del juicio. VI-P-1aS-291 34

COMPETENCIA para conocer del juicio. Caso en el que debe atenderse a la sede de la autoridad emisora. VI-P-1aS-287 22

COMPETENCIA territorial de las Salas Regionales.- Caso en el que se indican dos domicilios en la demanda. VI-P-2aS-371 48

COMPETENCIA territorial de las Salas Regionales.- El reporte general de consulta de información del contribuyente es idóneo para acreditar su domicilio fiscal, excepto cuando su contenido indica tratarse de un documento interno carente de validez oficial. VI-P-2aS-378 84

COMPETENCIA territorial de las Salas Regionales, se rige por las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, independientemente de lo pactado por las partes en un contrato de obra pública. VI-P-2aS-380 99

COMPETENCIA territorial. Tratándose de empresas que forman parte del Sistema Financiero. VI-P-1aS-292 36

CUOTAS compensatorias definitivas en materia de comercio exterior. Es competencia de las Secciones de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conocer de la resolución dictada con motivo de la impugnación vía recurso de revocación contra la continuación de su vigencia. VI-P-2aS-381 102

CUOTAS compensatorias nulidad de la resolución que las determina.- Tiene eficacia en el tiempo a partir del momento en que se cometió la ilegalidad en el procedimiento de origen de investigación antidumping, al retrotraerse sus efectos al momento de la violación cometida. VI-P-2aS-406 167

DECLARACIÓN de abandono de la solicitud de patente.- Es procedente la suspensión en contra de su publicación en la Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. VI-P-2aS-379 92

EFECTOS de la suspensión otorgada en el procedimiento contencioso administrativo respecto de la ejecución de la declaratoria definitiva de retiro por inutilidad por causas ajenas al servicio respecto de un marino (inicio del procedimiento de baja). VI-P-2aS-394 134

EFECTOS "erga omnes" de las sentencias que declaran la nulidad de una resolución que establece o confirma una cuota compensatoria definitiva. VI-P-2aS-407 168

ENTIDADES federativas.- No están obligadas a otorgar garantía del interés fiscal, al solicitar la suspensión de la ejecución en el juicio contencioso administrativo. VI-P-2aS-398 146

GARANTÍA del interés fiscal. El Secretario de Gobierno del Distrito Federal no tiene que otorgarla para obtener la suspensión de la resolución impugnada. VI-P-2aS-413 206

HECHO notorio.- Lo constituye para la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa una sentencia emitida por ella. VI-P-2aS-408 169

INCIDENTE de incompetencia. Casos en que la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual es competente para conocer del juicio contencioso administrativo. VI-P-1aS-288 27

INCIDENTE de incompetencia. Credencial emitida por el Instituto Federal Electoral la información en ella contenida no desvirtúa la presunción a que se refiere el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. VI-P-2aS-404 164

INCIDENTE de incompetencia territorial.- Boleta de infracción levantada respecto del peso, dimensiones y capacidad de vehículos de autotransporte federal. VI-P-1aS-289 30

INCIDENTE de incompetencia territorial.- Cuando no se actualice alguna de las excepciones previstas, en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente, deberá estarse a la regla general contenida en el propio artículo. VI-P-2aS-388 113

INCIDENTE de incompetencia territorial. Los documentos certificados de pantalla del sistema de cómputo del Registro Federal de Contribuyentes, logran desvirtuar la presunción legal establecida en el artículo 34, último párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. VI-P-2aS-391 116

INCIDENTE de incompetencia territorial. Para determinar la Sala Regional correspondiente debe atenderse al domicilio fiscal del demandante al momento de presentación de la demanda. VI-P-1aS-295 41

INCIDENTE de incompetencia territorial.- Resulta infundado el planteado por la actora cuando lo promueve en contra de la Sala ante la cual presentó su escrito de demanda. VI-P-1aS-293 39

INCIDENTE de incompetencia territorial.- Tratándose de resoluciones emitidas por la Administración Central de Comercio Exterior dependiente del Servicio de Administración Tributaria, no aplica la excepción prevista en la frac-

ción III del artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. VI-P-2aS-377 79

INCOMPETENCIA territorial.- Conocerán del incidente las Secciones de la Sala Superior que por turno corresponda. VI-P-2aS-403 162

INSTITUCIONES de banca múltiple. No se encuentran obligadas a otorgar garantía del interés fiscal para que surta efectos la suspensión que se les conceda con apoyo en el artículo 28 fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. VI-P-2aS-382 104

MARCAS en idioma extranjero.- Si al traducirse no son descriptivas de los productos que pretende proteger deben registrarse. VI-P-SS-241 7

MEDIDA cautelar positiva para dejar sin efectos la suspensión del importador en los padrones de importadores o en el de sectores específicos. Elementos que deben valorarse para su otorgamiento. VI-P-2aS-373 59

MEDIDAS cautelares. Análisis del nexo entre la materia del juicio principal y la medida específica solicitada. VI-P-2aS-400 157

MEDIDAS cautelares. Su otorgamiento con base en su objeto. VI-P-2aS-402 160

MEDIDAS cautelares solicitadas.- No procede su otorgamiento, cuando se actualiza la excepción prevista en el artículo 24, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al causarse perjuicio al interés social o contravenirse disposiciones de orden público. VI-P-2aS-401 159

MULTAS impuestas a instituciones y sociedades mutualistas de seguros. Debe garantizarse el interés fiscal para efecto de la suspensión de la ejecución de las mismas. VI-P-2aS-384 106

PEMEX Exploración y Producción.- Es un organismo público descentralizado exento de la obligación de garantizar el interés fiscal. VI-P-2aS-369 43

PRUEBA documental superveniente, ofrecida en el juicio contencioso administrativo.- Oportunidad para presentarla. VI-P-2aS-409 170

RECURSO de reclamación.- Caso en el cual no debe otorgarse el término de tres días para que acredite que se ha garantizado el interés fiscal. VI-P-2aS-372 50

RECURSO de reclamación. Caso en el que no procede tratándose de la rescisión de un contrato de obra pública. VI-P-2aS-411 202

RECURSO de reclamación. Es oportuno el que se deposita en el Servicio Postal Mexicano para su envío dentro del plazo de cinco días a que se refiere el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. VI-P-2aS-412 203

RECURSO de reclamación.- Si al promoverse se impugna la competencia territorial de la sala regional, debe tramitarse como incidente de incompetencia por razón de territorio. VI-P-2aS-397 141

RECURSO de reclamación extemporáneo. VI-P-1aS-290 32

RESOLUCIÓN final de la investigación antidumping que determina cuotas compensatorias. Su nulidad decretada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tiene efectos generales que se retrotraen al momento de la ilegalidad cometida. VI-P-2aS-410 171

SALA Regional en Materia de Propiedad Intelectual. Al tener competencia especializada a nivel nacional por razón de territorio, le corresponde conocer de los asuntos en dicha materia. VI-P-2aS-415 214

SOLICITUD de suspensión de la ejecución en base al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Debe otorgarse, conforme a dicho precepto y no en base a los artículos 24 y 25 de dicha Ley. VI-P-2aS-395 136

SUSPENSIÓN de la ejecución de la resolución impugnada. Tratándose de la sanción de suspensión en la captación de recursos del público en general, impuesta por violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, es improcedente concederla. VI-P-2aS-396 138

SUSPENSIÓN. No procede otorgarla respecto de responsabilidades de los servidores públicos, tratándose de infracciones graves o casos de reincidencia. VI-P-2aS-374 77

VIOLACIÓN procesal en la tramitación del incidente de petición de medidas cautelares. Caso en que la omisión del Magistrado Instructor de requerir un informe a la autoridad a quien se impute el acto administrativo, es insuficiente para revocar la sentencia combatida vía recurso de reclamación. VI-P-2aS-387 108

VISITA domiciliaria. Es ilegal el oficio que comunica la ampliación del plazo para la práctica de aquélla, si se emite con motivo de una revisión de dictamen iniciada con anterioridad. VI-P-2aS-393 119

ÍNDICE ALFABÉTICO DE CRITERIOS AISLADOS DE SALA SUPERIOR

DESECHAMIENTO de un recurso. Si se confirma su legalidad no opera el principio de litis abierta regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que permite analizar conceptos de anulación planteados en contra de la resolución recurrida. VI-TASS-42 221

FERROCARRILES Nacionales de México, en liquidación. En su carácter de organismo descentralizado y de entidad paraestatal que compone la Administración Pública Federal, no tiene que otorgar garantía del interés fiscal para efectos de la suspensión. VI-TA-2aS-21 237

INCIDENTE de incompetencia territorial. Copia certificada del Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente. Es un documento oficial idóneo para efectos de evidenciar la actual ubicación del domicilio fiscal del actor. VI-TA-1aS-22 223

INCIDENTE de incompetencia territorial. Para determinar la Sala Regional correspondiente debe atenderse al domicilio fiscal del demandante al momento de presentación de la demanda. VI-TA-1aS-24 236

INSTITUCIONES de fianzas. Deben considerarse de acreditada solvencia por las fianzas que otorgan.- Por ello debe concederse la suspensión de la ejecución del requerimiento de pago por el cual se pretende hacer exigible la fianza. VI-TA-2aS-22 239

RECURSO de reclamación extemporáneo. VI-TA-1aS-23 225

ÍNDICE ALFABÉTICO DE CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES

ACTA de visita domiciliaria. Es ilegal si el personal actuante adscrito a la autoridad, permite que por parte del particular, firme el acta final de visita, relativa a las actuaciones de la autoridad, una persona, en calidad de tercero, que no estuvo presente, ni al inicio, ni durante el desarrollo de dicha diligencia. VI-TASR-XXIV-15 272

ACTAS de verificación. No resultan aplicables las formalidades establecidas por los artículos 65 a 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo cuando la empresa verificada impide el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad. VI-TASR-XIII-36 308

ACTIVO.- El impuesto respectivo debe tener un sujeto de causación cuando haya realización comprobada de la actividad gravada aunque ésta se efectúe a través de diversos sujetos. VI-TASR-VI-2 245

ACTIVO.- Interpretación correcta del artículo 2º, primer párrafo, de su Ley. VI-TASR-VI-3 246

ACUERDO 45175 del Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, incumple lo dispuesto en el artículo 5° del Reglamento Interior del INFONAVIT, al no demostrarse por la autoridad demandada la existencia de la propuesta del Director General del mencionado Instituto. VI-TASR-XIII-50 324

AGENTE aduanal. No es responsable solidario cuando para determinar las deficiencias, irregularidades o falsedad de los documentos y datos que, en su oportunidad, le haya hecho llegar el contribuyente, se lleve a cabo el análisis químico o de laboratorio para su identificación. VI-TASR-XIII-23 294

ALEGATOS. Deben considerarse inoportunos los argumentos contenidos en ellos tendientes a combatir la legalidad de los actos y resoluciones dados a conocer con la contestación de la demanda. VI-TASR-XXXVII-80 257

ARTÍCULO 90, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, el segundo párrafo aplica tanto para productos como a servicios. VI-TASR-EPI-173 341

AUDIENCIA de conciliación, debe celebrarse, por lo menos, cuatro días después de la fecha de notificación de la reclamación al proveedor. Forma de computar el plazo. VI-TASR-XXIV-11 267

AUDIENCIA de conciliación.- No es necesario que dicha audiencia se lleve a cabo con la presencia física del representante legal de la empresa proveedora en la delegación en que se presentó la queja respectiva. VI-TASR-XXIV-12 . 268

AUTORIZACIÓN expresa de la solicitud de pago en parcialidades. No genera la inexistencia del crédito fiscal la falta de. VI-TASR-XIII-31 303

CADUCIDAD.- Aplicación supletoria del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Ley Federal de Protección al Consumidor. VI-TASR-XIII-27 299

CADUCIDAD administrativa. El plazo para que opere no se prorroga con la emisión de un segundo acuerdo de alegatos. VI-TASR-XXI-35 254

CADUCIDAD de las facultades del Instituto Mexicano del Seguro Social.- Debe atenderse al término genérico de cinco años tratándose de responsabilidad solidaria de socios o accionistas. VI-TASR-XIII-41 313

CARGA de la prueba. Le corresponde a la autoridad demandada demostrar que la resolución impugnada contiene firma autógrafa del funcionario emisor, cuando no se acredita su legal notificación. VI-TASR-XIII-40 312

CAUSAL de improcedencia del juicio contencioso administrativo por inexistencia del crédito impugnado.- Es infundada dicha causal, si a través del procedimiento administrativo de ejecución se requiere el pago del crédito controvertido. VI-TASR-XXI-30 248

CAUSAL de improcedencia del juicio de nulidad. Es infundada cuando la autoridad alega falta de interés jurídico por no encontrarse "vigente en el sistema" el crédito fiscal controvertido. VI-TASR-XIII-39 311

CERTIFICACIÓN de la información conservada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de otorgarle valor probatorio en el juicio de nulidad, la autoridad debe fundar la facultad relativa. VI-TASR-XIII-26 298

COMISARÍAS de Sector de la Policía Federal Preventiva. No tienen competencia para formular oficios de liquidación. VI-TASR-XXXVII-85 262

COMPETENCIA del Jefe de la Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social. Su debida fundamentación para firmar en suplencia por ausencia del Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social. VI-TASR-XVII-4 330

COMPROBANTES fiscales. Una abreviatura en el nombre, denominación o razón social no actualiza la infracción prevista en el artículo 83, fracción VII y sancionada en el numeral 84, fracción IV, ambos del Código Fiscal de la Federación. VI-TASR-XIII-30 302

CONFUSIÓN de marcas.- Leyendas no reservables. VI-TASR-EPI-191 359

CONFUSIÓN marcaria.- El estudio conjunto de las marcas, no implica la obligación de la autoridad de analizar todos los aspectos de similitud o identidad de sus elementos. VI-TASR-EPI-176 344

CONFUSIÓN marcaria.- La exclusión expresa de los productos o servicios que ampara una marca registrada, no exime de que se pueda actualizar la similitud de los mismos. VI-TASR-EPI-190 358

CONSTANCIAS de notificación.- Cuando el actor argumente que son ilegibles, debe señalar qué parte considera ilegible. VI-TASR-XIII-42 314

COORDINADOR de Auditoría Fiscal de la Zona Norte, de la Dirección General de Auditoría Fiscal, de la Secretaría de Hacienda del Estado de Quintana Roo, es una autoridad inexistente y, por ende, incompetente para emitir actos de molestia. VI-TASR-XXXVI-66 336

CRÉDITO al salario. No procede su devolución como pago de lo indebido en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, conforme a la Tercera Disposición Transitoria fracción XXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (legislación vigente en 2005). 371

DECRETO por el que se exime parcialmente del pago de las cuotas patronales a que se refiere la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de marzo de dos mil ocho.- Para su aplicación, es innecesario solicitarlo previamente al Instituto Mexicano del Seguro Social. VI-TASR-XXXVII-81 258

DEDUCCIÓN de pagos de anticipos a socios.- El requisito previsto en la fracción V del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para 2003 y 2004, de que se pague el impuesto respectivo por dichos anticipos, puede cumplirse conservando la declaración anual del ejercicio de los terceros a quienes se hayan efectuado los pagos, en la que conste el entero del impuesto correspondiente. VI-TASR-XXIX-36 284

DEDUCCIÓN de pagos de anticipos a socios.- La fracción V del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para 2003 y 2004 establece dos formas de cumplir con el requisito de que se pague el impuesto respectivo por dichos anticipos, por lo que el mismo se cubre cuando se efectúe en cualquiera de esas dos formas. VI-TASR-XXIX-37 285

DESCRIPTIVIDAD de las marcas.- El pronunciamiento de legalidad que hace el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no requiere de la aplicación de conocimientos técnicos, sino jurídico-especializados. VI-TASR-EPI-187 355

DESCRIPTIVIDAD de las marcas.- Para que se actualice, la denominación debe indicar las cualidades o características de los productos o servicios a proteger de forma directa y no inferirse o deducirse de una denominación similar. VI-TASR-EPI-188 356

DESCRIPTIVIDAD de las marcas.- Se actualiza sólo si las denominaciones propuestas remiten de forma directa e inmediata al producto o servicio a ampararse, o bien, a alguna de sus características. VI-TASR-EPI-183 351

DESCRIPTIVIDAD de marcas innominadas.- Casos en los que contienen elementos ortográficos. VI-TASR-EPI-193 361

DEVOLUCIÓN de cantidades pagadas indebidamente. Es ilegal su negativa al haberse acreditado en el juicio de nulidad, que no existe inconsistencia alguna en la declaración anual del impuesto sobre la renta presentada por la contribuyente. VI-TASR-XIII-45 317

DEVOLUCIÓN de saldo a favor.- Casos en que la autoridad procede en forma indebida negándola. VI-TASR-XXXV-11 334

DEVOLUCIÓN, verificación de procedencia de la. Documentación e información que únicamente puede requerir la autoridad fiscal al contribuyente. VI-TASR-XVII-2 328

EL ACUSE recibo impreso criptográfico o el reporte impreso de la información que contiene el diskette, con su sello de recibo, expedido por el Instituto

Mexicano del Seguro Social, desvirtúa la negativa de presentación de movimientos afiliatorios que hace el actor. VI-TASR-XVII-3 329

EL CONCEPTO de amortizaciones de crédito al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no está sujeto a la figura de la caducidad prevista por el artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. VI-TASR-XXI-31 249

EL INCUMPLIMIENTO a lo ordenado en el artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no ocasiona la ilegalidad de la resolución administrativa, al tratarse de una norma de las que la doctrina denomina imperfecta. VI-TASR-XXI-34 253

ESTADOS de cuentas bancarios, obligación de citar el último párrafo, del artículo 48, del Código Fiscal de la Federación, en la solicitud de información y documentación, cuando éstos son requeridos al contribuyente. VI-TASR-XXXVII-79 256

ESTÍMULOS fiscales.- A los contribuyentes dedicados al transporte terrestre de carga o pasajeros que utilicen la red nacional de autopistas de cuota, les es aplicable el estímulo fiscal concedido en el artículo 16, fracción X de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 2006, cuando el pago del peaje se realice por un medio distinto a los señalados en la regla 11.9 de la Resolución Miscelánea para 2006, en los casos en que la caseta de cobro no cuente con la infraestructura necesaria para recibir el entero a través de la tarjeta de identificación automática vehicular o medios electrónicos. VI-TASR-XXVIII-3 282

ESTUDIO de confusión fonética de las marcas.- Debe atenderse a la forma en que se registran o pretenden registrar. VI-TASR-EPI-189 357

EXCEPCIÓN prevista en el párrafo final del artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación. Requerimiento directo al contribuyente, sin hacerlo en forma previa al contador público autorizado que emitió el dictamen correspondiente VI-TASR-XXIV-13 269

FALTA de apersonamiento a juicio del tercero interesado.- No implica su consentimiento en el otorgamiento de la marca o la no actualización de la confusión marcaria. VI-TASR-EPI-180 348

FIDEICOMISO.- Es obligación de los fideicomisarios presentar la declaración del ejercicio, respecto de las actividades empresariales derivadas del. VI-TASR-XXXVI-69 339

FORMATO denominado “revocación de certificado digital en la subdelegación” del Instituto Mexicano del Seguro Social. Carece de fiabilidad para acreditar que el demandante aportó los avisos de alta, baja y modificación salarial, en atención a lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia contenciosa. VI-TASR-XXIX-39 287

IMPOSICIÓN de sanciones administrativas.- Prescripción para su. VI-TASR-XIII-52 326

IMPUESTO al valor agregado.- Artículo 2-A, fracción I, inciso b), numeral 1 de la Ley de la materia, relativo a la enajenación de alimentos. VI-TASR-II-17 241

IMPUESTO general de importación. Su debida determinación. VI-TASR-XIII-38 310

IMPUGNACIÓN simultánea de la caducidad y prescripción sobre una misma situación jurídica.- Figura aplicable en tratándose del requerimiento de pago de un saldo insoluto autodeterminado. VI-TASR-XXXVI-67 337

INTERÉS jurídico.- Alcances de su regulación en la Ley de la Propiedad Industrial, aplicada a los procedimientos de declaración administrativa. VI-TASR-EPI-184 352

INTERÉS jurídico del particular que solicita la declaración administrativa de nulidad de una marca, si argumenta tener un mejor derecho por uso anterior. VI-TASR-EPI-175 343

INTERPRETACIÓN de las normas fiscales.- No puede ser tal que conduzca a un fraude a la ley o a un abuso del derecho. VI-TASR-VI-4 247

JUICIO de nulidad promovido contra el desconocimiento del acto impugnado.- Oportunidad para su presentación. VI-TASR-XXXVI-65 335

JUNTA técnica solicitada por el particular para demostrar los motivos y fundamentos que se tomaron en cuenta para realizar la correcta clasificación arancelaria de la mercancía sujeta a revisión por parte de la autoridad aduanera. Lo que establece el punto "E" de la unidad octava del Manual de Operación Aduanera, vigente a partir del 1º de septiembre de 2006, en relación con la Regla 2.12.19 de las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior vigentes en el año de los hechos es la celebración de la junta técnica referida. VI-TASR-XXIV-9 264

LA HIPÓTESIS prevista en el último párrafo del artículo 157 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, constituye una positiva o aceptación ficta que no puede ser revocada o modificada por la autoridad por tratarse de una resolución favorable al patrón. VI-TASR-XXXVII-84 261

LEGALIDAD de la negativa de un registro en materia de propiedad intelectual.- Debe ser estudiada en el juicio contencioso administrativo, al tenor de los argumentos que se expusieron para determinarla. VI-TASR-EPI-186 354

MARCA descriptiva.- Para considerarse como tal, debe referir de manera directa e ineludible al producto o servicio que se pretenda amparar, o alguna de las características que lo comprenden. VI-TASR-EPI-192 360

MARCAS, confusión fonética, se actualiza aunque el nuevo signo difiera en uno o dos caracteres de la marca registrada y vigente. VI-TASR-EPI-198 366

MARCAS mixtas. Confusión gráfica, dibujo relevante. VI-TASR-EPI-199 .. 367

MARCAS mixtas.- Para determinar su similitud en grado de confusión, debe atenderse al conjunto de sus elementos, así como al caso en concreto. VI-TASR-EPI-178 346

MOMENTO de aplicación de la Regla 2.2.3. de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, en relación a la devolución de aranceles pagados en exceso en virtud del trato preferencial otorgado por el Tratado de Libre Comercio relativo. VI-TASR-XIII-22 293

MULTA por la no presentación al inicio de la visita domiciliaria de los libros y registros que forman parte de la contabilidad.- Para su imposición no es suficiente que en la orden de visita se hubiese señalado el artículo 45, del Código Fiscal de la Federación, sino que es preciso además el señalamiento del diverso numeral 53, inciso a), de dicho ordenamiento. VI-TASR-XXIV-17 274

MULTAS formales, impuestas con fundamento en el artículo 82 fracción I inciso b) del Código Fiscal de la Federación.- Debe aplicarse la vigente al momento de la comisión de la infracción. VI-TASR-XIII-43 315

MULTAS. Puede imponerlas la autoridad fiscal dentro del procedimiento de fiscalización (visita domiciliaria). 372

NEGATIVA a la devolución del impuesto al valor agregado por considerar que un contrato de cesión de derechos no fue otorgado en términos de las disposiciones del Código Civil Federal aplicado supletoriamente al Código de Comercio. VI-TASR-XXIX-40 288

NEGATIVA de autorización de pago en parcialidades. Los artículos 66 y 66-A del Código Fiscal de la Federación hacen referencia a esta figura, pero si el crédito que pretende enterarse a plazos deviene de una multa de carácter formal, no resulta procedente. VI-TASR-XXIX-38 286

NEGATIVA ficta.- Análisis de su legalidad a la luz de lo planteado en sede administrativa, sin que se exhiba la constancia del acto recurrido.- Su consecuencia legal. VI-TASR-XXXVI-68 338

NEGATIVA ficta. Supuesto en el que resulta innecesario otorgar a la parte actora término para ampliar la demanda. VI-TASR-XXIX-41 289

NORMAS heteroaplicativas.- Primer acto de aplicación. VI-TASR-II-18 242

NOTIFICACIÓN personal.- Es ilegal si las constancias relativas son ilegibles VI-TASR-II-19. 243

OBLIGACIONES derivadas de la Ley del Seguro Social y el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado.- Caso en que se celebre un contrato para la ejecución de las obras a precio alzado o bajo precio unitario. VI-TASR-XXIV-14 271

OFICIO de impedimento.- Al ser un acto emitido dentro del procedimiento, es innecesario que contenga las causas o motivos de la descriptividad. VI-TASR-EPI-174 342

ORDEN de visita. El requisito previsto en el artículo 43, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se satisface si en la orden aludida, debajo del nombre del contribuyente, se precisó su domicilio. VI-TASR-XIII-24 296

PAGO espontáneo. Momento a partir del cual surten efectos las notificaciones del crédito requerido de pago. VI-TASR-XXXVII-82 259

PARA examinar la registrabilidad de un signo propuesto se debe atender a los productos o servicios señalados en la solicitud. VI-TASR-EPI-196 364

PATENTE.- Es legal su otorgamiento cuando se cumplieron con las disposiciones establecidas en el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, sin que sea procedente para su validez, la aplicación de las normas que rigen el procedimiento ordinario en dicha Ley. VI-TASR-EPI-194 362

PENSIÓN jubilatoria de los trabajadores al servicio del estado. La carga de la prueba para la determinación de la base salarial conforme al tabulador regional corresponde al ISSSTE. VI-TASR-XXI-33 252

PLAZO para la interposición del recurso de revocación. La excepción prevista en el artículo 128 del Código Fiscal de la Federación, no aplica tratándose de embargo precautorio de bienes conforme al artículo 155 de la Ley Aduanera. VI-TASR-XIII-25 297

PRESCRIPCIÓN consignada en la Ley Federal del Trabajo. Tiene alcances distintos a la prescripción prevista en la Ley del Seguro Social. VI-TASR-XII-I-7 291

PRIMA en el seguro de riesgos de trabajo. Es ilegal la multa impuesta por haber presentado la determinación anual de aquélla derivada de la revisión anual de la siniestralidad, con datos incompletos. VI-TASR-XIII-29 301

PRINCIPIO de congruencia en la nulidad marcaria.- Se observa si a través de la resolución impugnada se atiende al planteamiento efectivo propuesto por el solicitante. VI-TASR-EPI-181 349

PROCEDIMIENTO administrativo de ejecución. Es impugnable en el juicio de nulidad en cualquier momento, cuando afecte el interés jurídico de un tercero. VI-TASR-XIII-47 320

QUEJA y juicio de nulidad.- No se puede considerar como interposición concurrente cuando se promueve en un único escrito. VI-TASR-XXI-32 251

RECURSO de revocación. Artículo 125 del Código Fiscal de la Federación, optatividad del. VI-TASR-XXIV-19 277

RECURSO de revocación. La autoridad fiscal no está obligada a dar a conocer al recurrente, la resolución recaída a una solicitud de condonación de multas, al no actualizarse las hipótesis normativas previstas en los artículos 117 y 129, del Código Fiscal de la Federación. VI-TASR-XIII-49 323

REHABILITACIÓN de patente.- El pago efectuado de las tarifas correspondientes por concepto de vigencia de derechos, es suficiente para la procedencia de dicha rehabilitación. VI-TASR-EPI-195 363

REPRESENTANTE común de la copropiedad. Es el obligado legalmente a observar las obligaciones previstas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (vigente en 2004). VI-TASR-XIII-46 318

REQUERIMIENTO de pago. Es ilegal diligenciar diversos requerimientos de pago en forma simultánea al constituir actos administrativos distintos. VI-TASR-XXIV-10 266

RESOLUCIÓN por medio de la cual un Agente del Ministerio Público aplica una sanción como medida de apremio en una averiguación previa. No se surte la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. VI-TASR-XVI-24 332

RESPONSABILIDAD solidaria de persona física. Se concreta legalmente cuando la asume en el acta de embargo ofreciendo un bien inmueble, sin tener que acreditar el porcentaje de sus ingresos. VI-TASR-XIII-48 321

RETROACTIVIDAD de las normas procedimentales.- No se actualiza, cuando la hipótesis normativa que regula el supuesto se suscita una vez que ha entrado en vigor la nueva norma que regula dicho supuesto. VI-TASR-EPI-182 350

REVISIÓN a dictamen.- Para proceder el Instituto a requerir al particular la misma información y documentación que ya había requerido al contador público autorizado, debe de motivar debidamente dicho proceder. VI-TASR-XXIV-18 275

REVISIÓN secuencial del dictamen de estados financieros previsto por el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, excepciones a la observancia del orden establecido. VI-TASR-XXXVII-83 260

SIMILITUD fonética en grado de confusión.- Para el estudio relativo, en términos generales, se deben aplicar las mismas reglas de pronunciación a las marcas en cuestión. VI-TASR-EPI-185 353

SOBRESEIMIENTO. Es infundada la causal de improcedencia si se alega la no formulación de conceptos de impugnación, en tratándose de resoluciones recaídas a medios de defensa administrativos. VI-TASR-XIII-34 306

SOBRESEIMIENTO del juicio contencioso administrativo.- Puede decretarse en cualquier etapa del procedimiento, siempre y cuando la improcedencia resulte evidente. VI-TASR-EPI-177 345

SOBRESEIMIENTO del juicio. Es infundado que la autoridad lo solicite al considerar que la falta de exigibilidad de un crédito derivado de una boleta de infracción, implica la inexistencia de interés jurídico del particular a quien fue dirigida. VI-TASR-XIII-37 309

SOBRESEIMIENTO del juicio. Se actualiza la causal prevista en el artículo 8, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuando la demanda de nulidad no está firmada por quien la promueve. VI-TASR-XIII-32 304

SOBRESEIMIENTO del juicio de nulidad. VI-TASR-XXIV-20 279

SOBRESEIMIENTO del juicio de nulidad por inexistencia del acto reclamado, en tratándose de la configuración de la negativa ficta. Se actualiza cuando la resolución expresa no se impugna de manera oportuna en la ampliación de demanda. VI-TASR-XIII-28 300

SOCIEDADES cooperativas.- Sí pueden contar con personal que les preste un servicio personal subordinado, con el cual guardan relación laboral, y en ese sentido deben cumplir con sus obligaciones de seguridad social. VI-TASR-XIII-33 305

SOLICITUD de devolución acorde con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Si la autoridad considera que deben subsanarse irregularidades

debe requerirse al solicitante aunque se haya formulado declaratoria por contador público certificado. VI-TASR-XIII-35 307

SUPLENCIA por ausencia del administrador de la aduana. Para una debida motivación el jefe de departamento debe ostentarse adscrito a la aduana de la que es titular el suplido. VI-TASR-XXXVII-86 263

SUSPENSIÓN de la caducidad tratándose de responsabilidad solidaria, caso en que no procede. VI-TASR-XIII-44 316

TÍTULO de registro marcario caduco. Efectos. VI-TASR-EPI-197 365

TRÁMITE.- No procede reanudarse, si se abandonó la solicitud que lo inició. VI-TASR-EPI-179 347

TRIBUNAL Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es competente para pronunciarse sobre los vicios de legalidad en la emisión del acuerdo 45175 del Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, aun cuando el promovente no lo señale en su demanda como resolución impugnada en forma destacada. VI-TASR-XIII-51 325

VERIFICACIÓN de mercancía de comercio exterior en transporte.- El personal designado para llevarla a cabo por el Administrador de la Aduana debe encontrarse adscrito a la Unidad Administrativa de la cual sea titular. VI-TASR-XXIV-16 273

VISITA domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales. Es legal si se entiende con una persona que se ostenta como empleada del contribuyente visitado. VI-TASR-XVII-1 327

VISITA domiciliaria. Aportación de datos por tercero. La autoridad no se encuentra obligada a otorgar el plazo de veinte días que refiere la fracción IV del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, en el caso de.
VI-TASR-XXIV-21 280

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ACUERDOS GENERALES

DESIGNACIÓN de Presidente de la Segunda Sección, para el periodo de 2010. G/S2/1/2010 381

SE DETERMINA no fijar como jurisprudencia un precedente reiterado.
G/8/2009 379

ÍNDICE ALFABÉTICO DE JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

QUEJA prevista en el artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación. Debe instruirse como juicio cuando se advierta que el medio de defensa procedente contra el acto dictado en cumplimiento sea un diverso juicio de nulidad, con independencia de que esa determinación se haga al proveer sobre el escrito de queja o al resolver ésta (legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005). (2a./J. 143/2009) 395

REVISIÓN fiscal. El Subdirector de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado carece de legitimación para interponer dicho recurso en suplencia por ausencia del titular de la Dirección Jurídica, si el Director General del propio Organismo no ha designado a los servidores públicos que puedan suplir las faltas temporales de los titulares de sus Unidades Administrativas Centrales (legislación vigente a partir del 1o. de enero de 2009). (I.7o.A. J/53) 400

REVISIÓN fiscal. Es improcedente contra sentencias de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que declaren la nulidad de resoluciones administrativas dictadas en el procedimiento administrativo previsto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente hasta el 29 de mayo de 2009. (2a./J. 147/2009) 398

REVISIÓN fiscal. Procede contra las resoluciones en materia de pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad Social para Las Fuerzas Armadas Mexicanas, en términos del artículo 14, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (2a./J. 138/2009) 398

SENTENCIAS del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Si una Sala de dicho Órgano declara la nulidad de la resolución impugnada bajo un argumento distinto al planteado por el actor, infringe el principio de congruencia que rige a aquéllas. (XIX.1o.A.C. J/20) 402

ÍNDICE ALFABÉTICO DE TESIS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

COMPETENCIA material de la autoridad fiscal para imponer multas como resultado de una visita domiciliaria. Para considerarla debidamente fundada es innecesario que en la resolución sancionadora se reiteren los preceptos legales que facultan a aquélla tanto para ejercer sus facultades de comprobación como para aplicar sanciones, citados al ordenar la revisión. (VI.3o.A.328 A) 423

EJECUCIÓN de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. La tiene el auto de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que coarta el derecho del demandante de señalar domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte del territorio nacional. (XXI.2o.P.A.94 A) 426

FUNDAMENTACIÓN de la competencia de la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo. No es un requisito formal cuya omisión o insuficiencia encuadre en las hipótesis de ilegalidades no invalidantes previstas en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. (IV.2o.A.260 A) 419

JUICIO contencioso administrativo federal. Es necesario agotarlo previamente al amparo, cuando el particular optó por impugnar la resolución administrativa que le agravia mediante algún recurso cuya determinación deba combatirse a través de aquél. (I.7o.A.651 A) 411

NOTIFICACIÓN del acto que el demandante manifestó desconocer en el juicio contencioso administrativo. El análisis de su legalidad es preeminente al de la competencia de la autoridad a la que atribuye aquél (legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005). (I.7o.A.653 A) 413

PRESIDENTE del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de la Junta de Gobierno y Administración de dicho Órgano Jurisdiccional. Carece de legitimación para promover, por sí solo, el juicio de amparo e interponer los recursos procedentes en defensa de los intereses de la indicada Junta. (III.2o.A.211 A) 417

REVISIÓN fiscal. Es improcedente dicho recurso conforme al artículo 63, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contra sentencias emitidas en asuntos donde se haya demandado la imposición de una multa a un agente aduanal con motivo de las funciones desempeñadas en el despacho aduanero. (I.7o.A.661 A) 414

TERCERO interesado en el juicio contencioso administrativo federal. En tanto no esté claramente definida su existencia, debe darse preponderancia a la garantía de acceso a la justicia, antes de tener por no interpuesta la demanda

relativa por no haber indicado el actor el nombre y domicilio de aquél. (XXI.1o.P.A.116 A) 425

TRIBUNAL Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es competente para analizar la legalidad de las reglas de una resolución miscelánea fiscal que infrinjan el principio de reserva de ley, aplicadas en perjuicio del actor en el juicio contencioso, cuando dicho Órgano considere que no se apegan al Código Fiscal de la Federación (aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 108/2004). (IV.2o.A.262 A) 420

DIRECTORIO DE LA REVISTA

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA:
Mag. Francisco Cuevas Godínez

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA:
Lic. Minko Eugenio Arriaga y Mayés

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Lic. Juan Carlos Ramírez Villena

Compilación, clasificación, ordenación y revisión de tesis, elaboración de índices, corrección tipográfica y vigilancia de la edición:

Lic. Ana Lidia Santoyo Avila
C. Elba Carolina Anguiano Ramos
C. María Goreti Álvarez Cadena

PUBLICACIÓN OFICIAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Certificado de Licitud de Título No. 3672
Certificado de Licitud de Contenido No. 3104
Número de Reserva al Título en Derechos de Autor: 04-2001-012517410700-102
Distribuidor principal: Fideicomiso para Promover la Investigación del Derecho Fiscal y Administrativo, Insurgentes Sur 881 Torre 'O', Piso 12, Colonia Nápoles, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03810, México , D.F.
Impresión:Talleres Gráficos de México. Secretaría de Gobernación, Av. Canal del Norte No. 80, Col. Felipe Pescador, C.P. 06280, México D.F.
Insurgentes Sur No. 881, Torre 'O', Piso 12, Col. Nápoles, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F.

Las obras podrán adquirirse en la Dirección General de Publicaciones, en las Librerías Jurídicas Especializadas y en las Salas Regionales Foráneas, o bien, por correo, enviando cheque a nombre del Fideicomiso para Promover la Investigación del Derecho Fiscal y Administrativo, a la siguiente dirección:

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

ÁREA DE PUBLICACIONES

Torres Adalid No. 21, Piso 2, Col. Del Valle Norte
Deleg. Benito Juárez. C.P. 03103
México, D.F.
Tel. 50-03-70-00 Ext. 3219
Mail: mangeles.gonzalez@tfjfa.gob.mx

LIBRERÍAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS

METROPOLITANAS

SUCURSAL INSURGENTES
INSURGENTES SUR No. 881, MEZANINE
COL. NÁPOLES
DELEG. BENITO JUÁREZ.
C.P. 03810 MÉXICO, D.F.
TEL.(55) 50 03 70 00 Ext. 4144
FAX: 50037402
Mail: libreria.insurgentes@tfjfa.gob.mx

SUCURSAL TLALNEPANTLA

AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
No. 18 - P.B. LOCAL COL. CENTRO
C.P. 54000 TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO
TEL. (55)53 84 05 44
Mail: libreria.tlalnepantla@tfjfa.gob.mx

LIBRERÍAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS

FORÁNEAS

SUCURSAL TORREÓN
BLVD. DIAGONAL REFORMA
No. 2984 ZONA CENTRO,
C.P. 27000, TORREÓN, COAH.
TEL. (871) 79 38 937
Mail: libreria.torreon@mail.tfjfa.gob.mx

SUCURSAL CELAYA
EJE VIAL MANUEL J. CLOUTHIER
NORPONIENTE No. 508
FRACCIÓN DE LA SEGUNDA
SECCIÓN DE LA HACIENDA
SAN JUANICO
C.P. 38020 CELAYA, GTO.
TEL. (461) 6 14 20 89
Mail: libreria.celaya@mail.tfjfa.gob.mx

LIBRERÍAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS

FORÁNEAS

SUCURSAL OAXACA
AV. PINO SUÁREZ 700 INTERIOR 16-B
COL. CENTRO
C.P. 68000 OAXACA, OAX.
TEL. (951) 51 37 899
Mail: libreriajuridicaoax@prodigy.net.mx

SUCURSAL CULIACÁN
PASEO NIÑOS HÉROES No. 520
ORIENTE
COL. CENTRO
C.P. 80000, CULIACÁN, SIN.
TEL. (667) 7 12 90 39
Mail: libreria.culiacan@mail.tfjfa.gob.mx

LIBRERÍAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS

FORÁNEAS

SUCURSAL ACAPULCO
AV. COSTERA MIGUEL ALEMÁN No. 63-2° PISO
LOCALES C-1 Y C-2 FRACC. CLUB DEPORTIVO
INTERIOR DEL CENTRO DE CONGRESOS COPACABANA
C.P. 33690, ACAPULCO, GRO.
TEL. (744) 4 81 36 39
Mail: libreria.acapulco@mail.tfjfa.gob.mx

DIRECTORIO
SALAS REGIONALES FORÁNEAS

PRIMERA SALA REGIONAL DE ORIENTE
PRIVADA 5B-SUR, No. 4302,
ENTRE 43 PTE. Y 7 SUR
COL. HUEXOTITLA,
C.P. 72530
PUEBLA, PUEBLA
TEL. 01 (222) 2 43 34 05

SALA REGIONAL PENINSULAR
CALLE 56-A No. 483B, (PASEO DE MONTEJO)
ESQ. CON CALLE 41, COL. CENTRO
C.P. 97000
MÉRIDA, YUCATÁN
TEL 01 (999) 9 28 04 19

PRIMERA SALA REGIONAL DEL NORESTE
CERRO DE PICACHOS No. 855 SUR
COL. OBISPADO
C.P. 64060
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL. 01 (818) 1 23 21 53

PRIMERA SALA REGIONAL DEL GOLFO
AV. CIRCUITO CRISTOBAL COLÓN No. 5,
OCTAVO Y DÉCIMO PISOS.
COL. JARDINES DE LAS ÁNIMAS,
SECCIÓN "TORRE ÁNIMAS"
C.P. 91190
JALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ
TEL. 01 (228) 812 56 31

SALA REGIONAL DEL NOROESTE I
AV. PASEO DE LOS HÉROES 9691,
FRACC. DESARROLLO URBANO
DEL RÍO TIJUANA
C.P. 22320
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
TEL. 01 (664) 684 84 61

SALA REGIONAL DEL NOROESTE II
CALLE CHIHUAHUA No. 133 NTE.
ENTRE CALLES HIDALGO Y ALLENDE
COL. CENTRO
C.P. 85000
CD. OBREGÓN, SONORA
TEL. 01 (644) 414 70 05

PRIMERA Y SEGUNDA SALA
REGIONAL DE OCCIDENTE
AV. AMÉRICAS No. 877-2° Y 3er PISO
ENTRE COLOMOS Y FLORENCIA
COL. PROVIDENCIA, SECTOR HIDALGO
C.P. 44620
GUADALAJARA, JALISCO
TEL. 01 (333) 8 17 15 25

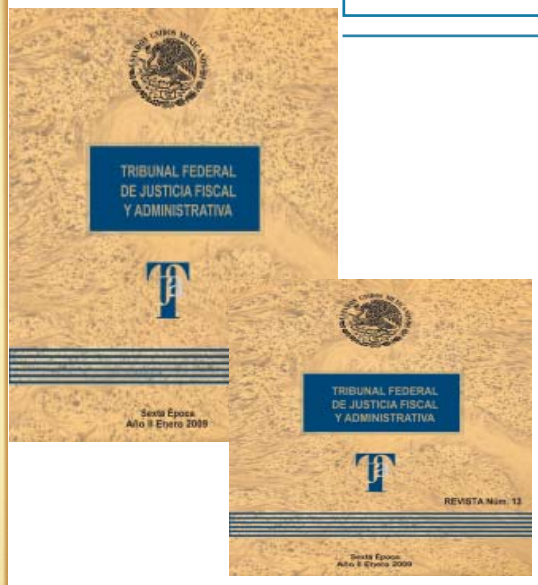
SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO I
AV. FRANCISCO ZARCO No. 2656
COL. FRANCISCO ZARCO
C.P. 31020
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL. 01 (614) 418 84 77

SALA REGIONAL DEL CENTRO I
PLAZA KRISTAL, TORRE "A" ÚLTIMO PISO,
AV. LÓPEZ MATEOS, ESQUINA CON HÉROES
DE NACOZARI SUR No. 1001,
COL. SAN LUIS
C.P. 20250
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL. 01 (449) 915 29 12

SALA REGIONAL DEL GOLFO-NORTE
CALLE HIDALGO No. 260
ESQ. MIER Y TERÁN
COL. CENTRO
C.P. 87000
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
TEL. 01 (834) 315 59 74

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA



La Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se publica mensualmente para dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 75 y 78 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 26, fracción XXV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Su objetivo es el difundir los criterios establecidos en las tesis de jurisprudencia, precedentes o criterios aislados que surgen al resolver los juicios planteados ante el propio Tribunal. Además de las tesis y la parte relativa de la sentencia que la motivó, se publica una selección de jurisprudencia y tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia fiscal y administrativa.

La suscripción anual comprende 12 ejemplares que van de enero a diciembre del mismo año en impreso; y para 2009 se incluye, además, en CD. También la puede adquirir por semestre que comprende de enero a junio o de julio a diciembre, o por ejemplar suelto.

$330.00* ***Ejemplar suelto**

SUSCRIPCIÓN ANUAL

ENERO A DICIEMBRE 2009 $ 3,650.00 Incluye Revista con disco compacto

ENERO A DICIEMBRE 2008	$ 3,500.00
ENERO A DICIEMBRE 2007	$ 3,100.00
ENERO A DICIEMBRE 2006	$ 3,100.00
ENERO A DICIEMBRE 2005	$ 2,915.00

SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL

ENERO A JUNIO 2009	**$ 1,880.00**
JULIO A DICIEMBRE 2009	**$ 1,880.00**

ENERO A JUNIO 2008	$ 1,800.00
ENERO A JUNIO 2007	$ 1,670.00
ENERO A JUNIO 2006	$ 1,670.00
ENERO A JUNIO 2005	$ 1,574.00

NOVEDADES

PROPIEDAD INTELECTUAL
(compendio legislativo en CD)



Contiene

Jurisprudencia

Jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y criterios aislados de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual; con diversos índices para su búsqueda y localización.

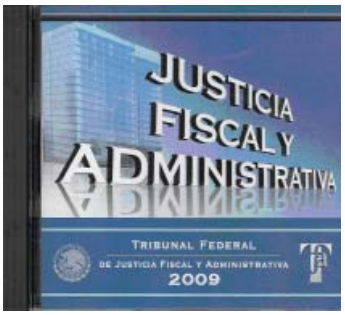
Legislación Federal, Tratados Internacionales y Legislación Histórica.

ISBN 9786079509613

$30.00

DISCO COMPACTO

"JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 2009"



Contiene:

Jurisprudencia, tesis aisladas, ejecutorias y votos que ha emitido y publicado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de enero de 1937 a diciembre de 2008 (Primera a Sexta Época).

Noticia Histórica sobre la creación, evolución y competencia otorgada a dicho Tribunal.

ISBN 9786074680690

$150.00



PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
(compendio legislativo en CD)

Reúne en un solo disco todo lo necesario para analizar un problema en materia de protección al consumidor:

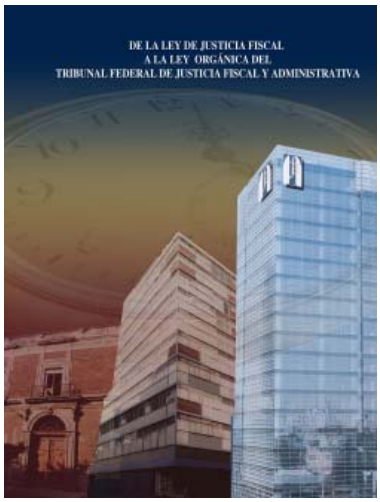
Legislación histórica y actualizada en versión HTML, PDF y Word.

Incluye una compilación de jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con opción de búsqueda alfabética, por materia, cronológica o por código de voz.

ISBN 9786079509613

$30.00

COMPILACIÓN



ISBN 968-7626-48-8

$290.00

DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL A LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Muestra con un sentido histórico la memoria legislativa del Tribunal, las huellas de un largo camino de evolución constante y modernización del Contencioso Administrativo Federal inserto en la realidad nacional.

Temas: Antecedentes Legislativos del modelo Contencioso Administrativo en México, Notas periodísticas relativas al inicio de labores del Tribunal Fiscal de la Federación, Ley de Justicia Fiscal (D.O.F. 31 de agosto de 1936), Código Fiscal de la Federación (D.O.F. 31 de diciembre de 1938), Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (D.O.F. 19 de enero de 1967), Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (D.O.F. 2 de febrero de 1978), Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (D.O.F. 15 de diciembre de 1995), así como las Reformas que se hicieron a estos Ordenamientos.

COMPILACIÓN DE TESIS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y EL PODER JUDICIAL FEDERAL EN MATERIA DE LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, TRATADOS INTERNACIONALES, PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR

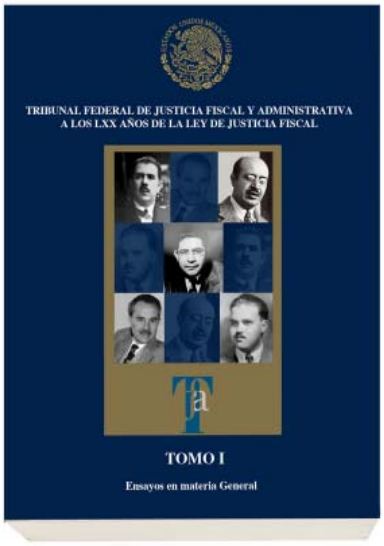
Incluye las tesis publicadas en las Revistas de este Tribunal de enero de 1994 a octubre de 2004 y las publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de enero de 1994 a agosto de 2004.

$350.00



ISBN 968-7626-49-6

OBRAS CONMEMORATIVAS DE LOS ANIVERSARIOS DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL



ISBN 968-7626-57-7

$ 1,350.00

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA A LOS LXX AÑOS DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL EN CINCO TOMOS

En el marco de la conmemoración del LXX aniversario de la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal, fue presentada esta magna obra que constituye el testimonio de lo que actualmente es la justicia fiscal y administrativa, vista por sus propios actores. A partir de la valiosa colaboración de destacados juristas nacionales y extranjeros se desarrollan, en cinco tomos, temas de trascendencia para el contencioso administrativo, tales como: Ensayos en materia General (Tomo I); Cuestiones constitucionales, control de legalidad de los actos de la Administración Pública y nuevas perspectivas para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Tomo II); Recursos administrativos, juicio contencioso administrativo y responsabilidad patrimonial del Estado y de los servidores públicos (Tomo III); Tratados internacionales en materia económica y tributaria; ensayos en materia fiscal, aduanera y comercio exterior (Tomo IV); y Seguridad social, propiedad intelectual, protección al consumidor, aguas nacionales y bioseguridad de organismos genéticamente modificados (Tomo V).



ISBN 968-7626-60-7

$ 150.00

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN) MAGISTRADOS PRESIDENTES DEL TRIBUNAL 1937-2006 TESTIMONIOS Y SEMBLANZAS

En el LXX aniversario de la creación del hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se hace un homenaje a los hombres y mujeres que han tenido a su cargo dirigir los destinos de este Tribunal, a través de esta obra que incluye el testimonio de los licenciados Antonio Carrillo Flores y Guillermo López Velarde, Magistrados Fundadores, quienes en dos artículos relataron las circunstancias en que fue creado este Órgano Jurisdiccional, y sus primeros años de vida; los discursos pronunciados por los Presidentes de la República y por los Presidentes del Tribunal con motivo de diversos aniversarios de la Promulgación de la Ley de Justicia Fiscal; la trayectoria de los Presidentes de este Órgano de impartición de justicia; y un apartado fotográfico.

OBRAS CONMEMORATIVAS DE LOS ANIVERSARIOS DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA A LOS LXV AÑOS DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL 2001 EN SEIS TOMOS

Al cumplir 65 años el Tribunal, se edita una obra que reune a grandes tratadistas nacionales y extranjeros, los ensayos relativos se incluyen en los tres primeros tomos de la obra. También en los tomos IV y V se presenta una compilación de las tesis emitidas por el Tribunal, durante los últimos cinco años, que comprenden en su totalidad la cuarta época de la revista, dichas tesis se clasifican según la instancia emisora, el tipo de tesis y dentro de esta clasificación, en orden alfabético. El tomo VI contiene un índice temático en el que aparecen los rubros de las tesis identificando los preceptos jurídicos que fueron señalados en cada una de ellas, así como la materia correspondiente a dicho precepto y los preceptos de otros ordenamientos jurídicos que se correlacionaron en dicha tesis.

ISBN 968-7626-29-1

$1,200.00



CONGRESO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 1997 LXI ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN DOS TOMOS

En 1997 se conmemora el 61 aniversario de la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal, celebrándose el Congreso de Justicia Administrativa 1997, con la participación nuevamente de algunos de los Presidentes de los Tribunales Fiscales de países de América Latina y España, de los Magistrados del propio Tribunal y de eminentes juristas nacionales y extranjeros. Se tratan temas de gran importancia y trascendencia para nuestro país, tales como: “Cuotas Compensatorias; Alcances de la Declaración de Inconstitucionalidad por el Poder Judicial Federal; y La Suspensión en Materia de Responsabilidades de Servidores Públicos”.

ISBN 968-7626-11-9

$425.00

MEMORIAS DE LAS REUNIONES NACIONALES

MEMORIA DEL XVII CONGRESO NACIONAL DE MAGISTRADOS "VISIÓN DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL ANTE LOS RETOS DEL CAMBIO SOCIAL"



Realizado en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, del 27 al 29 de agosto de 2008, este Congreso se dividió en cuatro temas de disertación: “Cambios en el Contencioso Administrativo”; “Misión y Visión de la Junta de Gobierno y Administración”; “Nuevas Competencias del Tribunal”; y “La Justicia Pronta y Expedita en el Contencioso Administrativo. Juicio en Línea”; temas magistralmente expuestos en sesiones plenarias, a las cuales sucedieron ocho mesas de trabajo, divididas a su vez en subtemas, marco ideal de discusión de los tópicos tratados, y cuyo testimonio se recoge en esta Memoria.

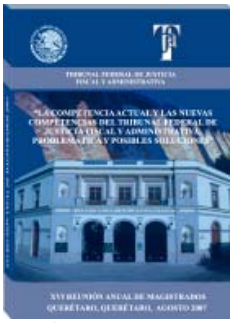
ISBN 978-607-95096-0-6

$80.00

"LA COMPETENCIA ACTUAL Y LAS NUEVAS COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PROBLEMÁTICA Y POSIBLES SOLUCIONES"

XVI REUNIÓN ANUAL DE MAGISTRADOS QUERÉTARO, QUERÉTARO, AGOSTO 2007

La Reunión se dividió en dos grandes rubros: en el primero, se trató la competencia del Tribunal, incluyéndose la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; la impugnación de actos administrativos de carácter general diversos a los Reglamentos; medidas cautelares y suspensión de la ejecución del acto impugnado; entre otros. El segundo tema incluyó las reflexiones realizadas en torno a las nuevas competencias del Tribunal, tratándose temas como las implicaciones de la promulgación de su nueva Ley Orgánica y su autonomía presupuestaria.



Disco Compacto

ISBN 9789689468011

$80.00



ISBN. 968-7626-61-5

$450.00

MEMORIAS DEL TERCER CONGRESO DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (PERSPECTIVA DEL DERECHO FISCAL Y ADMINISTRATIVO EN AMÉRICA Y EUROPA EN LA PRIMERA PARTE DEL SIGLO XXI EN DOS TOMOS

Congreso celebrado en la ciudad de México del 24 al 28 de agosto de 2006. Los temas abordados recorrieron todas las materias del ámbito de competencia del Tribunal, manifestados en la visión de los juristas participantes respecto de las “Perspectivas del Derecho Fiscal y Administrativo en América y Europa en la primera parte del Siglo XXI”.

OBRAS DE LAS REUNIONES

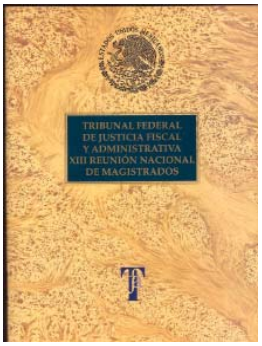
ANTE LOS RETOS DEL FUTURO, VALORES Y CAPACIDADES DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL XIV REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2005)

Temas tratados: Ética y Valores, Nuevas formas de controversia del Contencioso Administrativo Federal, responsabilidad patrimonial del Estado, Evolución de la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, su proyección hacia el futuro y la búsqueda de nuevas fórmulas de controversia, al encuentro de un sistema renovado del Contencioso Administrativo Federal, La responsabilidad del Estado, Reflexiones en torno al Acceso de la Justicia Administrativa en materia de Responsabilidad Patrimonial del Estado, Interpretación constitucional en materia patrimonial del Estado.



$290.00

ISBN 968-7626-54-2



ISBN 968-7626-53-4

$370.00

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA XIII REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2004)

Temas tratados: El Contencioso Administrativo a la luz de un sistema integral y coherente de impartición de justicia en el Estado Mexicano, Aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA XII REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2003)

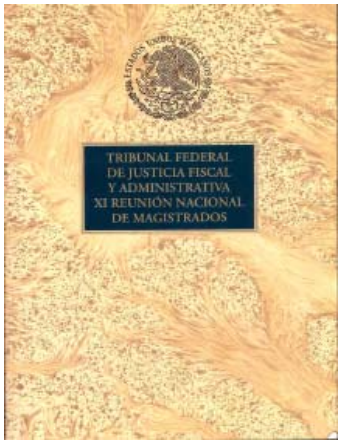
Temas tratados: La Supresión del Contencioso Administrativo en México, Estado actual del Contencioso Administrativo en Europa, en América Latina y el Contencioso Administrativo Federal en México evolución y situación actual, iniciativa de la Ley Federal de Justicia Administrativa en la Función Pública, Nuevo Esquema en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos.



ISBN 968-7626-47-X

$130.00

OBRAS DE LAS REUNIONES



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA XI REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2002)

Temas tratados: Demanda, Suspensión, Pruebas, Alcances de la Sentencia y su Impugnación, Efectividad, Obligatoriedad de la Jurisprudencia, ISR, Aspectos de la Reforma Fiscal, Ley del IMSS, Iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones.

ISBN 968-7626-42-9

$260.00



CONTROL DE LEGALIDAD EN EL MODERNO ESTADO DE DERECHO EN AMÉRICA Y EUROPA X REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2001)

Esta obra contiene los trabajos presentados con motivo del Segundo Congreso Internacional de Justicia Fiscal y Administrativa, celebrado con motivo del 65 aniversario de la expedición de la Ley de Justicia Fiscal, en el que participaron el Vicepresidente del Consejo de Estado de Francia **Sr. Renaud Denoix de Saint Marc**, el Presidente de la Corte de Impuestos de Canadá **Alban Garon**, el Presidente del Consejo de Tribunales Administrativos de Canadá **Lic. Murray Walter Chitra**, y en representación de la Asociación Iberoamericana de Tribunales Fiscales y Administrativos, participaron el **Dr. Manuel Urueta Ayola**, Presidente del Consejo de Estado de Colombia y el **Dr. Luis Rodríguez Picado,** Presidente del Tribunal Fiscal Administrativo de Costa Rica; representantes del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo **Ministro Juan Díaz Romero**, **Senador Fauzi Handam** y el Procurador Fiscal de la Federación **Lic. Gabriel Reyes Orona**; por los Tribunales Administrativos Estatales **Magistrada Teresita Rendón Huerta** presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo de Guanajuato; así como de la Academia Mexicana del Derecho Fiscal y Magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del propio Tribunal.

ISBN 968-7626-37-2

$210.00

OBRAS DE LAS REUNIONES

TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN IX REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2000)

Temas tratados: Validez Actual del Contencioso Administrativo en México, Competencia del Tribunal Fiscal de la Federación, Eficacia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Local, Principios Fundamentales del Procedimiento Contencioso Administrativo, Cumplimiento y Ejecución de Sentencias, Análisis de Derecho Comparado, Contencioso Objetivo y Subjetivo de Anulación, El Procedimiento Contencioso Administrativo.



ISBN 968-7626-27-5

$210.00



TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIII REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (1999)

En 1999 se realiza la VIII Reunión Nacional, con la presentación de trabajos presentados por Magistrados, los cuales se enmarcan en importantes temas de Derecho Procesal Fiscal: Competencia prorrogada o prórroga de competencia y validación de actos de autoridades incompetentes; Problemática de Competencia territorial entre dos Salas con Sede en diferentes Estados; Notificaciones por correo certificado; Improcedencia; Resoluciones que dejan sin efectos los créditos recurridos; Impugnación de actos de ejecución; Idoneidad de la prueba; Problemas en la admisión, desahogo y valoración de la prueba pericial; La prueba de inspección judicial; La prueba confidencial en materia de comercio exterior internacional y precios de transferencia; Los efectos de las sentencias del Tribunal; Las sentencias que se dictan en 24 horas; Formación de jurisprudencia; Regulación de la queja, violación del plazo de cumplimiento de la sentencia; y diversos trabajos sobre el Procedimiento Administrativo y Derecho Sustantivo.

ISBN 968-7626-18-6

$130.00

COLECCIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN MÉXICO

La manipulación de las condiciones en que los miembros de un mismo grupo de interés pactan las operaciones entre sí genera importantes problemas recaudatorios, que impactan como un factor determinante en la vida de los gobiernos, de las empresas multinacionales y de sus operaciones internacionales.

Ante esta manipulación de precios de transferencia, la OCDE ha recomendado medidas "antídoto", adoptadas en gran medida por México, pero ¿Son estas medidas congruentes con nuestro sistema constitucional?

En este libro, el Maestro Mario Barrera Vázquez realiza un análisis serio de la regulación mexicana sobre los precios de transferencia, desde un punto de vista estrictamente jurídico, brindando al lector una herramienta de consulta indispensable para conocer o profundizar en este tema, lo que le valió ser acreedor al "Premio de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa", otorgado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.



ISBN 607-950-964-4

$ 310.00

LA MUERTE DEL INFRACTOR COMO FORMA DE EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL POR INFRACCIONES A LAS LEYES FISCALES FEDERALES



ISBN 607-950-963-7

$ 310.00

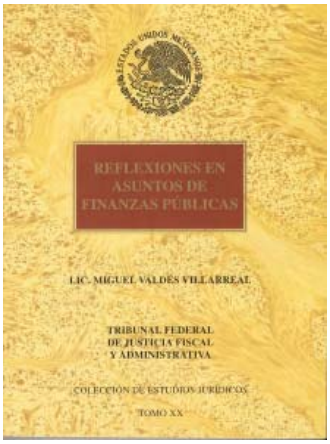
¿Es la muerte causa de extinción de obligaciones fiscales derivadas de la imposición de una sanción? De acuerdo con el criterio del Fisco Federal, la obligación subsiste.

La muerte, lo único cierto que sabemos nos va a suceder, tiene implicaciones en diversos ámbitos, incluido por supuesto el fiscal. La finitud del ser humano implica la de sus derechos y obligaciones; sin embargo, estas le trascienden, por un tiempo al menos.

Es de todos conocido que el patrimonio se transmite por herencia, tanto en activo como en pasivo, pero en el caso de las multas, conservando sin lugar a duda su carácter de pasivo, ¿no es acaso una sanción? Recordemos entonces la prohibición constitucional a la trascendencia de la sanción.

Son estos los elementos de un tema polémico e interesante que la licenciada Dione Rivera aborda con claridad y precisión, misma que le valió el ser galardonada con el "Premio de Estudios sobre Justicia Administrativa 2007", otorgado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

COLECCIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS



ISBN 968-7626-56-9

$280.00

REFLEXIONES EN ASUNTOS DE FINANZAS PÚBLICAS.- TOMO XX.- 2005, LIC. MIGUEL VALDÉS VILLARREAL

Como un homenaje a la trayectoria del Maestro Miguel Valdés Villarreal, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa realiza la compilación de sus trabajos, estructurada en dos capítulos: en el primero se incluyen aquellas reflexiones presentadas por el Maestro en diversos foros, principalmente la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que versan sobre política fiscal, Necesidad de Tribunales Contencioso Administrativos locales, Asentamientos humanos, Amparo contra Leyes, Administración de Justicia, Misión del abogado hacendario, entre otros.

El capítulo segundo comprende los mensajes dados en diversos Congresos anuales del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal, así como los trabajos presentados en los mismos, relativos a Coordinación Fiscal, Modernización del Sistema Tributario Mexicano, Reforma Fiscal integral, Estado de Derecho y una visión integral de un Sistema Jurídico de Contribuciones.



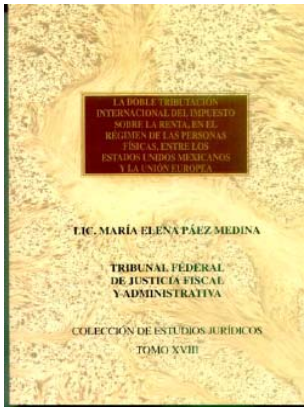
ISBN 968-7626-45-3

$165.00

EFECTOS DEL SILENCIO ANTE UN PAGO DE LO INDEBIDO EN MATERIA TRIBUTARIA FEDERAL, CONFORME AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUCIONALIDAD VS. LEGALIDAD.- TOMO XIX.- 2003, LIC. ANA RUTH HERRERA GÓMEZ

Temas: El pago de lo indebido en Materia Tributaria, Devolución, Plazos para solicitar la Devolución de un pago indebido.

COLECCIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS

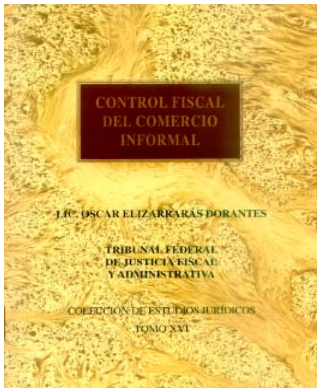


ISBN 968-7626-44-5

$250.00

LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN EL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS, ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA UNIÓN EUROPEA.-TOMO XVIII.- 2003, LIC. MARÍA ELENA PÁEZ MEDINA

Temas: Conceptos, La Unión Europea “Sinopsis acerca de la relación jurídico económica existente entre los estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea en el marco de la globalización internacional", “Tratamiento en el Derecho Mexicano a la doble contribución Internacional del Impuesto sobre la Renta”, “Tratados Internacionales celebrados entre los Estados Unidos Mexicanos y los países integrantes de la comunidad Europea, en material de doble tributación”, “Solución de Controversias”



ISBN 968-7626-39-9

$170.00

CONTROL FISCAL DEL COMERCIO INFORMAL.- VOL. XVI LIC. OSCAR ELIZARRARÁS DORANTES

Temas: Generalidades del Comercio Informal, Breves Antecedentes de la regulación fiscal del Comercio Informal, Régimen Fiscal del Comercio Informal, Asistencia fiscal especializada para el Comercio Informal.



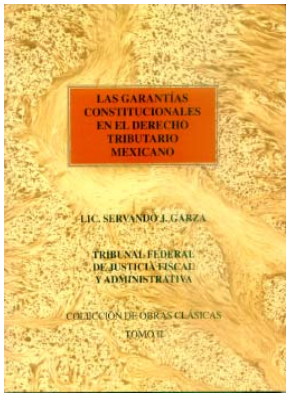
ISBN 968-7626-25-9

$100.00

SISTEMA FISCAL FEDERAL MEXICANO.- SU REVISIÓN ANTE LAS TEORÍAS Y LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS. VOL. XV LIC. LUIS GERARDO DEL VALLE TORRES

SU REVISIÓN ANTE LAS TEORÍAS Y LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS. Esta obra forma parte de la Colección de Estudios Jurídicos, que se encuentra formada en sus últimos tomos por las tesis que resultan premiadas en el Certamen “Revista del Tribunal Fiscal de la Federación”, o Certamen “Premio de Estudios sobre Justicia Administrativa”. Además de ser premiada, el Jurado Calificador determinó que este trabajo reunía la calidad para ser publicado en dicha colección.

COLECCIÓN DE OBRAS CLÁSICAS



ISBN 968-7626-38-0

$100.00

LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL DERECHO TRIBUTARIO MEXICANO. TOMO II. LIC. SERVANDO J. GARZA

Obra escrita por el maestro de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, contribuyó notablemente a la construcción de esa Doctrina de la que hoy nos sentimos orgullosos.

Algunos Temas: Derecho y equidad, El Principio de Igualdad del Artículo 13, Proporcionalidad y Equidad, La autentica violación del Principio de Justicia, El Impuesto sobre dividendos, El principio de Irretroactividad, Sanción y Acción, La Sentencia como Norma concreta y El Principio de su Unicidad.

COEDICIONES



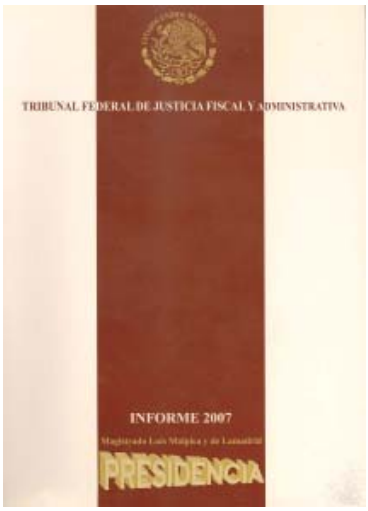
ISBN 968-6080-24-4

$160.00

EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MÉXICO-FRANCIA MEMORIA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL 1999

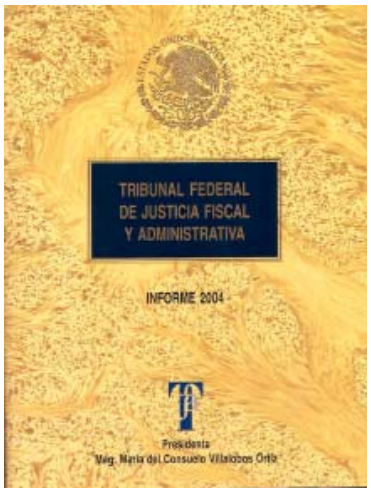
Memorias del Seminario Internacional sobre lo Contencioso Administrativo. Trabajos presentados por Funcionarios del Consejo de Estado Francés y por Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en los que trataron los temas de: La Reforma del Estado y La Jurisdicción en México y Francia; La Organización y Las Competencias de la Jurisdicción Administrativa en México; La eficiencia de las Jurisdicciones Administrativas y La ejecución de las sentencias en Francia y México; La Jurisdicción administrativa. El Derecho Internacional y La Globalización; y La Modernización Tecnológica e Informática en las Jurisdicciones Administrativas en Francia y México.

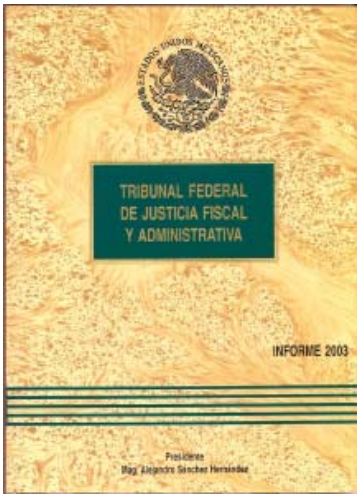
INFORMES ANUALES

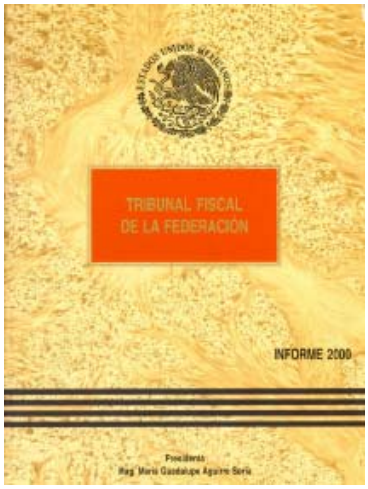












INFORME DE LABORES 2007	$310.00	ISBN 978-968-9468-00-4
INFORME DE LABORES 2006	$300.00	ISBN 968-7626-63-1
INFORME DE LABORES 2005	$292.00	ISBN 968-7626-55-0
INFORME DE LABORES 2004	$275.00	ISBN 968-7626-46-1
INFORME DE LABORES 2003	$250.00	ISBN 968-7626-43-7
INFORME DE LABORES 2002	$200.00	ISBN 968-7626-41-0
INFORME DE LABORES 2001	$190.00	ISBN 968-7626-28-3
INFORME DE LABORES 2000	$155.00	ISBN 968-7626-7

CORREO ELECTRÓNICO: **publicaciones@mail.tfjfa.gob.mx**

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN DE ESTAS PUBLICACIONES COMUNICARSE AL TELÉFONO 50-03-70-00 EXT. 3219 ó 3227

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA



LIBRERÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA

- **SUCURSAL INSURGENTES**

INSURGENTES SUR No. 881, MEZANINE
COL. NÁPOLES
DELEG. BENITO JUÁREZ. C.P. 03810
MÉXICO, D.F.
TEL: 50 03 70 00 EXT. 4144
Mail: libreria.juridica@mail.tfjfa.gob.mx